

Villas Rebeldes



Apuntes sobre las organizaciones vecinales de la periferie urbana en Bolivia

Willas Rebeldes



Centro de Documentación e Información Bolivia

Patrimonio Documental de Cochabamba

Willas Rebeldes

Apuntes sobre las organizaciones
vecinales de la periferie urbana en
Bolivia

Título

“VILLAS REBELDES”

Apuntes sobre las organizaciones vecinales de la periferie urbana en Bolivia

Director Ejecutivo CEDIB

Marco Gandarillas Gonzáles

Autores

Escarley Torrico (coord.)

Gabriela Canedo

Carminia Torrico

Gerson Ventura

Apoyo en Investigación

Marina Vargas

Isadora Coria

Beatriz Saire

Jairo Montesinos

DEPÓSITO LEGAL: 2-1-1208-13

Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIB

Calle Calama Nº 255, entre Nataniel Aguirre y Esteban Arze

Teléfono: 4 25 78 39 Fax: 4 25 24 01

Cochabamba - Bolivia

Esta publicación es posible gracias al apoyo solidario de:

El Col.lectiu y Ajuntament de Barcelona



el col.lectiu
Col·lectiu d'Estudis sobre
Cooperació i Desenvolupament



Presentación

VILLAS REBELDES ofrece un retrato de la insurgencia urbano popular que apuntaló el proceso político de nuestro país en los últimos diez años. A partir de la denominada Guerra del Agua, pasando por las jornadas de octubre en El Alto y la resistencia al golpe latifundista en El Plan 3.000 de Santa Cruz, los sectores populares urbanos dejaron sentir el peso de su importancia poblacional y política, imponiendo, en cada uno de estos eventos, cambios en las correlaciones de fuerza nacionales. A partir de ello se constituyeron en protagonistas de primer orden del proceso político que derrumbó el proyecto neoliberal.

El relato de la incursión de los movimientos populares urbanos en los grandes eventos nacionales de la última década ha sido enriquecido con el estudio de tres casos emblemáticos. Casos que retratan la vida organizativa, la esfera íntima, de los espacios urbanos marginales, de las periferias construidas con las manos de sus habitantes, con el esfuerzo propio y la lucha cotidiana de hombres y mujeres que abandonados a su suerte por las autoridades locales y nacionales, se han abierto camino en las ciudades de Bolivia, modificándolas para darse cabida.

Las tres Villas Rebeldes: Villa Felicidad, Villa Santiago Segundo y El Plan 3.000, son casos paradigmáticos de insurgencia social y urbana, debido en primer lugar a la carga histórica de resistencia que cada Villa ha acumulado en su difícil inserción a sus ciudades; y en segundo lugar, porque gracias a esa experiencia acumulada por sus habitantes y sus organizaciones, han podido ser puntales y determinantes en los hechos políticos nacionales que hemos mencionado. Las Villas Rebeldes, son muestras ejemplares del protagonismo de los sectores populares urbanos en la lucha contra el neoliberalismo expresada en las políticas de privatización de los servicios y la vida en las propias ciudades

y en el plano nacional en las políticas de saqueo de los recursos naturales. El movimiento popular urbano combatió contra ambos frentes.

El estudio se presenta como un insumo necesario para entender la relevancia social, política y demográfica de lo urbano popular en el actual contexto. Debido a la pronta presentación de los datos del último censo nacional, que corroborará la tendencia urbanizadora que es característica del modelo neoliberal y extractivista, esperamos que los aportes de VILLAS REBELDES contribuyan a profundizar el debate en torno a la pobreza y desigualdad que acompañan al espíritu rebelde de los sectores urbanos populares de Bolivia.

Este esfuerzo ha sido posible gracias al trabajo de más de una década en el terreno, a lado de la causa de los movimientos urbano populares, en especial de Cochabamba. Por ello va dedicado a nuestras entrañables amistades de la querida Villa Pagador y la zona sur de Cochabamba, a quienes hemos tenido la suerte de acompañar por caminos, luchas, victorias y derrotas. Gracias por acogernos, enseñarnos tantas y tantas cosas y por disculpar tan amorosamente nuestras muchas limitaciones.

Agradecemos los aportes de los/as vecinas/os que colaboraron con nuestro equipo en este esfuerzo; a nuestros/as compañeros/as de El Col.lectiu con quienes compartimos un mismo horizonte político transformador; y al Ayuntamiento de Barcelona por su solidaridad con la causa de los movimientos sociales de Bolivia, que son los destinatarios finales de nuestra acción institucional.

Marco Antonio Gandarillas Gonzales
Director Ejecutivo - CEDIB

A manera de introducción

Entre el 2000 y 2005 en Bolivia las organizaciones y movimientos sociales populares, en un proceso de creciente rearticulación, acosaron sin tregua a los representantes del modelo económico y político neoliberal que hasta entonces gobernaban el país, hasta destruir los ya débiles y escasos soportes de legitimidad que quedaban al régimen impuesto y resistido hace poco más de veinte años.

No es casual que los conflictos sociales más intensos hayan tenido como escenario el espacio urbano y como protagonistas a sus habitantes, puesto que son las ciudades las que han recibido el impacto de la recomposición territorial que ha generado el neoliberalismo en nuestro país, de un lado la des-industrialización y del otro la desaparición de las condiciones de vida del pequeño productor campesino.

Varios análisis han hecho hincapié en el hecho de que los cambios en el mundo del trabajo y la precarización de las condiciones de vida en las ciudades han significado a su vez la pérdida de referentes organizativos y por lo tanto los procesos de articulación, organización y ejercicio de derechos se ha visto limitada. Pero a la luz del hecho de que desde las ciudades se han lanzado los desafíos más importantes a la hegemonía neoliberal, es posible también evidenciar que a pesar de los obstáculos ha sido posible reconstruir formas de organización colectiva efectivas que han tenido calidad definitoria en la ola de protestas populares contra los limitados alcances del modelo de libre mercado.

Este hecho se perfiló ya en la “Guerra del agua” en la ciudad de Cochabamba en el año 2000, reconocida hoy como la primera victoria popular contra el modelo neoliberal tras 20 años de resistencia, pero fue la intervención de actores urbanos en la llamada “Guerra del Gas” en Octubre del 2003 en la ciudad de El Alto, la que terminó de posicionar a los actores urbanos como una pieza clave del proceso de transformaciones

políticas que ha vivido el país, hecho que finalmente remató en la acción de resistencia a las aspiraciones separatistas de las élites cruceñas que se produjo en Agosto del 2008 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Estos acontecimientos han concitado la atención de las ciencias sociales sobre el tema. A tono con la corriente predominante en el estudio de los movimientos sociales en América Latina, los profusos análisis se han centrado en las estructuras de organización territorial, las juntas vecinales, así como en el componente cultural y étnico, como los elementos que estructuran su fortaleza y contundencia de los movimientos de protesta urbanos.

De este modo, las juntas vecinales, que hasta entonces eran consideradas presas fáciles del clientelismo y la cooptación política, pasaron a formar parte de un selecto grupo de los “nuevos” sujetos políticos protagónicos de la coyuntura nacional reciente. Aunque todavía deben pagar el precio del particularismo, puesto que solo la FEDJUVE de El Alto aparece en esta lista.

Con este trabajo pretendemos poner a consideración algunos elementos que amplíen la mirada sobre los actores urbanos y la dinámica política que han vivido en este tiempo, en la primera parte intentamos dar cuenta de los cambios en que se han operado en el mundo urbano en el último período histórico, teniendo en cuenta la implementación del modelo neoliberal, para de este modo tener presente el telón de fondo que ha marcado las luchas y preocupaciones más importantes de los habitantes de las ciudades en Bolivia.

Posteriormente, nos adentramos en un análisis más detallado de los tres eventos escogidos para el presente estudio, La Guerra del Agua en Cochabamba, la Guerra del Gas en La Paz (El Alto) y finalmente la resistencia al llamado “Golpe Cívico-Prefectural” en la ciudad de Santa Cruz desde la perspectiva de los actores urbanos. En los tres casos, se analiza en contexto general en que se desarrollaron los hechos, pero por cuestiones metodológicas se ha seleccionado a un actor urbano relevante, un barrio que se haya destacado por su participación en los mencionados eventos.

Por ello y a fin de entender características compartidas y diferencias sobre las dinámicas organizativas barriales, no hemos detenido en la dimensión histórica de la vida y organización barrial. Ello nos permite enlazar de manera más amplia los aspectos que finalmente determinan que un barrio se incorpore a ciertas luchas sociales. Se trata de rescatar los elementos que se incuban en las propias organizaciones desde sus luchas más inmediatas y cotidianas en la construcción de sus barrios, que rebotan en momentos de conflicto.

**Características
de las ciudades
bolivianas**

Contexto general del estudio

Las ciudades bolivianas

La fundación de las actuales ciudades en Bolivia está ligada a la Colonia¹, los españoles ya tenía una larga experiencia en utilizar la fundación de ciudades como instrumento de expansión económica, y luego como elemento cultural para consolidar su presencia en el territorio conquistado. Allí donde los señores llegaban “...una vasta operación mercantil comenzaba. Si la región adquirida era despoblada, la ciudad surgía (...) para constituir simultáneamente un baluarte militar y una factoría. La muralla y el mercado eran los símbolos de estas dos funciones que la ciudad comenzaba cumplir...” (Romero 2001: 27).

En estos términos se comprende “...que la corona española promoviera enérgicamente el desarrollo urbano dentro de la situación colonizadora que acababa de formarse” en América (Schoop: 1981:21). La ciudad colonial tiene dos funciones importantes. Por un lado, es el centro desde el cual se organiza y articula la principal actividad económica, generalmente extractiva, con el entorno inmediato para la satisfacción de necesidades como la provisión de alimentos y mano de obra; por el otro lado es una frontera con el mundo indígena ya que allí debe organizarse no solo la defensa de la ciudad, sino también la reconstrucción de la vida en Europa. Por ello, la ciudad, no dejará de ser un “cuerpo trasplantado” y “extraño”, un símbolo de la conquista continuamente asediado por los originarios.

Se dice que apenas setenta años después de la aparición de los primeros conquistadores en América, en la actual Bolivia fueron fundadas siete de las principales ciudades que

¹ Aunque está claro que en muchos casos las ciudades coloniales se fundaron allí donde existían originarias importantes.

más tarde se convertirían en capitales de departamento². Las mismas, se desarrollaron, casi exclusivamente en relación a la actividad minera, ya sea por su cercanía a yacimientos de oro o plata, la disponibilidad de la mano de obra, por su capacidad para la producción y distribución de productos agrícolas y finalmente como lugares de tránsito hacia los puertos. (Schoop: 1981:21- 22).

Las ciudades alto peruanas, en su condición de zonas de extracción de plata tuvieron gran relevancia en toda la época colonial, destacando Potosí y Oruro, aunque en una escala mucho menor esta última. La primera alcanzó dimensiones tales que la pusieron entre las ciudades más pobladas del mundo, en esa época. El boom será efímero, mientras que para 1600 alcanza su grado más alto sobrepasando los 160.000 habitantes, en 1800 con la economía de la plata en total declive la población de la ciudad de Potosí disminuye a 20.000 habitantes, manteniéndose esta cifra sin cambios significativos durante todo el siglo XIX. (Schoop: 1981: 112) Igual suerte sufre la ciudad de Oruro y solo un nuevo auge de minerales como el estaño, antimonio y tungsteno, a principios del siglo XX logra re-posicionarla entre las tres ciudades más importantes de Bolivia.

Si las ciudades mineras disminuyeron drásticamente su población desde el siglo XVII hasta el XIX, ciudades como La Paz y Cochabamba, no solo mantuvieron su población sino crecieron, llegando a constituirse la primera en la ciudad más importante del país, seguida de cerca por Cochabamba a comienzos de la vida republicana. Según Klein, esta situación muestra un hecho paradójico en el crecimiento boliviano hasta el siglo XX. “La decadencia del sector exportador disminuyó el nivel de explotación española e incrementó la renta de los campesinos indios. Estos pudieron aumentar su comercio interno gracias a sus ingresos en aumento, lo que, a su vez, dio pleno apoyo a las economías regionales e hizo avanzar el crecimiento de los centros urbanos que satisfacían sus necesidades” [Klein: 1982:122].

Pero la recuperación de la industria minera hacia la segunda mitad del siglo XIX, ya con los barones de la plata en la escena económica, significó un nuevo interés por aumentar las tierras de hacienda, hecho que no podía llevarse a cabo sin un ataque sostenido a las tierras de comunidad, que fue lo que se vivió durante el gobierno de Melgarejo. [Klein: 1982:156].

En adelante, las elites mineras nacionales no hacen sino profundizar una estructura donde efectivamente un solo sector de la economía, el minero exportador, se desarrolla articulado a la economía mundial con características capitalistas, incluso a costa de los demás sectores económicos. Un ejemplo de ello fue la introducción del ferrocarril en el transporte de mineral, luego de la Guerra del Pacífico, fundada en “el ferviente deseo” de los empresarios mineros de “paliar la caída de los precios internacionales” de la plata.

² Según los datos de Schoop, entre la 1530 y 1580 siete de las actuales capitales de departamento ya estaban fundadas, solo la fundación de Trinidad data de 1617 aunque ya existían asentamientos allí desde 1556.

Este hecho terminó abriendo "...una inédita faceta en la relación entre el centro político minero y diversas regiones bolivianas, pues muchas de ellas quedaron prácticamente al margen de las redes tejidas en el mercado interior durante la era colonial, precipitándose en la vorágine de un inesperada crisis y consecuente frustración" (Rodríguez: 2003)

El transporte ferroviario, aliado de las políticas librecambistas que adoptaron los gobiernos bolivianos, a finales del siglo XIX, precipitó la importación de mercancías tanto como facilitó la salida de mineral a costos menores. El resultado final consistió en el derrumbe de las pequeñas e incipientes industrias locales, pequeños capitales comerciales y agricultura comercial. Si bien esta situación fue particularmente evidente en el caso de Cochabamba y la producción agrícola, tuvo efectos también en otras regiones.

Rivera (2003) en el caso de La Paz, nos habla de que antes del ferrocarril, existía una "compleja red de intercambios intercológicos" que al mismo tiempo incrementaba la intensidad de las relaciones urbano -rurales. Esto había sido posible en el Altiplano, sobre la base del control relativo de actividades de tipo comercial de parte de las comunidades indígenas, las que incluían la provisión de alimentos, insumos como el carbón de qñwa, y servicios como el transporte en llamas.

Todo esto se vino abajo con el ferrocarril, su aparición, principalmente en las rutas hacia el Pacífico, habría creado las condiciones para la sustitución de estos productos por sus equivalentes importados. El efecto inmediato fue el desplazamiento de los indios de estas actividades comerciales y la creación de monopolios dominados por los mestizos de pueblos cercanos a las nuevas estaciones ferrocarrileras. A esta situación Rivera le llama "control monopólico del mercado" que junto al monopolio de la tierra y el monopolio del poder político, constituyen el corazón del proyecto liberal de fines del XIX y las contradicciones en torno a las cuales girará también las resistencias y sublevaciones de indígenas de 1910 - 1930.

No era la minería la que más recursos aportaba al sostenimiento del Estado boliviano, tampoco era la más importante generadora de empleo, aunque si la mayor del sector industrial (Calderón y Szmukler: 2000; Dunkerley: 1984). De hecho, los bajísimos sueldos que se pagaban en el sector, no contribuían a la generación de un mercado interno, ni al incremento de consumo, que en otras circunstancias hubiera podido dinamizar la economía urbana³.

Los centros mineros se aprovisionaban mediante la importación de toda gama de productos desde los agropecuarios, hasta aquellos más elaborados como telas y zapatos,

³ Los centros mineros, se constituyen en una forma "particular" de urbanización, puesto las empresas mineras solían organizar "ciudadelas" cerca a la fuente laboral, cuyo aprovisionamiento se realizaba con mercancía importada. Aunque absorben mano de obra de origen rural, las condiciones de vida de los trabajadores mineros eran tan paupérrimas, que su capacidad de consumo fue casi nula. (Calderon y Smulker: 2000) Baste decir que antes de la revolución de 1952 se calculó que la esperanza de vida de un trabajador minero era de apenas 35 años y el salario alcanzaba a menos de \$us 0.32 por día (Dunkerley: 1986).

y de esta forma se fomentaba el desarrollo de las funciones comerciales más que industriales en las urbes⁴.

De otro lado, la actividad que involucraba a la mayor cantidad de población en Bolivia seguía siendo la agrícola, hasta 1950 el 72% de la población se dedicaba a esta actividad, aunque es ahí donde se manifestaba con mayor nitidez la pervivencia de las estructuras feudales, puesto que producían solo el 33% del PIB nacional.

El historiador James Dunkerley (1984) apunta que para 1950, la mitad de las tierras cultivables estaban en manos de unos cuantos latifundistas, aunque lo realmente relevante es la ineficiencia con que eran trabajadas, menos del 6% de la tierra era cultivada con maquinaria. El bajo nivel de producción de las haciendas, la estrechez del mercado local, el predominio del alquiler de mano de obra como la principal forma de ocupación del campesino y de acceso a la tierra "...aseguraban que la evolución hacia una agricultura comercial sea marginal". Klein, por su lado apunta que gracias a la total falta de inversión en semillas o maquinaria, el sector agrícola eran tan rudimentario y atrasado que apenas podía satisfacer las necesidades de los centros urbanos del país. Para ese momento, Bolivia importaba incluso alimentos tradicionales como tubérculos andinos. [Klein: 1982:237]

Bolivia, hasta 1979 fue considerado un país de urbanización tardía, la población rural era de 68.5 % lo que lo ubicaba como uno de los países más campesino del continente, para entonces sólo tenía una ciudad con más de 500.000 habitantes, La Paz (Schoop: 9-11). La realidad en otros países de Latinoamérica era diferente; ya para 1930 la ciudad de México y Rio de Janeiro superaban el millón y Buenos Aires tenía dos. (Romero: 2001: 251).

Nacionalismo y Urbanización

En el primer tercio del siglo XX Bolivia se hallaba en la etapa avanzada de una crisis que comprometía seriamente la continuidad en el poder de la casta política gobernante, que había cifrado toda su fe en el liberalismo económico, como la vía más rápida para alcanzar el desarrollo capitalista. Pero, la realidad mostraba que esta política sostenida durante tres décadas no hizo más que exacerbar el rol de Bolivia como proveedor de materia prima, aunque es más correcto decir mono- productor, y una creciente debilidad frente a los cambios en los precios internacionales, ya que la economía nacional dependía casi exclusivamente de la exportación de estaño, cuyos principales yacimientos

⁴ Los datos de Smulker y Calderon (2000:30) muestran que la dinámica urbana se centró en la ciudad de La Paz que en los años de la colonia y el inicio del periodo entre 1909 y 1950 habría incrementado su población de 78.856 a 321.000 habitantes a un ritmo de crecimiento mayor que el registrado durante la colonia.

estaban bajo la propiedad de unos pocos empresarios⁵. En estas circunstancias, a decir de Klein (1982), Bolivia sería uno de los primeros países del mundo en sentir los efectos de la gran crisis económica mundial, conocida como la Gran Depresión.

La estructura poblacional apenas si había sido alterada, la población rural ligada a las haciendas seguía siendo mayoritaria, y la población urbana permanecía casi estanca. Lo nuevo fueron las concentraciones de trabajadores en los campamentos mineros. Klein sostiene que hacia 1900 se trataría de un conglomerado de 13.000 obreros. Barragán (pp. 229) en cambio indica que en total la industria paceña tenía hacia 1941 unos 8.287 trabajadores en todas las ramas, pero las minas de Patiño, Hoschild y Aramayo superaban la concentración poblacional de las fábricas paceñas, con 30.00 trabajadores. Más allá de estas diferencias, lo que sí es evidente es la desproporción existente entre el número de trabajadores mineros y casi todo el sector industrial⁶, pues debemos tener en cuenta que para entonces La Paz concentraba el 94% de los establecimientos industriales del país. La figura es clara, no solo en términos de la distribución poblacional existente en ese momento, sobre el (lento y escaso) desarrollo de la industria nacional.

Con todo, la situación general del país era propicia para que surgieran plateamientos de cambios. En el área rural, la expansión de las haciendas, que significaba el despojo de tierras comunitarias, y la persistencia del trabajo servil, habían ya dado como fruto un clima de agitación y levantamientos regulares desde 1920. En el área urbana, se había formado un incipiente proletariado, el mismo que ya daba los primeros pasos de su vida organizada. Lo mismo sucedía en los centros mineros, que no solo eran ya protagonistas de movimientos huelguísticos importantes, sino que ya habían comenzado a ser las víctimas de esa interminable historia de masacres que se hizo tan recurrente en nuestra historia.⁷

Muchos autores coincidirán con Rivera en la afirmación de que en tales circunstancias, la oligarquía boliviana vio en la guerra “una solución por la vía del desastre” (2003:93) para controlar eficaz pero temporalmente el descontento social, y también para justificar la represión contra los agitadores, convertidos en “enemigos de la patria”. Más allá de estos cálculos políticos, la guerra y el fracaso de las élites en la misma, sólo consiguieron dar el último empujón antes del derrumbe del proyecto político liberal.

5 Estos habían logrado favorecer sus intereses con la presencia de funcionarios en los más altos cargos jerárquicos, de tal suerte que el Estado boliviano era pequeña a sucursal de los negocios de los “barones del Estalo”, a quien se dejaba las inversiones más costosas como el tema del transporte ferroviario, mientras ellos se quedaban con la mayor parte de las ganancias. Los impuestos, que dejaban al país eran ínfimos y aún así, motivo de regateo permanente.

6 Barragán sostiene que para entonces La Paz concentraba el 94% de los establecimientos industriales del país, por lo que la cantidad de trabajadores involucrados en esta actividad puede considerarse casi la totalidad de obreros a nivel nacional.

7 Guillermo Lora, en su *Historia del Movimiento Obrero*, rememora una serie de incidentes y conflictos laborales entre obreros y personal administrativo en las minas de los barones del Estalo a partir de 1906. Afirma que algunos incluso terminaron con enfrentamientos armados, pero la llamada “Masacre de Uncia” (1923) debería ser considerada un hito especial del movimiento minero, debido a que la huelga comenzó por la demanda del derecho a la sindicalización, y en los otros casos se circunscribía a temas salariales. (pp. 349. Tomo 1)

Desarmadas y ya inocuas las bases del régimen, se fue construyendo una especie de programa de reformas político- económicas que venían en su reemplazo, las mismas giraban en torno a la necesidad de un Estado centralizado y extendido que se encargara de dirigir todos los aspectos de la economía y de cierta manera aunque no en un sentido unívoco también el cuestionamiento al sistema de castas. En torno a estos temas, se decantaría la crisis política que dio lugar a la Revolución de 1952.

Pero es necesario aclarar que los cambios en la estructura social, comenzaron a hacerse visibles aún antes de producirse la revolución misma. La crisis, la guerra y la expropiación de tierras comunitarias, produjeron una intensa movilidad territorial en esos años. Este ir y venir de gentes daría también lugar a la circulación de ideas y experiencias. La ciudad de La Paz, fue el centro en torno cual giraban estos vaivenes y la principal receptora de migrantes. Calderon y Szmukler (2000) señalan que la ciudad de La Paz creció 5.3 veces entre 1902 y 1950 pero solo entre 1928 y 1935, es decir siete años, su población casi se duplicó. Este crecimiento no tuvo paralelo en las otras ciudades, ya que La Paz cuadruplicaba el tamaño de la segunda ciudad más importante (Cochabamba). Este hecho, dio lugar a que, momentáneamente⁸, Bolivia reflejara la tendencia latinoamericana de crecimiento exponencial de la ciudad capital, denominado macrocefalismo.

Barragán (1990) llega a la conclusión de que afines del siglo XIX el proceso de expansión urbana en la ciudad de La Paz, supuso una ocupación del espacio territorial indígena y la conversión de las tierras de comunidad en haciendas particulares o barrios de la ciudad. Este despojo tuvo como consecuencia la formación de nuevas capas sociales dentro de la ciudad, como obreros de industria, artesanos, comerciantes y otros. Ello no significó una ruptura “ciudad-campo, característica de todas las ciudades”, gracias a la pervivencia de comunidades indígenas, que quedaban por fuera del ataque terrateniente, y que también nutrían la expansión urbana, de forma temporal o definitiva. Según la autora, éstos “...recuerdan constantemente otro tipo de organización socioeconómica y cultural” a los nuevos ciudadanos y de esta forma se renuevan los lazos con el mundo rural.

En términos políticos, esto bien pudo plasmarse en una temprana pero fructífera articulación urbano/rural. Rivera (2003) por ejemplo, nos describe una relación intensa aunque “contradictoria” entre sectores populares urbanos y el mundo rural campesino e indígena, cuyos orígenes se remontarían al contacto entre caciques y autoridades tradicionales de ayllu con estudiantes y obreros en las ciudades. A decir de la mencionada autora, muchas organizaciones obreras de ese tiempo habían incorporado en la estructura orgánica de sus organizaciones, secretarías de vinculación con indígenas y campesinos. Al mismo tiempo, efectuaban tareas de asesoramiento o apoyo en sus demandas, especialmente los reclamos judiciales para evitar el despojo de sus territorios. También señala que individualmente campesinos e indígenas ocupaban cargos dentro de estructuras

⁸ Decimos “momentáneamente” debido al hecho de actualmente Bolivia ya no presenta esta situación. Existen tres ciudades que más o menos tienen el mismo peso poblacional. Más adelante volveremos sobre este tema.

obreras como parte de una estrategia de vinculación, o tal vez porque simplemente sus vidas ya trascurrían entre el mundo rural y el urbano. Este hecho habría despertado una inmensa preocupación entre las autoridades gubernamentales a tal punto de incorporar disposiciones que convertían en ilegal estas acciones. El grado de “peligrosidad” de estos contactos debió hacerse patente en la adopción de formas de lucha de corte obrero por los campesinos, como fue el caso de la huelga de brazos caídos, practicada por los colonos en las haciendas antes de la Revolución y que pusieron en jaque a los terratenientes.

Esta “alianza” fue afectada profundamente en las puertas de la Revolución y en sus primeros años, sea por la cooptación política de un grueso sector del campesinado, sea por el hecho de que la reformas nacionalistas, dejaron satisfechos a los indígenas.

Una vez producida la revolución, el modelo de acumulación propuesto e implementado por los gobiernos nacionalistas a partir de 1952, afectaron la composición poblacional y distribución territorial de forma significativa del país en su conjunto. Pero, de manera más específica se diseñaron e implementaron políticas urbanas, diríamos que por primera vez en la historia de Bolivia, cuyo alcance fue nacional. Nos detendremos en estos temas.

No cabe duda que uno de los hechos más importantes para el posterior desarrollo de las ciudades fue la Reforma Agraria, pero igualmente importante es la modalidad con que fue aplicada. En el occidente, se distribuyó tierras de manera individual, consolidando la “campesinización” de la población. Hecho que a decir de Rivera, encarnaba de mejor manera “el ideal de patria plebeya -mestiza que estaba en la raíz del proyecto de homogeneización cultural movimientista” (2003:122). En cambio, en el oriente donde existía un sector agropecuario con uso intensivo de capital se mantuvo intacta la propiedad latifundista.

Posteriormente, se haría evidente que aunque el sector campesino, sería el principal soporte político de todos los gobiernos nacionalistas, incluidos los militares, sus parcelas y lo que pasara con ellas no formaba parte del programa de desarrollo de económico. El MNR y todos los gobiernos que vinieron después convirtieron en una verdadera política de Estado el desarrollo de una agricultura “moderna” en el Oriente del país, cuyos empresarios, fueron los beneficiarios del financiamiento público.

Pasadas dos décadas, la pequeña propiedad agraria de valles y altiplano languidecía inevitablemente por efecto del empobrecimiento de suelos y la excesiva parcelación, mientras la agroindustria, especialmente del oriente, evolucionó hasta convertirse en el exportador agropecuario más importante del país en nuestros días.

La Reforma Agraria, de forma inmediata y a largo plazo, aceleró la migración campesina hacia las ciudades, particularmente en el Occidente del país, mientras en Oriente, se generaba un polo de atracción que convirtió en pocos años la región, en una de las más

populadas de Bolivia. En general, el ritmo de crecimiento urbano duplicó las tasas de crecimiento nacionales en el período 1950 - 1976, mientras se registró un estancamiento en el área rural (ver Gráfico1).

La población urbana en Bolivia pasó de significar 26% del total en 1950 a 42% en 1976 y aunque el crecimiento urbano en todas las ciudades fue significativo, el más vertiginoso tuvo lugar en Santa Cruz. Hasta 1950 La Paz, concentraba al 41 % de la población urbana del país, mientras que Santa Cruz solo tenía el 9%. Para 1976, aunque La Paz mantenía un peso poblacional importante, con el 36% de la población urbana nacional, Santa Cruz ya concentraba al 19% de la población urbana del país. En términos numéricos, la población urbana de Santa Cruz pasó de 64.710 habitantes en 1950 a 1.545.648 en 2001. (Ver Gráfico 2 y 3)

El peso de la ciudad de La Paz en el complejo urbano, iría disminuyendo cada vez más en el tiempo. En el 2001, tanto Santa Cruz como La Paz ostentarían por igual 29% de la población urbana del país seguidos por Cochabamba con 16%. Esta situación tiene importancia vital debido a que no se puede ya hablar del fenómeno de macrofocalismo. Autores como Mazureck (2008) hablan de la configuración de una tripolarización urbana, “estamos ante tres ciudades de casi el mismo rango”, hecho que se considera “rarísimo en América Latina y el Mundo”.

Sin embargo, el crecimiento de la población urbana, no halló paralelo en el crecimiento industrial, si bien se diversificó la exportación, todavía se trataba de materias

GRAFICO Nº 1 **Evolución tasa anual de crecimiento de la población**

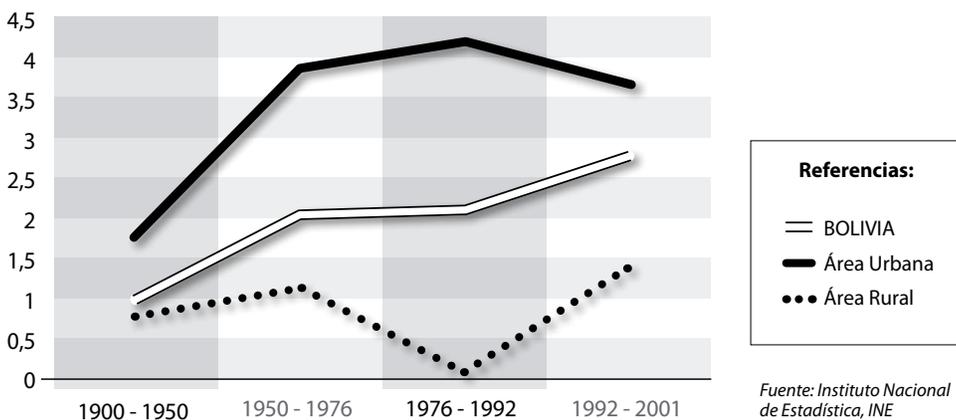
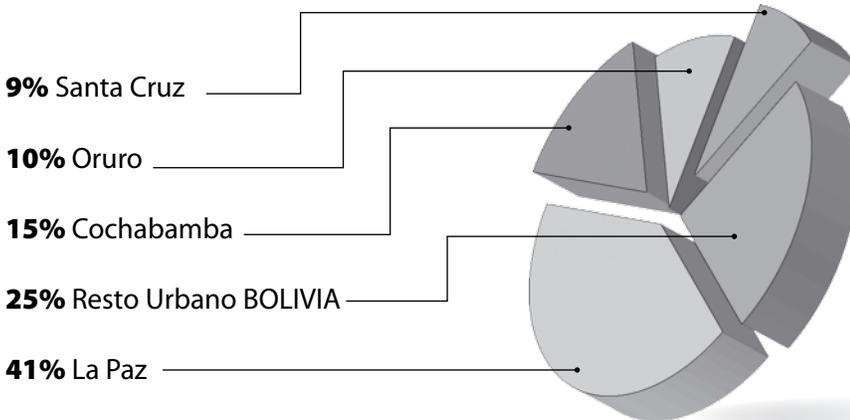
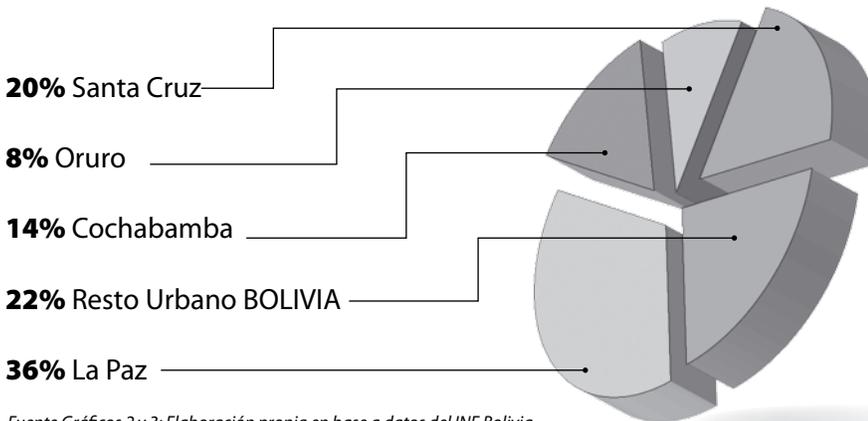


GRAFICO Nº 2 **Distribución de la población urbana (Bolivia, 1950)**GRAFICO Nº 3 **Distribución de la población urbana (Bolivia, 1976)**

Fuente Gráficos 2 y 3: Elaboración propia en base a datos del INE Bolivia

primas⁹. Para 1963 se registraron solo 18.118 trabajadores en el rubro de manufactura, contra 55.000 de la industria pequeña y 65.000 artesanos y trabajadores independientes. (Zontag: 1968:132-134, en Calderon & Szmukler, 2000: 94) Al parecer, lo único significativo en la composición del empleo urbano fue el crecimiento de la burocracia estatal.

⁹ El Estaño disminuyó poco a poco su importancia, y con ello la propia Corporación Minera de Bolivia, al mismo tiempo se desarrollaba la minería privada, llamada pequeña y mediana ofertando otros minerales al mercado mundial. Pero, lo significativo fue en inicio de la era de los hidrocarburos, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPF, comenzó a explotar petróleo y posteriormente gas natural que ya en 1983 sustituiría al estaño como principal producto de exportación. (ver Klein y Dunkerley)

A manera de ejemplo señala que solo en la Alcaldía de La Paz entre 1957 y 1964 se crearon 11 once reparticiones con la finalidad de “ocupar” a los militantes del MNR y también para mantener en la población, la ilusión de que esto significaría la agilización de la atención de necesidades. (Calderon & Szmukler, 2000: 94). Hasta 1985, el Estado boliviano era el empleador más importante del sector formal, del total de la población ocupada en área urbana 18,1% trabajaba en sector semi - empresarial, 36,9% en el sector familiar (cuenta propia y familiares no remunerados), 5% en servicio doméstico, 15,7% en empresas y **24,3% en el sector estatal** (Wanderley: 2009:35).

Por otra parte, conforme el proceso de urbanización se aceleraba, se hacía cada vez más relevante en la planificación del desarrollo nacional. Un hecho particularmente importante de comprender es que en ese momento prácticamente no existía política urbana, pero esto cambió, las Alcaldías comenzaron a tener funciones mayores de orden técnico¹⁰ y de planificación, lo que redundó en una mayor inversión de recursos estatales, particularmente en dos ámbitos. La dotación de servicios básicos, como el agua y el alcantarillado (consumo colectivo)¹¹ y la problemática de la vivienda.

Tomaremos como referencia el trabajo de Calderón y Szmukler (2000) en cuyo trabajo se han ocupado de manera extensa de contabilizar y clasificar tanto las obras más importantes como los lugares de la ciudad donde los mismo fueron realizados en el período que va desde 1952 hasta los años 90, aunque la ciudad de La Paz es el foco principal de esta investigación, también se han compilado datos sobre la situación de servicios y vivienda a nivel nacional que son útiles para poder tener una visión más amplia.

Los mencionados autores, distinguen cinco etapas en la política urbana de 1952 a 1976, las mismas que se corresponden con los vaivenes propios de la revolución boliviana. (Grafico 4 y 5) En este intervalo de tiempo, es posible evidenciar que en la primera etapa existe una política urbana con orientación popular y “pluri – clasista” que favorece a los sectores más pobres de la ciudad. Los barrios y Villas son beneficiados con una inversión pública sin precedentes, destinada a satisfacer el consumo colectivo primario, es decir agua potable, alcantarillado y luz eléctrica.

Conforme pasa el tiempo, se producen sutiles pero irreversibles transformaciones en la orientación de política urbana (1957 – 1960) puesto que la inversión para los sectores populares reduce a casi la mitad y los sectores medios y altos son objeto de mayor atención. Este hecho parece condicionado por una menor disponibilidad de recursos para la inversión pública que mostraba los efectos de la crisis económica en esos años.

¹⁰ Lo que no impidió y hasta a veces justificó la burocratización de estas entidades.

¹¹ Manuel Castells introdujo en concepto de “consumo colectivo”, en palabras de Jaramillo (1981) se los define como una serie de valores de uso que por alguna de sus características, son difíciles de suministrar por el capital individual y, sin embargo, son indispensables para la acumulación de capital en general. Esta circunstancia no se desprende de algo esencial y absoluto de estos valores de uso, sino que se trata de una característica de tipo histórico. Entre los consumos colectivos más importantes de nuestro contexto histórico, señalamos los servicios públicos, la vialidad y los espacios colectivos, los servicios de salud, de educación y la vivienda para sectores populares.

GRAFICO N° 4 **Sectores de la ciudad donde se ejecutaron obras urbanas de consumo colectivo**

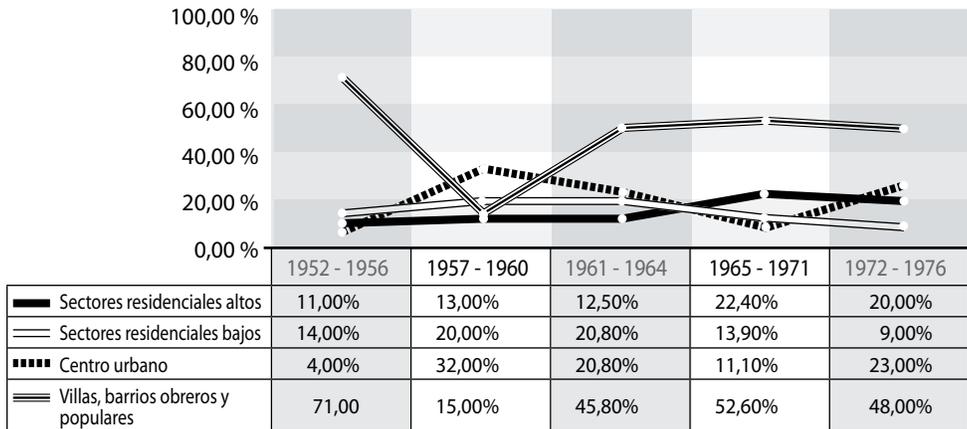
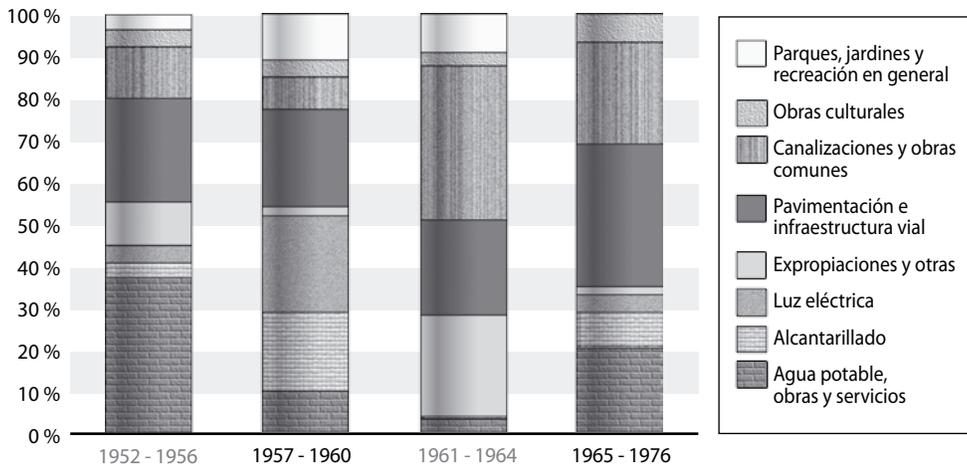


GRAFICO N° 5 **Obras urbanas de consumo colectivo por tipo**



Fuente Gráficos 4 y 5: Elaboración propia en base a datos de Calderón y Szmukler (2000)

En el período (1965-1976) denominada por Calderón y Szmukler “autoritarismo burocrático”¹², en su fase uno y dos, existe una disponibilidad importante de recursos para la inversión, misma que responde a dos causas: mejoría en los precios de las princi-

¹² Corresponde a los gobiernos de los militares; Barrientos, Ovando, Torres y Banzer quienes asumen la presidencia del país acertando golpes de estado.

pales materias primas de exportación y la afluencia de financiamiento externo, que llega al país mediante préstamos o también vía “cooperación internacional”, principalmente norteamericana. Esta excepcional situación económica, se traduce en un incremento de la inversión pública en consumo colectivo, pero en contrapartida es el capital financiero el que saca mayor provecho ya que son las grandes empresas constructoras las más beneficiadas.

Calderón y Szmukler afirman que también se impone como ideología, el llamado modernismo ciudadano de carácter excluyente, lo cual se expresa en el incremento de obras de “embellecimiento” urbano, o sea pavimentación de vías, construcción de monumentos, etc. que solo benefician a los sectores medios y ricos de la ciudad. Este tipo de obras se incrementan incluso en los barrios y villas pobres, expresando quizás que más allá de las necesidades inmediatas, en la ciudad se comparte o se imponen ciertas ideas que tiene influencia en el tipo de demandas de los sectores más pobres de la ciudad.

Aunque en todo el período nacionalista se realizaron grandes inversiones para proyectos de dotación de agua potable y alcantarillado en las principales ciudades, es evidente que los sectores medios y ricos fueron la población más beneficiada.

Del total de la población urbana (1.787.700 personas en 1975), sólo el 45% tenía conexión domiciliaria y el 11.6% contaba con acceso fácil a piletas públicas (gracias a la política popular de los primeros años de la revolución). Es decir, un 56% tenía acceso limitado a este consumo mientras que un 43.4% no tenía acceso a él. Sólo 23% de la población urbana (425.625 personas) tenía acceso a alcantarillado y el 30% a los servicios de recolección y disposición de desechos sólidos.¹³

En lo que toca a la vivienda y el suelo urbano, un tema particularmente sensible en las ciudades, por la inmensa cantidad de inquilinos que sufrían el consiguiente problema de los elevados costos de alquiler, la intervención estatal habría comenzado con el Decreto Ley 3819 de Expropiaciones Urbanas, signado el 27 de agosto de 1954.

El Decreto establecía que el Estado podía expropiar aquellos terrenos del radio urbano “sin edificar” que sean mayores a 10.000 mts². Esta misma extensión de terreno era lo máximo que los dueños podían conservar en propiedad. En caso de afectación el propietario podía “escoger la parte que más le convenga” para quedarse con ella y cedería en favor de la municipalidad el sobrante. Los terrenos expropiados, serían luego vendidos “a obreros y elementos de la clase media que no posean bienes inmuebles urbanos”.¹⁴

¹³ Los datos son del Plan de Desarrollo Económico y Social (1978) citado en Calderon y Szmukler (2000)

¹⁴ Decreto Ley N° 3819. Artículos 1, 2 y 5

Según los datos de Calderón y Szmukler (2000), esto permitió que en los primeros años luego de dictado el decreto, en La Paz fueran beneficiadas con la redistribución de tierra urbana 26 agrupaciones obreras que aglutinaban a 20 mil personas y en Santa Cruz la cifra llegó a 39 barrios “recuperados”, no sin conflicto, para los sectores marginales y obreros de la ciudad. Tampoco se pagaron indemnizaciones, debido a la excesiva burocracia de los trámites y la devaluación de la moneda. Esta política habría tenido continuidad, incluso hasta los años 60, pero poco a poco los propietarios fueron ganando terreno en la disputa, hasta lograr restablecer su control sobre el mercado de tierras.

Los logros y avances en materia de vivienda fueron menores, si en 1960 el Instituto Nacional de vivienda había señalado un déficit habitacional de 57 mil viviendas en el área urbana nacional y el Plan decenal se fijó como meta la construcción de 45 mil viviendas en el quinquenio 1962 -1967, lo cierto es que hasta 1964 se logró efectivamente construir solo 847 viviendas. Entre el 1965 -1971 el Consejo Nacional de la Vivienda se encarga de construir viviendas para sectores obreros y empleados públicos, pero paralelamente proliferan programas de vivienda “facilitados por la iniciativa estatal, a través del otorgamiento de créditos para sectores medios y altos a cargo de la caja Central de Ahorro y Préstamo para la vivienda”. Como fruto de esta política, se desarrollan nuevos espacios urbanizados por sectores medios y altos así como barrios residenciales al sur de la ciudad de La Paz. Por otro lado, los sectores asalariados iniciaron políticas autónomas de apoyo a la vivienda con la creación de consejos autónomos, como la minera, la ferroviaria, petrolera, militar, etc.

Pero las limitaciones de esta política se evidencian en el hecho de que excluía de la posibilidad de contar con vivienda a la gran mayoría de hogares que lo necesitaban. En base a los datos del Plan de desarrollo económico y social (1978) el trabajo de Calderón y Szmukler, presenta la situación de la vivienda en Bolivia hacia 1975.

“Del total de viviendas a nivel nacional, un 83% estaba constituido por viviendas inestables de baja calidad, solo el 17% reunía condiciones de buena calidad. Asimismo, el 53% estaba constituido por viviendas prácticamente inhabitables...”

La demanda real era enorme e ilustraba con precisión lo dramático del problema. La demanda necesaria era de 111.291 viviendas, tomando en cuenta una demanda inmediata de 67.522 viviendas, más 43.769 en mal estado, esta demanda se incrementaba cada año en 9.282 unidades”.

En contrapartida, el promedio de construcción de viviendas entre 1968 y 1978, habría alcanzado a solo mil por año. Para completar el cuadro, se registraba una alta concentración de la propiedad urbana, debido a que 55% de la población urbana alquilaba vivienda.

En conjunto, los datos sobre la cobertura de servicios como el tema de la vivienda y el suelo urbano, muestran que el “Estado de Bienestar”, alcanzó a cubrir las necesidades los sectores medios y altos y acaso a un porcentaje pequeño de la población asalariada. Eso sin dejar de mencionar que esto se logró a costa de un alto endeudamiento estatal con organismos internacionales. Mientras los barrios populares crecían a un ritmo acelerado, se dejaba un déficit importante en materia de vivienda y servicios, como un problema a enfrentar en un futuro lejano.

Pero si esto sucedía en un período en el cual el Estado había asumido los problemas urbanos como una tarea que debía ser enfrentada con inversión pública, las posibilidades de allanar las distancias sociales en la esfera urbana se harán cada vez más inciertas con el cambio de política económica.



Neoliberalismo y urbanización

La reconfiguración territorial. Sub-urbanización y des-ruralización

En los años 70 los sectores dominantes de la economía mundial buscaban una salida a la crisis en la que estaba envuelto el capitalismo. Como relata David Harvey en su “Breve historia del Neoliberalismo”, el principal cambio que terminaría imponiéndose como paradigma económico en el mundo entero, tenía que ver con abandonar la intervención estatal en la economía¹, puesto que se partía del supuesto de que ésta sólo generaba “constreñimientos” a las actividades empresariales y corporativas. Una vez que las fuerzas del mercado fueran liberadas de estas ataduras, se podría iniciar una nueva etapa de crecimiento económico.

La aplicación muchas veces forzada de las reformas económicas, en la mayoría de los países del Tercer Mundo, permitiría ampliar los mercados a terrenos antes siquiera pensados, “... *la expansión del mercado ha llegado a convertir el agua, los servicios de salud, y la educación en mercancías. Algo que anteriormente era impensable*” (Harvey: 2007).

Esta búsqueda de mejores condiciones para generar ganancia, que inició en los años 70, fue produciendo al mismo tiempo una reconfiguración territorial importante, “la mayor en cinco siglos” según Zibechi [2008], al cambiar la división internacio-

¹ La misma que había dado lugar al desarrollo del llamado Estado de Bienestar.

nal del trabajo, las relaciones y ritmos de crecimiento campo-ciudad; intra-urbana; interurbanas; intra-regionales; inter-regionales/nacionales e internacionales, han sido trastocadas.

Desde nuestro punto de vista, son dos los hechos más relevantes en términos de su impacto en la estructura urbana: la des-ruralización y la sub-urbanización. El primero es fruto de una de las mayores olas de expropiación indígena – campesina que se ha vivido en los últimos 30/40 años, ya que el actual modelo de explotación de recursos naturales en las escalas fijadas por las empresas transnacionales y apoyadas por los gobiernos de los países semi-coloniales, es simplemente incompatible con la pequeña producción.

De hecho, si el ajuste estructural significó ya un duro golpe para el pequeño productor con la eliminación de subvenciones y la libre importación de alimentos agrícolas²; la expansión de la explotación minera/ petrolera y el ingreso de las grandes empresas en el agro negocio, han impulsado los procesos de desalojo y reconcentración de tierras, por “vías legales o ilegales”³, que actúan de manera complementaria. Entre ellas figuran: compra o arrendamiento masivo de tierras, guerra de baja intensidad (incluida la organización de grupos paramilitares); desalojos con militarización en concesiones (mineras, petroleras y latifundios) y desplazamientos por contaminación y agotamiento de tierras y agua. (Zibechi 2008)

Este hecho ha sostenido y disparado las tasas de migración hacia las ciudades que se ha producido en casi todo el Tercer Mundo. Según Davis (2003: 28-29) la mayoría de los expertos quedaron sorprendidos debido al hecho de que la urbanización en los países coloniales, continuaba su “desenfrenada carrera”⁴ (3,8 por 100 frente a un 2,1 de las ciudades europeas),⁵ pese a la contracción del empleo, la acelerada des – industrialización, la reducción del empleo público y la caída de las clases medias, que producía el neoliberalismo a su paso por las urbes de África, América Latina y Asia.

2 “Uno por uno, los gobiernos nacionales atrapados por la deuda, se encontraron sometidos a los programas de ajuste estructural y condicionados pro el Fondo Monetario Internacional. Las subvenciones, las mejoras de los inputs agrícolas y la construcción de infraestructuras rurales se vieron drásticamente reducidas. A medida que tanto en América Latina como en África se abandonaron los esfuerzos por ‘modernizar’ la agricultura, los agricultores y campesinos se iban encontrando a merced de la estrategia de ‘nadar o ahogarse’ que proponían las instituciones financieras internacionales, la desregulación de los mercados nacionales empujó a productores agrícolas hacia los mercados globales, donde los campesinos pequeños y medianos no podrían competir. Los programas de ajuste y las políticas de liberalización económica supusieron la convergencia de las tendencias mundiales que buscaban el cierre de mercados agrícolas, con las políticas nacionales que provocaban la desaparición del campesinado D. Bryceson, ¿Disappearing pasantries? Rural labor redundancy in the neoliberal Era and beyond” pp 304 -305 Tomado de Davis: 2003

3 “Ciertamente parece poco importante que estos desplazamientos se produzcan por vías legales o ilegales, poniendo en juego los mecanismos del mercado o través de la militarización de los territorios en disputa. En Brasil. Los conflictos más intensos se desarrollan precisamente en las áreas donde se está expandiendo el agro negocio...” [Zibechi, 2008 @93]

4 “Los modelos económicos ortodoxos (...) mantenían que la recesión urbana traería como consecuencia una ralentización o incluso una inversión del proceso migratorio” (Davis: 2003: 28)

5 En Bolivia ciudades como El Alto han tenido tasas de crecimiento de más del 8% en a etapa de implementación del ajuste estructural.

El crecimiento veloz de las ciudades, alimentado por el proceso de des-ruralización, en un contexto de ajuste estructural “... ha resultado una receta infalible para la producción en masa de áreas urbanas hiper-degradadas”, fenómeno que se ha denominado sub-urbanización.

La (sub) urbanización boliviana en tiempos neoliberales

En Bolivia, según los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de crecimiento de la población urbana más alta (4,2) se registra en el período 1976 – 1992⁶ que coincide con el período de crisis económica, apertura democrática e implementación de las reformas neoliberales de primera generación. En el mismo período, la tasa de crecimiento de la población rural es casi nula (0,09 % anual)⁷. En el Censo del 2001, se observa la continuación de esta tendencia, el área urbana tuvo un crecimiento mayor al nacional con una tasa de crecimiento de 3.62%, pero se observa una ligera elevación en la tasa de crecimiento de la población rural con un 1,42⁸. (ver Grafico 1)

En todo caso, el proceso de des-ruralización, tiene su origen en la situación de bancarrota de la pequeña producción campesina. En el contexto de la crisis de los 80, la reducción de demanda de productos agrícolas destinados a la exportación, la reducción del precio de los mismos y finalmente la reducción de la demanda interna, como efecto de la caída de los ingresos de los trabajadores, influyó en el abandono de la actividad agrícola (Pradilla, 1987: 287). Y a ello debería sumarse el duro golpe que significó la libre importación de productos agrícolas.

Nele Marien, en su artículo “Adiós al Pequeño Productor” (2002), asevera que un periodo de 20 años (1981-2000) las importaciones oficiales de alimentos se cuadruplicaron, en especial de 1998 en adelante, mientras por un otro lado hay una total permisividad con el contrabando. Esto habría deteriorado el tipo de intercambio campo – ciudad. Los precios al consumidor se cuadruplicaron entre 1987 – 2000 pero los precios de productos agrícolas sólo se duplicaron.

Marien, también pone atención a los efectos que tuvo en el agro la explotación de recursos naturales por empresas transnacionales, pues los campesinos tendrían que lidiar

6 La tasa de crecimiento medio anual de América Latina es de 2,8% (1980 -1990) y 2,4 para el periodo 1990 – 2000. Fuente: CEPAL: 2009: 90.

7 Para el país, este hecho fue relevante porque significó un cambio histórico en la proporción de población urbano/rural puesto que a partir de entonces nos convertimos un país mayoritariamente urbano. Esta tendencia, aunque ha tenido algunos matices, no se ha modificado sustancialmente. Para el año 2001 la población urbana ya representaba el 62% del total nacional.

8 El año 1994 seis años antes del último censo nacional, se implementó en Bolivia la descentralización municipal, que consistía en la distribución de recursos desde el nivel nacional a los gobiernos locales. El criterio para esta distribución fue la cantidad de población de cada municipio. Para la realización del CENSO en 2001, en los sectores rurales se hicieron llamados a los residentes en áreas urbanas para que “retornaran” a sus lugares de origen, ya que esto supondría recibir mayores recursos. Para otros autores, este dato fue visto como un consecuencia inmediata del éxito de la descentralización que al mejorar las condiciones de vida en el campo, detuvo los procesos de migración.

con los efectos del incremento en el número de concesiones mineras e hidrocarburíferas, cuya actividad terminó por generar procesos de degradación de los suelos y contaminación de las fuentes de agua.

“Desde la implementación de las nuevas políticas económicas, la explotación se ha transferido a las empresas transnacionales, que han obtenido concesiones madereras, petroleras y mineras. Como la racionalidad neoliberal indica que la actividad con mayores rendimientos económicos debe prevalecer sobre la actividad con menores ganancias, las concesiones mineras siempre tienen prioridad sobre la producción campesina, lo que ha provocado la expulsión de los campesinos que se encuentran en potenciales áreas mineras, sobre todo en el occidente del país.

Pero la minería no sólo afecta a los propietarios de la tierra, sino que también a toda la producción campesina que se encuentra río abajo de la mina, por las aguas contaminadas con metales pesados.

En el oriente, las empresas petroleras y madereras se sobreponen a los territorios indígenas, ya que consiguen concesiones y expropián las tierras o los indígenas (...)

De esta forma, las transnacionales se adueñan del subsuelo, muchas veces, también de la biodiversidad de la región y son totalmente depredadores del medio ambiente: tanto los petroleros como los madereros destruyen bosque primario, contaminan el suelo, el agua y afectan, en muchos casos, el equilibrio ambiental, elementos imprescindibles para la sobrevivencia de los pueblos indígenas” (Marien:2002: 5).

Por supuesto que esta situación tiene efectos en otras áreas como la producción de alimentos, según un estudio de AIPE (2011), en los últimos años, se ha reducido la proporción de superficies destinadas a cultivos de alimentos, pero se incrementaron los cultivos industriales y comerciales. En términos cuantitativos señalan que desde 1985, se ha reducido la participación de la producción campesina en el valor bruto de la producción agrícola. Si en 1985 significaba el 43%, el 2005 alcanzaba a 32% y solo 29% en 2009. En contrapartida, la producción empresarial subió su participación de 57% a 68% y 72% en los mismos años.

Esta situación abre el camino para que el pequeño productor finalmente opte por la migración hacia las ciudades, misma que alimentará los cordones periurbanos de las ciudades principales. Sin embargo, en las ciudades están inmersas en su propia crisis. Desde los primeros años de aplicación del modelo neoliberal, los niveles de desempleo se dispararon sin que este hecho fuera mínimamente revertido en la década del 90. La

tasa de desempleo urbano aumentó de 3,8% en 1996 a 7,2 en 1999, y llegó a 8,1% en 2005 en su punto más alto, afectando principalmente a las mujeres (Wanderley: 2009: 48).

Siguiendo a Wanderley, las características más importantes del período 1985 - 2003 en términos del régimen de trabajo fue el incremento del sector familiar, el semi-emplearial y doméstico, la contracción del empleo generado por el sector público, el incremento del desempleo abierto y la extensión de la modalidad de contratación eventual o por plazo definido. Este último uno de los rasgos más importantes del llamado sector informal que conlleva ausencia de regulaciones, y principalmente ausencia de derechos laborales.

Visto en perspectiva, el sector informal, aunque brinda mayores y más fáciles opciones de inserción laboral, es al mismo tiempo es el sector donde los ingresos se deterioran con más rapidez, ya que la expansión del sector es posible "...no porque origine nuevas vías sino porque divide las ya existentes, dividiendo claro está los ingresos" (Davis: 2003: 242-245). En el caso boliviano, los datos comparativos de los ingresos medios de asalariados y trabajadores por cuenta propia en el período (1989 - 2004) muestran que mientras el ingreso medio de los primeros se ha mantenido, el de los segundos ha caído drásticamente. (CEPAL, Panorama social de América Latina 2006, tomado de: Wanderley: 2009: 50)

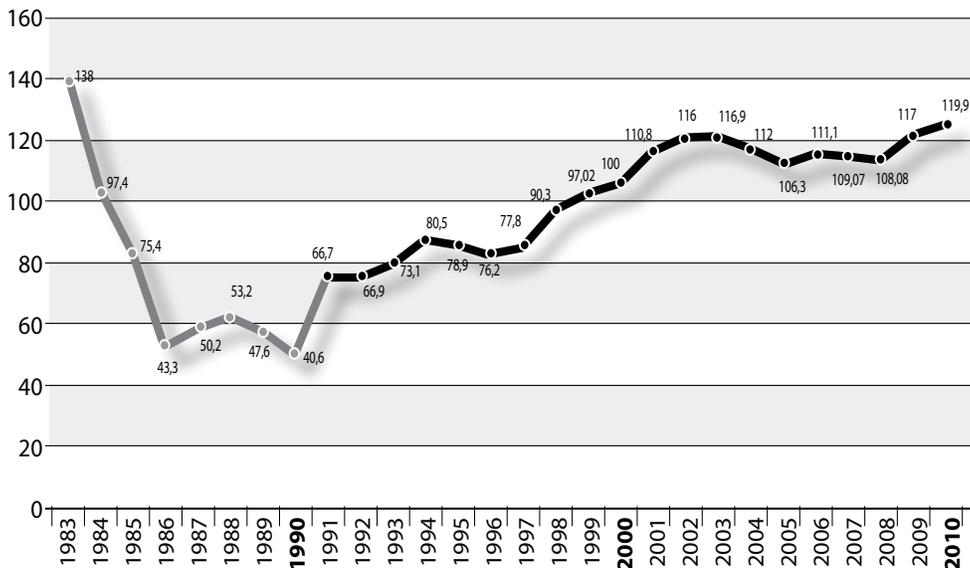
En los primeros cinco o siete años luego de la implementación de la Nueva Política Económica en Bolivia, los salarios se mantuvieron congelados, perdiendo su valor conforme subía el tipo de cambio del dólar americano, ritmo al cual se encarecían los precios de los principales productos de la canasta familiar y los servicios. Según los datos de la CEPAL, el salario mínimo nacional que en 1983 significaba 138 \$us, no hizo sino presentar una permanente tendencia a la baja, hasta 1990. De allí para adelante se ha vivido una paulatina pero lenta recuperación, pero ni siquiera hoy, se ha logrado superar el nivel de 1983. (Ver Gráfico 6)

Pensemos que además de esto, los trabajadores tuvieron que hacer frente a una constante elevación del costo de vida como efecto de la liberalización de los precios y su relación con el dólar cuya cotización subía paulatinamente. Según reportes de prensa en el año 1990, los precios de productos de primera necesidad como el pan, la leche, carne se elevaron un 400% entre julio y octubre de ese año.

Es importante contar como costos adicionales para las familias urbanas el retiro del Estado en varios sectores como el de la vivienda⁹ y el transporte público, el incremento de las cargas tributarias que sobrevino como efecto de las reformas en este ámbito y la

⁹ En ausencia de regulación de alquileres y finalmente la eliminación de cualquier forma de apoyo en la dotación de viviendas, las olas de migración rural son muy bien aprovechadas por latifundistas urbanos, especuladores y también por políticos locales corruptos.

GRAFICO N° 6 **Bolivia: Salario Mínimo Nacional (en Dólares Americanos)**



privatización de servicios básicos¹⁰ como el agua potable - alcantarillado y la electricidad que significó un incremento de tarifas y costos de conexión.

Finalmente una constante elevación de los precios de carburantes, que en realidad se trató de un nuevo tipo de impuesto que terminaba afectando toda la estructura de precios. Entre el año 1986 y 1993 el Estado recurre a frecuentes e importantes incrementos de los precios de los carburantes. En un intento de paliar el déficit del Presupuesto general de la Nación “...los gobiernos neoliberales llegan a incrementar los precios de los derivados más consumidos en esos años (Gasolina, diesel, kerosene y Gas licuado de petróleo) en un promedio con más de 21% con picos de 46% en 1988 o 32% 1991” (Gandarillas 2010) .

Aunque en nuestro país la pobreza afecta con más crudeza a las áreas rurales, en los marcos del neoliberalismo, los niveles de pobreza urbana se han incrementado. Según los datos de CEPAL (2009: 34) Bolivia se encuentra entre los países con mayor inciden-

¹⁰ En el caso de Bolivia, aunque el proceso de descentralización fue presentado como la vía para mejorar la cobertura de servicios, en los hechos todas las instituciones e instancias que se encargaban de este tema fueron a su vez privatizadas o “descentralizadas” de los municipios y se les exigió que ajustarán la gestión a los parámetros empresariales. En pos de la eficiencia y eficacia económica, dichas empresas debían “autofinanciarse” o sea no recibir ninguna transferencia de fondos públicos, como consecuencia las entidades de servicios pasaron prontamente a ser consideradas “empresas”. Ver FOBOMADE 2005

cia de pobreza urbana a nivel regional (53,8%) y al mismo tiempo porcentajes elevados de indigencia (20.2%).¹¹

Aunque la pobreza medida por el índice de necesidades básicas insatisfechas, muestra una reducción (1992 - 70,9%; 2001 - 58.6%)¹² siendo significativa en la zona urbana, la pobreza medida por ingresos es menos optimista.

Pereira y Velasco, de la Unidad de Políticas Sociales (UDAPSO) en su trabajo “Estimación de la pobreza urbana en Bolivia” con datos de las 10 principales ciudades de Bolivia en 1990 muestran que en ese año, 2.44 millones de personas en 523.5 miles de hogares habitaban en las nueve capitales de departamento y la ciudad de El Alto. Las denominadas ciudades del eje (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) concentraban el 79% de los hogares. Del total de hogares 55% estaban en condiciones de pobreza, 22% con problemas de indigencia y 33% eran pobres no indigentes. También ratifican la relación de pobreza y etnicidad, ya que en los hogares bajo condiciones de indigencia se observó que el 63.2% de los jefes de familia hablaban quechua y/o aymara aparte del castellano.

“Puede deducirse que las personas que hablan algún idioma nativo provienen en un alto porcentaje de contextos rurales y que en general tienen serios problemas para insertarse en actividades con ingresos aceptables debido, tal vez, a su bajo nivel de calificación, pocas opciones de ocupación y a una encubierta discriminación hacia estos grupos étnicos” (Pereira y Velasco: 1991: 19).

De las diez ciudades consideradas Potosí, El Alto, Oruro y Sucre mostraban los mayores niveles de pobreza, más del 60% de sus hogares se encontraban en estas condiciones. Las otras ciudades a excepción de Tarija tenían niveles que afectaban alrededor del 50% de sus hogares. Si bien existe una relativa diferencia de 21 puntos porcentuales entre la ciudad con el mayor índice de pobreza (Potosí) y la de menor (Santa Cruz), el nivel promedio por demás ya es alto. Se consideraba particularmente preocupante la situación de la ciudad de El Alto con 40% de su población en la indigencia y Potosí con 44%. Las ciudades que les siguen como Oruro, Sucre, Tarija y La Paz tienen 20% de población indigente. (1991: 20)

¹¹ Las cifras para la región son las siguientes. Pobreza porcentaje promedio América Latina y el Caribe 34.1%. Indigencia, 10.3%. Cálculo para el año 2005

¹² Los datos de pobreza en Bolivia según qué método se utilice (NBI o Línea de pobreza) son tremendamente disímiles y dan un lugar a mucha confusión. Por ejemplo Laserna en su estudio “Ciudades y Pobreza” refiriéndose principalmente a la reducción de los porcentajes de población con NBI, llega a la conclusión de que “La reducción de la pobreza en un fenómeno ante todo urbano” (2005:76) Y que “la pobreza en este período ha disminuido más rápidamente” (idem) Siguiendo sus datos, por ejemplo, la reducción de la pobreza en el área urbana de Cochabamba sería de -16.8% una de las más altas a nivel nacional. Entre tanto la investigadora Carmen Ledo, llega a la conclusión de que la población de Cochabamba figura entre las más pobres del mundo puesto que el 80% de su población vive con menos de dos dólares diarios. Para Wanderley “los resultados dispares de la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas y por ingreso laboral es difícil de explicar. Tropezamos probablemente con problemas de medición estadística, sobre todo en materia de ingresos, dada la enorme economía informal que hay en Bolivia. También es probable que los progresos en la cobertura de atención sanitaria y educación, por ejemplo, no reflejen en la calidad de las mismas en una situación de profunda crisis institucional. Otra hipótesis es que esta paradoja sea fruto de la continuidad de un tipo de políticas públicas que da mucha más importancia a la ampliación de la cobertura de los servicios públicos y la distribución directa de recursos y menos a la transformación de la estructura ocupacional, y por ende a la generación de empleos de calidad...” (2009: 59)

El trabajo de Landa sobre la pobreza en Bolivia que cubre el período 1999 - 2002¹³ muestra que la pobreza tuvo un incremento de 2,57 puntos porcentuales (de 62,03% a 64,60%), en tanto que la pobreza extrema aumento en 0,93 puntos porcentuales (de 35,84% a 36,77%). Seguidamente plantea que las mayores diferencias se encuentran en el área urbana pues es allí donde existe un mayor crecimiento de la pobreza, 2,58% comparado con un 1,87% en el área rural. (Landa: 2002: 6)

El informe concluye que si bien en el área rural hay niveles altos de pobreza, el área urbana es la que presenta las mayores tasas de crecimiento de los niveles de incidencia. Los indicadores de salud y educación además ayudan a comprender el deterioro de la calidad de vida en áreas urbanas. La tasa de asistencia a establecimientos educativos de la población entre 6 y 25 años, en el área urbana bajó 2% y 1% en área rural. Lo cual estaría relacionado a la incorporación de los niños en la generación de ingresos. La asistencia a centros de salud formal bajó en un 10% en el área urbana, y 2,3% en el área rural. (Landa: 2002: 9-10)

Llama también la atención el incremento de la desigualdad, en el período estudiado se evidencia una reducción de los ingresos de todos los sectores **a excepción de los más ricos en el área urbana**, lo que indica que “...en el contexto que se desarrolló la economía boliviana, los más ricos (decil 10) que están en las ciudades aumentaron su ingreso (17,77%) en cambio los más pobres (decil 1) se hicieron 9% más pobres” (Landa: 2002: 6).

Con este panorama, parece acertada la afirmación de que: “Las fronteras urbanas son la zona de impacto de dos procesos sociales que llevan a la fuerza centrífuga de la ciudad a colisionar con la implosión del campo” (Davis: 2005: 67).

La conflictividad urbana en etapa neoliberal

Precisamente a raíz de que las ciudades del Tercer Mundo concentraron los efectos de los cambios económicos de los últimos años, la conflictividad urbana ha sido una constante en América Latina, el autor uruguayo Raúl Zibechi encuentra que del “corazón de las barriadas pobres han surgido en las dos últimas décadas los principales desafíos al sistema dominante. Desde el Caracazo de 1989 hasta la comuna de Oaxaca en 2006 (...) los levantamientos populares de Asunción en marzo de 1999, Quito en febrero de 1997 y enero de 2000, Lima y Cochabamba en abril del 2000, Buenos Aires en diciembre 2001, Arequipa en junio 2002, Caracas en abril de 2002, La Paz en febrero o de 2003 y El Alto en Octubre de 2003, por mencionar sólo los casos más relevantes” [2008: 23].

¹³ Los datos comparativos de varios años, permiten tener una idea más clara del proceso.

En nuestro país, La Guerra del Agua, la Guerra del Gas, el llamado Febrero Negro, han recibido bastante atención de las ciencias sociales. Pero, como veremos con más detalle adelante muy pocas veces se ha considerado relevante estudiar su especificidad urbana, la mayoría de los trabajos se han referido a estos eventos dentro del marco de rebelión popular, multi-actoral. De esta manera, pareciera que los actores urbanos no tienen una identidad propia dentro de las principales tensiones nacionales. Ello ha contribuido a opacar su presencia y pasar por alto un necesario análisis de los procesos políticos que se están desarrollando en el ámbito urbano.

Aunque consideramos que el presente trabajo contribuirá a salvar en alguna medida este vacío, en este apartado haremos una breve reseña de la conflictividad social en el período que analizamos debido a que nos permite contar con un marco referencial sobre la importancia de los actores específicamente urbanos en la dinámica política del último tiempo.

Los datos que ofrece el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social CERES (1970-2008)¹⁴, que al cubrir un período largo sobre el estudio de conflictos sociales, resulta de bastante utilidad para cumplir este objetivo.

Haciendo un lectura propia de los datos del referido estudio, distinguimos tres momentos¹⁵ de conflictividad, después de la aplicación de las reformas neoliberales en Bolivia. Una que podríamos llamar de resistencia (Víctor y Jaime Paz 1985 – 1993), una breve disminución de conflictos entre 1993 y 1997 (primer gobierno de Sánchez de Lozada) y una súbita escalada de conflictos sociales desde 1997 que llega a su pico más elevado en 2005 (Carlos Mesa) para finalmente volver a caer por un breve período del año 2006 ya en el gobierno del Evo Morales (Calderón y Villarroel: 2008: 13).

En todos estos momentos las ciudades bolivianas y los actores urbanos, de manera cada vez más persistente, han sido las variables de conflicto más significativas. En la etapa de resistencia resalta el protagonismo de empleados públicos, maestros, estudiantes, obreros y el sector denominado “popular urbano”, que pese a la represión desplegada por el Estado e incluso a la política de ataque contra las estructuras sindicales y la desaparición de algunos sectores de trabajadores, como los mineros, fruto del cierre de operaciones de la corporación Minera de Bolivia COMIBOL y las primeras privatizaciones, han liderizado las protestas.

Notablemente, en este período el sector campesino-indígena con mayor tradición de lucha, es decir el organizado en torno a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, se muestra muy poco activo. Esto podría tener origen

¹⁴ La base de datos comprende el período 01/01/1970 – 31/01/2008 fue elaborada en base a los registros de prensa de conflictos sociales de ese período histórico. Ver Calderón y Villarroel. 2008 “38 años de conflicto social en Bolivia”

¹⁵ El gobierno de Siles se lleva 15,3% del total de conflictos del período, el gobierno de Víctor Paz se lleva el 9,9%; Jaime Paz 8,1%; el primer gobierno de Sánchez de Lozada 5,3%; Banzer y Quiroga 15,4%; Sánchez, Mesa y Veltzé 15,2% y Morales hasta Enero del 2008 el 8,1%.

en el hecho de que, en ese momento las estructuras organizativas campesinas - indígenas hubieran estado pasando por una crisis orgánica, que solo se revierte en 1988, cuando asume la dirección de esta entidad Felipe Quispe. Como indica la investigadora Silvia Rivera.

“La ruptura de la CSUTB con la izquierda (dentro y fuera del gobierno), a raíz de la manipulación partidista y prebendal de los recursos de alivio a la crisis agrícola, conduce a un repliegue campesino en la COB, desde donde la propuesta se expande y replantea, en términos más políticos. La disyunción entre sindicato y partido, como formas de representación ciudadana, llega a su punto culminante cuando la COB y la CSUTCB se postulan como órgano de poder sustitutivo de los partidos, plateando una estrategia de co-gobierno con la UDP y la discusión de una Ley Fundamental Agraria, que se aprueba a principios de 1984 en un masivo congreso de la CSTUCB en Cochabamba, La derrota de la propuesta de co-gobierno y la total indiferencia parlamentaria ante un proyecto campesino de ley agraria, desata en los organismos sindicales un reflujó político, que se expresa en la eclosión de demandas reivindicativas contradictorias y de corto plazo. En este contexto, el ala katarista de la CSUTCB en Cochabamba se convierte en el eje de una controversia interna: los aliados izquierdistas de Genaro Flores, que le permitieron derrotar los intentos manipuladores del MNRI en el 2° Congreso, acaban volcándose en contra del dirigente aymara, y desatan una prolongada crisis faccionalista, que durará hasta 1988, cuando el organismo sindical campesino se convierte en arena de los partidos políticos y el katarismo es finalmente desterrado de su seno” (2003:49).

En ese contexto, son los indígenas del oriente los que tienen mayor visibilidad, ya que inician una movilización emblemática, “la marcha por el territorio y la dignidad”, como reacción ante el creciente “...asedio de las empresas explotadoras de los bosques y la expansión del latifundio...” (Tapia: 2002: 48) Este hecho, cobra relevancia por ser una de las primeras manifestaciones de la agudización de la contradicción entre diferentes formas de apropiación del espacio¹⁶. Los indígenas, a partir “formas sociales y políticas de origen no moderno” se ven en la necesidad de cuestionar “los procesos modernos de explotación de la naturaleza y las gentes” para intentar frenar la destrucción de sus territorios y por ende su cultura (Tapia: 2002:48).

¹⁶ Un bosque no es lo mismo para un pueblo que ha convivido con él millares de años que para un maderero que, más que en la madera, está interesado en su transformación en algo abstracto —dinero; en la vida de una comunidad, para quien una riqueza mineral no tenga el menor sentido, puede transformarse en una pesadilla si en sus tierras se descubre petróleo, oro o cualquier otro mineral que interese a algún empresario o a algún Estado ávido de hacer concesiones a empresas o, también, para cobrar más impuestos.(Porto)

Resulta interesante el hecho de que en el primer gobierno de Sánchez de Lozada¹⁷ (1993-1997) se registrara una disminución de conflictos sociales. Afirmaciones como la de Tapia sobre que el escenario político sugería que "...a fuerza de golpes y de tiempo se aceptaba el orden neoliberal como inevitable por unos, y como bueno, por los más entusiastas" (Tapia: 2002: 52).

Pero, la escalada de conflictos registrada a partir de 1998 y que continuaron en todo el gobierno de Banzer, nos muestra que este intervalo de relativa paz social, bien pudo ser la calma antes de la tormenta, ¿se gestaba un subterráneo proceso de rearticulación social? ¿Se trataba acaso de un compás de espera de los sectores populares? ¿Quizás la búsqueda de nuevas estructuras de movilización y organización frente al ataque y destrucción de las existentes? En todo caso, es evidente que este período puede ser considerado como el ejemplo más claro de dislocación entre el optimismo de los operadores políticos de aquél entonces que confiaban rotundamente en el triunfo de la institucionalidad impuesta, y los reales procesos políticos que se estaban gestando en la base de los sectores populares.

Si ponemos atención a los datos, es posible ver que son los sectores medios (a excepción de los maestros urbanos y estudiantes) los que reducen el número de conflictos sociales. A contra-ruta de esta tendencia, entre 1997 - 1998, cuando ocurrió el proceso de capitalización de las empresas estratégicas de propiedad del Estado, se registró uno de los períodos de mayor movilización de obreros en etapa democrática, mismo que puede considerarse la última batalla de este sector frente al neoliberalismo, ya que en adelante, su intervención como sector se verá enormemente reducida. (Ver Laserna y Villarroel: 2008).

Durante las gestiones de Banzer y Quiroga (1997-2002) se intensifican los conflictos sociales, y mucho más importante que eso, la efectividad de la protesta social, ya que logra frenar cualquier intento de profundización del modelo. Si bien los actores urbanos continúan teniendo el protagonismo, la composición de estos actores cambia, los sectores medios no incrementan su participación en conflictos, con respecto al período anterior, pero aparecen en escena, ocupando el segundo lugar, los sectores denominados "otros" en la clasificación que utiliza CERES, cuya identificación no está del todo clara, ya que no se trata de ningún sector "tradicional". Desgraciadamente, no hay mayores detalles sobre este clasificador, excepto que se trata de "...diversos sectores y grupos de la población, la mayor parte de ellos sin una tradición de luchas sociales u organizados de manera difusa y, por tanto, difíciles de ser incluidos dentro de grupos o actores sociales más comunes de identificar" (Calderón y Villarroel: 2008: 51). En este caso podríamos suponer que se trata de una expresión de la fragmentación del mundo

¹⁷ En esta época, el gobierno implementó la segunda generación de reformas neoliberales, como la capitalización, la descentralización municipal y otras

laboral e incluso de las instancias organizativas históricas. Esta tendencia se verifica también por el hecho de que el tercer lugar lo ocupa la “ciudadanía en general”, es decir aquellos conflictos que siendo de magnitud considerable, interpelan a los sujetos en tanto individuos, ya que no acuden a los mismos como afiliados a ningún sector en particular, es posible que eventos como la “Guerra del Agua” hayan entrado en este clasificador.

Un hecho interesante es que a la disminución de participación del sector obrero en los conflictos le corresponde un incremento de las acciones de los llamados sectores urbano populares y además el surgimiento del “bloqueo urbano” como forma de protesta, el mismo que resultará tan efectivo en las jornadas de octubre del 2003. A título de hipótesis, y alejándonos de la interpretación que hace de ello Calderón y Villarroel, podríamos decir que ante la imposibilidad de mantener el espacio laboral como eje de organización, empiezan a surgir otros ámbitos desde donde se expresa el descontento e incluso se empiezan a perfilar nuevas y más efectivas formas de movilización.

Es importante mencionar que la participación del sector campesino indígena en la escena política, tiene más relevancia que en los períodos anteriores, tanto por la acción de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSTUCB, que logra recomponer su estructura orgánica, como por el incremento de la represión en el Chacabuco, que genera amplia movilización en el sector.

El año 2003 a poco tiempo de iniciado el segundo gobierno de Sánchez de Lozada, comenzó con una revuelta urbana de proporciones considerables, el gobierno particularmente obsecuente de las recomendaciones de los organismos internacionales, se decide por la (nada creativa) implementación de un impuesto al reducido sector asalariado del país, como medio para controlar el déficit fiscal y así destrabar las condicionantes de la ayuda financiera que ofrecía el Fondo Monetario Internacional.

Aunque las protestas de los sectores afectados no se dejaron esperar, fue un motín policial que terminó acelerando los sucesos. El gobierno movilizó a los militares para enfrentar a los policías y la jornada terminó con unos 32 muertos y una centena de heridos producto de la acción de francotiradores. Por la noche, la ciudad fue escenario de disturbios en donde fueron quemadas las sedes de varios partidos políticos y oficinas gubernamentales. El impuesto al salario fue finalmente retirado pero quedó claro que era el sistema político el que estaba en entredicho.

En septiembre del mismo año varios conflictos sectoriales, regionales y nacionales se traslapan y sobreponen. Por un lado, los habitantes de la ciudad de El Alto se oponen a la aplicación de los formularios Maya y Paya, pues se suponía eran antesala de un incremento al impuesto a los bienes inmuebles en el municipio. Con su movilización y un paro cívico que inmoviliza a toda la ciudad, impiden la aplicación de la medida. A ello

se suma, la movilización de campesinos-indígenas del altiplano que con bloqueos de caminos y finalmente un huelga de hambre en la radio San Gabriel, en la ciudad de El Alto, demandan atención a su pliego petitorio y la liberación de dos dirigentes. Finalmente, la intervención militar en la comunidad de Warisata que provoca nuevas muertes, determina el ingreso de la FEDJUVE - El Alto al conflicto, con la declaratoria de un nuevo paro cívico en rechazo a la venta del gas por Chile y la industrialización del gas natural en Bolivia. El conflicto se prolonga durante la primera quincena de octubre, involucrando a la ciudad de La Paz y más débilmente las otras ciudades del eje, pero el epicentro fue la ciudad de El Alto. La brutalidad de la represión estatal desatada contra sus habitantes es tal y que no tarda en desatar una respuesta aún más amplia de la población urbana, que desde sus barrios organizan la defensa de la ciudad calle a calle y terminan por conseguir la renuncia de Sánchez de Lozada, quien dejó la silla presidencial dejando tras de sí una cuenta de 60 víctimas fatales.

Termina así la etapa de estabilidad política de la era neoliberal ya que después de esto el sucesor de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa también renunciaría y el Presidente de la Corte Suprema asumirá el mando con el objetivo de convocar a nuevas elecciones en donde saldría vencedor y posesionado presidente Evo Morales.

Es significativo el hecho de que a diferencia de los anteriores períodos, durante el tiempo que ocupó la silla presidencial Carlos Mesa, se reduce significativamente la presencia en conflictos de los sectores medios, pero sigue creciendo la importancia del sector urbano popular. Durante el gobierno de Rodríguez Veltzé ya son el segundo actor conflictivo más relevante. De manera interesante, en esta etapa, aunque más marcadamente durante el gobierno de Carlos Mesa, el sector campesino indígena se muestra más activo que en ningún otro período.

Lamentablemente, el estudio de CERES no cubre todo el gobierno de Evo Morales sino solo el período de dos años aproximadamente, desde el 26 de enero del 2006 hasta el 31 de enero de 2008. Así que no alcanza a cubrir precisamente el evento que es parte de esta investigación, en septiembre de 2008 en Santa Cruz.

Sin embargo, aporta datos interesantes en cuanto al tipo de conflictos que se desarrollaron en esta etapa y los actores sociales involucrados. Tras ser electo con mayoría absoluta, hecho que no logró ningún otro presidente en la etapa democrática contemporánea, Evo Morales convocó a la Asamblea Constituyente, hecho que a esas alturas se había convertido en la principal demanda de la población en su intento de lograr cambios profundos en la estructura económica y política del país.

En esos años, se registró una alta conflictividad, principalmente en torno a temas de coyuntura política, esto debido al hecho de que estaba en disputa el camino que habrían

de seguir las Reformas constitucionales. Pero el conflicto se tornó particularmente tenso en la etapa de redacción del texto final de la Constitución a fines del 2008.

Lideraban la protesta, la oposición política de derecha, que habiendo perdido espacio en el ámbito nacional, lograron el control de algunas prefecturas (Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Beni y Pando). Esta situación determinó que el conflicto con la oposición regional se acentuara y en ese marco se desataron una serie de conflictos en esos departamentos, con la toma de instalaciones estatales y un virtual desacato a la autoridad del Estado nacional, en septiembre de 2008. En la ciudad de Santa Cruz, un barrio conocido como Plan 3000¹⁸, presentó resistencia a las acciones del Comité cívico y su brazo armado, la Unión Juvenil Cruceñista, sectores integrantes de la oposición regional, durante los días que duró el conflicto y por ello fue bautizada como el “bastión rebelde del oriente”.

18 El origen del barrio fue una riada en 1983 que afectó a gente que vivía en las riveras del Río Pirai, en total unas 3000 familias que fueron reubicadas en otra zona más alejada del centro. De ahí quedó con el nombre.



Bibliografía

- AIPE (2011). *Política comercial agrícola y su relación con la economía y alimentación de la familia indígena originaria campesina*. La Paz.
- ANTEQUERA, Nelson. *Territorios Urbanos*. La Paz: CEDIB - PLURAL, 2007.
- BARRAGAN, R. (1990). *Espacio urbano y dinámica étnica: La Paz en el siglo XIX*. La Paz: HISBOL.
- CALDERÓN, Fernando, y Alicia Szmukler. *La Política en las calles*. La Paz: Plural, 2000.
- CENTRO de Documentación e Información Bolivia. «Inversión municipal en servicios básicos.» CEDIB, Cochabamba, 2010.
- CEPAL. (s.f.). CEPALSTATS. Obtenido de <http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp>
- DAVIS, Mike. *Planeta de ciudades miseria*. Traducido por Amoroto Salido José María. Foca, 2004.
- DE SOUSA Santos, B. (28 de Julio de 2008). *Entre la represión del neoliberalismo y la imaginación utópica de los pueblos*. (p. R. Hoetmer, Entrevistador).
- DUNKERLEY, James. *Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952 -1982*. La Paz: Quipus, 1987.
- ENGELS, Federico. *La situación de la clase obrera en Inglaterra*. Londres, 1845.
- GANDARILLAS, M. A. (2010). *Petropress*.
- HARVEY, David. *Urbanismo y desigualdad social*. 3º edición. Siglo XXI, 1985.
- HARVEY, D. (2007). *Breve Historia del Neoliberalismo*. Madrid: AKAL.
- JORDÁN, R., & Martínez, R. (2009). *Pobreza y Precariedad urbana en America Latina y el Caribe*. Santiago: CEPAL.
- KLEIN, H. (2008). *Historia de Bolivia*. La Paz: Gisbert.
- LANDA, Fernando. *Pobreza y desigualdad del ingreso en Bolivia entre 1999-2002*. electrónico. 2003.
- LASERNA, R., & Villarroel, M. (2008). *38 años de conflictos sociales en Bolivia*. CERES.
- LA RAZÓN. 12 de septiembre de 2008).

- LEDO, Carmen. «Urbanización y Pobreza en la ciudad de Cochabamba.» En *Estudio Urbanos en la encrucijada de la interdisciplinariedad*, de Fernanda Wanderley (Comp), 119- 151. La Paz: Plural, 2009.
- LORA, G. (1996). *Historia del Movimiento Obrero*, Tomo II. La Paz: Amigos del Libro.
- MARTINELLY, Erick. «Participación y (des) conocimiento popular en Oruro (2001 -2007).» *VillaLibre* (CEDIB), 2009: 115 -132.
- MAZUREK, H. (2009). Lo urbano: la cristalización de lo social y de lo espacial. En F. Wanderley, *Estudios urbanos en la encrucijada de la interdisciplinariedad*. La Paz: CIDES.
- NELE, Marien. *Adios al pequeños productor*. electrónico. 2003.
- OPINIÓN. «Incendio en caseta de La Pampa.» 27/11/2008.
- PEÑAFIEL, Osvaldo. «El presupuesto público y Participación social. El Caso del Municipio de Santa Cruz.» *VillaLibre* (CEDIB), n° 4 (2009): 36 -59.
- PEREIRA Morató, René. «Las ciudades Bolivianas, ¿cómo entenderlas?» En *Estudios Urbanos en la encrucijada de la interdisciplinariedad*, de Fernanda Wanderley (Comp), 95 -119. La Paz: Plural, 2009.
- PEREIRA, Rodney, y Tito Velasco. *Estimación de la pobreza urbana en Bolivia*.
- PRADILLA, Emilio. *Capital, Estado y vivienda en América Latina*. México D.F: Fontamara, 1987.
- PRADO, Isabella. «Sectores periurbanos en la Santa Cruz dual.» *Tinkazos*, N° 25 (Noviembre 2008): 79-89.
- ROMERO, José Luis. *Latinoamérica. Las ciudades y las ideas*. 2° edición. Buenos Aires: Siglo XXI, 2001.
- RIVERA, S. (2003). *Oprimidos pero no vencidos*. La Paz: Aruwiyiri.
- SANDOVAL, Godofredo, Xavier Albó, y Tomas Greaves. *Chukiyawu. La cara aymara de La Paz*. Vol. IV. Nuevos lazos con el campo. La Paz: CIPCA, 1987.
- SCHOOP, Wolfgang. *Ciudades Bolivianas*. La Paz: Los amigos del Libro, 1981.
- SOLARES, Humberto. *Vivienda y Estado. Políticas habitacionales y producción del habitat popular en América Latina*. Cochabamba, 1999.
- TAPIA, L. (2000). La densidad de las síntesis. En VVAA, *El retorno de la Bolivia plebeya* (págs. 51 -79). La Paz: Muela del Diablo.
- WACQUANT, Loic. *Los condenados de la ciudad*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.
- WANDERLEY, F. (2009). *Crecimiento, empleo y bienestar social. ¿por qué Bolivia es tan desigual?* La Paz: CIDES - Plural.
- OTROS DOCUMENTOS:
- República de Bolivia. Decreto Ley 3819, 27 de Agosto 1954.

**Las guerras
y los Guerreros
Urbanos**

Actores urbanos en la Guerra del Agua

Villa Felicidad, de obreros a comerciantes

La Guerra del Agua

Contexto general

La política económica neoliberal¹ aplicada en el país, reestructuró el Estado nacionalista, implementando un paquete de reformas, que redujeron el control por parte del Estado de los recursos naturales, servicios básicos y de los sectores claves de la economía, con el objetivo de transferirlos al sector privado y a las multinacionales. De esta manera de las empresas estatales, los recursos naturales y los servicios básicos fueron privatizados, promoviendo la lógica de mercantilización de los mismos. Para ello, modificaron y transformaron la legislación nacional, dando seguridad jurídica a las transnacionales y a todo el proceso de privatización.

En este contexto, los servicios básicos, pasaron a ser entregados a la administración privada, dejando de ser un bien público. Bajo esta lógica, se inició la privatización del

¹ La respuesta a la crisis económica del capitalismo en la década de los 80 fue el modelo Neoliberal, que tenía como objetivo: "la ampliación de los espacios de acumulación y ganancia a costa del sector público (privatizaciones), la ruptura de los marcos regulatorios nacionales (apertura y desregulación externa), y el ensanchamiento de los márgenes de ganancia en aquellos sectores donde ya operaba el capital privado (vía recortes sociales, desregulación laboral, etc.)"

agua en el año 1997. El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, concesiona la empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarilla Sanitario (SAMAPA) de la ciudad de La Paz, utilizando como marco el Reglamento de organización institucional y de las concesiones del sector de aguas². Más tarde el gobierno de Hugo Banzer Suarez, en uno de sus primeros intentos, en el año 1998, emitió el Decreto Supremo (DS) No. 25133³ autorizando la Licitación para la participación del sector privado en el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) así como el Proyecto Múltiple Misisicuni (PMM)⁴, licitación que no prosperó debido a que, los empresarios no veían que los términos de referencia de la licitación les ofrecieran condiciones de rentabilidad para la inversión. Por este motivo, un año más tarde, en 1999, las condiciones de la licitación fueron flexibilizadas con la reformulación de los términos de referencia, los que redujeron a dimensiones mínimas el PMM. Se relanzó la Licitación, la cual se declaró desierta dado que la única empresa que se presentó, la Empresa Transnacional Aguas del Tunari⁵, no cumplió con los requisitos. Sin embargo, en la percepción del Ing. Maldonado⁶, de forma poco transparente se conformó una comisión Interinstitucional que negociaría de forma exclusiva con la única proponente, para iniciar el proceso de concesión. La comisión, conformada por el Superintendente de Aguas, Superintendente de Electricidad, Presidente de la Empresa Misisicuni, Gerente de SEMAPA, Alcalde y Prefecto de Cochabamba y Vice-ministro de Inversión y Privatización, facilitó la adjudicación y Concesión de la empresa de SEMAPA y el PMM a la empresa Aguas del Tunari, en un proceso de negociación herméticamente cerrado a cualquier observación o intervención pública.

El 3 de septiembre de 1999, fue firmado el contrato de concesión y privatización del servicio de agua potable en Cochabamba. Contrato que contenía condiciones absolutamente ventajosas para que Agua del Tunari logre aprovechar la venta de agua por un lapso de cuarenta años.

Sintetizaremos algunos de los aspectos del Contrato que fueron cuestionados:

2 Decreto supremo N° 24716

3 Ver anexo 1.- Decreto Supremo 25133

4 El Proyecto múltiple Misisicuni es El Proyecto Múltiple Misisicuni, fue una iniciativa nacida hace unos 50 años, de vital importancia para el valle central de Cochabamba, que permitirá abastecer de agua potable a la creciente población urbana consiste en el aprovechamiento hídrico de las cuencas los ríos Misisicuni, Viscachas y Putucuni, mediante el represamiento y trasvase de sus aguas
Sus objetivos principales son la dotación de Agua Potable a las poblaciones urbanas del Valle Central de Cochabamba, la dotación de Agua de Riego para los municipios de Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe y la generación de energía eléctrica.

5 Aguas del Tunari es una filial de la multinacional Bechtel Cooperation, dedicada a la industria de la construcción, infraestructura e ingeniería, según Krusse: "La empresa que llego a Cochabamba para apoderarse del agua, Bechtel Enterprises de EEUU, es un novato en el mercado de agua. Hasta principios del 2001 Bechtel -y su subsidiaria creado para los negocios de agua, International Water Limited (IWL)- tenía ocho operaciones de agua, en Asia, Europa Central, Australia, Reinos Unidos, Estonia y Ecuador, y habría tenido nueve, si no fuera por la Guerra del Agua en Cochabamba" (Krusse, s/f: 90).
La empresa Aguas del Tunari conformada por los siguientes socios accionistas: Bechtel a través de Internacional Water Ltd (IWL) con el 55%, Abengoa Servicios Urbanos, empresa española, con el 25 %, y cuatro empresas boliviana (Sociedad Boliviana de Cemento, Compañía Boliviana de Ingeniería, Constructora Petriveich e ICE Agua e Ingeniería), cada una con el 5 % de acciones.

6 Diputado por Cochabamba, por Nueva Fuerza Republicana (1997-2001), escribió un libro "la Guerra del Agua", en el relata todos pormenores de la privatización del SEMAPA Y el PMM

1. El contrato garantizaba que Aguas del Tunari se capitalice y genere ganancias con los dineros de los consumidores, a través de la elevación de tarifas, sin mejorar la calidad del servicio.
2. Monopolio exclusivo del área de concesión.
3. Los aranceles o tarifas se indexaban al dólar EEUU.
4. No garantizaba la inversión necesaria para ejecutar el Proyecto Múltiple Micicuni.
5. Se le daba la potestad de ampliar y expandir sus actividades hacia otros municipios aledaños, como ser Quillacollo, Tiquipaya, Sacaba, entre otros.

La privatización y la concesión del agua bajo esas condiciones afectaban, directamente a tres actores fundamentales: Primero, a la población urbana de Cochabamba que tendría que pagar tarifas más elevadas por el mismo servicio, el que en sí mismo ya era deficiente pues no podía suministrar agua durante las veinticuatro horas del día. Segundo, los pobladores de las zonas peri urbanas que no contaban con el servicio de agua potable por medio de SEMAPA. Personas que resolvieron la carencia organizando por su propia cuenta cooperativas, asociaciones o comités de agua comunales, con fuentes de agua de pozos que tienen entre 50 a 80 metros de profundidad. Estos sectores se verían perjudicados debido a que corrían el riesgo de perder la administración de sus pozos por la empresa Aguas del Tunari, a quien se otorgaba derecho exclusivo de operación. Por último, los Campesinos agropecuarios organizados como Regantes, que utilizan el agua para riego agrícola a través de sus propios sistemas aprovechando fuentes de agua basados en los Usos y Costumbres⁷, los cuales se ponía en peligro ya que el contrato con la transnacional generaba inseguridad sobre la propiedad de sus fuentes de agua.

El contrato con Aguas del Tunari, que anunciaba conflictos sociales, por lo anteriormente mencionado, fue amparado legalmente con la aprobación de la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado⁸, normativa que estaba en consonancia con el modelo neoliberal. Esta ley permitía la privatización del agua y sobre todo la legalización del contrato con Aguas del Tunari. El respecto Maldonado señaló que: “Algo muy importante que el pueblo debe conocer, de forma muy coincidente la Ley 2029 contenía artículos idénticos a los del contrato, otorgando seguridad jurídica dirigida por el propio gobierno y las autoridades responsables del proceso de Concesión” (Maldonado, 2004:63).

Básicamente, se puede señalar que la Ley generaba el marco jurídico para favorecer el monopolio de la administración del agua, a favor de Aguas del Tunari, que acapara-

⁷ Una investigación realizada por C. Crespo (2001) define los Usos y Costumbres como: Son todos los derechos que nos dejan los abuelos es decir los originarios, como ser nuestras aguas que fue un sacrificio de nuestros abuelos, son nuestras costumbres ancestrales en el manejo de las lagunas y vertientes”.

⁸ La Ley fue aprobada el 28 de octubre de 1999

ba las fuentes hídricas, para realizar un jugoso negocio. Por ejemplo, la Ley señalaba que:

“(...) Cualquier entidad comunal o asociación de vecinos, campesinos, indígenas u otras que a través de sistemas de apoyo mutuo cuenten con infraestructura de captación y distribución de aguas para fines de consumo humano, que esté dentro del área concesionada a una determinada empresa, estará ejerciendo una actividad ilegal, en la medida en que sólo el concesionario tiene derecho a prestar dicho servicio. El mismo criterio se aplica a los usuarios individuales que cuenten con pozos u otras fuentes propias que les permiten satisfacer sus necesidades a través de iniciativas propias o colectivas” (Crespo y Fernández, 2001:89)

En suma se orientaba a que Aguas del Tunari no tenga que competir con asociaciones comunales que brindan el servicio con la finalidad de garantizar el consumo humano.

El contrato que entregaba el servicio de agua a una empresa que buscaba lucrar con el agua y la ley 2029 que legislaba esta orientación, dio origen a la denominada Guerra del Agua, pues sin duda alguna el levantamiento popular contra el Estado, provocó una verdadera guerra, en la que el Estado y sus fuerzas represivas se enfrentó en una batalla contra la población de Cochabamba.

Breve cronología del conflicto

Debemos recordar que desde 1986, con el decreto 21060 se determinó que las tarifas de los bienes y servicios en todo el territorio de la República, se establecerán libremente (Art. 74). Este hecho sumado al criterio de establecer precios con relación al dólar americano, significó un reajuste constante de tarifas eléctricas, telefónicas, de transporte, de agua potable y de alimentos, que afectaron principalmente a la población de los centros urbanos. En contrapartida, se prohibió el incremento salarial con el congelamiento respectivo que estuvo vigente hasta entrados los noventa. Según los datos de la CEPAL, el salario mínimo nacional se redujo de 138 \$us en 1983 a 43.3 \$us en 1986 y llegó a su límite histórico más bajo durante el año 1990 con 40,6 \$us.⁹

Con este motivo se agudizaron los conflictos en torno a la elevación de tarifas de servicios básicos, alimentos y el incremento salarial, demandas que fueron controlados con medidas de excepción (Estados de sitio) que iban acompañados de persecución, arrestos y confinamientos de las dirigencias sindicales. En esta etapa, la política de privatización se concentró en las empresas públicas productivas y de servicios más rentables, llamadas también estratégicas, que incluían el sector eléctrico, hidrocarburos,

⁹ Comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de Desarrollo Económico

comunicaciones y transporte ferroviario y aéreo. El tema más sensible de provisión de agua potable, quedó pendiente en la agenda, pero en los siguientes años se avanzaría en este ámbito mediante la municipalización de los mismos. Los gobiernos locales serían luego obligados a “descentralizar” la provisión de estos servicios, lo que en los hechos significaba su privatización.

De esta manera la lucha por mantener el carácter público de la provisión de agua potable quedó librada a las fuerzas locales, en 1997 la ciudad de La Paz fue la primera en entregar en servicio a la empresa Aguas del Illimani (consorcio conformado por la Empresa Suez), aún después de una resistencia social importante pero insuficiente.

El Contrato suscrito con Aguas del Tunari logró ser firmado con el beneplácito del gobierno local de la ciudad de Cochabamba, debido a que la máxima autoridad de la ciudad formaba parte de un acuerdo interpartidario que lo comprometía con el ejecutivo nacional. Al mismo tiempo, las organizaciones vecinales, por lo menos sus representaciones máximas, se encontraban comprometidas con el Ejecutivo Municipal, hecho que imposibilitó que se pronunciaran en contra del contrato.

Como resultado, el malestar generalizado fue organizado y canalizado por instancias de representación menos formales. Estas se articularon con la finalidad de hacer más visibles las protestas. Como resultado de este proceso surgió la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida en cuyas características nos extenderemos más adelante.

Las jornadas de enero

En el mes de enero del 2000, llegaron a los hogares de la población de Cercado –Cochabamba las facturas del consumo del agua, en las mismas se verificaba un incremento que oscilaba entre 17% y 150% (Maldonado, 2001:63). Al tomar el control de la administración de la provisión de agua potable, Aguas del Tunari, sin realizar ninguna inversión para mejorar el servicio del agua, aplicó una nueva estructura tarifaria, con incrementos significativo.

Frente al “tarifazo” y la aprobación de la Ley de Aguas 2929, que concedía monopolio del servicio a Aguas del Tunari, diferentes organizaciones e instituciones de la ciudad, el campo se articularon y conformaron una organización. De este modo, la recientemente conformada Coordinadora del Agua y la Vida convocó y organizó un bloqueo departamental indefinido para el 11 de enero de 2000 bajo los siguientes objetivos:

1. Derogar la ley 2920
2. Anular Contrato de Concesión con aguas del Tunari
3. Destituir al Superintendente de Aguas

4. Exigir la presencia de la comisión que negoció el contrato con dicha empresa
5. Resistir civilmente el pago de las facturas de consumo de agua potable

En paralelo, el Comité Cívico¹⁰ convocó a un paro para el mismo día, pero sus objetivos eran diferentes, buscaban solo la modificación de cuatro artículos del contrato, que para ellos representaban un atentado a los intereses de Cochabamba¹¹. El el autotransporte Pesado, se sumó a la movilización (TRANSPECO).

La primera batalla por el agua se desarrolló entre el 11 y el 13 de enero, en las que se realizaron bloqueos en los caminos y paro cívico, además de movilizaciones callejeras. Durante los tres días, se evidenció una gran capacidad de movilización de las organizaciones reunidas en torno a la Coordinadora.

El primer día, (11 de enero) la ciudad quedó paralizada por completo, ninguna actividad económica funcionaba. El 12 de enero, el Comité Cívico levantó la medida de presión, pero la Coordinadora instruyó a la población a persistir en el bloqueo, medida que se mantuvo sustancialmente en las zonas periurbanas de la ciudad y en las carreteras, a pesar de las amenazas del Prefecto de utilizar las fuerzas policiales para garantizar el libre tránsito.

Ante la negativa del gobierno de reconocer a la Coordinadora como la representación legítima de la población, la asamblea de la Coordinadora determinó convocar, para el 13 de enero, a un cabildo abierto, con la finalidad de determinar y deliberar sobre el futuro del contrato y la Ley de Agua; entregando el poder de decisión a la población a través de mecanismos de democracia directa.

El cabildo se realizó en la plaza principal (14 de septiembre), “La concurrencia de la gente fue impresionante”¹², tal y como lo registró la prensa del siguiente día. Las fotografías del cabildo muestran un plaza repleta. Allí, los cochabambinos decidieron solicitar la anulación del contrato con Aguas del Tunari.

La respuesta del Gobierno fue la represión, pero los miles de manifestantes que habían concurrido al evento se enfrentaron a la policía durante varias horas, anulando la capacidad de represión y dispersión de los efectivos antimotines.

Esta primera batalla generó cierto temor en el gobierno pues era evidente el creciente poder de la Coordinadora, finalmente optaron por instalar una mesa de negociación, y pactaron un breve periodo de tranquilidad y no agresión, bajo los siguientes condicionantes:

¹⁰ El comité cívico es una institución creada por los empresarios privados para representar desde la sociedad civil los intereses regionales

¹¹ Declaraciones hechas al periódico Los Tiempos: “Comité Cívico no busca anular el contrato, sino modificarlo” Enero 2 de 2000, pág. 2

¹² Los Tiempos: “El gobierno revisará el tarifazo”. Enero 14 de 2000 pg.1

1. El gobierno revisaría el contrato con Aguas de Tunari,
2. Revisar la nueva estructura tarifaria y
3. Se modificaría y complementaria la Ley de Agua 2920.

El cumplimiento de los puntos acordados quedó a cargo de una comisión mixta conformada por representantes de la Coordinadora, el Comité Cívico y representantes del Gobierno.

La batalla de febrero

Al poco tiempo las negociaciones fracasaron pues el gobierno no estaba dispuesto a modificar el contrato de Concesión a Aguas del Tunari. Al contrario, desde el 13 de enero, el gobierno y Aguas del Tunari realizaron una intensa campaña publicitaria acerca de los “beneficios del contrato”, tratando de volcar la opinión pública y dejar aislada a la Coordinadora del Agua.

A la sazón, la Coordinadora en una asamblea realizada el 20 de enero, advierte al gobierno que de continuar con la actitud de soslayo e incumplimiento del acuerdo, se prepararía una “Marcha por la Dignidad” y la “Toma Pacífica de Cochabamba” el 4 de febrero. Por su parte, el gobierno prosiguió con la guerra mediática que llevaba adelante, pretendiendo restar apoyo y credibilidad a las acciones de su oponente, además anunció que la marcha sería frenada por las fuerzas del orden.

Como las negociaciones no avanzaron, el día 4 de febrero los manifestantes, al llamado de la Coordinadora, salieron a las calles rumbo a la plaza principal. Como había sido anunciado, el gobierno reprimió duramente la movilización, con el objetivo de dispersar a los movilizadores antes de que llegara a su destino. La violencia estatal, produjo el efecto contrario, los manifestantes se multiplicaron, los campesinos cocalleros que llegaron para sumarse, se fundieron con los ciudadanos; los comerciantes, las juntas de vecinos, choferes, maestros, universitarios, y la población en general se volcó a las calles para librar un batalla campal contra la fuerza policial que duró 14 horas.

De un lado, se encontraba el gobierno, tratando de mantener el principio de autoridad y utilizando todos los recursos de violencia represiva, gases lacrimógenos, balines, detenciones, y avionetas sobre volando la ciudad. Por otro lado, la población movilizada logró tomar la ciudad, luchando por controlar el último símbolo de poder, la plaza de armas, donde se concentra toda la infraestructura del poder estatal, la Prefectura, Policía, Alcaldía y paradójicamente la Central Obrera Departamental y la Federación de Fabriles, que hacían las veces de centro de operaciones de la Coordinadora.

Al caer la noche, el gobierno no lograba retomar el control de la ciudad, por lo que se vio obligado a plantear nuevamente una salida política, que logre poner a salvo la autoidad estatal. De esa manera, convocó a dialogar para encontrar puntos de convergencia respecto a las demandas.

Al día siguiente, 5 de febrero, de forma espontánea la población de diferentes puntos de la ciudad y provincias, volvía a concentrarse y tomar los puntos de barricadas que de forma espontánea se establecieron el día anterior. Nuevamente la ciudad fue tomada por los manifestantes, mientras la policía hacia todos los esfuerzos por hacer retroceder la toma o impedir que ingresaran a la plaza principal. Durante todo el día el combate no paró, ni el sol, ni la sed ni el hambre logró agotar las fuerzas de los combatientes que lucharon tratando de tomar su principal punto de referencia.

Mientras tanto, el gobierno y la Coordinadora se reunieron y finalmente firmaron un acuerdo. A decir de Maldonado:

“... en aras de proteger a los cochabambinos que estaban en las calles sufriendo la represión policial, existiendo amenaza de ingresar tropas del ejército, pensamos que podríamos tener serios problemas con nuestros hermanos que llegaron de las provincias y el trópico, que fueron los baluartes de esta defensa a la agresión sufrida por las tropas de policías y sus perros dálmatas” (Maldonado, 2004: 80)

Pero el mismo, no satisfizo las demandas de la población, pues los cochabambinos ya habían resuelto luchar por la retirada de Aguas del Tunari en un cabildo, y no se mostraba dispuestos a dar marcha atrás.

El acuerdo establecía¹³: 1.- Desarrollar esfuerzos necesarios para ejecutar el PMM. 2.- Continuar con las negociaciones para modificar la estructura tarifaria. 3.- Se mantiene el régimen tarifario vigente del octubre de 1999, hasta que concluya la restructuración tarifaria. 4.- Se revisará la ley No. 2029 otorgando seguridad jurídica a las cooperativas, comités, asociaciones del área urbana y rural. 5.- Se revisará el contrato con la empresa “Aguas del Tunari”, técnica, financieramente y jurídicamente. 6.- Repliegue de las fuerzas policiales y de las organizaciones sociales. 7.- Liberación inmediata de las personas detenidas en el conflicto. 8.- Durante la vigencia del conflicto, no se realizará ninguna movilización. 9.- Se constituyen garantes del convenio la Iglesia y el representante departamental de la Defensoría del Pueblo.

Al poco tiempo de firmado el acuerdo, el gobierno advierte que sin alza de tarifas el PMM no es viable y las negociaciones vuelven a punto cero. Esta actitud demostraba, que en realidad, el gobierno sólo utilizó la negociación, como un medio para dilatar el

¹³ Ver anexo N° 2 acuerdo de febrero

conflicto. Existía en ellos la esperanza de que los animos de la población se aplacaran y fuera imposible para la Coordinadora re-articular la movilización.

Frente a la evidencia de las maniobras gubernamentales, a los representantes de la Coordinadora no les quedó otra salida que abandonar las mesas de negociación, sacando a luz pública los pormenores de las reuniones y las evasiva del gobierno de respetar el convenio.

Retomando la línea adoptada en Cabildo popular, los representantes de la Coordinadora reivindicaron la salida de Aguas del Tunari. Oscar Olivera¹⁴, declaró lo siguiente:

*“Ante las Actitudes distraccionistas y demagógicas del gobierno y el silencio cómplice de Aguas del Tunari, ya no exigiremos que se revise el contrato de concesión sino que se lo anule”*¹⁵

El gobierno calificó esta postura de “radical” y “política” buscando deslegitimar a los representantes de la Coordinadora, en cuyo reemplazo actuaría el Comité Cívico, con quienes se pretendía firmar un acuerdo más favorable.

Ante la posibilidad de que dicha táctica logre confundir a la población, la Coordinadora en Asamblea decidió medidas para frenarla, convocó a la realización de una Consulta Pública para el 26 de marzo con las siguientes preguntas:

1. ¿Aceptas el incremento de tarifas?
2. ¿El contrato con Aguas del Tunari debe ser anulado?
3. ¿Estás de acuerdo con el carácter privado del agua en la Ley 2029?

En el día señalado cerca de 50.000 personas concurren a las improvisadas mesas de votación¹⁶, mostrando el éxito de la medida convocada por la Coordinadora. Los resultados del acto dejaron claro el rechazo al incremento de tarifas, el apoyo a la demanda de anulación del contrato con Aguas del Tunari y el rechazo a privatización del agua contenida en la Ley 2029. Oscar Olivera aseveró:

*“Hemos percibido que esta asistencia masiva, esta presencia importante en los 200 puntos de consulta sin ningún tipo de prebendalismo, ni clientelismo político ni partidario, tiene un hondo significado social y humano”*¹⁷

Lo cierto es que los resultados de la consulta generaron un nuevo escenario de apronte en la población. La asamblea de la Coordinadora convocó a la población a librar

¹⁴ Oscar Olivera era el Secretario Ejecutivo de la Federación de Fabriles y uno de los portavoces oficiales de la Coordinadora.

¹⁵ Los tiempos (2000): “No más revisión, plantean anular el contrato con Aguas del Tunari” 21 de febrero pág. e 5-1-2

¹⁶ De 46276 personas los resultados fueron: 99% votaron No a la Primera pregunta, el 96% SI a la segunda pregunta y 97% NO a la tercera. (Cronología Guerra del Agua de eventos y redes de actores. Versión 4.12.10)

¹⁷ Los Tiempos (2000): Cuestionan la Validez de la Consulta popular; Marzo 2000 pág. e5-1

la “madre” de las batallas, que significaba movilizarse hasta conseguir la anulación del contrato con la empresa Aguas del Tunari.

Abril. “La madre de las batallas”

El 4 de abril se iniciaron las movilizaciones para expulsar a Aguas de Tunari del país. La táctica de los denominados “Guerreros del agua” fue realizar el paro indefinido y bloqueo departamental de caminos. Los movilizados tenían que prepararse para tal contingencia de modo que el desabastecimiento no se convierta en una causa de deserción.

Los cochabambinos se organizaron bajo el mando de la Coordinadora del Agua. Ese día, la ciudad quedó paralizada mostrando la fuerza de convocatoria y la legitimidad de la demanda entre la población. La prensa registró este paro de la siguiente forma: “Cochabamba quedo totalmente paralizada ayer (4 de abril). Los bloqueos fueron contundentes y en ellos participaron casi todos los cochabambinos”¹⁸

El 5 de abril se llevó a cabo, un segundo cabildo abierto con el objetivo de empezar a tomar el control de la ciudad, dado que el día anterior el gobierno no intentó frenar la movilización. El cabildo fue multitudinario y en él se decidió tomar el Comité Cívico, como muestra de que no tenía representatividad para entablar negociaciones ni ser portavoz de la ciudadanía de Cochabamba. También se tomaron simbólicamente las instalaciones desde donde se distribuye el agua a la ciudad y fueron retirados los carteles del frontis de las oficinas de la empresa. El día finalizó con la intermediación de la Iglesia Católica, que logró concertar una reunión con representantes del gobierno y la Coordinadora para el día siguiente.

Al tercer día de bloqueos y paro, nuevamente se realiza una Asamblea General de la Coordinadora en la que se decide acudir a la reunión con el gobierno, pero los movilizados definieron mantener cercada la prefectura que era el lugar de encuentro. De esa manera, la prefectura quedó rodeada por cientos de manifestantes que gritaban “Si no hay solución, no van a salir”.

Los representantes del gobierno decidieron no continuar con la reunión bajo esas circunstancias, y pretendieron abandonar el lugar de encuentro, pero su salida fue impedida. Cerca las 22:00 hrs., la policía gasificó a los manifestantes para dispersarlos, sacaron a las autoridades en una ambulancia y detuvieron a los dirigentes de la Coordinadora.

El desmán del gobierno, echó leña al fuego, pues la tensión que giraba en el ambiente, fue alimentada con una actitud provocativa, la población respondió con indignación y

18 Opinión: Bloqueo indefinido paraliza actividades públicas y privadas: abril 2000 pág. 10A 5

salió nuevamente a movilizarse, pese a que los dirigentes de la Coordinadora habían sido liberados al poco tiempo.

El viernes 7 de abril nuevamente se realizó una Asamblea a la que los manifestantes asistieron predisuestos al combate. Esta vez, tomaron la iniciativa, lanzaron piedras, cachorros de dinamitas y casi destrozaron el frontis de la Policía, tuvieron incluso posibilidad de ingresar a las oficinas de la Prefectura.

El enfrentamiento se tornó cada vez más violento pues la Policía empezó a lanzar gases lacrimógenos. Mientras tanto, una nueva reunión se desarrollaba en las oficinas del Arzobispado, para tratar de buscar una salida o acuerdos ante la caótica e insostenible situación que se había generado. Omar Fernández¹⁹ relata lo sucedido al interior de dicha reunión:

“Nos convocan a una reunión en el Arzobispado, donde están presentes el Defensor del Pueblo, los representantes de la Coordinadora, el Presidente del Concejo Municipal, el Alcalde y otros. Llama el Prefecto muy preocupado porque la multitud estaba por derrumbar la puerta de la Prefectura, y comunica que ha consultado al gobierno sobre la salida de Aguas del Tunari, y que en media hora habría una respuesta definitiva; monseñor nos dijo que tratemos de calmar a la gente y esperemos la respuesta. Después de media hora, nuevamente llama el Prefecto e informa que desde el gobierno central le han comunicado que se informe a la población que Aguas del Tunari se va de Cochabamba, (la situación antes del anuncio es que la puerta de la Prefectura y las instalaciones de la Policía estaban a punto de ser abiertas)”
(Crespo y Fernández, 2001:149)

Este anuncio fue hecho público por los representantes de la Coordinadora, la población se reunió en la Plaza 14 de Septiembre para festejar el triunfo. Pero en cuestión de horas la información fue desmentida desde la sede de gobierno (La Paz) generando un ambiente de incertidumbre y frustración.

El sábado 8 de abril, desde las primeras horas de la madrugada, se declaró Estado de Sitio y se allanó la vivienda de varios dirigentes, algunos fueron confinados²⁰ pero las figuras más públicas consiguieron huir declarándose en la clandestinidad, ante el riesgo a su seguridad personal.

Con esta noticia, al amanecer, la población salió enardecida a las calles. De manera espontánea se organizaron bloqueos y marchas de diferentes sectores, rompiendo de

¹⁹ Omar Fernández era representante de la Federación de Regantes de Cochabamba FEDECOR y un portavoz oficial de la Coordinadora

²⁰ Los dirigentes que fueron confinados a San Joaquín son: Gabriel Herbas. 2.- Emilio Sejas. 3.- Angel Claire. 4.- Walter Antezana. 5.- Enriqueta Imaca. 6.- Sacarias Pereira. 7.- Victor Cossio. 8.- Francisco Partis. 9.- Ascencio Picha. 10.- Santiago Gareca. 11.- Victor Nina. 12.- Emilio Rodríguez. 13.- Filomeno Rivera. 14.- Felipe Flores. 15.- Oswaldo Toco. 16.- Juan Yupara. 17.- Pedro Soto. (Fuente: Opinión: Un muerte, 28 heridos y 17 confinados; 9 de abril 2000; pág. A3)

facto el estado de excepción vigente. Al promediar las 10 de la mañana, empezaron los enfrentamientos con la policía, nuevamente por el control de la plaza de armas de la ciudad. Después de unas cuantas horas de enfrentamientos la policía se replegó y la plaza fue tomada por los manifestantes que organizaron barricadas en las cuatro esquinas de ingreso a la misma, convirtiéndola en un fortín.

El ejército salió a custodiar sus instalaciones, particularmente el cuartel de la Séptima División, que se encuentra en el casco viejo de la ciudad, a pocas cuadras de la plaza. Los enfrentamientos se produjeron en toda esa zona, las tropas disparaban gas lacrimógeno para alejar a los manifestantes, pero al mismo tiempo se encontraban militares de alto rango sin uniforme que disparaban balas de guerra produciendo heridas en brazos y piernas. En horas de la tarde un impacto de bala mató a un transeúnte. La víctima fue llevada hasta la plaza principal, allí la ciudadanía se concentró. Las indignación creció entre la población. Al día siguiente, se realiza en entierro del joven de 17 años, Víctor Hugo Daza, misma que fue acompañada por multitudes.

Para ese momento, aún entro del ejército parecían existir reparos para continuar con la represión. El comandante de la Séptima división afirmó: “Por el honor de mi apellido, de mi esposa y mis hijos, los soldados no saldrán a reprimir al pueblo”²¹. Manifestó también, que “los ejecutivos de esa empresa (refiriéndose a Aguas del Tunari) podían evitar toda la violencia generada en la región”²². En esas condiciones la medida de excepción era insostenible, incluso la policía se replegó.

La situación era extremadamente delicada, el gobierno no tenia siquiera el apoyo de los organismos del orden, no tuvo otra salida que anunciar en horas de la tarde del domingo 9 de abril que se rompería el contrato con Aguas del Tunari. La gente recibió la noticia con desconfianza, no levantó los bloqueos, ni abandonó la plaza. Los “guerreros” declararon que “...hasta que no se vean papeles escritos y la Coordinadora les informe que pueden dejar de luchar, se quedarán en la Plaza Principal para defender el agua de una empresa que ha sido declarada Institución no grata el Cochabamba”²³.

Recién el 10 de abril, una comisión gubernamental de alto nivel se reúne con la Coordinadora y firman un acuerdo ratificando la ruptura del contrato con Aguas del Tunari y la aprobación de las modificaciones consensuadas a la Ley 2029, y la ciudad poco a poco retornó a la “normalidad”.

21 La Razón: “Victor Hugo Daza Fue enterrado Como mártir de la lucha por el agua”. 10 de abril 2000 pág. d2.4

22 Ídem

23 Opinión: “Cuatro grupos vigilan la Plaza 14 de Septiembre”. 10 de abril 2000 pág. d2.4

Los actores involucrados en la Guerra del Agua

Actores rurales

Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR)

La Federación de Regantes de Cochabamba, se define como: “la organización matriz de todos los sistemas y organizaciones de regantes de los valles de Cochabamba, cuya principal característica es la gestión integral del recurso agua a través de los usos y costumbres”, ello significa, respeto a sus autoridades naturales, la forma comunitaria de solución de sus problemas de dotación de agua o mejora de su infraestructura, el respeto a sus derechos de agua y sus tablas de distribución, la forma comunitaria de realizar el mantenimiento de su infraestructura de riego (larq'a pichay sus canales y acequias) vertientes, lagunas, canales, atajados, ríos, pozos, etc.) y el uso múltiple del recurso agua. (Estatutos de la Federación de Regantes de Cochabamba).

Su principal objetivo es la defensa de “Usos y Costumbres” en el consumo y explotación del agua. En sus estatutos indica que esta organización fue creada: “en un ‘Congreso Constituyente’ de la Federación de Regantes... el 3 de octubre de 1997 en la ciudad de Cochabamba, con la presencia de cerca de trece mil regantes de los diferentes valles de Cochabamba”.

La estructura organizativa de Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), según Carlos Crespo, refleja la complejidad de los sistemas de riego en los valles; se basa en la organización de ocho cuencas y cada cuenca con un conjunto de sistemas de riego, o unidades de riego, que son las siguientes: Cuenca Valles mesotérmicos-Mizque, Cuenca Valle Alto Este (fuentes de agua de la Cordillera de Tiraque), Cuenca Valle Alto Oeste (fuentes de agua de la Serranía de Catariri), Cuenca Valle de Sacaba, Cuenca Valle Central Este (espacio entre el río Tiquipaya y el Tuituri), Cuenca Valle Central Oeste (espacio entre el río Llave y Sipe Sipe), Cuenca del Río Tapacarí, (abarca todo el río Tapacarí hasta Playa Ancha), Cuenca del Río Arque (comprende los sistemas de riego de Capinota). Un representante de cada cuenca, forma parte del directorio, siendo las carteras elegidas en sus respectivos congresos.

La participación de FEDECOR en la Guerra del Agua tiene sus antecedentes de las luchas contra la empresa de SEMAPA en 1998 que explotaba las aguas subterráneas en el Valle Central y Bajo, que pretendía, seguir perforando pozos profundos en la localidad de El Paso, provincia Quillacollo, en perjuicio de las localidades de Vinto y Sipe Sipe,

dado que los efectos ambientales, como el hundimiento y agrietamiento de suelo, convertía a sus terrenos en zonas agrícolas inservibles.

“Con estos antecedentes, la FEDECOR, en el mes de Julio de 1998 inicia el análisis de las propuestas de Ley del Gobierno, además de la Ley SIRESE (Sistema de Regulación Sectorial), la Resolución Biministerial sobre Normas y Procedimiento para uso y aprovechamiento de Aguas para riego, discusión a la que se integran la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, la Cámara de Diputados, el Programa Nacional de Riegos y el grupo de consultores del Gobierno, en un seminario Taller, con la participación de más de 350 dirigentes regantes. La discusión se trasladó a las organizaciones de base, a través de talleres en las organizaciones de regantes de las diferentes Cuencas - Valles, donde se cuestionaron las propuestas gubernamentales y se empezó a discutir una propuesta propia de los regantes, denominada ‘Propuesta de la Ley del recurso Agua desde los Usos y Costumbres’ ” (Crespo y Fernández, 2001: 90)

A partir de entonces la FEDECOR inicia la tarea de discutir y debatir ampliamente el problema del agua. Del análisis del problema de agua, tuvieron que pasar a la acción, pues sorprendentemente se aprobó la Ley de las aguas el 28 de octubre, que ponía en riesgo el derecho propietario de las comunidades sobre las fuentes de aguas, sumado al Contrato de Concesiones de Aguas del Tunari. En noviembre organizaron las primeras movilizaciones con bloques en el Valle Bajo, Central y Alto, se firmó algunos acuerdos, pero no se comprometían a cambiar la Ley de Aguas.

Ante la emergencia de luchar por la modificación de la Ley y el contrato de concesiones, para hacer respetar y garantizar lo que denominaban usos y costumbres del derecho de las fuentes de aguas, se pusieron en contacto con otras organizaciones como la Federación de Fabriles, la de maestros Urbanos y la Central Obrera Departamental, y se consolidó el pacto que ya se había realizado con anterioridad con el CODAEF. La reunión se realizó el 12 de noviembre, fecha en la que se pone en pie la Coordinadora del AGUA y la VIDA. Se puede decir que el aporte fundamental de esta organización fue el impulsar la creación de Coordinadora, aportar en la discusión sobre la Ley del Agua y ser un pilar fundamental en los bloqueos de carreteras, acciones que impidieron que el gobierno pueda concentrar todas sus fuerzas represivas en la ciudad de Cochabamba.

Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba

La Federación del Trópico de Cocaleros de Cochabamba, es producto de una larga historia de lucha y de conformación del mismo sindicato cocalero, como antecedente podemos señalar:

“El sindicalismo campesino en el trópico de Cochabamba se inicia entre 1952 en adelante, como organizaciones agrarias que ejercían roles en la tenencia de la tierra, el reparto de la tierra, la construcción de sendas, la construcción de postas sanitarias, etc. Estos roles y funciones disminuían en importancia a medida que iban cumpliéndose sus objetivos. En el año 1984 emergieron estas organizaciones con el tema de la coca, apareciendo como ‘sindicatos cocaleros’” (Sistémica, 2009:50).

La Coordinadora de las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca del Trópico de Cochabamba, más conocida como la Federación de Cocaleros de Cochabamba, se creó a consecuencia de varias escisiones y discrepancias políticas y el número de nuevos Sindicatos de la Federación Especial Agraria del Chapare Tropical en 1971²⁴, que se divide en la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (FETCTC) y la Federación Especial de Colonizadores de Chimoré (FECCH). Entre el año 1986 y 1991 surgen nuevas divisiones y surgen nuevos sindicatos, hasta que en Febrero de 1991 aparece el Comité de la Coordinadora de las cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba. Posteriormente como consecuencia de la Municipalización del País (1994) se crea la Coordinadora de las seis federaciones, que agrupa a los cinco municipios del trópico²⁵.

El objetivo de esta organización es coordinar las demandas del sector frente a la política nacional que se tiene con el cultivo de la hoja de coca²⁶. Debido a la necesidad de unificar y coordinar las demandas, luchas y confrontar la erradicación de la coca.

Los ampliados sindicales definen acciones, no solo sindicales, sino también adoptan posturas, sobre las cuestiones de la política nacional y departamental, así por ejemplo fue el caso de la Ley 2029, tema que determinó su participación en la Guerra del agua.

Pero la directa vinculación de la Federación de cocaleros en la Guerra del Agua se realizó a través del representante de los cocaleros en el parlamento, el Diputado Evo Morales Ayma²⁷, que junto con el Diputado Maldonado, realizaron acciones legales para cuestionar el contrato y la Ley de Aguas, como un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en Sucre.

24 Inicialmente los Sindicatos del Trópico de Cochabamba estaban representados por una Sub Central y una Central Especial, bajo la dependencia de la Central Campesina de El Morro en Sacaba; a partir de 1968 los sindicatos se independizan del Morro y conforman su propia estructura Sindical, la FEDERACIÓN ESPECIAL AGRARIA DEL CHAPARE TROPICAL (FEAHT); su nivel de organización el Sindicato, la Central y la Federación, excluyéndose a la Sub Central.

25 Las Seis Federaciones son: 1.- FEDERACIÓN ZONAS TRADICIONALES YUNGAS DEL CHAPARE, 2.- FEDERACIÓN ESPECIAL DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA, 3.- FEDERACIÓN ÚNICA DE CENTRALES UNIDAS, 4.- FEDERACIÓN ESPECIAL DE COLONIZADORES DE CHIMORÉ, 5.- FEDERACIÓN ESPECIAL DE COMUNIDADES DE CARRASCO TROPICAL y 6.- FEDERACIÓN SINDICAL AGROPECUARIA DE MAMORÉ -BULO BULO

26 A partir del gobierno de Banzer, Estados Unidos de Norteamérica impone a Bolivia la política de lucha contra el narcotráfico, que se expresaba en la lucha contra el cultivo de la hoja de coca. Política que propugno la erradicación forzoso de la coca esencialmente en las áreas declaras no tradicionales, el Chapare de Cochabamba

27 Evo Morales Ayma era el presidente de la Federación de Cocaleros del Trópico, que junto con la organización sindical participaron en las elecciones generales, conformando su propio partido Político denominado Movimiento al Socialismo MAS

La Federación de cocaleros del Trópico, hizo presencia en las jornadas de febrero, cuando este sector asistió a la toma pacífica de la ciudad convocada por la Coordinadora, a través de los sindicatos cocaleros. Desde su incorporación, realizó un apoyo militante en los momentos más importantes de la lucha, realizando bloqueos en la carretera que vincula Cochabamba con Santa Cruz de la Sierra, también participaron en las marchas trasladando delegados de los sindicatos a las movilizaciones de la ciudad.

El gobierno acusó a Evo Morales de utilizar el tema del agua como un pretexto para promover la desestabilización política, el sindicato desmintió tal acusación argumentando que la Ley también les afectaba: "...la ley 2029 nos afecta a todos los municipios del Trópico por la población que tenemos allá y el Contrato con Aguas del Tunari igual les afecta a los compañeros, porque la mayoría de ellos tiene sus casas en Sacaba, Quillacollo y en los barrios marginales. Lo único que les falta es que digan que el narcotráfico está impulsado por este movimiento"²⁸.

Lo cierto es que los cocaleros aportaron significativamente a la movilización, pues poseían experiencia en enfrentamientos con las fuerzas del orden, cuestión que era casi permanente por su oposición a la erradicación de cultivos de coca. Tanto mujeres como hombres del Trópico habían aprendido a lidiar con los gases lacrimógenos e incluso tenían conocimiento de artefactos de fabricación casera para contrarrestarlos.

Actores urbanos

Comité de Defensa del Agua y de la Economía Familiar

La creación de dicho Comité de defensa, tiene sus orígenes en las acciones y preocupaciones de algunos profesionales, especialmente del Colegio de Ingenieros de Cochabamba, sobre el Proyecto Múltiple Misicuni PMM, que se presentó hace muchos años como la solución final al problema de escasez de agua.

A la cabeza del entonces Diputado, Gonzalo Maldonado y miembros del colegio de ingenieros, supervisaban las obras y la ejecución del proyecto. De esa forma llegaron a confirmar que el PMM corría el riesgo de no ejecutarse por la cuantiosa inversión que significaba y la poca rentabilidad. El peligro se confirmó una vez que se concesionó el PMM a Aguas del Tunari bajo los términos de referencia que flexibilizan el PMM convirtiéndolo en un proyecto mucho más pequeño al que denominaron irónicamente "MISICUNITO", pero además se condicionaba su ejecución a la elevación de tarifas. De esta forma, el colegio de ingenieros logró aglutinar a otras organizaciones y cuerpos colegiados de profesionales, preocupados por la problemática que aqueja a la región: "el agua".

²⁸ Gente: "La Lucha del Agua no es solo de la ciudad": 04 de abril 200 pág. A2

Al advertirse y comprender como se realizaban las negociaciones con el consorcio Aguas del Tunari, estas organizaciones conformaron el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar - CODAEF, que sentó su presencia en la región emitiendo un manifiesto público en que proclamaba sus objetivos:

“El CODAEF busca orientar a la ciudadanía y motivar su participación para evitar que se cometa un grave atentado a los intereses regionales y de la comunidad: la reducción y distorsión del PMM original; la adopción de una escala tarifaria atentatoria a los intereses de la población y, la supeditación de la solución del grave problema del agua al tiempo de ejecución –todavía imprevisible– del túnel de trasvase” (Maldonado, 2004:27).

Esta iniciativa, impulsó una dura vigilancia al proceso de negociación con Aguas del Tunari, convirtiéndose en punto de referencia para otras organizaciones que estaban interesadas en el tema. De esta forma fueron sumándose otros grupos: ONGs de ambientalistas, juntas vecinales de distritos que exigían un servicio de agua de calidad y otros grupos profesionales.

Se puede afirmar que el CODAEF consiguió la participación y la adhesión de las clases medias urbanas en la problemática y en el conflicto. Dado que disponían de recursos humanos y económicos, el CODAEF pudo realizar una campaña de información y difusión a través de foros, conferencias, publicaciones de artículos en medios de prensa locales, sobre las sinuosidades del contrato y la nueva estructura tarifaria. La información proporcionada por este grupo, empoderó a los actores sobre la necesidad de controlar las acciones que hacen a la gestión pública y en particular sobre la privatización del agua.

Otro importante aporte del CODAEF fue el respaldo técnico, académico y propositivo dentro las negociaciones con el gobierno, dado que contaba con un manejo detallado de los aspectos técnicos, legales y financieros del contrato y la Ley en debate.

Federación de Fabriles de Cochabamba

Los trabajadores vinculados a la industria manufacturera de Cochabamba, son representados bajo la entidad sindical de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Cochabamba (FDTFC). Entidad que está constituida y organizada por los sindicatos que la conforman. También está afiliada a la Confederación Nacional de Trabajadores Fabriles de Bolivia y por esa vía a la Central Obrera Boliviana (COB).

Debido a la nueva forma organizacional de valorizar el capital, que impuso el modelo neoliberal atacando los derechos laborales y al constante debilitamiento del sindicalismo en Bolivia y particularmente en Cochabamba, la Federación de Fabriles atravesaba un período de desorganización y despolitización.

La dirigencia denunciaba, las penosas condiciones de trabajo que se habían impuesto en las fábricas, tratando de visibilizar que en los hechos se habían impuesto una “flexibilización laboral”. A través de estas acciones su dirigente principal, Oscar Olivera, ganó un espacio en el escenario regional. Por otro lado, la Federación también contaba con una autoridad moral, debido a la histórica tradición sindical que le acompañaba.

Los obreros y trabajadores fabriles no tuvieron una presencia física que los distinguiera del resto de organizaciones, a no ser en una marcha que fue convocada juntando temas laborales. Es más probable que los fabriles hayan participado de los bloqueos y marchas con los grupos barriales.

La Federación de Fabriles se incorpora a la Coordinadora cuando esta ya estaba constituida pero en poco tiempo su representante se convirtió en uno de los principales voceros de la misma, tal vez debido al espacio, la experiencia y relaciones con la prensa, ganada con anterioridad.

También se puede decir que la infraestructura estratégica, situada en la Plaza principal, sirvió como punto de referencia de la Coordinadora, lugar que sirvió para aglutinar y asociar otras organizaciones que se sumaban en el camino.

“La Federación contaba con una infraestructura sindical - organizativa esencial para todo movimiento (un edificio en la Plaza central, salas de reuniones, líneas telefónicas), adquiridos en tiempos pasados. Además y durante la Guerra del Agua, las oficinas de la Federación se convirtieron efectivamente en la sede de la Coordinadora, donde todos iban con sus facturas, sus demandas y sus ofertas de ideas, materiales, acciones y solidaridad (...)” (Kruse, s/f:108)

Juntas Vecinales de las Zonas Peri Urbanas

Se denomina zonas periurbanas a los barrios marginales de la ciudad, carentes de condiciones y posibilidades de accesos a los servicios básicos. Estos barrios se encuentran en la Zona Sud²⁹ y una parte más reducida en la zona Norte de la ciudad de Cochabamba.

La población que se asienta en estos barrios³⁰ es de escasos recursos económicos debido a la poca estabilidad laboral y a los bajos ingresos económicos que generan en las actividades económicas a las que se dedican:

“Sin embargo, la actividad económica mediante la cual subsiste la mayoría de la gente no puede ser considerada un verdadero empleo, más allá de lo

29 La zona sud está conformada por 6 distritos; 5,6,7,8,9, y 14

30 La mayor parte de la población son inmigrantes de la década de los 80, procedentes especialmente del occidente del País La Paz, Oruro, Potosí.

que digan las estadísticas oficiales. Si analizamos los rubros de ocupación sólo un 42,92 % de la PO (Población Ocupada) de la zona sur se considera obrero o empleado, es decir que recibe cierto tipo de remuneración. Mientras que el 40 % de la PO es trabajador por cuenta propia y 3,11 % está contado en el rubro de trabajador familiar o aprendiz sin remuneración. Esto quiere decir que una gran parte de la población, 4 de cada 10 personas ocupadas, genera su propia fuente de trabajo, la cual en la mayoría de los casos es precaria y de supervivencia” (CEDIB, (s/f): 8)

El acceso a los servicios básico son deficientes sobre todo el agua potable y el alcantarillado, dado que el servicio no es brindado por SEMAPA:

“Sólo los Distritos 5 y 6 cuentan con conexión a la red de agua potable de Semapa, aunque este hecho no garantiza que la provisión de agua sea adecuada a las necesidades de la población, ni llega a todas las viviendas. En el distrito 5 el 86,58 % de los hogares cuentan con agua por cañería y en el Distrito 6 sólo 77 %. El 8,76% y el 15 % de la población de los Distritos 5 y 6 respectivamente se abastece de carros cisterna. En el resto de los distritos se cuenta con redes privadas de agua o con el servicio de cisternas. Un 23,93 % de las viviendas de los Distritos 7, 8, 9, y 14 se abastecen de agua mediante redes privadas. El 59,31 % se proveen de agua de distribuidores privados con todos los problemas tanto sanitarios como económicos que esto implica” (CEDIB, (s/f): 12).

Frente a este panorama de exclusión, los vecinos de estos barrios organizados en las tradicionales juntas de vecinos³¹, plantean sus demandas ante las instancias estatales, una de las cuales es precisamente el acceso a los servicios básicos. A pesar de las múltiples acciones colectivas para lograr que las entidades responsables solucionen sus problemas, todavía el Estado no logra satisfacer la demanda del servicio de agua potable, el problema mayor de estas zonas.

Para contar con el líquido vital los propios vecinos que se organizaron, bajo sistemas comunales, cooperativos, asociaciones, para la dotación de agua, a través de pozos subterráneos, tanques de almacenamiento y redes de distribución. Las mismas son administradas por los propios vecinos según sus normas. Ese era el caso, entre muchos, de la OTB Sebastián Pagador 1ª Grupo del Distrito 14, que con ayuda de organismos internacionales y sus aportes propios lograron construir un sistema de agua comunitario

³¹ Como indica Solares y Vargas: "Las juntas vecinales en el municipio de Cochabamba, tienen una larga historia que se inicia por los años 30. En estos años iniciales más se las conocía como grupo de vecinos. Por lo general, fueron conformadas para abocarse a velar por los intereses colectivos y más relacionados con atención a servicios básicos, abastecimiento de alimentos y resguardo del orden público". (, 1997: 5)

El hecho de que los habitantes de las zonas periurbanas no cuenten con servicios básicos prestados por el Estado, los coloca en una situación extremadamente vulnerable, ellos llegaron a la conclusión de que de concretarse la privatización del agua, su situación se agravaría aún más. La propiedad de las fuentes de agua y por tanto los sistemas de distribución autogestionada existente en muchos barrios, estaban en peligro de ser expropiados y ser puestos bajo administración de la empresa Aguas del Tunari. Bajo esta amenaza, los barrios se movilizaron para defender el sistema de agua comunal que funcionaba bajo la lógica administrar el líquido elemento de forma común..

Por otro lado, también están los barrios de la zona sud que cuentan con el servicio provisto por la red de SEMAPA, pero que son abastecidos de forma deficiente, pues el servicio les llega una o dos veces por semana por algunas horas. En esta población, se entendía que con la privatización de agua tendrían que pagar elevados costos por un servicio que era muy deficiente; el ejemplo de Barrio Petrolero del distrito 6, que participo activamente y desde un comienzo en la Guerra del Agua es ilustrativo debido a que el “agua potable” de SEMAPA llegaba una vez a la semana con sedimentos de lodo, teniendo que pagar sumas elevadas por un consumo que no se realizaba. Situación que generó reiterados conflictos entre SEMAPA y los usuarios. La situación de los vecinos empeoró cuando les llegaron las facturas de consumo de agua de la compañía Aguas del Tunari, con montos más elevados que antes, siendo el mismo pésimo servicio, pero esta vez bajo la administración privada. Ello empujó a que los vecinos buscaran y se articularan con organizaciones, instituciones y otros barrios y que se movilicen para reclamar el derecho a abastecerse del líquido elemento de calidad y público.

Ante esta realidad, varias juntas de vecinos y comités de agua como ser la del barrio 1^a de Mayo, Villa Israel, Ticti Norte, Pucara, San José, entre otros, de los Distritos, 8, 9, 14 y 6 que afrontaban similares problemas se movilizaron durante la Guerra del Agua, para defender sus sistemas comunales de agua y también para exigir un mejor servicio, es decir el derecho al abastecimiento de agua potable con un servicio de calidad y bajo la administración pública.

Las organizaciones vecinales, están afiliadas a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), una organización que aglutina y representa a las juntas vecinales de los 14 Distritos municipales de la ciudad de Cochabamba. La vigencia de esta organización data desde mucho antes que la ley de Participación Popular. Su función principal fue: “abocarse a velar por los intereses colectivos y más relacionados con atención a servicios básicos, abastecimiento de alimentos y resguardo del orden público. Como se entenderá estas organizaciones respondían a intereses de grupos sociales altos y medios asentados en la ciudad” (Solares y Vargas, 1997: 5). La Fejuve como órgano vecinal cumplía la función de interpelar ante los organismos estatales, las demandas sociales referentes a

la gestión urbana (servicios básicos), pero también en los temas económicos y sociales como el alza de precios de los artículos de primera necesidad (alimentos), tarifas de agua, transporte, energía eléctrica, e intervenían también en la vida política de la región y el país. Por esta razón, la FEJUVE, se constituyó en una organización con legitimidad, que encarnaba las necesidades básicas de la población.

Luego de la descentralización y la elección de Alcaldes por voto popular, en las FEJUVEs fueron vistas como espacios de cooptación política y espacio donde se articulaban redes clientelares que favorecían a los gobiernos municipales, los diferentes partidos políticos se ocuparon de esta tarea en su afán de ensanchar su influencia. Por otro lado, ciertos grupos o individuos particulares veían en la FEJUVE la posibilidad de sacar algún beneficio personal manteniendo relaciones clientelares con la Alcaldía, que requería controlar esta organización para convertirla en un aliado que acompañe y por tanto no cuestione su gestión.

En este marco la historia reciente de FEJUVE está marcada por escisiones, rupturas y paralelismos dirigenciales, existiendo muy pocos momentos en los que se ha mantenido como una entidad unitaria. Este fenómeno se profundizó aún más, cuando se aplicó la Ley de Participación Popular, debido a que la mencionada norma generó potestad a las juntas vecinales de ser la única organización social con representación legal para canalizar las demandas vecinales frente al gobierno local, asignándole además la responsabilidad de fiscalizar y vigilar las acciones de la Alcaldía. Este factor determinó que se consolide y estimule la práctica de “alinear” a los representantes de la FEJUVE utilizando el clientelismo político para colaborar con la carrera y gestión política de los alcaldes de turno.

La subordinación de la dirigencia vecinal hacia los intereses del gobierno municipal, se ahondó durante la gestión de Manfred Reyes Villa, que durante los numerosos años de gestión (diez en total a la cabeza del municipio de Cochabamba) cooptó a los y las dirigentes de varios Distritos y juntas vecinales. La autoridad supo imponer al mismo tiempo una política de aislamiento a los dirigentes que no estaban alineados o que no comulgaban con su política municipal. Con los años, esta dirigencia marginada se organizó en una FEJUVE paralela llamada “FEJUVE PUEBLO” que pretendía representar adecuadamente los intereses de los vecinos.

Cuando se plantea el conflicto del agua, casi no existía una representación vecinal creíble a nivel de toda la ciudad, la red de juntas vecinales que se movilizaron durante la Guerra del Agua, se organizó al margen de su máxima representación la Federación de Juntas Vecinales FEJUVE, pues los representantes oficiales estaban protegiendo la imagen del Alcalde que participó en la firma del Contrato con Aguas del Tunari. El rol de la FEJUVE oficialista fue la de tratar de desmovilizar y evitar de este modo la

participación independiente de las juntas vecinales en el conflicto: su máximo dirigente en ese momento, “Orellana³², se transformó en el relacionador público de la empresa, acompañaba a los barrios de la ciudad a Geoffrey Torpe, Gerente de Aguas del Tunari, para promocionar los servicios de la empresa a los vecinos, inclusive a sectores donde nunca llega el agua, solicitándoles que ya no compraran el líquido elemento en turriles” (Maldonado, 2004: 76).

La actitud de este personaje, para muchos miembros de la Coordinadora, se explicaba a partir del vínculo partidista que tenía con el Alcalde Manfred Reyes Villa, que como se había participado y otorgado su beneplácito en la firma del Contrato con el consorcio, aceptando el tarifazo aplicado por Aguas del Tunari.

Sin embargo, vanos fueron los esfuerzos realizados para impedir la movilización y el compromiso de los vecinos a su causa, los dirigentes oficialistas sólo lograron perder legitimidad como representación vecinal frente a sus bases, que entendían que fue precisamente la lucha por los derechos y acceso a los servicios básicos lo que justificó la creación de la FEJUVE.

Las juntas vecinales de la zona sud, que no estaban controladas políticamente por el Alcalde, se movilizaron y organizaron por la necesidad de defender el agua como un bien público y no privado. La participación de las juntas vecinales, en la guerra de agua, se produce desde la conformación del CODAEF, el Distrito 6 a través del barrio Villa Felicidad, integró el comité así como del Distrito 8 y algunos barrios y comités de agua del Distrito 14 y 9³³. Muchos de estos dirigentes participaron en varios seminarios y foros realizados por expertos sobre el tema del agua y su privatización y se convertían en pilares fundamentales para transmitir y organizar otras actividades informativas en los barrios, mediante talleres para que los vecinos de bases comprendieran la situación y se comprometieran con la movilización.

La forma de organizar la participación de los vecinos y vecinas, fueron las Asambleas donde analizaban y discutían la problemática del agua con los vecinos de base. De este modo las Asambleas se tornaron en espacios para democratizar la participación de la población en torno a la situación y peligro de la privatización del servicio de agua potable, mecanismo que recuperaba su experiencia organizativa previa a la que recurrían usualmente para enfrentar problemas colectivos.

Paulatinamente los barrios conformaron un bloque vecinal que aglutinaba a diferentes juntas, los mismos que se integraron a la Coordinadora del Agua a través de su vinculación con el CODAEF, con la finalidad de organizar a los vecinos para frenar al alza

32 José Orellana, era en ese momento Presidente de la FEJUVE

33 Este dato se puede corroborar en las lista d integrantes del CODAEF, elaborada los G. Maldonado. Ver Anexo N° 3

de las tarifas y el peligro de la privatización. La conformación de dicho bloque quedó registrada en la prensa escrita del siguiente modo:

*“Catorce comités barriales de defensa del agua, para sendos distritos municipales, se conformaron ayer (22 de enero) con el propósito de difundir en los barrios toda la información relativa al incremento de tarifas de agua potable, el contrato suscrito por el gobierno con aguas del Tunari las inversiones y obras que debe realizar el consorcio en Misicuni, la recategorización del consumo de agua potable y otros temas”*³⁴

Después de la fase de información, los barrios se organizaron para llevar adelante las primeras movilizaciones y las posteriores batallas registradas en la Guerra del Agua. Por ejemplo en las jornadas de enero cuando se realizó el paro cívico, se evidenciaron que existieron bloqueos en la zona sud fundamentalmente de los distrito 8 y 6 y algunos barrios del distrito 9. En la denominada “Toma de Cochabamba” en febrero, durante el cabildo estuvieron presentes varias juntas vecinales, sentando su participación con pancartas y banderas donde se exponía el nombre del barrio al que pertenecían. Finalmente, en abril el bloqueo de la zona sud de la ciudad como lo registra una nota de prensa del periódico local Opinión: “El bloque de la Zona Sud fue Hermético ayer (4 de abril), debido a la drasticidad de los vecinos que dirigieron la protesta en cumplimiento de las instrucciones de la Coordinadora del agua”³⁵

Es evidente que el papel que jugaron las juntas vecinales especialmente de la zona sud, fue en primera instancia el de informar, concientizar y politizar a las bases sobre los peligros de la privatización del agua, en segundo lugar, el de fortalecer la conformación de la coalición entre los sectores sociales y las diferentes clases sociales de la ciudad, ganado adherentes hacia la lucha. La tercera contribución significativa fue la fuerza movilizadora que simbolizaban a través de los bloqueos, las marchas y todas las formas de protesta colectiva. Por último, aunque no menos importante, fue la tarea autodesignada de abastecer con alimentos a las filas de combatientes, especialmente en las jornadas de abril.

La Coordinadora del Agua y de la Vida

La Coordinadora del Agua fue fundada el 12 de noviembre de 1999, en una reunión convocada por diferentes organizaciones sociales de la región, que con anterioridad y cada una por su parte realizaron los esfuerzos necesarios para discutir, analizar y confrontar el problema del agua. Cada Organización a su manera trataba de articularse con otras organizaciones y establecer vínculos o aliados que potencien sus actividades. De

³⁴ Los Tiempos: “Forman 14 comités para defender el agua”. 23 de enero 2000 pág. d.2.4

³⁵ Opinión: “Advierten que Cochabamba podrían quedar sin agua 10 años”. 5 de abril 2000 pág. 12 A

esa forma se logró realizar una reunión en la que participaron diferentes actores, cuyo resultado fue la conformación de una Coordinadora del Agua, como instancia que logre defender el recurso frente a la amenaza de su privatización.

La Coordinadora del Agua incluía a organizaciones del campo y ciudad. Los principales promotores de su conformación fueron los Regantes del sector rural y los miembros del Comité de defensa del agua y de la economía familiar CODAEE, que aglutinaban a varios sectores y organizaciones de la ciudad: profesionales, juntas vecinales, ONG y agrupaciones políticas urbanas.

Sin embargo a medida que la Coordinadora protagonizada un lucha directa contra el gobierno se fueron sumando nuevas organizaciones, como los cocaleros, maestros, universitarios, sindicatos agrarios, comités de agua, y otras juntas vecinales, entre otras. Varias organizaciones participaban asiduamente en las Asambleas que se tornaron en lugares donde se tomaban decisiones.

Cada uno de estos actores jugó un papel importante en el desarrollo de la movilización, cada uno con su particular forma de organizarse aportó con sus experiencias en la Guerra del Agua. Estas experiencias y sus aportes han sido ampliamente estudiados por muchos investigadores, a continuación sintetizaremos estas vivencias de los actores más relevantes, sin desmerecer el valor y aporte de muchas organizaciones que no están mencionadas.

Los actores urbanos en la Guerra del Agua

Estado de la cuestión

La Guerra del Agua fue un fenómeno con proyección regional, nacional e internacional debido a que se trataba de una victoria popular frente los intereses de una transnacional, hecho inédito hasta ese momento, en el país y el mundo, hecho que sacudió las estructuras no solo del Estado Boliviano sino las bases mismas del neoliberalismo y se convirtió en un símbolo mundial de resistencia al libre mercado.

Debido a ello, se convirtió en un objeto de análisis social por varios años. Los estudios indagaron acerca de las causas de la movilización, la forma de la organización, los resultados, las lecciones, los intereses, entre otros. Preguntas que surgieron ante un hecho de gran significación y por ello mismo tan complejo y que involucró un entramado de múltiples relaciones y contradicciones sociales.

En ese sentido existen muchos escritos que reflejan a su modo la mirada de los investigadores al problema desde distintos enfoques teóricos y de diversos campos de acción,

pero que lamentablemente no han profundizado en el rol, participación, significación de la organización vecinal, en los tejidos y su dinámica asociativa conformados en la lucha de la Guerra del Agua. Pero sin embargo en los autores se encuentran elementos que permiten dar pautas sobre la acción vecinal, desde diferentes ópticas y conclusiones teóricas.

Raquel Gutiérrez, es una de las primeras autoras, que publicó artículos sobre este hecho poniendo atención a la organización, configuración y articulación de los protagonistas de la Guerra del Agua.

Desde esa perspectiva identifica la composición social de la Coordinadora como una masa de actores que heterogéneos:

“... la gente se afirmó en la voluntad de bloquear, de decir ¡basta!, reunida en la federación de fabriles era definitivamente heterogéneas mezcla de ciudadanos indignados al estar recibiendo facturas de agua con precios duplicados, más grupos de profesionales que han encontrado incoherencias intolerables en el contrato con Aguas del Tunari y en la Ley de agua potable y saneamiento básico, de dirigentes sindicales un tanto desconcertados y sobre todo de miembros de las múltiples asociaciones de regantes y comités de agua potable rurales y urbanas organizados en la Federación Departamental Cochabambina de Organizaciones de Regantes (FEDECOR)” (Gutiérrez et al., 2000:145).

Ella afirma que “esta composición heterogénea, articuló un movimiento, no bajo las antiguas estructuras corporativas del sindicato o de barrio, sino que actuaron bajo la forma multitud, definida como una forma de interunificación práctica, deliberativa discursiva de varias estructuras de organización local, barrial, laboral o amistosa en torno a objetivos comunes que afectan a todos y por medio de formas de aglutinamiento flexibles multicéntricas y semi-institucionalizada” (Gutiérrez et al., 2000:168). Esta forma multitud adquiere características organizativas sui generis, es laxa a decir “por fuera del entramado normal”, no excluye a las personas y organizaciones que no tengan una estructura sindical, esto le permite expandir sus lazos para incorporar a nuevos adherentes. Ello permitió que cada miembro perteneciente al movimiento participara según sus propias prácticas asociativas y formas de aglutinación.

Bajo la forma multitud se aborda la organización y participación de las organizaciones urbanas y particularmente vecinales que actuaron durante la Guerra del Agua:

“... la población urbana, tampoco se movilizó bajo los estándares de un gremio territorial, de empresa o de oficio. Actuó como multitud donde trabajadores, artesanos, estudiantes, pequeños comerciantes, cuentapropistas, dueñas de casas y oficinistas se fusionaban en una colectividad actuante sin más norma que la que emanaba de la voluntarias capacidad de movilización” (Gutiérrez et al., 2000:157)

Pero reconoce el mismo tiempo que en la movilización fueron los vecinos de las zonas peri-urbanas quienes contribuyeron en la lucha a través de los bloqueos vecinales que aglutina a las otras clases sociales bajo la forma multitud:

“Algunas juntas vecinales de base contribuyeron a la acción colectiva, mas todavía sirvieron los comités de defensa del agua potable, conformados en los barrios periurbanos para acceder de manera común a ese recurso. No tardo en reaparecer toda la experiencia de lucha y de cohesión de los vecinos hoy dispersos, que antes fueron trabajadores regulares de alguna empresa, o mineros que vinieron al valle hace más de diez años, o campesinos que están en medio de estrategias de paso a la ciudad” (Gutiérrez et al., 2000:148).

Esta fisonomía organizativa “de estos núcleos de condensación” corresponden a la característica compleja de la nueva estructura de clases en Bolivia, una reconfiguración producto de la mercantilización de las condiciones de reproducción social y la consecuente expansión de la obrerización difusa, en los condiciones de explotación en el proceso de trabajo que reduce costos y diversifica mercados.

Para Manuel de la Fuente³⁶ por ejemplo. La Guerra del Agua ha sido una insurgencia contra el modelo, contra la Bolivia autoritaria y discriminatoria. Pero al mismo tiempo el conflicto reveló la crisis en los mecanismos de representación provistos por el sistema de democracia representativa. Al momento de platearse el conflicto en torno a la privatización del servicio de agua potable, los partidos políticos miembros de la coalición gubernamental representaban más los intereses de la empresa transnacional que se adjudicó el contrato que la demanda social de mantener este servicio como público.

De otro lado, organizaciones sociales que pudieron presentar objeciones al contrato como el Comité Cívico y la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad, se encontraban tácitamente silenciadas por el compromiso político que mantenían con el gobierno a nivel nacional y también local

Pero el descontento social era tan grande para entonces, que a falta de representación y confianza en los canales formales y tradicionales tuvieron que crear otro tipo de estructuras organizativas, más representativas y legítimas como la Coordinadora.

Para T. Kruse el análisis de los acontecimientos de la Guerra del Agua están enmarcados en explorar cuales son las bases y las formas de articular la protesta, en un escenario en el que la principal organización obrera COB, que históricamente aglutinaba las demandas sociales, se encontraba en una profunda crisis, producto de los cambios y ajustes realizados en el ámbito laboral que socavaron las bases del sindicalismo. Las reformas realizadas para estabilizar la economía sin lograr una verdadera reactivación

³⁶ En su artículo para el PROMEC “La guerra por el agua en Cochabamba crónica de una dolorosa victoria”

económica del aparato productivo, aceleraron la flexibilización laboral, precarizando las condiciones laborales, con la eliminación de las protecciones sociales y la des-sindicalización.

Sin embargo y a pesar de la crisis o ausencia de la COB, existiría una ascendente lucha de las masas, en la que se enmarca la Guerra del Agua, que refleja las tensiones y conflictos entre los intereses de las transnacionales y los intereses locales, como por ejemplo el acceso al agua. Estas acciones colectivas de masas, giran cada vez más en torno a la política de las necesidades básicas o de sobrevivencia, debilitándose cada vez más las manifestación colectivas de lucha entre el capital y el trabajo.

En ese escenario, la Coordinadora fue un espacio de convergencia es decir que:

“Lo que hizo fue abrir, como argumenta Albro, ‘espacios de traducibilidad’, en los cuales sectores y redes diversos podrían construir conceptos y agendas compartidas basadas en necesidades consentidas y atropellos indignantes compartidos. No comandaba filas sindicales, sino articulaba argumentos resonantes, enarbolaba símbolos compartidos, sentaba estrategias y pautas aprehendibles, y proveía oportunidades para la articulación de iniciativas en distintos espacios– y todo en torno a dos necesidades básicas: acceso al agua, y un sentido de dignidad” (Kruse, (s/f): 27).

Los actores que convergieron en la movilización, fueron nuevos actores, que no se estructuraban bajo la forma tradicional del sindicalismo, sino más bien que se han estructurado bajo la capacidad de procesar conflictos por las necesidades básicas, como FEDECOR una asociación de campesinos que se dedica a defender el agua en base a los usos y costumbres; también se destaca la conformación del Comité de Defensa del Agua que fue integrada por un grupo de ambientalistas motivados por los múltiples aspectos de esta problemática en Cochabamba (proyecto Misicuni, perforación de pozos y el impacto del contrato de concesión de agua, etc), concluyeron en el grave peligro de la privatización de SEMAPA y volcaron toda su atención en el problema logrando articular a otras organizaciones como las organizaciones barriales a través de seminarios, reuniones y pronunciamientos. Ambas organizaciones se aliaron y dieron paso a la creación de una organización que pueda articular de forma más amplia a otras organizaciones “cada uno con características distintas pero potencialmente complementarios” (Kruse, Tomas (s/f):107). En este espacio de articulación y alianzas nació la Coordinadora, integrada por más de cuarenta organizaciones, entre las se incluye organización vecinales, comités cívico provinciales, federación de fabriles, etc.

En esta redes el rol que jugaron los trabajadores, tuvo una práctica novedosa, pues su experiencia y tradición fueron aportados no desde sus estructuras organizativas tradicionales, sino desde dispositivos que emanaban de agrupaciones sociales fuera del medio

laboral, desde su quehacer cotidiano, los barrios, los gremios, los comités de aguas, escenarios en los que ahora encuentra “reconocimiento y utilidad”.

El autor analiza con detenimiento las “nuevas” formas en las que se presenta una rebelión por las necesidades básicas, y nos sugiere que dichas formas y actores se van reconfigurando en una reconstrucción política en la que nacen nuevas formas creativas e iniciativas que involucren cada vez más a la gente. De esta manera desde los barrios y desde diferentes asociaciones emergerá una forma de articulación que pueda dar paso a la convergencia de los actores involucrados, “para encontrar un espacio y una forma de poner en práctica una participación significativa en la sociedad” (Kruse, (s/f):111).

Otro autor como Thomas Perreault, considera que la lucha del agua pone sobre el tapete temas de “governabilidad ambiental, expresión conceptualizada en este artículo como los marcos legales y los arreglos institucionales a través de los cuales se toma las decisiones sobre los recursos naturales, así como las prácticas de gestión a través de las cuales se implementa dichas decisiones” (Perreault, 2007:149). En Bolivia la gobernabilidad ambiental ha seguido la orientación neoliberal, es decir la aplicación de los principios del mercado o la privatización de los recursos naturales controlados por el Estado. Para ello se ha modificado y cambiado las normas, instituciones y representaciones sobre los recursos naturales, para el beneficio del capital extranjero, trayendo consigo las desigualdades de poder y de distribución “sobre los recursos naturales y los beneficios que resultan del uso de los recursos” (Perreault, 2007:154).

Esta orientación de la gobernanza sobre los recursos naturales y especialmente sobre el agua ha chocado directamente con los intereses de la población rural y urbana, que rechazan la mercantilización y la privatización del agua porque desde su punto de vista este es un bien público y un recurso colectivo.

El rol que jugaron los actores de las zonas periurbanas permitieron visibilizar la lucha contra la privatización del agua, basta demostrar que quienes tomaron las calles eran:

“... inmigrantes relativamente recién establecidos que no poseían conexiones domesticas con el sistema de provisión de agua potable urbano. Por consiguiente, su participación en la Guerra del Agua no fue en defensa de un acceso seguro de los recursos, ni de un justo y eficiente servicio municipal. Más bien, fue un genuino rechazo a la privatización de los recursos naturales bolivianos y a su control por intereses extranjeros” (Perreault, 2007:160).

Los barrio periurbanos que se van poblando de inmigrantes provenientes de Oruro, Potosí, La Paz, desde 1985, son pobladores que no tiene el agua y que sin embargo luchan por imponer una lógica en el manejo de los recursos naturales de propiedad colectiva intrínseca a las prácticas tradicionales locales y colectivas.

La movilización de los ciudadanos inmigrantes de los barrios periurbanos que no cuenta con el acceso al agua, pero que luchan por imponer los usos y costumbres en el manejo de los recursos naturales como un bien colectivo, demostró que la Guerra del Agua sirvió para frenar esta pretendida centralización de los recursos por parte de las transnacionales, al cancelar el contrato, corregir la legislación y devolver el agua al control público. Reconocer esto: “implica abordar temas de gobernanza o las formas en que los derechos del agua son atribuidos e impuestos –cómo las decisiones relativas al agua son tomadas y cómo el agua misma es manejada–, así como formas y escalas de organización social para el manejo del agua” (Perreault, 2007:161).

Finalmente Carlos Domínguez, analiza la Guerra del Agua, enfocando dos procesos la “construcción de identidades y discursos colectivos por parte del movimiento social, así como sus posibles relaciones con discursos y prácticas políticas asociados con la privatización de los Servicio Agua Potable y Alcantarillado” (Domínguez, 2007:212). Para ello propone analizar las identidades colectivas utilizando el enfoque de nuevos movimiento sociales (NMS) y los estudios de discursos colectivos a partir de los marcos de acción colectiva³⁷.

Desde este ángulo la movilización encabezada por la Coordinadora, se califica como un NMS porque, primero la protesta estaba dirigida a oponerse a las políticas de privatización, confrontándose al discurso mercantil del agua y proponía que este recurso sea reconocido como un bien social. En segundo término el movimiento fue resultado de: “los errores de operación política por parte del gobierno –incluyendo la represión de protesta y marchas– y los errores de política pública que los asesores técnicos de la Coordinadora encontraron poco a poco en el contrato de concesiones y en la Ley 2029” (Domínguez, 2007:214), Ambos errores se originan en el sistema burocrático que no reconoce a los actores no institucionalizados, lo que lleva a la división entre los aspectos técnicos de un proyecto con los aspectos sociales. Por último la protesta tuvo lugar en un contexto de descontento generalizado con las instituciones de representación política, pues los partidos políticos, dejaron de ser los representantes auténticos de los intereses de la sociedad civil. Por lo que concluye que en el fondo lo que se buscaba no era tomar el poder sino reducir las relaciones de poder o dominación, a través de contrastar la participación directa, los cabildos y las asambleas, en la toma de decisiones sobre los temas públicos, frente a un sistema democrático –representativo que “había demostrado ser inútil para poner sus intereses en la balanza de las decisiones públicas” (Domínguez, 2007:218).

³⁷ Un nuevo movimiento social (NMS), se caracteriza por generar un proceso profundo de auto reflexión “que a su vez está asociado con la emergencia de una sociedad postindustrial, capaz de producir su propio conocimiento” (Domínguez, 2007:216), también se caracterizan porque buscan reformas radicales que no necesariamente cuestionen el poder Estatal, solo pretenden redefinir los valores normativos, como por ejemplo la mercantilización y comercialización extrema de la sociedad, expresando su descontento contra las instituciones de representación democrática

Complementando a esta caracterización sobre la Guerra del Agua como NMS, está el enfoque de los marcos de acción colectiva (MAC), que se define como: “un principio organizador que de coherencia y sentido a un conjunto diverso de símbolos” (Ob, cit, 2007:220), logrando que se desmitifique ante los potenciales adherentes de un movimiento social las verdades absolutas, problematizando en este caso la política de la privatización del agua, como una política no acertada e innecesaria, y convencer a los actores y aliados sobre las razones por las cuales debe movilizarse. En ese camino se construye una identidad compartida, es decir los que se movilizan, los aliados los adherentes en la lucha construyen una misma identidad como afectados y se auto identifican como “nosotros”, visualizando a sus oponentes con los agresores “ellos”. Por ejemplo esta identidad compartida se fue gestando entre los grupos rurales y urbanos, basada en la idea de que: “el agua constituye una condición para la vida y para la reproducción social, que el derecho a tener agua es inalienable y, por lo tanto, que su manejo concierne a todos” (Ob, cit, 2007:222), por lo tanto esta idea construía una identidad de todos los afectados, los actores rurales que defendían sus usos y costumbres y los actores urbanos que pagarían tarifas más elevadas, lo que les llevo a defender su economía. En la construcción de la identidad, intervinieron elementos de vinculación que funcionaron como “bisagra”, como por ejemplo la solidaridad y reciprocidad, como valores vitales para mantener el tejido social, otro elemento discursivo fue la idea de la “multitud plebeya”, es decir la capacidad de canalizar las demandas de los distintos actores, la generación de nuevas formas de auto-organizarse rebasando las formas tradicionales de movilización. El último elemento vinculante fue la idea de que el agua es vida, que tiene un significado social e histórico.

Son estos elementos los que permiten la alianza entre el campo y la ciudad, porque estaba basado en elementos discursivos flexibles que permitieron atraer a potenciales aliados. En esta construcción los MAC de los regantes funcionó como detonador para que en la ciudad se legitime un discurso que justifique su participación, sin embargo se reconoce que los actores de las zonas periurbanas forjaron un marco de acción colectiva, encarnando y expresando los elementos de vinculación de carácter histórico, como la valoración del agua como elemento vital, dado que:

“Solo en las zonas de mayor marginación social y económica –como la zona sur de la ciudad– es posible encontrar que el valor social y histórico del agua está basado en los esfuerzos de estas comunidades para implementar sistemas tradicionales que precisamente han suplido por la falta de acceso a la red municipal de agua potable” (Domínguez, 2007:224).

Barrio Petrolero Villa Felicidad. Un espacio de construcción social

La ciudad de Cochabamba, características generales

La ciudad de Cochabamba es la capital del departamento, que tiene el mismo nombre, se encuentra dentro la provincia de Cercado. Cuenta con una población de 517026 habitantes. Tiene las siguientes características geográficas:

“... se extiende a lo largo de un eje Este-Oeste y otro menor Norte-Sud, a lo largo y ancho del Valle Central, fuertemente condicionada por la presencia de la Cordillera del Tunari en sus límites Norte y Oeste y, la penetración profunda de la serranía sur que termina en el cerro de San Pedro. Este ámbito geográfico es recorrido por los ríos Maylancu, Rocha y Tamborada; quedando vestigios del pasado pantanoso en las lagunas de Alalay y Coña Coña (en la actualidad seca). En las estribaciones de la cordillera del Tunari se encuentra la ‘Media Luna Cochabambina’, cadena montañosa en la que se encuentra el Parque Tunari, el mismo que se despliega a lo largo del límite urbanizable (la cota 2.750 mts). Hacia el sur la presencia del Aeropuerto departamental y las lagunas de oxidación de las aguas negras, constituyen una barrera al crecimiento físico de la ciudad junto a las alledañas zonas de cultivo agrícola y de actividades de lechería” (Solares y Vargas, 1997:1).

Las actividades económicas que más aportan en el Producto Interno Bruto departamental son: La industria manufacturera con el 16.23%, la agricultura con un 8.88%, el comercio con el 7.97% y la producción petrolífera y extractiva con 5.18%³⁸.

En la ciudad la zona central concentra la mayoría de los negocios y actividades comerciales, aunque durante la última década estas actividades van descentralizándose hacia el noroeste de la ciudad. Pero aún se puede afirmar que la banca, el comercio formal y las instituciones están concentrados en el “centro urbano tradicional”. También el más y mayor mercado central llamado la Cancha todavía es el más grande conglomerado de comercialización de las diferentes actividades económicas.

El carácter y estructura urbana de la ciudad, para Solares, H. y Vargas, H, son de tipo concéntrico, es decir:

“... excesiva concentración de funciones comerciales, administrativas, financieras, de gestión, incluso industriales, educativas, culturales, etc. creando con-

38 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2010

gestión, contaminación e incomodidad. Sin embargo aquí no se crea una economía de aglomeración que pudiera estimular modificaciones estructurales. Todo parece indicar que la condición de centralidad es fuertemente funcional para el tipo de economía urbana vigente, por tanto otras implicaciones resultan problemas secundarios. En resumen, los rasgos estructurales anotados, lejos de debilitarse con las transformaciones urbanas y los esfuerzos municipales para descongestionar rubros como el abastecimiento, han cobrado mayor vigor y nada hace suponer que esto se modifique en el próximo futuro, pues no en vano, el proceso urbano en el fondo no es otra cosa que la dimensión espacial de la economía y su transformación sólo se opera si su esencia tiene razones poderosas para cambiar de comportamiento” (Solares y Vargas, 1997:2).

Esta estructura urbana concéntrica, profundiza las desigualdades socio-económicas, ya que es en la zona central donde se establece el rol productivo económico fundamental, excluyendo o impidiendo la posibilidad de articular, a la actividad o unidad económica a las zonas o los barrios que están en crecimiento. Por lo que se va desarrollando un proceso de urbanización que contiene enormes desigualdades en una ciudad que conlleva dos contrastes: por un lado un centro urbano “donde existe una cierta unidad económica, social y cultural...” (Antequera, 2007: 18), y por otro las zonas suburbanas, que son parte de la ciudad, pero: “...en términos sociales, económicos y de acceso a servicios básicos está fuera de ella, está en sus márgenes y su población está física y simbólicamente excluida” (Antequera, 2007: 21).

En la ciudad de Cochabamba los barrios del centro urbano son la zona central y la zona norte, que abarca el distrito 10, 11, 12, 3,2 y 1, y la zona suburbana es la zona sur que son los distritos, 5, 6, 7, 8, 9 y 14. La población de la Zona sur representa el 43.87 % de la población total del Municipio, abarca una superficie del 64% del total del municipio. Las características económicas de la población son:

“En cuanto a los grupos ocupacionales, un 29,70% de la población ocupada de la zona sur se encuentra en el sector terciario, son vendedores o prestan servicios varios, mientras que un 28,59 % se encuentra en el sector de manufacturas, construcción o industrias extractivas. Es significativo también el porcentaje de personas que se dedican a trabajos no calificados, un 10,64 %. De acuerdo a estos datos podemos decir que la zona sur de Cochabamba está habitada principalmente por comerciantes, albañiles y operarios de talleres” (Antequera, 2007: 120).

En cuanto a la vivienda y los servicios básicos, se identifica que: un 51.69% cuenta con vivienda propia, mientras que un porcentaje de viviendas alquiladas es de 30,29 % y las viviendas prestadas 7,55 %. (Antequera, 2007: 124).

Sobre los accesos a servicios básicos los datos revelan que la mayor carencia es el agua potable dado que solo el 54.18% de la población de la zona sur cuenta con agua potable distribuido por cañería de la red Municipal, mientras que el 45.82% debe abastecerse de agua por carro cisterna o mediante la construcción de redes comunales. En el Alcantarillado: “La mayoría de la gente de las zonas en expansión depone las excretas al aire libre, en terrenos baldíos, en acequias o en torrenteras, siendo estas una fuente de contaminación para los mismos vecinos. En algunos casos los vecinos cuentan con pozos ciegos o pozos sépticos, de acuerdo a la economía familiar” (Antequera, 2007: 127). Otros servicios como el alumbrado público, electricidad domiciliaria y recojo de basura, son deficiente en muchas zonas como el distrito 6, 8,14, y en muchos otros barrios casi inexistentes.

El Barrio Petrolero Villa Felicidad. Condiciones generales

El Barrio Petrolero Villa Felicidad, está ubicado dentro del Distrito 6 en la Zona Sud de Cochabamba. Limita al Norte con el Barrio Víctor Paz Estenssoro, al sud con Villa Progreso, al este el barrio libertados y al oeste con San Carlos. Se compone de 35 manzanos.

Según datos proporcionados por el CEDIB en su revista “Datos de la zona Sur de Cochabamba Tomo II”, la población es de 5707 habitantes, de los cuales 2689 son varones y 3018 son mujeres, por lo que la población femenina es mayor que la masculina. La población que realiza una actividad económica o que tiene ocupación es 2222 y la desocupada es 86. Las categorías de las actividades económicas de la población ocupada es la siguiente:

Tabla N° 1

Barrio Petrolero	Totales	Obrero o Empleado	Trabajador por Cuenta Propia	Patrón o socio	Cooperativa	Trabajo Familiar	Otros
	2222	1083	881	75	6	69	108

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito 6

Los datos demuestran que el 48.7 % de la población tiene un trabajo estable, mientras que el 51.3 tiene una categoría ocupacional informal.

Con relación al nivel de instrucción alcanzado tenemos:

Tabla Nº 2: **Población de 6 años y más de edad por nivel de instrucción más alto alcanzado**

Totales	Primaria			Secundaria		Licenciatura		Técnico		Normal		Militar o Policía	
	Tecnico de Instituto	Otro	Sin especificar	Comp	Incom	Comp	Incom	Comp	Incom	Comp	Incom	Comp	Incom
4892	2076	269	1807	714	780	254	373	63	37	91	27	11	9

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito 6

De los datos expuestos se concluye que el 84.8 % se encuentran con grado de instrucción de nivel primario, el 30,5 % se tiene una formación secundaria, los que tienen instrucción a nivel licenciatura son el 12.8%, 2 % con instrucción técnica y por ultimo un 2,4 se encuentran en el nivel de normalistas.

Por otro lado en el acceso a los servicios básicos tenemos los siguientes indicadores:

Tabla Nº 3: **Agua y procedencia de abastecimiento**

Total hogares	Cañería de red	Pileta pública	Carro repartidor	Pozo	Otros
1492	1419	39	22	11	1

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito 6

Tabla Nº 4: **Alcantarillado**

Totales	Tiene	No tiene
1492	1484	8

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito 6

Tabla Nº 5: **Energía eléctrica**

Totales	Tiene	No tiene
1492	1441	51

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito 6

Tabla N° 6: **Tenencia de vivienda**

Totales	Propia	Alquilada	Anticrético	Prestada por parientes	Otros
1492	557	580	190	119	46

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito 6

Del total de familias solo el 37,3 tiene una vivienda propia, y mientras que el 62.6 % no son propietarios.

Y en relación a la calidad de vivienda tenemos los siguientes datos:

Tabla N° 7: **Número de habitaciones de los hogares**

Totales	Una habitación	Dos habitaciones	Tres habitaciones	Cuatro habitaciones	Cinco y más
1492	708	254	167	150	213

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito

Tabla N° 8: **Material de construcción**

Totales	Ladrillo y cemento	Adobe/Tapial	Otros
1492	746	738	8

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito

Materiales utilizados en los techos y pisos.

Tabla N° 9: **Techos**

Totales	Calamina	Teja	Losa	Paja	Otros
1492	1083	307	93	2	7

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito

Tabla N° 10: **Pisos**

Totales	Tierra	Tablón	Machimbre	Alfombra	Cemento	Mosaico	Ladrillo	Otro
1492	34	8	41	7	1094	273	32	3

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito 6

Tabla N° 11: **Hogares con cuarto especial para cocinar**

Totales	Tiene	No tiene
1492	1087	405

Fuente: CEDIB: Datos del Distrito 6

De los datos sobre la calidad vivienda se puede concluir que el 47.5 % de los hogares vive en una solo habitación, el 17 % en dos habitaciones y el 11% en tres habitación, significando que la mayoría de los hogares vive de forma hacinada. Respecto los materiales de construcción la mitad de los hogares utiliza materiales de ladrillo y cemento. En el material de los techos se demuestra que el 72.5 % de las viviendas son techadas con lamina. En el material de los pisos el cemento es el mayor material utilizado. Finalmente de 1492 hogares el 72.8 % tiene una habitación especial para cocinar.

Con relación al origen migratorio de los pobladores se establece que existe un predominio de Oruro, Potosí y La Paz, el promedio total de inmigrantes de los otros departamentos representa el 39.4 % del total de la población de Barrio Petrolero.

Surgimiento y procesos asociativos

El barrio Petrolero Villa Felicidad se crea aproximadamente el año de 1957 durante el Gobierno de Siles Suazo. Es uno de los primeros barrios del distrito. Los primeros pobladores que urbanizaron el barrio fueron los trabajadores y ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que fundaron el barrio con el nombre de Villa Plafer, pero por la presencia de los petroleros se fue consolidado y adquiriendo la identidad de Barrio Petrolero. En la entrevista a Raúl Salvatierra, un vecino y ex dirigentes del Barrio, comentó:

“Según revisé algunos documentos de propiedad de los terrenos de esta zona eran de la Familia Quiroga³⁹. Los trabajadores han adquirido el terreno en grupo de una persona particular, no estaba regularizado y ellos hicieron urbanizar poco a poco; por lo que ellos son los fundadores del barrio” (entrevista 2).

A pesar de que los fundadores fueron los trabajadores petroleros, con el tiempo estos se fueron enajenado de sus viviendas, vendiéndolas a terceros familias de inmigrantes que deseaban contar con una vivienda cerca del centro, y en la actualidad casi no existen habitantes fundadores:

³⁹ Es el Apellido de la persona particular a quien le compraron el terreno

“Pero ya son pocos los ex trabajadores de Yacimientos, son muy pocas a las que se les puede decir originarios del barrio, porque poco a poco, –como estamos cerca a la cancha– se ha venido gente de La Paz, gente migrante ha ido poblando este sector, gente que se dedica al comercio, ya sea los que vienen de las provincias o de los departamentos porque estamos cerca a la Cancha” (entrevista 4).

En la medida que se urbanizaba el barrio, surgieron las necesidades de mejorar las condiciones de urbanización, como el agua, el alcantarillado, la luz eléctrica, los empedrados, etc. Entonces se fue fortaleciendo la coordinación y la asociación de vecinos que se organizaban para reclamar el agua potable, el empedrado, etc. Sin embargo esta gestante organización era totalmente espontánea por lo que no adquirió una fisonomía definida:

“No había organización, eran muy espontáneas, necesitaban luz, empezaba uno por ahí contagiaba a los otros y reunían a la junta vecinal para la luz, un poco cumplían eso, se olvidaban, y ya no había junta. Para la cuestión de agua potable se reunían muy espontáneamente un sectorcito, y se daban ganas todos, y nuevamente se juntaban como junta vecinal para conseguir agua potable, una vez conseguido desaparecían nuevamente. Luego por el alcantarillado nuevamente, entonces, esa la hermenéutica espontáneamente, se reunían por sus necesidades. Ahora con la ley de participación popular con eso se llega a afianzar como OTB” (entrevista2).

La más clara y cercana forma de organización vecinal con estructura organizativa más o menos sólida, se desarrolló por los años ochenta durante el Gobierno de la UDP, época en la que se puso en pie una junta vecinal, que pueda organizar la provisión de alimentos y víveres, dado que la escasez de los productos de primera necesidad obligaba a organizar de mejor forma el aprovisionamiento de dichos productos. Lamentablemente dicha organización fue desvirtuada por los dirigentes de la junta vecinal que aprovecharon su condición para sacar provecho personal, como por ejemplo el agio de los viveres y la malversación de fondos de una cooperativa de ahorro y consumo que habían creado los vecinos con sus aportes, los cuales fueron desfalcados por los dirigentes. Quienes no tuvieron una sanción adecuada porque lograron manipular y engañar a los vecinos con mentiras, falsas promesas y compromisos de devolver esos recursos. Por ese motivo se debilitó la embrionaria organización vecinal, pues los vecinos perdieron la confianza en la dirigencia y en el poder organizativo vecinal. Así que continuaron las acciones colectivas organizadas de forma espontánea durante un tiempo más.

Esta espontaneidad en la organización llegaría a su fin con la aprobación de la Ley de participación Popular 1551, puesto que normó:

“... Hasta el último procedimiento de participación empezando con los sujetos, los momentos, las funciones y la forma de presentar reclamos, solucionar conflictos y ejercer el control. En ese terreno, uno de los elementos que marco su orientación es que las organización territoriales eran consideradas ‘los principales sujetos de participación popular’ otorgando un rol secundario y aleatorio a todos los demás tipos de organización” (Torrice, 2004:43).

De esa manera el Barrio Petrolero se constituyó en Organización Territorial de Base OTB, que le obligaba por ley a tener una nueva delimitación territorial, una estructura organizativa solida y definida, que cumpla con los requisitos establecido por ley para poder convertirse en el canal de expresión de sus demandas hacia el gobierno local.

“Con la Ley de participación Popular se logra ‘algo’, sin embargo se hizo fronteras entre todos, antes no había eso, podían participar de arriba, de abajo, venían de Cerro Verde y podíamos priorizar necesidades. Vino la ley de participación popular y nos empieza a fragmentar, nos ponen cercos, nos ponen murallas. Antes el Barrio Petrolero no tenía fronteras, podían venir de arriba de Cerro Verde, nos organizábamos y como éramos una parte estratégica por la ubicación, aquí abajo, venían de todos los cerros y nos reuníamos en Villa Felicidad” (Salvatierra, entrevista, 2012).

Así se conformo la OTB Barrio Petrolero Villa Felicidad con 35 manzanos, integrada por tres juntas vecinales:

1. Barrio Petrolero
2. Villa Felicidad
3. Barrio Municipal

La OTB, no solo reestructuro los limites, sino que impulsó y formalizó, la espontanea, estructura organizativa vecinal, pues la OTB era ahora un actor indispensable para realizar las demandas para mejorar las condiciones de su habidad. Se recuperó parte de la tradición de la antigua organización que se gestaba durante la UDP y se incorporó mecanismo para que los vecinos puedan ejercer un control a los dirigentes en los que existía una participación más amplia de los vecinos de base. Esa estructuración adquirió la siguiente forma:

La mesa Directiva, conformada por un presidente, Vicepresidente, secretario (a) de actas, secretario de Deportes, Secretario de hacienda, secretario de conflictos, vocales. En un segundo Nivel de representación se encuentran los representantes por manzanos o segmentos de calles que adquirirían, los cuales eran representantes de sus calles para coordinar con la directiva sobre las demandas del segmento o su cuadra. La toma de

decisiones se realizaba a través de las asambleas de manzanos y finalmente la asamblea general de todo el barrio, que se constituía en el máximo órgano de decisión y deliberación de los problemas.

“Nosotros organizábamos representantes de manzanos para no hegemonizar un solo sector, porque en algún momento (cuando era vicepresidente) de un manzanito dos o tres representantes había y eso no era bueno, entonces había que sacar de todos los lados, de ahí nació la idea de sacar por manzanos. por segmentos de calle, o cruce de calle, así se debería sacar a un representante de calle, porque también era conflictivo el manejar representante de manzanos cuadrados, y los vecinos decían que podían pelear por la otra calle mas, y se podían reunir en la esquina de la calle. Así nacieron estos representantes de representantes de manzanos o segmentos de calle” (Salvatierra, entrevista, 2012).

Esta forma de organización y de toma de decisiones, garantizaba a través de la democracia directa de los vecinos que, no se hegemonice el poder en un sector y que las demandas de todos los sectores del barrio sean debidamente atendidas y representadas.

Paralelamente a esta estructura organizativa se fue gestionando la personería jurídica, requisito que establece la ley 1551, una especie de certificado de nacimiento de la OTB, expedida por la Prefectura del departamento. La gestión de esta personería requería de datos de la OTB como Habitantes, límites, etc. Los representantes gestionaron su institucionalidad realizando un Censo y una delimitación territorial, que imponía una nueva jurisdicción en la que recortaban los alcances y área de acción de la OTB:

“... la ley nos dice censo de habitantes, (cuantos habitantes tenemos), cual el límite que vamos a tener, lo mínimo que podíamos tener es de 8 manzanos. (.....). Pero no pudimos abarcar todo lo que era el Barrio Petrolero, porque una parte está en otra OTB (en San Carlos), nunca nos dieron una respuesta favorable y nosotros teníamos apuros por hacer los trámites de nuestra personería jurídica y los dejamos fuera, e inclusive existe otra zona que pidió que les tome en cuenta, pero teníamos apuro, hasta donde podíamos lo hicimos, por esa razón el Barrio Petrolero debería ser más grande. Los límites son: Toda la República, el límite es: Valle Grande, nos subimos al cerro (pero ya no es Barrio Petrolero es Villa Felicidad), atrás nos subimos por la Av. Los Andes e inclusive se incluyeron tres manzanos de barrio municipal, de esa avenida bajamos cruzamos por el puente de la 6 de Agosto” (Salvatierra, entrevista, 2012).

Entre los requisitos para la personería jurídica también estaba la elaboración de estatutos, una especie de constitución barrial que norma la estructura organizativa, los

niveles de representación, los órganos de poder, los derechos y deberes. Delimita territorialmente.

Estos Estatutos debieran reflejar la dinámica interna de la OTB, sus formas naturales de organización. Sin embargo los estatutos del Barrio petrolero no reflejas esta dinámica interna que adquirieron al principio de la organización de la OTB, tal vez por falta de apoyo técnico legal o falta de tiempo, este estatuto era una copia de los Estatutos realizados por FEJUVE, un modelo estatutario que la organización matriz había consensuado con la Prefectura y la Alcaldía.

“Los Estatutos no estaban correctamente bien elaborados aunque pusimos nuestro aporte, porque se hizo una copia del modelo que daba la Federación de Juntas Vecinales. Este estatuto no mostraba la verdadera estructura organizativa del barrio, aunque nosotros queríamos hacer nuestro propio estatuto, pero por razones de tiempo, no pudimos establecer y estatuir esto y en algún momento pedimos el apoyo de Miquel Lora (dirigentes del Magisterio Urbano), pero repito nos faltó tiempo porque era corretear aquí y en otros lados por los trámites de la junta vecinal” (Salvatierra, entrevista, 2012).

Organizaciones y asociaciones del Barrio

La OTB está compuesta por las siguientes asociaciones:

Asociaciones vecinales

Junta de vecinos Barrio Petrolero, el barrio más antiguo de la OTB, sus fundadores los trabajadores petroleros, quienes paulatinamente fueron abandonando la zona, para dar lugar a los inmigrantes provenientes de otras ciudades del occidente del país.

Junta vecinal Villa felicidad, un barrio de origen migratorio, sus fundadores provienen de Oruro, Potosí, La Paz. Se articulo a la OTB cuando esta consolidaba la Personería Jurídica, enmarcándose dentro sus límites territoriales

Barrio Municipal, es el barrio que recientemente se fusionó a la OTB, es un barrio de reciente creación sus fundadores son trabajadores municipales que adquirieron terrenos para sus viviendas. Se fusionaron e integraron a la OTB para que sus demandas se canalicen a través de ésta.

Las tres juntas de vecinos se articulan y tienen una estructura organizativa, en la actualidad, a través de la conformación de la mesa directiva, en la que miembros de los tres barrios se encuentran representados.

Asociaciones deportivas

Existe un Liga deportiva de la Disciplina de Futbol, estos campeonatos se realizan en el complejo deportivo Petrolero. Los campeonatos del barrio no forman parte de esta liga y no se desenvuelven dentro del Complejo dado que estos últimos están a cargo de la administración del Municipio.

Asociaciones laborales o actividades económicas

En el barrio se han instalado talleres de confección de ropa. Tienen la característica de producción domestico familiar. Contratación de obreros a destajo. La maquila talleres son subsidiarias de empresas confeccionistas, que realizan acabados de la ropa, como colocar botones, realizar costura, o bordados.

No cuentan con una organización estructura ni asociada entre los mismos miembros del ramo, por lo tanto no cuentan con ninguna forma organizativa que les permitan tener presencia institucional o informal con el barrio.

Asociaciones juveniles

Existe un grupo de jóvenes, dedicados a fomentar y crear espacios culturales, especialmente los espacios literarios. Ello impulsó la creación de un espacio de lectura, una pequeña biblioteca que por el impulso y esfuerzo de los jóvenes se institucionalizo en el barrio como una biblioteca municipal, equipada adecuadamente.

La relación de esta agrupación juvenil incidió en la OTB en la priorización de obras, dado que destinaron sus recursos de la participación popular a la construcción de la Biblioteca zonal donde se pretendió además adecuarlo a un espacio de recreación cultural. Sin embargo dicho espacio es administrado por el Municipio. Como lo destaca el responsable actual:

*“Mendoza fue responsable de la mencionada biblioteca desde la creación de la misma por los jóvenes del barrio. A la fecha continúa al cuidado de los libros y colecciones que integran el stock del lugar. Lo importante es que con ayuda del Oficial Mayor de Cultura Max Munckel se incrementará los libros, priorizando aquellos que los vecinos de la zona requieran más y que sean actuales”.*⁴⁰

Esta agrupación juvenil aunque no tiene una estructura solida, ha logrado y lograr incidir en la OTB con las actividades culturales y en combinación con el responsable municipal de dicho espacio. Son los responsables y gestores culturales del barrio.

⁴⁰ Los Tiempos (2012).“ Villa Felicidad, OTB que prioriza la cultura para sus habitantes”. Local: Febrero.

Juan José Torres presidente de Bolivia entre el 7 de octubre del 70 y el 21 de agosto de 1971, fecha en el que fue derrocado por el golpe de Estado organizado por el General Hugo Banzer Suarez.

Espacios físicos de articulación

La OTB cuenta con muy pocos espacios históricos que marcaron y consolidaron la referencia de la OTB. Entre estos espacios se encuentra el Complejo deportivo Petrolero. El complejo fue la herencia de los trabajadores Petroleros, que contaban con un equipo deportivo en la liga, el Club petrolero, que adquirió un terreno, en calidad de comodato, en la zona para construir un complejo deportivo, con el respaldo económico de los aportes de los trabajadores. Por la mala administración de los recursos para el complejo, por parte de los administradores del Club, el complejo no pudo ser concluido. Después del descenso del Club, el complejo fue abandonado, y paulatinamente se fue deteriorando la infraestructura existente.

En la actualidad la Alcaldía ha tomado a su cargo la administración del Complejo, pero las mejoras que se realizan en dicho espacio son con los dineros de coparticipación. Contradictoriamente ello no significa ninguna ventaja a los vecinos del lugar a la hora de utilizar el espacio. Sin embargo aunque no puedan aprovechar los vecinos esta infraestructura, el complejo es la referencia obligada del barrio, pues es proceso de urbanización se gestó alrededor del mismo, constituyéndose en el caso viejo del barrio.

Recientemente se ha creado una biblioteca en el barrio con los recursos de coparticipación, este espacio de recreación cultural está administrado por la Alcaldía. Pero tiene importancia en la medida que ahora se va consolidando en el espacio de la OTB como sede social del Barrio, esta infraestructura es reciente pero se abre paso como el punto de referencia donde se gestiona actividades culturales, y sociales.

Tejido Social. Modo de relacionarse con otros

El barrio “Petrolero”, se encuentra dentro el Distrito 6, que al mismo tiempo está compuesto de 26 OTBs. El distrito se conformó a partir de la Ley 1551 de Participación Popular: “Se ha consolidado con la ley y es la ley quien ha delimitado los límites del Distrito también, en base a las OTBs (juntas vecinales) que se han organizado en base a ley 1551” (Salvatierra, entrevista, 2012). En un inicio el distrito se conformó con 16 juntas de vecinos que habían logrado obtener su personería jurídica, con el tiempo muchos barrios y junta de vecinos se fueron separando de otros barrios y consolidaron su propia OTB. El Distrito se encuentra ubicado en la zona sureste de la ciudad. Limita al norte con el distrito 11, al sur con el distrito 7 y 8. En la parte oeste con los distritos 5 y 10. Según los datos del CEDIB el distrito 6 es el más poblado del municipio, cuenta con 62 mil habitantes en una superficie de 89 kilómetros cuadrados.

El distrito se organiza a través de los presidentes de OTBs, que se reúnen una vez por semana para discutir los problemas del distrito y de los barrios y donde priorizan las obras distritales, se podría decir que es el espacio de articulación entre los diferentes

Barrios y/u OTBs y las diferentes organizaciones barriales. El Distrito escoge a sus representantes a través de congreso distrital, donde asisten uno o dos representantes de las OTBs y realizan la elección de los representantes del Distrito. El congreso Distrital, se reúne cada dos años, tiene las atribuciones de planificar, priorizar las demandas del Distrito, también escoge a los representantes del distrito que son los responsables de velar por los intereses distritales y convertirse en una especie de control social sobre los recursos de la Zona administrados por la Alcaldía.

LA OTB B. Petrolero, en el proceso de consolidación del Distrito jugó un papel importante, aportando en el proceso de estructuración orgánica. Durante la Etapa de consolidación en la estructura del distrito, el barrio impulsó la creación de una organización representativa de las OTBs:

“La junta vecinal del barrio petrolero, pudimos hacer congresos con participación de bases (congresos del Distrito), como junta vecinal, sacamos la línea de elegir delegados de base, que era la representación genuina de las bases; dos o tres representantes haciendo paridad con gente de base en cada OTB, entonces si íbamos tres de la directiva, tres delegados de base deberían ir al congreso del Distrito, eso lo instituímos nosotros y de ahí como que muchas juntas vecinales lo manejaron muy a su antojo esto, aunque llegaron alguna gente de base y ahí plantearon que yo vaya a la cabeza del Distrito pero yo he rechazado y dije que puedo ir como segundo también, pero la decisión fue por consenso del Distrito. Pero como había representantes de base manifestaron nuestras necesidades y reivindicaciones del Distrito” (entrevista 1).

Bajo la propuesta de los que representaban al Barrio, lo importante era generar un espacio de participación de la bases en el Congreso, para que se pueda expresar las demandas vecinales y poder contar con representantes que expresen ese sentimiento y realicen una verdadera labor de fiscalizadores. De alguna manera, para estos actores, se pudo orientar en ese sentido, pues en este evento el barrio pudo concretar un espacio de representación que exprese esta tendencia.

En la actualidad, estos eventos, ya no están conformados por algunas bases, el congreso se realiza de forma mucho más cupular, básicamente los representantes de las OTBs son los que realizan el evento. Conforman una representación distrital que no cumple con la función de control social cuyos miembros casi siempre militan el partido del alcalde de turno. La alcaldía siempre ha estado interesada en contar con dirigentes que no ejerzan su función de fiscalizadores, porque muchas veces los intereses políticos de la Alcaldía han chocado con los intereses del Barrio. En ese sentido la Alcaldía lleva adelante una política clientelar con los dirigentes distritales

En la actualidad existe un paralelismo en la distrital, dado que se han generado disputas en torno a los intereses partidistas:

“Pone un presidente que este a fin a los intereses de la Alcaldía y como que ahora está el que era resabio de la Nueva Fuerza Republicana (Garvizu), que está en disputa con el MAS, están en pugnas y están pataleando e inclusive creando paralelos en el Distrito. Un sector que esta con Garvizu y otro sector que esta con el MÁS en ese pataleo están” (Salvatierra, entrevista, 2012).

La OTB actualmente, se relaciona de la misma forma con la distrital, apoyando en torno a las relaciones clientelares. Apoya a quien tiene más posibilidades de imponerse como representación, es decir quien tiene mayor relación con la Alcaldía.

El papel de articulador de la OTB B Petrolero en el proceso fundacional del distrito, no solo se limitó a conformar un espacio democrático de estructuración del distrito, sino que también articuló a los barrios en torno a la problemática concreta de los servicios básicos y sus demandas barriales, bajo la lógica de “exigir nuestros derechos” se articuló al distrito en torno a problemas concretos con la Alcaldía. Los servicios básicos como el agua, los empedrados, las canchitas múltiples y las unidades educativas fueron problemáticas que se gestaron y que la OTB articulaba para unificar las demandas con otros barrios, al mismo tiempo se fue gestando nuevos procesos de articulación con otras asociaciones vecinales como las juntas escolares y asociaciones juveniles.

Un ejemplo de este proceso es el de la problemática surgida en las Unidades educativas:

“En las Unidades Educativas había lo siguiente; a los padres de familia les pedían aportes para poder reponer un vidrio, para pagar el material de escritorio, para pagar un foco, reparación de muchas cosas. Pero como estaba como representante en el Distrito, tenía información básica, tuve que informar a la gente de las unidades educativas,(...) está en el presupuesto como ejecutado, ¿dónde llega esto?, ¿a quien llega esto?, ¿les llega a ustedes?, ¿quién es el responsable para pedir esto?, Me costó hacer fotocopiar para entregar a cada representante de curso de las Unidades Educativas rayando con resaltador lo que nos corresponde. Por tanto ‘no tenemos porque dar plata para que se realice y todavía no se hace bien’; eso tiene que dar la alcaldía, porque está aquí como ejecutado, sin embargo no lo ejecutaron. Entonces eso causo malestar absoluto en las Unidades Educativas, convocamos a los Técnicos de la Alcaldía vinieron y nos quisieron tratar mal de palabra, pero la gente reacciona y los voto a los funcionarios a empujones a carajazos, porque nosotros pagamos, ¡que ellos ganen!, ¡Gracias a nosotros están trabajando!, ¡ las veces que queramos se van a quedar!, ¡ si no dan respuesta se van a quedar, junto

con nosotros a resolver el problema!. Cuando la gente está bien informada reacciona de esa manera” (Salvatierra, entrevista, 2012).

Este proceso fue interrumpido por los operadores políticos de la Alcaldía que generaron tensiones y rupturas, desarticulando los espacios de lucha, para imponer espacio de articulación clientelares.

El modo de relacionarse con otras instituciones y o asociaciones, son básicamente esporádicas, limitadas a las acciones políticas de la Alcaldía, y de los intereses partidista, esto demuestra que la lógica de gestión impuesta por el Estado, sumado a los procesos clientelares a impuesto una forma de articulación cupular prebenda, funcionalizando espacios de gestión y control social, para obtener beneficios personales, diferente a la forma de articulación de lucha que se genera en momentos de confrontación con los intereses y demandas sociales.

Dinámica Asociativa

Durante el proceso de surgimiento y consolidación del Barrio en OTB la estructura organizativa era una estructura participativa, democrática cuya base, se centraba en la democracia directa. Los niveles de Jerarquía recaían en la Asamblea como máxima instancia de decisión, pasando por las asambleas de calle, los representantes de manzanos o segmentos de calles, y el directorio de la OTB. Esta estructura no se consolidó, formalmente en un Estatuto.

El estatuto reflejaba el modelo de la FEJUVE, que tenía un una guía para facilitar a las juntas vecinales, seguramente basados en las experiencias organizativas de su jurisdicción. Este modelo se basada en un estructura jerárquica en la que se reconocía formalmente a la asamblea de vecinos como la instancia de la toma de decisiones, pero le otorgaba atribuciones ilimitadas al Presidente de la Junta Vecinal.

Cuando el barrio cambio el rumbo de sus posiciones y sus relaciones con la Alcaldía, también se transformó las estructuras orgánicas. Adquirieron otras formas organizativas y nivel de jerarquía, pero también el nivel o grado de control de las bases fue decayendo y permitieron que fueran los dirigentes quienes tengan el poder de tomar decisiones sin consultar con las bases.

En la actualidad la OTB funciona de la Siguiete manera:

El directorio es la máximo representación de la OTB, concentra el poder de decisión de los aspectos fundamentales de la OTB, como por ejemplo: decide la priorización de obras del barrio de los recursos de Coparticipación, Una decisión que por norma y costumbre debe recaer en los vecinos que a través de la asamblea, instancia que debe deliberar el destino de los recursos para el barrio. En la práctica los mecanismos de

toma de decisiones en los que involucren a los vecinos no existen y estos recaen exclusivamente en la mesa directiva y particularmente en el presidente. Cada miembro de la mesa directiva tiene una función específica de acuerdo a su cartera. Pero es el presidente a quien se le atribuye la representación exclusiva frente a las organizaciones o instituciones. No se puede realizar ningún proyecto, ninguna acción si no está autorizada por el presidente.

El Directorio está Compuesto por:

- Presidente, tiene las atribuciones de representar al barrio ante las instancias y organizaciones naturales y jurídicas. Aprobar y priorizar las obras a realizarse con los recursos de la OTB
- Vicepresidente, es el colaborador del presidente y en caso de ausencia asume el cargo de presidente.
- Secretario de Relaciones y Conflictos, formalmente debe realizar y encargarse de realizar nuevas relaciones con instituciones, resolver los conflictos generados internamente como externamente. Pero en la práctica está limitado por la facultad del presidente.
- Secretario de hacienda, es el encargado de manejar los recursos que genera la OTB, como aportes, multas, etc.
- Secretario de actas, lleva las actas de las reuniones del barrio, y de las reuniones de la directiva.
- Secretario de cultura y deportes, encargado de realizar eventos culturales y deportivos, que los realiza esporádicamente y sin planificación.
- Vocales son personas que deben suplir cualquier caerte en caso de la ausencia de algún miembro de la directiva, pero que su papel se limita a ser un miembro para prever eventualidades de ausencias.

Los mecanismos formales de la Toma de decisión están estatuidos, pero en la práctica se ejerce mecanismos que están sujetos a la voluntad de la directiva, si existe un problema que requiere del apoyo vecinal para respaldar la acción de los representantes, entonces se recurre a la asamblea. Pero si no se necesita de la participación de las bases en la toma de decisiones que hacen a las necesidades del barrio, actúan sin consultar a los vecinos. Un ejemplo que ratifica lo dicho fue la cuestión del gas. “Como que esto reuniones, ahora, como acabo el tendido de red ya no llaman a asambleas. Esta cuestión del gas han utilizado para que puedan ser reelegidos, han manipulado para ser elegidos o sea que ellos utilizan las obras para su fines políticos”.

Esta dinámica de relación con las bases se estableció para que los representantes en realidad no tengan un control colectivo de sus acciones y tengan la libertad suficiente para representar al barrio según vean sus conveniencias personales. Por ejemplo si tienen que priorizar una obra como el asfaltado de una calle la realizara primero en sus calles y de esa forma van sacando provecho personal.

Además que esta forma de relacionarse con las bases, también les ha permitido establecer un forma de relacionarse con el Estado, diferente a cuando las bases participaban y decidían sobre los asuntos del barrio. Ahora se relacionan de forma prebendal, utilizan la representación del barrio para obtener algún benéfico de la Alcaldía, según nuestro entrevistado que dice: “según tengo información del presidente una de sus hijas está trabajando en la alcaldía y por eso tienen que trabajar con el MAS y por debajo con NFR” (Entrevista AR, 2012).

Por lo tanto los mecanismos que utilizan para realizar las demandas hacia el Estado están subordinados a los intereses impuestos por estas instituciones y bajo las vías institucionalizadas y formalistas, dejando de lado la acción de hecho. Un claro ejemplo fue la priorización de obras del Complejo petrolero, que está administrado por la alcaldía, pero que se utilizaron los recursos del barrio para que se mejore la infraestructura, sin embargo los beneficios que se obtengan de dicho complejo no van a parar a las arcas del barrio sino de la Alcaldía. Los mecanismos de la acción directa, la movilización, marchas, paros que se encontraron durante su proceso de consolidación, para reclamar, demandar, fueron excluidos como vía para demandar al Estado la atención a sus necesidades.

Mientras los representantes se ponen de acuerdo con la alcaldía, para definir las obras que se realizaran, existen otras demandas y necesidades de los habitantes sin resolver. Por ejemplo esta la necesidad de contar con alumbrado público en determinadas calles que no cuentan con este servicio, que sin embargo lo pagan, en sus facturas de consumo de luz, en las que automáticamente cobran el 10 % por el alumbrado a familias que no cuentan con este servicio. También se puso latente el aprovisionamiento del agua, ya que en la actualidad SEMAPA ha empezado a racionalizar el abastecimiento, recortando las horas del servicio.

Experiencia y memoria históricas

La memoria histórica del Barrio Petrolero está conformada por hechos que hacen a la temática de los servicios básicos, estas necesidades han llevado al barrio a que realice, organice y viva momentos transcendentales que cambien y determinen el rumbo de su proceso de constitución. En este análisis encontramos cinco momentos principales que

conforman la memoria colectiva del barrio, momento que catalizaron, acciones, necesidades, creaciones y proyectos de conformación del barrio.

La vista del presidente J. J. Torrez, un encuentro con el Estado

El barrio se fundó en medio de fundamentales carencia de los servicios básicos, la organización primaria, logro obtener una pileta pública de agua al cual todos los vecinos tenían que asistir para poder abastecerse del líquido elemento. En su primera década de creación el barrio se expandía lentamente sin ninguna planificación urbana, no se contaba con agua, ni alcantarillado y la atención del Estado a este barrio era escasa por no decir nula.

Un hecho que cambio esta situación fue la visita de Juan José Torrez al barrio, que realizo una inspección al barrio donde habitaban los trabajadores petroleros, para saber bajo qué condiciones estos desenvolvían su vida cotidiana.

“El barrio estaba todavía en sus inicios, pura tierra, habría muladares en el complejo petrolero, había un frontón que se estaba derrumbando, entre medio era muladar, la gente hacia sus necesidades biológicas en esto y había un monte de hierbas y montones de tierra, y sobre ese muladar entre Juan José Torres y vio y vi en las expresiones de la gente como la gente lo acogía, yo también un poco. Manifestaban la necesidad (...), la cuestión del agua, seguramente la gente reclamaba agua y él dijo ‘vamos hacer en las alturas de los cerros’, y dijo claramente que iban hacer tanques para que puedan bajar las aguas hacia nosotros mediante red a todos los domicilios, esa era una de las cuestiones que fue bastante bien sentida por la gente y eso creo que la gente supo calar hondo esa situación e incluso me levantó Juan José Torres y algunos chiquitos más y eso fue también lo que calo con alguna gente e inclusive a mi también porque siguió con la cuestión todavía fresca y sigue en mi retina, y así muy rápidamente vino dio la vuelta, no escatimo esfuerzo en entrar al muladar y dijo como puede ser esto como pueden vivir así, y la gente veía espantada como una autoridad entraba al muladar sin reparo. Pero no sabemos por qué razón vino seguramente porque esa vez había bastante gente de los ex trabajadores y trabajadores de Yacimientos que vivían en zona porque les venían a recoger a los trabajadores” (entrevista1).

El propósito de la visita fue conseguir apoyo de los trabajadores en YPF. Pese a la algarabía de los vecinos, la demanda fundamental fue el agua potable, Torres se comprometió a crear tanques de agua en los cerros, para tal acometido. Dicho compromiso se hizo realidad, posteriormente se construyo los tanques y distribuye agua a algunos segmentos de calles según nuestro entrevistado.

El agua potable, una demanda que se otorga a “medias”

Cuando el Barrio se constituyó en una OTB, todavía existían lugares del barrio que no contaban con un servicio de agua potable adecuado, el agua llegaba por red, de SEMAPA una vez por semana, y con sedimentos de tierra y lodo. Sin embargo cada mes la empresa remitía facturas elevadas por un servicio casi inexistente. Entonces se organizaron los vecinos para reclamar un mejor servicio y una solución adecuada a su problema. Recurrieron a la acción directa, conformaron una asamblea, para exigir la presencia de las autoridades competentes que se comprometiera a dar una solución, que pasaba por proveerle del servicio de forma adecuada y que no se les cobrara más por el agua con sedimento que se les proporcionaba cada semana. De esta manera la población recuerda como a través de esta acción se logró generar una respuesta a su demanda.

“A SEMAPA fuimos como 4 o 5 micros, íbamos para que nos de agua, para que nos escuche nuestra demanda. Esa vez había un poco de unidad porque solo una calle tenía agua, pero cada 5 días se les daba agua sábados y miércoles les daban un poco más y después en madrugada media horita al sector de abajo, pero en el sector de arriba no les dan. Por lo que mostramos unidad, a la gente le hicimos reflexionar y como que juntábamos unos 5 micros, aquella vez le dije que yo iba cuestionar de tal forma y ellos deberían apoyar con dureza, entonces vamos a entrar va ver una comisión que debía entrar para pedir eso, pero la reunión debería ser a puertas abiertas y la gente exigía que sea a puertas abiertas delante de los vecinos tenían que dar la respuesta, Entonces el gerente tuvo que atendernos pero la reunión se realizó en el mismo barrio” (entrevista 3).

Lo importante de dicho momento fue que por primera vez el Gerente de SEMAPA, estaba en el barrio obligado por los vecinos que lo trasladaron desde su oficina hasta la zona, allí no le quedó otra cosa que comprometerse a dar agua en turriles dos o tres veces por semana.

La demanda de alcantarillado.

Una lección de que el diálogo no sirve con la Alcaldía

Posterior a esta movilización, se organizó una nueva acción, contra la Alcaldía, la demanda se centraba en renovar o cambiar la red de alcantarillado antigua, que ya había cumplido su ciclo de utilidad. Los vecinos se encontraban molestos porque el alcantarillado se reventaba y las aguas servidas anegaban las calles, convirtiéndose en focos de infección. Acudían a la Alcaldía con solicitudes escritas para pedir que solucionen el problema de forma general. Sin embargo la Alcaldía solo se limitaba a realizar la limpieza de la red de un sector, para que más tarde en otra calle se vuelva a rebalsar la red. Por

lo tanto los vecinos decidieron organizarse para tomar una medida de presión y realizaron un Bloqueo a la altura de la 6 de agosto una calle estratégica de acceso al mercado central. Bloqueo que fue memorable dado que allí la Alcaldía se presentó, para reprimir la movilización y enfrentarse con los vecinos. El hecho quedó agravado en la memoria del barrio pues queda como antecedente que una lucha importante para conseguir el alcantarillado, que desató todo un enfrentamiento con la Alcaldía:

“(...) cuando nosotros estuvimos, antes de que se haga el primer asfalto rígido, (...), logramos que el Complejo tenga algunas mejoras, como el asfalto rígido al perímetro del complejo petrolero. Pero en esa pelea antes de que se haga el asfalto rígido había los taponamientos del alcantarillado ya habían cumplido su ciclo de vida; resolvíamos un trecho y al otro día otro trecho se reventaba nuevamente. Entonces las calles estaban mal olientes con todo lo que salía de las alcantarillas, fue una preocupación bastante fuerte de todos nosotros y en calidad de vicepresidente nos movilizamos para presionar a la alcaldía para que resuelva de una vez antes que se coloque el asfalto rígido, no podíamos permitir aceptar que esto pueda demorarse más. Si no se resolvía los servicios básicos (alcantarillado, agua, otros servicios mas), y no se podía hacer nada. Nosotros nos teníamos que movilizar intensamente día y noche para poder conseguir estas atenciones de la Alcaldía. (...) Por lo que convocamos a la gente, estaba muy preocupada por estas cuestiones y se sumaban. Reuníamos bastante gente y bloqueábamos la calle 6 de Agosto y por el puente los Andes. Como era un tráfico obligado para todo vehículo, desde la mañana hasta horas de la tarde, a las 3 o 4 de la tarde los técnicos de la alcaldía venían con policías y nos gasificaron de forma feroz mucha gente se escapo a los cerros” (Entrevista 1, 2012).

Con esta experiencia los vecinos aprehendieron cual era la forma de las relaciones que se establecía con la Alcaldía a la hora de lograr la atención a sus demandas. Relaciones que generaban confrontación de intereses.

Iniciando la Guerra del Agua, para defender un derecho

El barrio fue uno de los pioneros en la organización de la Guerra de Agua, desde la movilización y problema irresuelto con SEMAPA para lograr mejorar el abastecimiento de agua, ellos fueron buscando muchas alternativas y asociaciones con organizaciones que puedan convertirse en sus aliados. De esa forma el barrio logro participar, organizar y asociar a una red de organizaciones que estaban teniendo un problema similar o la necesidad de contar con el líquido elemento.

“... es aquí donde se ha gestado la cuestión de la Guerra del Agua, porque fuimos los primeros en preocuparnos en la cuestión del agua, ya que no teníamos agua en un sector del barrio petrolero. Esto motivo a que tengamos que movilizarnos por todas las instancias de la Alcaldía. En todo esto prácticamente nos informamos de la Ley de Agua y a partir de eso momento tuvimos que informar a la gente permanentemente, reuniéndonos con Maldonado, (...) para que dé información sobre estos problemas de los barrios. (...). Nos pusimos a trabajar y ahí nos dio la información el Ing. Maldonado de que se venía una ley de aguas esto significaba que se iba a privatizar toda fuente de agua en cualquier parte ya sean pozos, fuentes de aguas naturales y se iban a dar en concesión SEMAPA a una empresa privada para que puedan hacer su negociado, significaba subir las tarifas. Nos movilizamos a todas las instancias nosotros como junta vecinal pudimos comunicar a donde podíamos, pudimos comunicar también a otras organizaciones que no eran juntas vecinales, algunas organizaciones manifestamos inclusive al Magisterio” (entrevista 4, 2012).

En dicha movilización se interpelló, a los vecinos no solo por la demanda de acceder a un servicio de calidad por parte de SEMAPA sino que al mismo tiempo significaba luchar contra toda una lógica mercantilista del servicio. El barrio que se enfrentó a SEMAPA para lograr un abastecimiento adecuado, ahora veía que la privatización del recurso no significaría una mejora, sino un atentado a su economía.

En ese escenario se convirtió en un organizador, articulador y referente de acción para ayudar en el entre tejido social que se conformó durante la organización de la Guerra del Agua en Cochabamba.

Experiencia y lucha en la Guerra del Agua

La participación del Barrio en la Guerra del Agua tiene su génesis en la necesidad de los vecinos de poder contar con agua potable por parte de un sector de los vecinos que contaban con el servicio por intermedio de SEMAPA, pero que sin embargo este servicio era muy deficiente, dado que los vecinos apenas podían contar con el líquido elemento una vez por semana, pero el aprovisionamiento del agua no era potable, dado que tenía que recibir agua con sedimentos de lodo, así cuenta un vecino:

“...había demandas del agua, de un segmento del barrio, (de aquí arriba no tenía agua) si tenía agua de SEMAPA era rara vez a la semana o algunas una vez a la semana y les daban con sedimentos y turbio, no les daban buena agua y ni siquiera llenaban un turril. Y las facturas del agua llegaban con 34 hasta 50 Bs -si mal no me acuerdo aquellas veces-. La gente no pagaba a SEMA-

PA, traían todas las facturas, –adendus se llamaban esas veces– 4 a 5 años estaban sin pagos y hacíamos las gestiones en SEMAPA (.....) explicamos la situación y no daban una respuesta favorable para que la gente tenga por lo menos 2 o 3 turriles, si es que tocaba un día a la semana (.....). Entonces se decidió que la gente no pague; ¡cómo van a pagar si no les dan agua!, les dan agua de mala calidad y ni siquiera la cantidad suficiente (un turril, medio turril). Entonces el malestar de la gente creció” (Salvatierra, entrevista, 2012).

Por lo tanto los vecinos decidieron reclamar ante todos los organismos posibles, utilizaron todos los mecanismos institucionales para ser escuchados, pero los procedimientos institucionales que realizan los vecinos en SEMAPA, el Órgano Ejecutivo y el Concejo Municipal, fueron inútiles, dado que el problema continuaba y nadie respondía a esta problemática.

Ante la negativa de atención a su demanda, los vecinos estaban dispuestos a acudir ante otras instancias alternativas que puedan canalizar su demanda ante las instancias pertinentes municipales, o supra municipales. Por esa vía se llegó a establecerse asociaciones y relaciones con el Diputado Maldonado, quien públicamente realizaba críticas al proceso de Concesión a Aguas del Tunari. Referencia que sirvió para tratar de encontrar alguna solución, pues se creía que en su condición de representante departamental ante la cámara de diputados éste podría escuchar su reclamo y ayudarles a realizar algunas acciones: “me encontré con Maldonado quien me recibe con mucha satisfacción y me manifiesta lo que se venía en ese ínterin, la Ley de Aguas, (nos dio un pantallazo) y explicó que: ‘sobre lo que no tenemos agua nos van a subir las tarifas con la Ley de Aguas: van a expropiar los pozos privados y van a pagar por ello’ ” (Vecino de Villa Felicidad).

De manera que aquel encuentro se transformó en un espacio de transmisión de información sobre la privatización del agua y el nuevo papel que tendría SEMAPA en manos de la transnacional Aguas del Tunari. Advertidos por la mercantilización del recurso, empezaron a generar espacios de articulación con otras organizaciones y ampliar y socializar la información sobre las verdaderas intenciones de Aguas del Tunari y la inminente subida del precio del agua.

Entonces comenzaron participando en reuniones de información con sectores organizaciones y colectivos bajo la orientación del Diputado Maldonado. Luego las reuniones empezaron a convertirse en espacios ya no solo de información sino de acciones, pues tomaban acuerdos para realizar actividades que puedan visibilizar su posición frente a la concesión del agua. Realizaban actividades como pronunciamiento públicos en la presa escrita y oral, organizaban talleres y seminarios en los distintos barrios para informar a las bases. Así se fue forjando un instrumento del Comité de defensa de agua

y la economía familiar, que iba configurando la estructura organizativa de las organizaciones urbanas que se convocaban para tomar por su cuenta la tarea de defender sus intereses.

Enmarcada en las acciones del naciente órgano, el barrio Petrolero, realizaba diversas actividades que profundice ese proceso de asociación, articulación y difusión en contra la privatización. En primera instancia realizaba asambleas por segmentos de calles para informar a los vecinos acerca de la naturaleza de la concesión. Pero paralelamente a la actividad de concientizar al interior del barrio se toma la tarea de informar a todo el distrito utilizando los espacios vecinales como las reuniones distritales, en donde se lograba además de informar articular nuevos aliados vecinales de esa manera se fue conformando un bloque asociativo de agrupaciones, organizaciones, colectivos urbanos y juntas vecinales que se oponían a la mercantilización del servicio básico. En esta etapa el barrio jugó un papel importante de articulador con otras organizaciones vecinales, utilizando espacio de convergencia de las OTBs del Distrito, se trato de informar e incorporar al Distrito sobre la necesidad de organizarse para defender el agua. De esa forma contribuyó en la consolidación del bloque articulador en la Guerra del Agua, dicho bloque fue un actor principal en la conformación de la Coordinadora del Agua, dado que había logrado articular y organizar a los sectores urbanos.

Cuando se evidenció que la concesión de Aguas del Tunari elevaría las facturas de agua, se consolidó la cohesión en los vecinos del lugar, y se organizo la lucha y la movilización que empezó la Guerra del Agua.

Como parte integrante de la Coordinadora, el barrio se organizó para realizar y ejecutar las acciones determinadas por dicha instancia de representación regional. Los mecanismos de organización, para tomar las acciones directas en el conflicto, fueron las asambleas generales, las reuniones de representantes de calle, las que permiten tomar posiciones consensuadas “nos hemos tenido que organizar en asambleas generales, después las perifoneadas, después las reuniones de calles, de manzanos, de intersecciones de calles, esa fue nuestra estrategia para informar de mejor manera” (Salvatierra, entrevista, 2012), el papel de los dirigentes fue determinante a la hora de comunicar a sus bases los comunicados que disponía la Coordinadora del Agua y las decisiones que tomaba el barrio.

Las acciones realizadas fueron los bloqueos de caminos y avenidas contundentes en el barrio, cada segmento de calle estaba bloqueada por los propios vecinos, los bloqueos se organizaban con por calles y manzanos. También realizaban marchas que partían desde un punto de concentración fijado por el distrito, para asistir a las marchas los vecinos se turnaban una parte se quedaba bloqueando y otra asistía a la marchas y cabildos.

Para que se organice la movilización constantemente se realizan asambleas de manzanos, donde se informaba de los detalles del conflicto, de los avances y retrocesos, de las negociaciones y las instrucciones de la Coordinadora. Esta forma de organización, sumada a la creciente tensión política, mantuvo cohesionado el accionar del barrio: “en los bloqueos nos hemos tenido que organizar en asambleas generales, después las perifoneadas, después las reuniones de calles, de manzanos, de intersecciones de calles, esa fue nuestra estrategia para informar de mejor manera” (Salvatierra, entrevista, 2012).

Durante el conflicto, el Barrio encontró como oponentes principales al Estado, quien a través de sus instituciones, la Prefectura, la Alcaldía, el Parlamento, el Poder ejecutivo, estaban privando de un derecho a la población. A demás el Estado se confronto a la población utilizando las fuerzas represivas, como la policía, el ejército para hacer respetar su autoridad.

Los vecinos se organizaron en contra el Estado y todos sus aparatos, para ello se articulo un poderoso órgano popular mediante el cual el barrio se encontraba representado, dado que expresaba sus necesidades. La alianza campo ciudad, determino el curso del conflicto, dado que esta unidad termino por derrotar la privatización del agua.

La Guerra del Agua no fue en vano

La lección más importante que deja la movilización, fue el hecho que la acción colectiva y organizada desde el barrio logro evitar la privatización de los servicios básicos, aunque algunos vecinos manifiestan que la lucha fue en vano, sin embargo para nuestro entrevistado se logro:

“... que no se Privatice SEMAPA (...) hemos hecho de que se nos respete nuestros derechos: de tener un pozo, de que no suban las tarifas y como que otros no valoran (...) esto es mentira hemos hecho respetar nuestros derechos, pero que SEMAPA está mal administrada eso si es cierto, algunos dicen que la Guerra del Agua no ha servido para nada, eso es falso porque sino ahora estuviéramos en peores condiciones, nuestros servicios básicos casi totalmente privatizadas. Por lo menos ahora tenemos la opción de seguir reclamando por una mejor administración a los barrios (...)”
(Salvatierra, entrevista, 2012).

El papel de los dirigentes vecinales juega un papel importante a la hora de democratizar la información sobre los problemas vecinales. En la actualidad la Directiva no socializa los problemas de Barrio, la asamblea fue perdiendo su espacio democrático de control y fiscalización, porque solo las convocan de forma esporádica.

El Pavimento. Esa demanda que nos debilitó

Desde la creación de la OTB, el barrio necesitó estructurar una organización que acompañe las demandas barriales. Esta estructura se caracterizaba por mantener como pilar fundamental la democracia directa, es decir garantizar la más amplia participación del vecino en la toma de decisiones. La asamblea barrial, las asambleas de manzanos se constituían en poder vecinal para controlar la labor de la dirigencia. Por otro lado este espacio de deliberación al mismo tiempo era espacio de organización y movilización colectiva de los vecinos, cuyo único poder que tenía para obtener respuestas frente al Estado era la acción directa.

Esta estructura organizativa sufrió una lamentable fractura producto de la división interna que se generó, por las discrepancias que surgieron ante la oferta de la Alcaldía de pavimentar unas calles bajo la condición de que los vecinos aporten bolsas de cementos. Los dirigentes y bases se vieron en un verdadero dilema: “la gente tenía el temor que no se lo iban a asfaltar su calle y empezaron a dividirse y a darnos la espalda a nosotros, porque se dividió en dos y ese fue el chantaje que nos imponían (lo de entregar las bolsas de cementos) nosotros explicamos” (Salvatierra, entrevista, 2012).

En esta división se rebelaba una contradicción entre dos orientaciones: exigir que los servicios básicos y la cosa pública estén a cargo del Estado instancia que tiene que resolver los problemas de los habitantes de una zona, o permitir que el Estado no se responsabilice de garantizar que los habitantes puedan acceder a los servicios básicos y que estos servicios estén gestionados y financiados por los propios vecinos es decir facilitar la aplicación de la política neoliberal reducir el gasto público del Estado y privatizar de los servicios básicos.

Para el barrio petrolero y sus dirigentes es el Estado quien tiene la obligación de garantizar los derechos sociales y el acceso a los servicios públicos. En esa orientación se fueron configurando los argumentos que se vertían con toda claridad al oponerse a la política de la Alcaldía:

“Nosotros estamos pidiendo lo que nos corresponde, eso es un derecho porque pagamos impuestos y eso es lo que estamos pidiendo que se invierta en nuestro barrio y eso es lo que tenemos que entender señores vecinos ‘hasta cuándo vamos estar postergados’ o sea que quieren que nosotros demos bolsas de cemento, vamos a pagar por lo que van hacer el asfalto rígido y nos van a subir los impuestos” (entrevista2)

Sin embargo la necesidad inmediata se transformó en desesperación de algunos vecinos que aceptaron la condición, fracturando la unidad del barrio. No solo se fracturó la unidad sino la memoria colectiva y la trayectoria que el barrio había consolidado

desde su consolidación como OTB. Esta ruptura sirvió para cambiar la orientación del Barrio sus relaciones con el Estado y su forma organizativa.

Los vecinos que se sentían “afectados”, por la posición del barrio y sus dirigentes, ya no se sentían representados. Empezaron a organizar la desestabilización de la Organización formal. Crearon una directiva paralela sin ninguna legitimación, pero que fue el instrumento que perforó la estructura organizativa consolidada. La conformación de un directorio apócrifo, fue legalizada por la Alcaldía que veía con buenos ojos la ruptura de una organización que se había contrapuesto a la orientación de su gestión. Poco a poco la fue derrumbando la antigua estructura organizativa porque a partir de ese momento ya no funciono la organización vecinal de los representantes de manzanos, de calles, segmentos. La representación quedo hegemonizada en un sector de vecinos que cuidaban sus intereses particulares, antes que los colectivos.

La ruptura interna, con la orientación que guiaba su accionar y cohesionada su lucha, cambio el rumbo de la organización actual, su relación con el Estado y por lo tanto su concepción de la publico y el papel del Estado.



Bibliografía

- ANTEQUERA, Nelson (2007). Territorios Urbano: Diversidad cultural dinámica socio económica y procesos de crecimiento urbano en la zona sur de Cochabamba. La Paz: Plural Editores
- CEDIB (s/f). “Guía del Sur”. Datos de la Zona Sur, s/f de publicación
- CRABTREE, John (2005). “La Guerra del Agua en Cochabamba”. Perfiles de la protesta: y movimientos sociales en Bolivia. Pg. 1-16. La Paz: Producción EDUBOL
- CRESCO, Carlos y Fernández, Omar (2001). Los Campesinos regantes de Cochabamba en la Guerra del Agua: Una experiencia de presión social y negociación. Disponible en <http://www.ibcperu.org/doc/isis/5486.pdf>, visitado en Diciembre 09 de 2011
- DE LA FUENTE, Manuel (2000). “La “guerra” por el Agua en Cochabamba: Crónica de una dolorosa victoria”. Cuadernos del PROMEC
- DOMÍNGUEZ, Carlos (2007). “Discursos e identidades en la “Guerra del Agua”: explicaciones alternativas y perspectivas futuras”. Después de las guerras del agua.
- CRESCO, Carlos y Spronk, Carlos: Pg. 211-237. La Paz: Plural Editores
- GUTIÉRREZ Raquel, García Linera Álvaro y Tapia Luis, (2000). “Forma Multitud de la política de las necesidades vitales”. El retorno de la Bolivia plebleya. pg.145. La Paz: Editorial Muela del Diablo
- GUTIÉRREZ, Raquel (2008). Los ritmos del pachakuti. Bolivia: Ediciones Yachaywasi.
- KRUSE, Tomas (s/f). “Capítulo IV: La “Guerra del Agua” en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos convergencias nuevas”. Disponible en <http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/libros/nvosactores/capituloiv.pdf>, visitado en Diciembre 15 de 2011.
- MALDONADO, Gonzalo (2004). H2O: La Guerra del Agua. Testimonio desde la línea de fuego. La Paz, Fonfo Editorial de los Diputados.
- PERREAULT, Thomas (2007). “De la Guerra del agua” a la “guerra del gas”: gobernabilidad de recursos, neoliberalismo y protesta popular en Bolivia. Después de las guerras del agua. Crespo, Carlos y Spronk, Carlos: Pg. 147-182. La Paz: Plural Editores
- SISTEMATICA SRL (2009). “Diagnostico de las organizaciones sociales de productores de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba”. Diagnostico a las organizaciones sociales de productores de hoja de coca de los departamentos de Cochabamba y La Paz. Disponible en www.controlsocial.bo/...2/.../004_DIAGNOSTICO_OS_CBBA.pdf, visitado en Diciembre 19 de 2011

SOLARES Humberto y Vargas Humberto (1997). Proceso urbano y organizaciones vecinales en el municipio de Cochabamba. Disponible en www.utoronto.ca/urban/pdf/juntas_cbes.pdf, visitado en Enero 12 de 2012.

TORRICO, Escarley (2005). La participación popular en Bolivia: A pesar de ley. Cochabamba: Ediciones CEDIB

ZAMBRANA, Erika (2011). Resistencia civil y Estado constitucional. Disponible en www.univalle.edu/publicaciones/compas_emp/.../010compas.pdf, visitado en Enero 06 de 2012.

DOCUMENTOS:

- Decreto supremo N° 24716, 22 de Julio de 1997.
- Decreto supremo N° 25133, 21 de Agosto de 1998.
- Gente (2000). “La Lucha del Agua no es solo de la ciudad”. Local: Abril 04
- La Razón (2000). “Víctor Hugo Daza Fue enterrado Como mártir de la lucha por el agua”. Nacional: Abril 10
- Ley N° 2029, 28 de octubre de 1999.
- Los Tiempos (2000). “Comité Cívico no busca anular el contrato, sino modificarlo”, Local: Enero 2
- Los Tiempos (2000). “El gobierno revisara el tarifazo”, Local: Enero 14
- Los Tiempos (2000). “No más revisión, plantean anular el contrato con Aguas del Tunari” Local: Febrero 21
- Los Tiempos (2000). “Cuestionan la Validez de la Consulta popular”, Local: Marzo 27
- Los Tiempos (2000). “Forman 14 comités para defender el agua”. Enero 23
- Los Tiempos (2012).” Villa Felicidad, OTB que prioriza la cultura para sus habitantes”. Local: Febrero.
- Opinión (2000). “Advierten que Cochabamba podrían quedar sin agua 10 años”. Local: Abril 05
- Opinión (2000). “Bloqueo indefinido paraliza actividades públicas y privadas”, Local: Abril 5
- Opinión (2000).”Un muerte, 28 heridos y 17 confinados”, Local: abril 09
- Opinión (2000). “Cuatro grupos vigilan la Plaza 14 de Septiembre”. Local: Abril 10

ENTREVISTAS:

- Entrevista 1. Dirigente en la guerra del Agua, adulto, 11 – 18 de Enero de 2012
- Entrevista 2 Dirigente de barrio Villa Felicidad, adulto fecha de entrevista. 15.12.11
- Entrevista 3. Antigua residente Villa Felicidad, adulta, Fecha 19/10/11
- Entrevista 4. Residente Villa Felicidad, joven, Fecha 14/11/11

Anexos

ANEXO 1

GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DECRETO SUPREMO Nº 25133
HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Proyecto Múltiple Misicuni para la producción de agua potable, agua de riego y generación de electricidad, está localizado en el departamento de Cochabamba y fue declarado de prioridad y urgencia nacional y de necesidad y utilidad pública, mediante ley 559;

Que el Supremo Gobierno ha definido, como prioridad, la ejecución del Proyecto Múltiple Misicuni, a fin de dotar de agua potable y de riego así como de energía eléctrica a la ciudad de Cochabamba;

Que la empresa Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) atiende los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba;

Que el sistema de tratamiento de agua potable, distribución y tratamiento de efluentes, así como el desarrollo del Proyecto Múltiple Misicuni debe ejecutarse con la participación del sector privado;

Que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que la competencia municipal, en el ámbito de su jurisdicción y para el cumplimiento de sus fines, comprende distintas materias que deben ser compatibilizadas y coordinadas bajo normas e interés de carácter regional y nacional;

Que por resolución del directorio de SEMAPA Nº 013 de 8 de julio de 1998, se autoriza la participación del sector privado en el servicio de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Cochabamba a través de la operación de concesión de SEMAPA, autorizando, además, la disposición de los bienes de SEMAPA mediante el arrendamiento y la transferencia de los mismos, así como también el descuento automático del canon de arrendamiento de los bienes en función del IRMS referencial (ingresos por venta de agua de riego y venta de agua potable a municipios secundarios) calculado de acuerdo a la resolución del Consejo Nacional de Política Económica;

Que mediante Ordenanza Municipal Nº 2162/98 de 9 de julio de 1998, la Municipalidad de Cochabamba homologa la resolución del directorio de SEMAPA Nº 013 de 8 de julio de 1998, autoriza el proceso de participación privada en la provisión de agua potable y alcantarillado a través de la modalidad de concesión de dichos servicios a favor de operadores privados, el arrendamiento de sus bienes así como la transferencia de activos y pasivos de SEMAPA y la utilización de bienes públicos con destino exclusivo al objeto de la concesión, entre otros;

Que mediante resolución del Directorio de la empresa MISICUNI Nº 005/98 de 4 de junio de 1998, se autoriza la concesión del Proyecto Múltiple Misicuni en favor de una persona jurídica de derecho privado mediante licitación pública nacional e internacional, el alquiler del Túnel Principal del Proyecto Múltiple Misicuni, cesión de garantías y derechos de inversionista adjudicado y constitución de servidumbres voluntarias sobre predios de propiedad de la empresa;

(Continúa en la siguiente página...)

(...viene de la anterior página)

Que el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión tiene, entre sus funciones, el formular y ejecutar políticas para captar inversiones privadas nacionales y extranjeras, así como ejecutar las actividades correspondientes a los procesos de privatización y capitalización de las empresas del sector público;

Que la ley 1600 de 28 de octubre de 1994 (LEY SIRESE), dispone que las concesiones de servicios públicos se otorgarán a nombre del Estado por el respectivo Superintendente Sectorial, de acuerdo a las normas sectoriales y demás disposiciones legales en vigencia. Asimismo, dispone que las concesiones, licencias, autorizaciones y registros relacionados a dos o más sectores regulados por las normas legales sectoriales, serán otorgadas en forma conjunta por los Superintendentes Sectoriales que tengan competencia;

Que el Reglamento de Dominio y Aprovechamiento de Aguas aprobado mediante decreto de 8 de septiembre de 1897 y elevado a rango de ley mediante Ley de 28 de noviembre de 1906, establece que la concesión de aprovechamiento de aguas públicas se otorgará por el gobierno, a nombre del Estado, con prioridad para el abastecimiento de agua potable a las poblaciones;

Que el decreto supremo 24716 de 22 de julio de 1997 (Reglamento de la Organización Institucional y de las Concesiones del Sector Aguas - Reglamento de Uso de Bienes de Dominio Público y de Servidumbres Para Servicios de Aguas), dispone en su artículo 7, inciso i, entre las atribuciones específicas de la Superintendencia de Aguas, otorgar, modificar y renovar las concesiones de servicio público, así como de aprovechamiento de aguas públicas, autorizaciones y registros, y disponer la caducidad o revocatoria de los mismos, de acuerdo a la Ley SIRESE, la Ley de Aguas y las demás normas legales del Sector Aguas y sus reglamentos;

Que el artículo 18 numeral 2 literal a) del decreto supremo 24716, establece que la Superintendencia de Aguas, otorgará las concesiones de servicios públicos y de aprovechamiento de aguas mediante el procedimiento de licitación pública de las concesiones de servicios públicos y/o de aprovechamiento de aguas, relacionadas a proyectos identificados y estudiados por el Estado;

Que la Ley de Electricidad 1604 de 21 de diciembre de 1994, establece en su artículo 26, numeral 2c que, mediante proceso de licitación pública, otorgará Licencias cuando se trate de proyectos estudiados e identificados por el Estado y que el período de exclusividad dispuesto hasta el 31 de diciembre de 1999 puede ser modificado por el Estado cuando se demuestre que la demanda de electricidad no esté adecuadamente satisfecha;

Que mediante nota SE-016-MY 03/98 de 5 de enero de 1998, la Superintendencia de Electricidad ha presentado al Ministerio de Desarrollo Económico el balance de potencia de electricidad procesado por el Comité Nacional de Despacho de Carga y el organismo regulador;

Que el Estado a través de sus órganos competentes ha identificado y estudiado el Proyecto Múltiple Misicuni para dotar de agua potable y riego a la ciudad de Cochabamba y generar electricidad para el Sistema Interconectado Nacional, proyecto que debe ser licitado en forma conjunta con el servicio de agua potable y alcantarillado a cargo de SEMAPA, por las instituciones competentes del Estado, en el marco de las normas sectoriales y otras aplicables;

Que mediante resolución de 23 de abril de 1998, el Consejo Nacional de Política Económica CONAPE aprobó la estrategia para la concesión de Misicuni y SEMAPA;

Que el Gobierno Nacional debe velar porque los recursos naturales sean usados teniendo en cuenta su aprovechamiento múltiple, racional, integral y sostenible precautelando los intereses de la sociedad;

Que es necesario adecuar y complementar las disposiciones legales relativas a la concesión privada del proyecto Múltiple Misicuni y la prestación de los servicios públicos prestados por SEMAPA;

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se autoriza la participación del sector privado en la prestación del servicio público de agua potable y alcantarilla para la ciudad de Cochabamba y en el Proyecto Múltiple Misicuni.

ARTICULO 2.- Se homologa la resolución 005/98 de 5 de junio de 1998 del Directorio de la Empresa Misicuni, que autoriza la disposición de los bienes muebles e inmuebles afectados a la concesión del Proyecto Múltiple Misicuni.

(Continúa en la siguiente página...)

(...viene de la anterior página)

ARTICULO 3.- El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y las Superintendencias de Agua y Electricidad, llevarán a cabo la licitación pública nacional e internacional para la participación del sector privado en la prestación referida en el artículo primero, conforme las previsiones legales para proyectos identificados y estudiados por el Estado.

ARTICULO 4.- Se dispone la modificación de la limitación temporal a la otorgación de Licencias de Generación, para otorgar dichas Licencias, única y exclusivamente para el componente de generación de electricidad del proyecto Múltiple Misicuni, en favor del proponente que resultase adjudicado en el proceso de licitación pública nacional e internacional referido en el artículo anterior.

ARTICULO 5.- Para la licitación referida en el artículo tercero del presente decreto, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y las Superintendencias de Agua y Electricidad establecerán una Comisión Calificadora, que tendrá a su cargo la recepción, apertura, evaluación y calificación de las propuestas. Dicha Comisión estará presidida por el Ministro de Comercio Exterior e Inversión y conformada además por el Viceministro de Inversión y Privatización que actuará como Secretario, el Director Ejecutivo de la Unidad de Reordenamiento, un representante de la Superintendencia de Aguas, un representante de la Superintendencia de Electricidad y por lo menos dos vocales.

ARTICULO 6.- Como resultado de la licitación pública, la Comisión mencionada en el artículo anterior, deberá emitir un informe de recomendación al Presidente de la República en Consejo de Ministros y a las Superintendencias de Aguas y Electricidad, quienes efectuarán la adjudicación simultáneamente mediante decreto supremo y resoluciones administrativas correspondientes.

Las Superintendencias de Aguas y de Electricidad otorgarán las concesiones y licencia mediante resoluciones administrativas de acuerdo a sus competencias y a nombre del Estado, de conformidad con el artículo 11 de la Ley SIRESE, aprobando los contratos a ser suscritos entre SEMAPA, MISICUNI y el concesionario.

ARTICULO 7.- Los procedimientos de la licitación pública que no estén previstos en el presente decreto supremo, se sujetarán a lo que establezca el pliego de condiciones que se emita para el efecto, que deberá incluir las previsiones para declarar desiertas, número mínimo de proponentes, subsanados de documentos, negociación de las ofertas, régimen de impugnaciones y otros que sean inherentes.

Los aspectos que no se encuentren reglamentados en el presente decreto supremo ni en el pliego de condiciones, se sujetarán a lo previsto en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Sector Público.

ARTICULO 8.- Se abroga el decreto supremo 24634 de 27 de mayo de 1997. Se deroga todas las disposiciones legales contrarias al presente decreto supremo.

Los señores Ministros de Estado en los despachos de Comercio Exterior e Inversión, de Vivienda y Servicios Básicos y Desarrollo Económico, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho años.

FDO. HUGO BANZER SUAREZ, Fernando Messmer Trigo, MINISTRO INTERINO DE RR. EE. Y CULTO, Carlos Iturralde Ballivián, Guido Nayar Parada, Fernando Kieffer Guzmán, Herbert Müller Costas, Ana María Cortéz de Soriano, Jorge Pacheco Franco, Tito Hoz de Vila Quiroga, Tonchy Marinkovic Uzqueda, Leopoldo López Cossio, Oswaldo Antezana Vaca Diez, Erick Reyes Villa Bacigalupi, Jorge Crespo Velasco, Amparo Ballivián Valdés.

ANEXO 2

“CONVENIO POR COCHABAMBA”

1°.- Desarrollar los esfuerzos necesarios para la ejecución efectiva del proyecto múltiple Misicuni como objetivo de desarrollo regional.

2°.- Continuar con las negociaciones para modificar la estructura tarifaria entre el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y empresa Aguas del Tunari para compatibilizar tal sistema con las posibilidades económicas de la población.

3°.- Se continuará cobrando la tarifa por el consumo de agua potable y alcantarillado conforme al régimen tarifario vigente a octubre de 1999, hasta que se concluya el proceso de negociaciones de tarifas.

4°.- La brigada parlamentaria conjuntamente las organizaciones de la sociedad civil y representantes de los ministerios correspondientes, revisarán por tiempo y materia la Ley 2029 para que en

el plazo establecido en el convenio del 13 de enero se presente a consideración del parlamento Nacional, respetando el artículo 171 de la CPE, y se otorgue la seguridad jurídica de las cooperativas, comités y asociaciones del área urbana como rural.

5°.- El contrato suscrito con Aguas del Tunari debe ser revisado técnica, financiera y jurídicamente, conforme a la CPE y la Ley del Sirese, a fin de garantizar la ejecución del proyecto múltiple Misicuni, tomando en cuenta las necesidades y posibilidades de la población, así como las condiciones que se requieren para la participación de inversionistas y empresarios en el desarrollo de la región conformando para ello una comisión técnica de parte del gobierno, la sociedad civil y el consorcio.

6°.- Repliegue inmediato y simultáneo de las fuerzas policiales

y militares a sus cuarteles y de las organizaciones sociales que se encuentran realizando manifestaciones y bloqueos a sus lugares de origen.

7°.- Liberación inmediata de las personas que hubiesen sido detenidas a raíz de este conflicto y respeto irrestricto a los derechos y garantías institucionales, así como la curación de las personas identificadas que sufrieron daños personales durante los días de conflicto.

8°.- Se establece que durante la vigencia del presente convenio los representantes o afiliados a las instituciones firmantes no realizarán ninguna medida de presión que limite el derecho al libre tránsito o atenten contra el derecho propietario.

9°.- Se constituyen en garantes del presente convenio monseñor Tito Solari y el defensor del Pueblo, José Luis Baptista Mortales.

ANEXO 3

FUNDADORES DEL COMITÉ DE DEFENSA DEL AGUA Y LA ECONOMÍA FAMILIAR

Aguirre Osvaldo, CIC, Colegio de Ingenieros de Cochabamba

Alconcé David, Ajayu

Antezana Mabel, Colegio de Abogados

Bellot Magin, FEJUVE PUEBLO

Bohórquez Lourdes, AMEP

Burgos Jaime, FEJUVE PUEBLO

Cabezas Ana María Lafuente de, Distrito 8

Cabezas Jaime, Distrito 8

Claure Teresa, AMEP, Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales

Colque Armenia, Ajayu

Delgadillo Marcelo, CODAC, Comité de Defensa de Medio Ambiente de Cochabamba

Espinoza Vladimir, CAC, Colegio de Arquitectos de Cochabamba

Eulate Jaime, Defensor del Pueblo

Evaristo Venegas, Colegio de Biólogos

Gorena Lia, CAC

Herbas Gabriel, FOCOMADE, Foro Cochabambino de Medio Ambiente

Heredia Lorgio, J.V.

Maldonado Alvaro B., PROACI,

Programa de Acción Ciudadana Maldonado Gonzalo, Diputado Uninominal

Maldonado Silvia de, AMEP Martha Sánchez de, FEJUVE PUEBLO

Mendoza Lidia, AMEP

Puente Rafael, Pueblo en Marcha Revollo S. de Orieta, Comité Cívico Femenino

Rocha Esteban, CEDIB

Siles Antonio, CIC, Colegio de Ingenieros Civiles

Vargas Bonnie, CODAC

Vidal Ana María, PROACI

Actores urbanos en la Masacre de Octubre¹

Villa Santiago Segundo - El Alto

“Nosotros no lo calificamos como la Guerra del Gas. Nosotros decimos Octubre Negro, masacre de octubre 2003, eso es nuestra... porque teniendo que ser guerra, podíamos haber tenido armamento, y pelear de igual a igual, pero ha sido masacre lo que hemos sufrido” (Carlos Rojas, enero 2012).

Introducción

La memoria es uno de los instrumentos a través del cual se reconstruye la historia, y desde la distancia y en perspectiva es posible evaluar acontecimientos que desafiaron el orden establecido. Es así que en las siguientes páginas pretendemos –recuperando la memoria de algunos actores que vivieron y presenciaron la “Guerra del Gas”– mostrar el rol político que los sujetos urbanos populares jugaron en dicho acontecimiento.

Cuando nos referimos a las transformaciones últimas que ha sufrido el país, el hito lo constituye el año 2000, en el que se llevó adelante la Guerra del Agua y a la que le continuaron un sinnúmero de sucesos y hechos políticos que tuvieron como corolario la subida de

¹ La presente investigación contó con el apoyo de Marina Vargas a quien le damos nuestros agradecimientos por haber sido la persona que nos permitió entrevistarnos con la gente de El Alto. Así como nos colaboró en el armado de los grupos focales. Asimismo Isidora Coria, fue la investigadora que nos colaboró con la realización del trabajo de campo.

Evo Morales al poder. Es así que además de adentrarnos en los sucesos de octubre de 2003, pretendemos hacer una evaluación del proceso de cambio por el que Bolivia atraviesa. Consideramos importante profundizar la percepción que los alteños tienen sobre el mismo, puesto que la guerra de gas fue uno de los antecedentes para el ascenso de Evo Morales al gobierno y en la que además el actor urbano tomó protagonismo. Es así que nos interesa analizar la percepción que se tiene del “proceso de cambio” y la actual situación de las organizaciones alteñas, principalmente de la FEJUVE.

En el primer capítulo presentamos determinados datos y elementos de la Ciudad de El Alto que nos ayudan a entender su estructura en varias dimensiones, poblacionales, sociales, económicas, política, de modo tal que se entienda la actual configuración de El Alto y las características con las que cuenta. Sólo teniendo este previo panorama es posible señalar las organizaciones que intervinieron en la Guerra del Gas. En este subtítulo nos apoyamos en información secundaria y en gran medida en aquella información que los participantes del grupo focal destacaron.

De las varias organizaciones e instancias que existen en El Alto, nos centramos en la COR y la FEJUVE que se constituyen en los referentes de organización.

Una vez teniendo este panorama, nos detendremos en la Guerra del Gas. En este segundo capítulo nos interesa ver el rol de la FEJUVE, el grado de organización y coordinación que se dio. Además presentamos una constatación, el protagonismo de los vecinos, los barrios, en algunos casos bajo el liderazgo de la directiva o presidencia de la junta vecinal, y en otros, una organización espontánea y obligada frente a las circunstancias que se iban desarrollando especialmente los días más críticos de la masacre. Asimismo, tuvimos la motivación de analizar los móviles, razones que desembocaron en un enfrentamiento como el vivido en octubre de 2003. La claridad de los vecinos respecto a que había que defender los recursos naturales, además de que la política neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada no traía beneficios para el país.

En el capítulo tres, presentamos las percepciones que recogimos sobre el proceso de cambio. Los entrevistados se refieren principalmente al problema de la cooptación de la que son presos los dirigentes. Asimismo nombraron el estado de división en el que se encuentra la FEJUVE. Es así que la evaluación que hacen es que el proceso de cambio prometía mucho y que creían que instancias organizativas como la FEJUVE gozarían de buen estado, que las dirigencias responderían a las bases, pero no ocurre aquello. Sin embargo guardan las esperanzas en que dirigentes jóvenes se formen y logren conducir la FEJUVE, o que se renueve la dirigencia con gente comprometida.

En el cuarto capítulo, en el que de lleno entramos al estudio de caso –Santiago II– desentrañamos la conformación del barrio, lo hacemos con base en los antecedentes

extraídos de documentos de la zona, así como de la información de las entrevistas y grupos focales.

Pese a que la principal ola de migración y poblamiento de la zona Santiago II, se dio con la relocalización en 1986, ya mucho antes se otorgó terrenos a los mineros. En este capítulo encontramos cómo se dió el proceso de asentamiento, y cómo la organización entre vecinos es la que posibilitó la consecución de servicios básicos. Al ser gran parte de los vecinos provenientes de las minas, existen réplicas de ciertos aspectos como el de la organización y el de la solidaridad entre ellos mismos. Estos dos aspectos como veremos, fueron replicados en la Guerra del Gas.

Es así que los “delegados de calle”, jugaron un rol especial, y esta figura fue réplica de los “delegados de sección” de las minas. Asimismo los métodos de lucha y la organización durante la Guerra del Gas, fue extraída de la experiencia minera. De esta manera, Santiago II se constituye en una de las zonas que hizo frente al ejército de manera organizada.

Por último presentaremos las conclusiones.

Metodología

El estudio que presentamos a continuación, contó con un periodo corto de estudio, tres meses. Es así que para el trabajo de campo, nos basamos en información cualitativa recogida a través de entrevistas y grupos focales, así como información secundaria, resultado de la revisión bibliográfica.

Guardamos el anonimato de nuestros entrevistados razón por los presentamos por medio de seudónimos (ver Anexo 1).

Estado del Arte

Entre los libros revisados que versan sobre los hechos acaecidos en octubre, encontramos el de Luis Gómez cuyo título “El Alto de pie. Una insurrección aymara en Bolivia”, da cuenta de manera cronológica los hechos acontecidos.

Lo interesante de esta obra es que nos remite a los acontecimientos anteriores a octubre que se constituyen en los aspectos que propiciaron la acumulación de la indignación, de la rabia y que finalizaron con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. El texto ha reconstruido la trama de acontecimientos y se encuentra intercalada con los testimonios de algunos alteños que participaron en la Guerra del Gas.

En el tratamiento sobre la explicación del surgimiento de la Guerra del Gas de octubre de 2003, los hechos nos muestran que si bien existieron los días críticos entre el 11 y 14 de octubre (días en los que se ocurrió la masacre) sí o sí nos tenemos que remitir a los acontecimientos de inicios de septiembre cuando se produjo una serie de huelgas,

marchas, el 8 de septiembre, ya acumuladas las fuerzas y los reclamos, los campesinos se unieron a los choferes del transporte interprovincial, a los vecinos de El Alto, a los alumnos de la UPEA y a otros sectores para comenzar una marcha desde la ciudad ayмара hacia La Paz. Las reivindicaciones –que incluían el rechazo a la venta del gas por Chile, un no al ALCA, la liberación incondicional del Huampu y la autonomía para la universidad alteña– pasaban de ochenta (Gómez, 2004: 23).

Es entonces que podemos entender los acontecimientos de octubre, ligándolos –entre otros– a la demanda de Felipe Quispe de liberar a un dirigente de una comunidad que fue encarcelado acusado de ser el responsable de un linchamiento ocurrido en una comunidad.

A esto se sumó el rechazo a los formularios “Maya y Paya” impuestos por la alcaldía de la ciudad de El Alto, el rechazo vecinal se basaba en que a partir de la información recolectada, la alcaldía alteña pretendía elevar el pago de impuestos en el rubro de la construcción y refaccionamiento de casas habitación.

Gómez resalta que los sectores movilizados convergieron en una demanda que empezaba a tener fuerza, esta fue la negativa al proyecto de exportación de gas por Chile.

En septiembre ya se había producido una de las masacres en la localidad de Warisata, y ya los paros y bloqueos se multiplicaban.

El relato que Gómez realiza demuestra que los actores que intervinieron inicialmente en los acontecimientos de septiembre como antesala a la Guerra del Gas, fueron varios: como la COB, la CSUTCB, el apoyo de la Federación de Cocaleros, la Coordinadora del agua.

Igualmente otros actores tomaban ya la ruta de la lucha. El mismo miércoles al término de un ampliado de emergencia en la localidad minera de Huanuni, la COB convocó a todos los sectores sociales a protestar masivamente a partir del lunes 29 y a la huelga general en los días siguientes. El movimiento Sin Tierra de Bolivia anunció la toma de tierras a partir del viernes 26. Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba máxima organización cocalera del Chapare anunció el inicio de bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. La dirigencia sindical alteña encabezada por Roberto de la Cruz (Gómez, 2004: 56).

De acuerdo a la cronología de los hechos relatada por Gómez, entonces se percibe que desde septiembre –como mediano plazo– se dieron acontecimientos que no cesaron hasta octubre. A fines de septiembre, varios gremios comenzaron a sumarse a la movilización, como trabajadores de carne pacaños, los choferes replegaron sus vehículos, los mercados amanecieron cerrados. La COB convocó a una marcha pacífica en La Paz para reunirse en la Plaza San Francisco a las dos de la tarde. De El Alto bajaron los gremios de comerciantes minoristas y estudiantes de la UPEA; la COR. El 30 de septiembre salió de Cochabamba la marca de la Coordinadora del agua, compuesta por 300 personas. En Radio San Gabriel cumpliendo 20 días en huelga la dirigencia campesina aymara se

cansó de escuchar las mismas propuestas y exigencias por parte del gobierno. El Mallku anunció que esperarían unos días más para ver si el gobierno cambiaba de actitud, si no “vamos a retirarnos a nuestras comunidades a organizar el gobierno de los indígenas, la nación del *Qullasuyu*”. Felipe Quispe definió al conflicto general como “la madre de todas las batallas” no solamente se trataba de demandas añejas y de la dignidad comprometida para no exportar el gas y recuperar la propiedad de los recursos naturales... los aymaras del campo retomaron una demanda que ya se escuchaba en varios sectores y comenzaron a exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada (Gómez, 2004: 67).

Gómez nos presenta una mirada cronológica de la Guerra del Gas, importante para no olvidar lo acaecido en octubre de 2003. Flores, Jesús, Iblin Herbas, Francisca Huanca, *Mujeres y movimientos sociales en El Alto. Fronteras entre la participación política y la vida cotidiana*, publicada en 2007, resultado de una de las investigaciones financiadas por el PIEB.

En esta publicación que pretende incidir en el papel fundamental desempeñado por las mujeres tanto en la vida cotidiana como en la vida política de El Alto. Nos apoyamos en esta publicación puesto que nosotros también partimos del supuesto del papel activo de la junta vecinal en varios episodios. Fue la junta vecinal o representación barrial, la que consiguió los servicios básicos. Flores *et al.* sostienen que:

“... fueron los propios vecinos quienes, a través de la organización de juntas de vecinos en cada barrio y del propio órgano matriz, hicieron posible la obtención de servicios en sus barrios y consiguieron la autonomía frente a la marginalidad institucional. Desde el principio los pobladores alteños comprendieron que las demandas sólo se lograban con la movilización, pues los mecanismos no funcionaban, especialmente a partir de 1985, cuando el Estado se comenzó a debilitar tanto que no podía resolver las necesidades básicas de la gente” (Flores, et al., 2007).

Es así que Flores *et al.*, sostienen que la junta vecinal de base fue asumiendo varias responsabilidades y adquiriendo gran importancia en cada barrio. Las juntas vecinales, dado el contexto urbano que hacen que cada barrio no tenga una completa unidad comunal, se fueron configurando como estos “gobiernos” locales que atendían las demandas de los vecinos, una suerte de “ciudadanos” de ese nivel. Tanto Flores (2007) y Mamani (2005) sostienen que esa característica de la junta vecinal se manifestó en toda su dimensión en octubre de 2003 cuando, frente a la violencia estatal encargada a los mismos órganos de la seguridad pública, fueron las juntas de vecinos o las propias vecinas y vecinos organizados a partir de otras instancias quienes asumieron tareas de seguridad, deliberación y otras.

Por su parte Arbona en *los límites de los márgenes* sostiene que las jornadas de Octubre de 2003, protagonizadas por distintas organizaciones barriales, vislumbraron las capacidades del poder local de crear espacios políticos que pudieran retar la lógica del proyecto neoliberal. Las jornadas de Octubre de 2003, protagonizadas por organizacio-

nes barriales (comités de huelga) vislumbraron las capacidades del poder local de crear espacios políticos que rebasaron a las entidades políticas locales (EPL) y rompieron el margen de legitimidad del Estado. En este sentido, continúa Arbona y sostiene que las Jornadas de Octubre pusieron en tela de juicio las posturas naturalizadas del mercado y lograron desenmascarar las hegemonías de clase (Arbona, 2005: 7).

Varios autores coinciden en que las jornadas de octubre de 2003, representan la cristalización del horizonte político, donde se vislumbró la promesa de un cambio del sistema político a partir de las vivencias de los alteños. Este protagonismo rebasó las fronteras de los espacios políticos trazados por una negociación entre partidos (en la esfera oficialista) y EPL. Arbona sostiene entonces que el protagonismo de los comités de huelga cristaliza el momento en el que el margen de la legitimidad del Estado se quiebra y por tanto, se cuestiona la objetividad y naturalidad de las hegemonías de clase, pero también se quiebra el margen de legitimidad de la dirigencia de las EPL (Arbona, 2005: 11).

En el ámbito barrial, se forjaban lazos locales y se daba vida a los comités de huelga, a través de los cuales se organizaba la protección de vecindarios y las estrategias de movilización. Los barrios se ordenaban por cuadras estableciendo jerarquías internas, cadenas de mando y responsabilidades, integrando formas de gobernabilidad indígena y estrategias de organización sindical (Mamani). Fue en este proceso de organización barrial autónoma, pero coordinada, que las EPL comenzaron a ser rebasadas. (Arbona, 2005)

Por su parte, Pablo Mamani en varias publicaciones sobre El Alto, sostiene que los actores claves en el levantamiento de Octubre de 2003, fueron los microgobiernos barriales, puesto que con éstos se ha articulado un conjunto complejo y unificado de pequeños gobiernos territoriales en cada distrito, zona o barrio para movilizar estrategias de acción colectiva e identidades urbanas aymaras y populares con las que se ingresa en abiertas relaciones de conflicto con el Estado-gobierno y los grupos dominantes blanco-mestizos de La Paz y Bolivia (Mamani, 2005: 8).

Mamani llama microgobiernos locales, a las juntas vecinales que se encuentran distribuidas en los distritos municipales. Es así que serían estas juntas vecinales los que son el sujeto más importante de la insurrección de octubre. De manera detallada, Mamani relata que los microgobiernos están contruidos por un largo proceso de interrelación interna (al interior de la ciudad) y relaciones externas (con las provincias) de donde mayoritariamente vienen los alteños. Se ha tejido un conjunto de actos, identidades, estrategias, sentidos en el manejo y uso del espacio social urbano y su relación con área rurales. Así la ciudad de El Alto es producto de una construcción esforzada de un grupo de hombres y mujeres que han tejido complejas relaciones interfamiliares, regionales,

colectivas, de trabajo y organizativas definidas por las carencias de servicios sociales: sanitarios, educativos y de seguridad (Mamani, 2005: 10).

En base a este fundamento se produjeron articulaciones sociopolíticas definidos aquí como los microgobiernos barriales distribuidos en la densa geografía urbana de El Alto y que se convierten en el centro de las decisiones colectivas y de los espacios del poder político porque se articulan en forma de multitudes movilizadas que activan los recursos de organización territorial y cultural radicalmente puestos en prácticas en las barricadas humanas, de piedras, llantas (Mamani, 2005: 10).

En octubre, diversos barrios, y gremios de trabajadores reprodujeron relaciones de parentesco, relaciones interbarriales y sentidos de pertenencia al interior de la ciudad. Se constituyeron así los microgobiernos barriales. Se movieron las estructuras internas de forma autónoma para ampliar y legitimar las acciones colectivas indígenas urbanas y rurales (Mamani, 2005:15).

Mamani (2005) sostiene que en las jornadas de octubre, la capacidad de acción y decisiones autónomas de las juntas vecinales se convirtieron en el factor de articulación sociopolítica.

En octubre de 2003, el autor enfatiza que se articularon las fuerzas internas de las organizaciones vecinales. En dichas jornadas tuvieron mucha más fuerza las acciones interbarriales. Se hace explícita la idea de que cada barrio si actúa por separado o sólo no podrá tener fuerza para enfrentar a las fuerzas del gobierno-Estado. En este sentido, se hacen necesarias las interrelaciones interbarriales fundadas sobre las experiencias de organización de la vida social de los barrios. Esta articulación se muestra en como una forma efectiva de acción paralizante de la ciudad. La lógica colectiva de la acción social adquiere mayor sentido y profundidad. Es bajo estos mecanismos que la ciudad de El Alto se levanta contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2005: 60). Finalmente concluye que si bien El Alto se convirtió en el centro gravitante y articulador del levantamiento general se debió a que se tejió profundos sentidos de autorganización social fundados, sobre las propias estructuras de organización barrial. Bajo estas condiciones, cada espacio de la ciudad se convirtió en un pequeño centro de poder y movilización social (2005: 148).

El Alto

Este apartado básicamente tomará los datos del *Atlas de El Alto*, un estudio realizado por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza el año 2011, puesto que son los más actualizados que encontramos.

El municipio se encuentra a una altura de 4050 metros sobre el nivel del mar. Es la cuarta sección de la provincia Murillo del departamento de La Paz. La urbe limita al norte y al este con el municipio de La Paz, al sur con los municipios de Viacha y Achocalla, y al oeste con los municipios de Laja y Pucarani (Gregoria Apaza, 2011: 15).

Distritos municipales y población

El Alto se divide en 14 distritos municipales. Diez de ellos son urbanos los distritos del 1 al 8, 12 y 14, y cuatro son rurales 9, 10, 11 y 13. El distrito 13 es el de mayor superficie. Cada distrito tiene como máxima autoridad a un sub alcalde/sa.

La composición poblacional se caracteriza desde su origen por la migración aymara, principalmente, y también minera, quechua y de otras ciudades y regiones del país. La población alteña llega al millón de habitantes. Desde su nacimiento presenta un crecimiento acelerado, lo cual la convierte en un lugar altamente dinámico generacional, social, cultural y económico².

Estas características incluyen la complejidad lingüística, pues las poblaciones migrantes preservan su idioma materno en sus relaciones familiares y sociales pero usan el castellano para sus actividades laborales, comerciales y estudiantiles.

Diferentes instituciones catolagan a El Alto como una de las ciudades más pobres de Bolivia. Según INE-UDAPE (2003) 39.7% de las alteñas y alteños vive en la extrema pobreza, y según el método de las necesidades básicas insatisfechas, 66.9% de la población vive en la pobreza (INE, CENSO 2001). Por esta situación, El Alto era considerada “una ciudad problema”, una “ciudad en emergencia” a la que los gobiernos debían destinar distintas medidas paliativas. Pero no solamente estas cifras de pobreza causaban inquietud sobre la radicacilizacion de su comportamiento político, sino su configuración como una “ciudad aymara”, con todo lo que ello implica la “discriminación” de la que es objeto, así como la ubicación en la que se encuentra, haciendo un “cerco” a la ciudad de La Paz (Flores, et al., 2007:21-22).

2 El Alto creció vertiginosamente entre 1976 y 1986 debido a la significativa migración de campesinos del altiplano norte, como consecuencia de los perjuicios agrícolas provocados por el “fenómeno del niño” en 1982 y el despido masivo de trabajadores de las minas de estaño en 1985 (Garfias y Mazurek 2005 en Flores 2007:21).

En 2001, la ciudad de El Alto tenía 677.412 habitantes (Censo de Población y Vivienda, INE 2001) de los cuales 334.675 eran varones y 342.737 mujeres. La tasa de crecimiento entre el censo de 1992 y 2001 fue de 5.1 % (INE, 2005). La tasa de natalidad alteña es de 4.2 hijos por mujer (Gobierno Municipal de El Alto, 2008).

Sobre la base de la información del 2001 se consideraba que para el año 2010 la ciudad tendría 960.767 habitantes, con una preeminencia femenina de 51.5%. A este crecimiento de la población alteña se suma que la población es principalmente joven (Gregoria Apaza, 2011: 20)

En El Alto, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, la tasa de analfabetismo llegaba al 7398% de la población mayor de 15 años. Estos valores seguro sufrieron cambios importantes debido a la aplicación del Programa Nacional de Alfabetización “Yo si puedo”, aunque claro los resultados obtenidos hay que relativizarlos, sobre todo por las características que adoptó dicho programa.

El Alto presenta un elevado componente productivo a nivel de industrias instaladas, como también de los pequeños talleres familiares y microempresariales. Al mismo tiempo, una gran parte de la población realiza actividades de comercios y servicios en ferias y mercados permanentes e itinerantes.

¿Cómo se va poblando El Alto?

A principios del siglo XX, El Alto era propiedad de un puñado de familias hacendadas que compartían el espacio con algunas empresas e instituciones estatales (Sandoval y Sostres 1989: 21). Flores sostiene que las primeras urbanizaciones aparecen en los años cuarenta, a partir de loteamientos, una práctica común en El Alto que trae problemas hasta la actualidad, especialmente en cuanto a la legalidad de los títulos de propiedad. Villa Dolores se fundó en 1942 y en 1952. Como sostenemos páginas adelante la falta de servicios favoreció la organización y la movilización de la población para conseguirlos. Sandoval y Sostres recuerdan que la primera movilización relevante en la que participó El Alto fue la Revolución de 1952, la que también le dio un giro a la zona, anteriormente poco habitada y desatendida. En la segunda mitad del siglo XX, cuando comenzó el proceso de vertiginoso crecimiento, el requerimiento de servicios como electricidad, agua alcantarillado, carreteras y transporte hizo más apremiante la organización vecinal. (Flores, et al., 2007: 22-24).

Primero formaron parte de la FEJUVE de La Paz, pero en 1957 formaron el Consejo Central de Vecinos de El Alto como entidad matriz. Después buscando mayor autonomía, constituyeron la FEJUVE El Alto, dando un impulso más a esta necesidad. Otra entidad igualmente relacionada con exdirigentes vecinales, fue el Frente de Unidad y Renovación Independiente de El Alto (FURIA) que luchó por la autonomía como ciudad.

En 1988 en una multitudinaria marcha cívica se consiguió la autonomía como ciudad. Toda la autonomía duró unos 30 años, en dos generaciones de dirigentes (Fernández 2005 en Flores, et al., 2007:25).

Flores destaca que el proceso de autonomización de los dirigentes se vio favorecido por la fuerte incidencia del partido populista CONDEPA en las organizaciones, que dio paso a un proceso de clientelización extraordinario. Fue una década perdida que detuvo un proceso de organización política en gestación. Pero a fines de los noventa, en la debacle regional por las medidas de estabilización, frente a la situación crítica de una población sumida en la pobreza, hubo un despertar de la conciencia política de las bases, y la expresión de nuevas formas de hacer política desde abajo, en el contexto mundial de una crisis del Estado reformado (Flores, et al., 2007: 25).

La población alteña posee una densa red de organización que puede ser: a) territorial, 600 juntas vecinales b) laborales a través de gremios y sindicatos y c) social –clubes de madres, grupos de jóvenes y otros.

Brevemente desarrollaremos las estructuras partidarias. Interesa abordar este punto porque desde décadas atrás en la ciudad de El Alto se instalaron determinadas tiendas políticas de corte populista que de una u otra manera, instauraron determinadas prácticas clientelares con organizaciones sociales como la FEJUVE, organización urbana que es de suma importancia en el presente estudio.

Estructuras partidarias

El Alto se caracteriza por ser una ciudad que atravesó por varios procesos que llegaron a establecer una identidad sociopolítica intercultural compleja.

Con el avance en la consolidación de la democracia y los esfuerzos por superar la crisis económica se fue gestando la valoración de la diversidad cultural en conexión con este proceso. En el escenario aparecieron dos organizaciones caracterizadas más como movimientos políticos populistas: CONDEPA, Unión Cívica Solidaridad (UCS)³.

En los procesos electorales que se realizaron entre los años 1989 y 1997 el municipio alteño se convirtió en un bastión de CONDEPA y su líder Carlos Palenque, quien con un discurso nacionalista endógeno impactó entre los habitantes de la ciudad por el uso de recursos simbólicos propios de la cultura aymara (Gregoria Apaza, 2011: 85).

Si bien CONDEPA y UCS recibieron el apoyo en los mayoritarios sectores populares de la ciudad, las fuerzas políticas dominantes en los años noventa como el MIR, ADN,

³ Revisar Laruta, Carlos Hugo (2006) *La conquista de la ciudadanía* (Documento de trabajo). Regional CIPCA La Paz, quien detalla el comportamiento de partidos populares en El Alto.

MNR tenían el respaldo de la clase media asentada en las urbanizaciones del municipio alteño.

CONDEPA fue un partido político hegemónico en El Alto en los años noventa y logró victorias contundentes y consecutivas en esa década. En contraste, las gestiones municipales condepistas contribuyeron muy poco al desarrollo de la ciudad.

Las elecciones municipales de 1999 marcaron el fin de la hegemonía Condepista. La victoria del entonces ex diputado José Luis Paredes sobre la candidata de CONDEPA Remedios Loza, significó el regreso del MIR a la administración del municipio alteño (Gregoria Apaza, 2011: 86). Para las elecciones de 2004, Paredes volvió a presentarse como candidato, esta vez con la agrupación ciudadana Plan Progreso. Para entonces el MAS ya se había convertido en la principal fuerza política del país, sin embargo Paredes resultó electo como alcalde municipal para una segunda gestión.

En las elecciones municipales de 2010, el ex secretario general de la COR, Edgar Patana, candidato del MAS, logró acceder al cargo de alcalde. Así se abrió una nueva etapa en la gestión pública local, en el marco de un nuevo escenario constitucional (Gregoria Apaza, 2011: 87).

Descripción de los actores involucrados en la Guerra del Gas

A partir del grupo focal realizado en El Alto presentamos el siguiente cuadro en el que los participantes identificaron aquellas organizaciones que en 2003 existían y otras que en la actualidad existen y que fueron creadas en los últimos años. Seguramente faltan varias, sin embargo para el grupo focal las principales que tienen incidencia y/o son conocidas por los vecinos alteños son:

Organizaciones en El Alto

EN 2003	EN LA ACTUALIDAD	
FEJUVE	FEJUVE	Comité de Vigilancia.
COR	COR	FESUCARUSU
FEDEPAF	FEDEPAF	FUTECRA (gremial)
FED TRANSPORTE	FED TRANSPORTE	GREMIALES
UPEA	UPEA	COSEDALE (artesanos)
HAM EL ALTO	HAM El Alto	CODIJE (Consejo Distrital de Educación distrito 8).
FED. DE MAESTROS	FEDERACION DE MAESTROS (laboral)	

Construcción en base al grupo focal realizado en El Alto con dirigentes que estuvieron en la FEJUVE en 2003

Existen dos organizaciones centrales en El Alto, la COR y la FEJUVE, la primera más de tipo sectorial pues aglutina a las organizaciones gremiales y de otros tipos de trabaja-

dores. Y la segunda de tipo territorial, pues aglutina a los 14 distritos en la actualidad y cada distrito a un número determinado de juntas vecinales.

- FESUCARUSU Federación sindical de campesinos área rural y urbano, esa institución no existía en 2003, o posiblemente era muy pequeña, ahora su dirigente se encuentra como presidente del concejo en El Alto.
- FUTE CRA de los carniceros. Pertenecían a la COR y ahora han formado federaciones.
- FEDEPAF, la Federación de Educación de Padres de Familia, es una institución grande, en aquella ocasión de octubre de 2003, su ejecutivo de acuerdo a la opinión de los entrevistados, traicionó la lucha de El Alto porque se negó a convocar a los padres de familia para que se movilizaran⁴.
- La UPEA estuvo latente. Porque se crea el 2000 y el 2001 se divide en dos. Estaba en huelga con los mallkus en la radio San Gabriel.
- Los Gremiales se encuentran dentro la COR, pero existen 6 federaciones de gremiales, un nuevo indicio de la división organizativa que existe al interior de las organizaciones⁵.
- COSEDAL.- es una organización perteneciente a los artesanos. Esta dentro la COR como federación.

María Velásquez, señala que hoy en día debido al debilitamiento que han sufrido organizaciones matrices como la FEJUVE y la COR, aparecen otras organizaciones que tienen una presencia fuerte.

Existen otras organizaciones cuyas reivindicaciones son más puntuales, sectoriales como la Federación de maestros urbanos que como organización no han estado en la lucha. “Ha quedado la imagen de una FEJUVE muy fuerte después del 2003, entonces estas organizaciones como la federación de maestros se han opacado” (María Velásquez, enero 2012)

Si bien en las jornadas de octubre de 2003, fueron las organizaciones de base, los vecinos en definitiva, que le dieron a la movilización su dinámica y orientación, como señala García “en tanto que los dirigentes quedaron rebasados, en la mayoría de los ca-

⁴ Incluso una resolución pos Guerra del Gas que salió de Santiago Segundo tenía entre sus resoluciones, el repudio al presidente de la FEDEPAF.

⁵ Entre otras entidades que se encuentran en la ciudad de El Alto, se encuentran instituciones y entidades estatales como: Procuraduría General del Estado, Policía Bolivia, Instituciones militares (Fuerza Aérea Boliviana, Regimiento Ingavi), Defensor del Pueblo, Corte superior de Justicia de El Alto. Asimismo varias y ONG que trabajan en la zona. Entre las universidades que se encuentran en el Alto se encuentran: UPEA, Universidad Unión Boliviana, USFA, Universidad Franz Tamayo. Por último entre los medios de comunicación tenemos a: Radio Atipiri, Radio Integración, pachamama, Pacha Qamasa, Radio San Gabriel, Wayna Tambo, Canal Paceñisima TV, Canal TV El alto, periódico El Alterio (Gregoria Apaza, 2011: 58).

sos, o atrapados y convertidos en portavoces de un movimiento que, como ningún otro en el país, careció de líderes generales” (2005: 590).

García y otros, hacen una detallada caracterización de las FEJUVE y la COR a quienes en el conflicto de la Guerra del Gas, les tocó tomar la palabra pública en los medios de comunicación.

García Linera, en su texto *Sociología de los movimientos sociales*, sostiene que El Alto es un conglomerado híbrido de distintas experiencias comunales, artesanales, comerciales y obreras que se mueven en el espacio urbano y se entrecruzan cotidianamente de forma fragmentada. Sin embargo, entre las diversas segmentaciones se tejen nuevas redes sociales. En principio, antes de 1952 existía una sola organización para varias zonas y no tenían un reconocimiento jurídico, basándose en Sandóval-Sostres, se sostiene que existía una junta vecinal para todas las villas (Sandóval-Sostres 1989 en García 2005). Fue el MNR después de la Revolución de 1952 que se crearon los primeros “Comandos Zonales”, los que a su vez impulsaron la formación de sindicatos de inquilinos que pasaron a ser parte de la COB. Varios de estos sindicatos de inquilinos se dedicaron a la venta de las tierras comunales que aún existían en El Alto (Cfr García, 2005).

Las juntas vecinales con una existencia más orgánica se remontan a 1959, por supuesto que las demandas se centraban sobre todo en temas de servicios básicos en los diferentes barrios, logrando así que algunas zonas tengan el apoyo estatal para determinados servicios, claro que en toda consecución de algún servicio social, el trabajo de los propios vecinos fue fundamental. Ya para 1966 se creó la subfederación de juntas vecinales de El Alto, que agrupaba ya a por lo menos 30 zonas, que se habían ido creando. En 1979 se eleva a rango de Federación de Juntas Vecinales de El Alto, en el Congreso de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE) (Estatuto Orgánico FEJUVE, 2001).

La COR - El Alto

A finales de los 60 y principios de los 70, lentamente se fueron creando federaciones laborales regionales en El Alto, especialmente entre los comerciantes y artesanos que, a diferencia de los obreros de empresa, tienen una identidad laboral de fuerte arraigo territorial. Surgió como un ente que desde su inicio coordinó acciones de protesta con la FEJUVE; así por ejemplo, reclamarán conjuntamente la ampliación de la Facultad Técnica en la ciudad de El Alto y, posteriores serán componentes centrales de la lucha por la constitución de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), mostrando una gran capacidad de convocar a sus afiliados (García, 2005: 594). Por ejemplo ambas entidades matrices en septiembre de 2003, participaron en dos grandes movilizaciones, en oposi-

ción a la implementación de un formulario municipal, denominado “Maya y Paya”, y en la Guerra del Gas en octubre del mismo año.

Varios autores muestran el estrepitoso crecimiento de El Alto, ciudad en la que el perímetro urbano fue bastante acelerado; así, para 1989 existían 166 zonas y villas reconocidas en los sectores norte, central y sur de El Alto, las que conformaron sus juntas vecinales. Sin duda, esta organización es la más extendida y logró crear una red de juntas unificadas en una sola federación⁶.

La creación de la FEJUVE

Si bien en la década de los 60 y 70, la FEJUVE fue reconocida y elevada al rango de Federación en el Congreso de la CONALJUVE, fue en la década de los 80, que la FEJUVE consolidó su poder de convocatoria, constituyéndose en un órgano mediante el cual los vecinos demandaban y negociaban intereses específicos, especialmente referidos al desarrollo urbano, con el Estado. Como parte de este proceso de consolidación organizativa y reivindicativa, en 1985 participaron en varias movilizaciones.

Estructura de la FEJUVE

La FEJUVE está constituida por un Comité Ejecutivo, que es elegido cada dos años durante la realización del Congreso Ordinario y que debe ser reconocida por la CONALJUVE. La FEJUVE se define a sí misma como una institución cívica, corporativa, democrática, participativa y apartidista, con Personería Jurídica. Entre sus fines se encuentra la de:

- a) Promover la participación activa de las Juntas Vecinales en la construcción y procesamiento de instrumentos normativos como el PDM, PD Distrital, POAs, etc.
- b) Participar en la formulación de Plan de Desarrollo Departamental.
- c) Velar por el cumplimiento de la voluntad popular de las Juntas Vecinales expresadas en planes y programas Municipales. (Estatuto Orgánico FEJUVE, 2001).

De acuerdo al Estatuto Orgánico de la FEJUVE, esta entidad tiene una estructura de acuerdo a la siguiente jerarquía:

1. Congreso Ordinario
2. Congreso Extraordinario

⁶ Para ahondar el nacimiento de la COR, ver Gregoria Apaza (2010) La acción colectiva en El Alto. Hacia una etnografía de las organizaciones sociales, Gregoria Apaza, Bolivia.

3. Ampliado
4. Reunión del Comité Ejecutivo de FEJUVE
5. Asamblea de Juntas Vecinales

El congreso Ordinario de FEJUVE El Alto es la máxima autoridad o instancia superior de decisión:

- a) Se reunirá ordinariamente de forma obligatoria cada dos años.
- b) El encargado de realizar esta convocatoria es el Comité Ejecutivo de FEJUVE El Alto.
- c) La finalidad del congreso es de escuchar el informe de la Directiva saliente, o recibir el informe de gestión.
- d) Elaborar plan de trabajo
- e) Fijar nuevas tareas y objetivos
- f) Resolver los casos de apelación
- g) Conocer las sanciones del Tribunal de Honor
- h) Ejecutar las sanciones del Tribunal de Honor.
- i) Evaluar y pronunciarse sobre la actuación de la CONALJUVE y FEJUVE El Alto.
- j) Evaluar la gestión de la comuna Alteña
- k) Evaluar al Comité de Vigilancia
- l) Evaluar a los y las Consejeros/as Departamentales
- m) Evaluar a los y las diputados/as uninominales.
- n) Evaluar el desempeño de los subalcaldes distritales
- o) Elevar planteamientos para eventos nacionales e internacionales
- p) Elegir nuevos miembros de la Directiva del Ejecutivo (Estatuto Orgánico de la FEJUVE, 2001).

La Federación de Juntas Vecinales está constituida por las representaciones de todos los distritos de Juntas de Vecinos, las cuales tienen en su estructura un delegado que asiste a las reuniones de FEJUVE y que excepto para las carteras de presidencia, vicepresidencia, y secretaría general, tiene una participación por cuota distrital de forma proporcional. En la estructura de la federación, las juntas vecinales tienen estatuidas sus funciones, siendo la principal ejecutar programas establecidas en la FEJUVE y elaborar POAs.

Para asistir al Congreso, cada Junta Vecinal acreditará 4 delegados (2 delegados de directorio y 2 de base) elegidos en asamblea. La delegación debe estar compuesta por una mujer como mínimo (Estatuto orgánico de la FEJUVE, 2001).

El ampliado se realizará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando sea necesario será convocado por el Comité Ejecutivo de FEJUVE El Alto:

- a) En los ampliados participarán los/as presidentes/as de Juntas Vecinales y/o representantes debidamente acreditados/as por credenciales otorgadas por FEJUVE El Alto.
- b) Las resoluciones del ampliado tendrán fuerza de obligatoriedad para el ejecutivo de FEJUVE El Alto.
- c) Para efectuar el ampliado, se deberá contar con el quórum reglamentario del 50% más uno de las Juntas Vecinales

Las reuniones del Directorio de FEJUVE se realizaran cada 15 días para analizar el desarrollo de las diferentes secretarías, comisiones de trabajo y seguimiento de las actividades propias de FEJUVE.

Del Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo de la FEJUVE es la instancia de dirección, elegido en congresos y cuya duración es de dos años. Los requisitos principales para ser dirigentes son, ser boliviano, no ser loteador, negociante o miembro de un partido político, no ser empleado/a municipal. Existen 29 secretarías:

Un presidente/a	Un secretario/a de Desarrollo Económico y productivo
Dos vicepresidentes/as	Dos secretarios/as de deportes
Un secretario/a general	Dos secretarios/as de juventudes
Un secretario/a de relaciones	Dos secretarios/as de participación popular
Un secretario/a de Asuntos Internacionales	Dos secretarios/as de educación y cultura
Tres secretarios/as de organización	Dos secretarios de transporte y comunicación
Tres secretarios/as de conflictos	Un secretario de cooperativas y microempresas
Un secretario/a de actas	
Un secretario/a de hacienda	

Un secretario/a de defensa del consumidor	Un secretario/a de estadística
Un secretario/a de vivienda	Un secretario/a de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dos secretarios/as de género	Un secretario/a de Prensa y propaganda
Un secretario/a de asuntos generacionales	Un Fiscal general
Un secretario/a de derechos humanos	Un secretario/a de Organización Provincial
Un secretario/a de Defensa Cívico Vecinal	Cuatro Vocales (Carteras extraída del Estatuto Orgánico FEJUVE 2001)
Dos secretarios/as de Seguridad Ciudadana	
Un secretario/a de salud	

Las carteras de Presidente/a, los/las Vicepresidentes/as y el/la Secretario general serán elegidos/as en la última Plenaria del Congreso Ordinario por voto secreto y mediante ternas (tomando en cuenta la rotación Norte a Sur solo para presidente de FEJUVE), las demás secretarías se elegirán de las cuotas Distritales en forma proporcional (Estatuto Orgánico FEJUVE 2001).

Las primeras carteras son las más importantes, ya que el presidente y el vicepresidente tienen la representación de toda la organización ante el gobierno, el municipio y otras instituciones. Las obligaciones del presidente son, además, convocar a directorios, asambleas y presidir los congresos extraordinarios.

El Comité Ejecutivo de la FEJUVE tiene un papel preponderante en la vida cotidiana de la organización; sin embargo, de una forma similar a lo que ocurre en los sindicatos, el comité está bajo el mandato de la máxima instancia de decisión, que es el Congreso Ordinario; realizado cada dos años.

Asambleas vecinales

Como ocurre en los sindicatos, los mecanismos por los cuales se interconectan todos los miembros de las secretarías y las bases con la directiva de la Junta Vecinal son las asambleas que son convocadas semanal o mensualmente, donde se discuten los problemas que atañen al barrio, aunque por lo general lo que mantiene con vida a la Junta es la actividad de su directorio. Las asambleas vecinales son un eje importante de la vida de las juntas vecinales, es el modo mediante el cual se unen las dos instancias que conforman la FEJUVE la instancia del Comité Ejecutivo y las bases, aunque existen muchos problemas, ya que, como veremos la intromisión partidaria constituye un verdadero problema en el relacionamiento de bases-dirigencias (García, 2005: 599).

Estructura de la junta vecinal

Una de las características esenciales de la organización en cada junta vecinal es que está basada en territorialidades. Cada junta para ser reconocida por la FEJUVE debe representar a zonas que tengan por lo menos 200 miembros, además que ocupe y tenga sus límites en el territorio de extensión de la zona. Esta cualidad territorial es importante puesto que se transforma en una potencial al momento de la movilización.

De acuerdo a García, la organización barrial compuesta por juntas de vecinos surgió y continúa como un proceso de autorganización social de los habitantes de zonas urbanas para debatir y buscar resolver las necesidades básicas urbanas (agua potable, electricidad, alcantarillado, etc) de la población en sus barrios. En la medida en que la ocupación territorial de las ciudades es relativamente aleatoria, sus pobladores proceden de múltiples oficios y condiciones sociales, aunque es posible ver ciertas segmentaciones zonales con una mayor presencia de exmineros, profesores, comerciantes y oficinistas, migrantes rurales, de una provincia u otra. En ocasiones la identidad barrial es más fuerte que otras identidades sociales, como por ejemplo la obrera (2005: 599).

Dentro de su estructura formal la junta de vecinos tiene una secretaria especial o un delegado que debe asistir a la instancia mayor de coordinación, que es la FEJUVE. Una junta vecinal está conformada formalmente por una serie de secretarías, similar a la organización sindical, aunque el número de secretarías puede variar de acuerdo a la zona.

Presidencia	Secretaria de deportes
Vicepresidencia	Secretaría de defensa civil vecinal
Secretaria de hacienda	Secretaria de prensa
Secretaria general	Secretaria de educación y cultura
Secretaria de actas	Secretaria de vinculación femenina
Secretaria de organización	Secretaria de transportes
Secretaria de obras públicas	Delegado a FEJUVE
Secretaria de conflictos	Vocales (García, 2005: 600)

Guerra del Gas en El Alto

FEJUVE 2003 y el Comité de Movilización

Este acápite se basará en la información levantada en campo y que de gran manera presenta la manera como se recuerda la Guerra del Gas a más de 8 años de los acontecimientos ocurridos en octubre de 2003.

Don Carmelo Rodríguez, cuenta que una de las características de la FEJUVE es conformar un comité de movilización en caso de que sea necesario y en caso de que se tenga que encabezar alguna movilización, pues entonces en la Guerra del Gas se conformó –en un ampliado– un comité de movilizaciones que dirigiría, coordinaría y encabezaría la misma. En caso de conflicto y de que se tenga que llevar a cabo determinadas medidas de presión, debían ser elegidos uno o dos representantes por distrito.

“En el tema de gas salió dos representantes, quienes coordinaban la movilización de la FEJUVE. Se coadyuvaba con el comité de la FEJUVE e impulsaba, nosotros éramos responsables de que las zonas salgan a la movilización y en tercera instancia se hacía una reunión para determinar qué acciones de forma conjunta” (Carmelo Rodríguez, enero 2012)

Si bien, de acuerdo a Don Carmelo tenemos una perspectiva en la que se muestra a una FEJUVE organizada, hubieron días, los más críticos en los que la dirigencia de dicha instancia desapareció. De acuerdo a lo señalado por uno de los dirigentes de uno de los barrios como Santiago II, don Jorge Meruvia, los dirigentes de la FEJUVE algún momento tuvieron un papel protagónico, es decir estaban liderizando la movilización. Don Jorge reconoce la división que existe al interior de la FEJUVE, las pugnas de diversa índole, sin embargo en esta lucha, dicha instancia se mostró unida.

“Sí, nos han reunido, el conjunto de la FEJUVE no? pero estaban liderizando un lugar, otro lugar, otro. El presidente era... Mauricio Cori, él convocó a la huelga, al paro a todo aquello. Él no estaba escondido, ninguno de los dirigentes, estaba a la cabeza, aunque cuando había pelea interna en la FEJUVE pero había unidad en esta lucha” (Jorge Meruvia, enero 2012).

La importancia de la junta vecinal fue la que en octubre de 2003 jugó un papel preponderante como bien señala Flores, esta instancia de base fue asumiendo varias responsabilidades y adquiriendo gran importancia en cada barrio. Los sindicatos agrarios no solamente fueron asociaciones “sindicales”; llegaron a ser una suerte de “gobiernos” locales, los legítimos órganos de mediación con el Estado y los entes gestores para una

serie de problemas de la localidad. Las juntas vecinales, dado el contexto urbano que hacía que cada barrio no tenga una completa unidad comunal, se fueron configurando como estos “gobiernos” locales que atendían las demandas de los vecinos, una suerte de “ciudadanos” de ese nivel. Esa característica se manifestó en toda su dimensión en octubre de 2003 cuando, frente a la violencia estatal encargada a los mismos órganos de la seguridad pública, fueron las juntas de vecinos o las propias vecinas y vecinos organizados a partir de otras instancias quienes asumieron tareas de seguridad, deliberación y otras (Mamani 2005b) (Flores, et al., 2007: 26).

Coordinación entre organizaciones

Para nosotros es importante indagar acerca de la coordinación o la falta de ella en los días críticos de la Guerra del Gas. Los entrevistados –en una gran mayoría– señalan que no hubo tal organización.

Algunas medidas en el inicio del conflicto fueron tomadas por la dirigencia de la COR, como el paro de 24 horas:

“... la dirigencia de la COR como la de los gremiales han determinado solo parar por 24 horas, la dirigencia y ellos decían nosotros vivimos al día, si hacemos un indefinido, estamos afectando a nuestras bases y ellos han hecho un paro” (Carmelo Rodríguez, enero 2012).

Como relata don Pablo Vásquez, hubo coordinación y organización con zonas alejadas,

“... los mineros de Santiago II, ellos con dinamita han aparecido hechos Panchito Villa. Y me han mirado quienes son dirigentes, y yo solo era junta escolar. Y nos hemos organizado. Y luego ya pasó eso, más tarde han venido la junta de vecinos, haremos reuniones era 10:30 de la noche, porque parecen que nos va a atacar siempre, saben que ya no tenemos dirigentes, ya no hay dirigentes, ya no vienen los dirigentes, así que con los dirigentes de Santiago nos hemos citado. Para dirigir a la gente hay que saber acoplar. Eso es lo que le faltaba a la señora a la dirigente, doña Hilda, su vice y nos hemos reunido, Horizonte, Santiago II, de Santa Rosa, de otros lados los dirigentes han venido, de 21 de dic, de Kenko, todo ya miremos no tenemos dirección FEJUVE ha desaparecido, nos están atacando... (Pablo Vásquez, enero 2012).

Qué hacemos? Cómo vamos a defendernos? No había ni un fusil no hay armas, ellos estaban armados, esa era la reunión de esa noche. Faltaría reunirnos del distrito 2 y ahí decidiremos... toditos nos hemos ido al velo-

rio donde estaba la niña. Y alguien ahí ha discurseado y ese ha encendido la mecha en nuestro sector. Los de FEJUVE bien ha declarado paro, pero aquí ni han venido entonces ya las bases han hablado ahí, han rebasado. Una señora dijo 'Yo tengo un fusil, voy a matarle y matarle al Goni', lloraba y lloraba. Hemos perdido contacto con nuestros dirigentes, y nosotros hemos quedado. Yo era de la junta escolar y tenía 500 padres de familia y podía reunir 200. Hemos hecho una reunión grande, hemos pedido que los de la FEJUVE vengan para saber qué plan tenían, pero no han aparecido" (Pablo Vásquez, enero 2012).

La coordinación en el caso concreto de Santiago II, consistió en que ésta zona se ha unido con la zona de Horizontes y familias íntegras han salido a la defensa. Los "zanjeados", hoyos que eran cavados rápidamente, luego eran tapados por una moto niveladora que era acompañada por tanques y soldados "armados hasta los dientes. Ellos tenían orden de matar, por eso es que disparaban ráfagas" (Pablo Vásquez, enero 2012).

Cuando los vecinos quedaron sin comida, pensaron tomar el regimiento ex Tarapacá, una acción bastante arriesgada, ya que desarmados se tendrían que enfrentar a los soldados del ejército:

Atacar el ex Tarapacá era suicida. Mucha gente pero sin armas

"Ponte en nuestros zapatos no teníamos para comer, ya no había abastecimiento, dos opciones, uno ya nomás darnos por vencidos, la segunda atacar el Tarapacá para tener alimentos. Ellos que decían, vamos hasta las últimas consecuencias, y las consecuencias eran graves y en aquí en Senkata ha sido más grave. Hemos ido a pie caven aquí, para que no pase el ejercito. En la ex tranca han matado a un minero, y cuando han llegado los mineros, de noche han llegado a Santiago II, para recepcionar hemos sacado desde donde no había para su alimentación ellos han traído dinamitas y nos hemos envalentonado si vale la palabra. Quería minar tal parte. Otros saben pues. Ex mineros saben cómo hacer reventar dinamita" (Pablo Vásquez, enero 2012).

De acuerdo al relato de don Hernán Caita, hubo coordinación con otras zonas: "Sacando las rieles hemos hecho zanjas grandes, para que no vaya gasolina a ningún lado. Luego fui como comisionado en Cruce Villa Adela había reunión, me entrevisté con esos compañeros y con ellos y los de Senkata" (Hernán Caita, enero 2012).

Del mismo modo resalta que la radio jugó un papel importante en la unificación de la lucha:

“Yo creo que los de la radio han unificado las luchas, porque no había cabeza visible que estuviese de dirigente en la Guerra del Gas, por lo menos 15 días hubo ausencia de dirección, pero pasó y ya se hicieron las negociaciones y aparecieron los dirigentes, parece que han traficado con la Guerra del Gas” (Hernán Caita, enero 2012).

Es así que si bien se resalta una ausencia de coordinación por varios motivos –entre ellos que los dirigentes se encontraban perseguidos, por lo tanto muchos clandestinos– los entrevistados señalan la unidad que se dio, y que consideramos que es un elemento que no se debe dejar de lado:

“Gremiales, juntas vecinales hemos hecho la unidad, a ojo cerrado hemos hecho unidad, las bases, el pueblo. En cada esquina ardía fogata, primero ha empezado en distrito 8 a un niño lo han disparado y luego en Senkata en Ventilla (ha sido el detonante) el muerto, luego la Ballivián otro muerto, y distrito 5 se ha enfurecido, de ahí ha empezado. En 3 no había mucho muertos. En el puente Bolivia distrito 2 ha habido también” (Rafael Andrade, enero 2012).

Bases sobrepasan dirección

Un común denominador que sale en las entrevistas, recapitulando los hechos de octubre, es la importancia que tomó el vecino esas jornadas a través de sus respectivas juntas vecinales. El protagonismo de las juntas vecinales de cada barrio radica en que algunos entrevistados afirman que los dirigentes sufrían de persecución, por lo tanto desaparecieron o permanecieron ocultos los días críticos.

Inicialmente cuando la situación se podía controlar, los dirigentes de alguna u otra manera, funcionaron, pero luego las bases rebasaron a la dirigencia en la toma de decisiones, en las acciones a desarrollarse.

“En los últimos días de la Guerra del Gas, había una persecución a la dirigencia de la FEJUVE. Algunos se han tenido que declarar en la clandestinidad. Ahora eso ha funcionado hasta cierta instancia, hasta que las mismas bases estaban conscientes. Ha funcionado hasta que se ha dado la primera masacre en Senkata siendo el segundo día en el sector de Río Seco. Ya no era necesario controlar que zonas estaban saliendo. La coordinación era para saber qué día se baja a la ciudad, y las bases conscientemente se autorganizaban, se autodirigían, porque era un movimiento más de bases, que ha saltado toda decisión del Comité Ejecutivo. La cabeza Mauricio Cori quería retroceder y aplazar alguna movilización y las bases han tenido que sobrepasar esa dirección” (Carmelo Rodríguez, enero 2012).

Tanto la FEJUVE como los presidentes de cada junta vecinal fueron rebasados, *“También igual han sido rebasado, no tenían ni voz ni voto. Un ex minero ya ha fallecido, en Nuevo Horizontes, el ha liderizado en todo ese grupo”* (Pablo Vásquez, enero 2012).

Puede entenderse que dado el grado de conflictividad en octubre, los vecinos desconfiaran de la cabeza o dirigencia. La desinformación y confusión cundió aquellos días, pues varios entrevistados señalan el hecho de que los dirigentes pretendían traicionar a sus bases, negociando o manteniendo reuniones con Gonzalo Sánchez de Lozada:

“El vecino que incluso ha rebasado a la dirigencia. Incluso la cabeza se ha reunido con Sánchez de Lozada, Mauricio Cori y algunos dirigentes de la FEJUVE querían aplazar la movilización y en un ampliado se ha determinado que no se vaya a la cabeza de Mauricio Cori, sino a la cabeza de la COB Jaime solares, porque Mauricio Cori está queriendo traicionar. Hasta esas ha llegado las bases” (Carmelo Rodríguez, enero 2012).

Los actores de primera línea en la Guerra del Gas han sido los vecinos

Siendo que los alteños son a la vez gremialistas y vecinos lo que primó fue la identidad de vecino, de manera contundente lo sostienen:

“... porque la movilización no se caracterizaba a ser gremial o de los afiliados a la COR, lo que primó fue el vecino y esa movilización, esa negociación que hicieron los dirigentes no ha tenido efecto” (Carmelo Rodríguez, enero 2012).

La entrega y lucha de los vecinos ha sido de tal forma que las bases han dado el todo por el todo:

“Las bases han dado todo por el todo, imagínese había momentos en que teníamos que pelear con la policía y las personas mayores de edad tenían que cuidar los puntos de bloqueos, y jóvenes, señoras venían a la marcha. En el sector de hacia camino a Viacha, las mujeres estaban trenzando fabricando las korawas para que los barones puedan ir a pelear. Las movilización ha sido consciente, no ha habido sectores apáticos, pero incluso gente comprometida con el gobierno ha tenido que darse la vuelta y dar la espalda al gobierno, porque ellos ni reaccionaban” (Carmelo Rodríguez, enero 2012).

Cuando indagamos sobre el detonante para que la gente haya salido a enfrentarse con el ejército, la gente nos responde que fue una mezcla de defensa de los recursos na-

turales y la forma como el gobierno enfrentó el conflicto. La gente alteña salió en defensa en cada barrio cuando se desataron las primeras muertes.

“Yo representaba a la junta, hicimos varios, pero yo era el líder, poco a poco logramos la gente se fue concientizando de acuerdo a lo que ocurría en cada zona. Aquí ha sido el primer muerto de nuestra zona, porque de aquí a 2 kilómetros en la zona franca, murió el primer muerto de la Guerra del Gas, era el compañero Vargas. El era, vendía en la feria de la 16, y eso comenzó a elevar los ánimos caldeados de la gente” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Don Pablo Vásquez que era dirigente de Junta Escolar, cuenta que al inicio él no se unió a la movilización, porque creía que no era de su competencia:

“... como van a estar trabajando aquí, mientras nosotros haciendo el paro, para defender el gas, entonces hemos salido por una puerta y entrado por otra, no estábamos interesados en esa lucha, pero sucede que después han matado a una niña por el puente Bolivia” (Pablo Vásquez, enero 2012).

Don Pablo cuenta que él había reaccionado señalando que la niña que había sido muerta no pertenecía a la junta escolar y que entonces no era de su competencia, pero luego viendo las vigiliyas y cuando le explicaron que se estaba luchando por el gas, entonces él se unió a la lucha.

De manera interesante nos retrata don Pablo Vásquez el protagonismo de los vecinos y a la vez hace una crítica a dirigentes que sacaron réditos de la Guerra del Gas.

“Aparecen Roberto de la Cruz como grandes héroes cuando no han participado. El Roberto de la Cruz estaba escondido, era vicepresidente de la COR, ha desaparecido, la FEJUVE en primer momento hizo algo, la COR no había, y luego aparece el Roberto de la Cruz como héroe de las jornadas de octubre, y no era actor ni de segunda. Los actores de primera línea ha sido la gente los vecinos” (Pablo Vásquez, enero 2012).

Era una insurrección popular, nadie se quedaba en casa. Había turnos los que no salían en el día salían en la noche, casi de forma automática. (Hernán Caíta, enero 2012).

Rechazo a las políticas de Goni y masacre iniciaron la ira y enfrentamiento

Una mezcla de desazón, rabia, acumulación de injusticias son los elementos que explican y nos ayudan a entender, las jornadas de octubre.

Los alteños tenían claro el rechazo a las políticas de Sánchez de Lozada, especialmente al tema de la capitalización. Pero entre los hechos más inmediatos, las muertes

producto de la masacre acaecida esos días en Warisata conmovió a los vecinos de El Alto, porque muchos son migrantes de ese sector. A esto se suma las condiciones sociales deprimentes y de calidad de vida que existe en El Alto, que ha incentivado a que los alteños se movilicen.

Don Jorge Meruvia, señala que la gente estaba muy consciente de que había que movilizarse y pelear para que el gas no se venda y se quede en territorio boliviano. Fueron las muertes las que desataron directamente la demanda de renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada:

“Estaba en la gente, (la pelea) era para que no se venda. Y se pensaba que el gas tenía que ser para los bolivianos. Pero cuando ya se vio que la movilización de la gente en todas las zonas era grave, y había muertos, entonces ya se pidió la renuncia de Goni porque había matado ya tanta gente” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Don Jorge Meruvia relata y señala que en una asamblea se decidió pedir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada:

“Luego de eso, vino el momento de llegar a las conclusiones, la asamblea pidió la renuncia de Goni, nos hemos organizado todas las zonas para bajar a la ciudad, organizados totalmente, dar las instrucciones, tenían que tener por lo menos su refresco, bien planificado todo. Del norte, del centro todo bien planificado vino, la gente bajaba como hormigas abajo. No considero que haya sido la COB sino las juntas vecinales, y aproveché de la palestra el Solares porque este no hizo nada en este trabajo. Los que han manejando han sido las juntas vecinales. De abajo también las juntas vecinales se han movilizadas” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Por zonas la lectura de lo que acontecía fue distinta: don Pablo Vásquez cuenta que en el marco del entierro de la niña que había sido muerta, se hizo un juramento donde se prometió no descansar hasta lograr que el presidente renuncie:

“En el entierro de la wawita han hecho la promesa, juramento, pero ahí no han dicho, no han hecho agenda, el único pedido que se vaya Goni, y gas ni una partícula a Chile, eso no se ha cumplido. Teníamos contacto con el norte y hemos ido a pie y prohibido celulares, ni escribir, ellos han hecho lo mismo. O sea todo el pueblo alteño que ha participado en los entierros, han hecho el juramento, ahí la gente se ha enardecido” (Pablo Vásquez, enero 2012).

Es interesante la lectura que determinados dirigentes realizan sobre la Guerra del Gas, pues no es una lectura inmediatista la que hacen, sino se remiten y remontan a toda la década de 2000, y sostienen que lo acontecido en octubre, ya estaba efervesciendo

desde la Guerra del Agua en Cochabamba, y luego en El Alto se manifestó con el conocido “Febrero Negro” de 2003, una lucha entre policías y militares a causa del pretendido “impuestazo” que Gonzalo Sánchez de Lozada quiso imponer. Seguidamente el otro hecho resaltado es la masacre en Warisata de septiembre de 2003, para luego desembocar en octubre de 2003.

“Yo creo que esto estaba efervesciendo desde la Guerra del Agua en Cochabamba y luego febrero con los policías y militares, luego lo de los policías, colegio Ayacucho, y luego Warisata donde matan campesinos y luego El Alto y las bases” (Hernán Caíta, enero 2012).

Una revuelta gestada

De manera lúcida, los dirigentes sostienen que la Guerra del Gas se inició por otros factores, no empezó por los muertos que se fueron dando en el enfrentamiento con las fuerzas armadas del gobierno:

“La Guerra del Gas empezó por otros factores, no empezó por los muertos, se consolidó por los muertos. El Alto estaba esperando, no era la situación del momento, como el paya, maya. La Guerra del Gas ha sido la acumulación del descontento que se ha ido gestando paulatinamente. Y que se ha gestado por lo de Felipe Quispe” (Rafael Andrade, enero 2012).

Se suele encontrar también una lectura clasista cuando se les pregunta en El Alto contra quién peleaban? Era la policía, Paredes o el Gobierno el principal enemigo?, Don Rafael, identifica que los principales enemigos eran las clases opulentas, los dueños del país: “Lozada, Banzer, Prieto, los que definen quien va a ser presidente” (Rafael Andrade, enero 2012).

La señora Mónica Escalera por su parte señala –al analizar los móviles de la Guerra del Gas– que los problemas empezaron con los impuestazos de Febrero Negro, luego se vino lo del maya, paya, luego en octubre ocurrieron varias muertes y se pensó entonces en expulsar al gobierno.

“Empezó con los impuestazos y Febrero Negro. Luego vino el maya paya, ahí empezó en que en un ampliado se ha decidido y de ahí ha nacido no con la idea de pensar botar al gobierno y que haya muertos” (Mónica Escalera, enero 2012).

Sobre la movilización masiva de la gente don Rafael Andrade se expresa de la siguiente manera:

“Eso de los muertos ha sido ya responsabilidad del gobierno, y teníamos que salir sí o sí, estaban matando a mi hermano, yo no me puedo quedar encerrado. Y cuando han caído los primeros muertos ya era de corazón, no habían juntas vecinales, los vecinos de por sí salían y en las marchas los vecinos nos daban agua. Los de la zona sur, Chasquipampa, Palca han apoyado, ha habido muertos y enfrentamientos. Por villa Victoria distrito 2 los que más se han enfrentado era los borrachitos, y han dado valor para que la gente sigan” (Rafael Andrade, enero 2012).

Regocijo de la victoria de Octubre de 2003

En las entrevistas, charlas informales y grupos focales, la gente resalta que los piquetes de huelga que se establecieron en la hoyada reavivaron las movilizaciones en El Alto, puesto que como era de esperarse, cundía el desánimo ya que después de las masacres del 11, 12, 13 de octubre, la gente estaba cansada y querían regresar a la normalidad, querían que todo acabase pues ya se habían suscitado muchas muertes. Es así que los piquetes de huelga iniciados en la ciudad de La Paz, ayudaron a que la protesta se masificó, de gran manera se mostró al gobierno de Sánchez de Lozada que el descontento y la desaprobación por la forma como afrontó el conflicto, creció y ahora las clases medias también pedían su renuncia. El conjunto de movilizaciones en El Alto y en la ciudad de La Paz, lograron que el entonces presidente renunciara.

La algarabía fue tal que, bajo la consigna de “El Alto de pie, nunca de rodillas”, se celebró la renuncia de Sánchez de Lozada.

*“Fue impresionante. Todos salieron. **El Alto de pie, nunca de rodillas**, se cogió la consigna con otro espíritu, todo el mundo lloraba, feliz, y era una reacción. Subió Carlos Mesa y vino, y en el puente se lo reconoció como presidente y ahí apareció Abel Mamani”*

Una vez que hemos descrito cómo se vivió la Guerra del Gas en El Alto, ahora nos detendremos en mostrar la evaluación que nuestros entrevistados realizan del proceso de cambio, conducido por el presidente Evo Morales.

Con el Proceso de Cambio: “chasqueados hemos quedado”

Una de las indagaciones de la investigación se centra en desentrañar la percepción y evaluación que se tiene del proceso de cambio.

Aquellos entrevistados a los que accedimos sostienen que evidentemente en El Alto el 2005 ganó Evo Morales con una gran votación. Uno de los puntos por los que se le dio apoyo radicó en que él sostuvo que nacionalizaría los hidrocarburos, justamente uno de los puntos álgidos y delicados de la guerra de octubre de 2003. Como bien lo señala Don Carmelo Rodríguez:

“Evo Morales todos encantados con Evo y se pensó que él iba a reivindicar porque él decía que iba a nacionalizar también los hidrocarburos que ha aplastado el modelo neoliberal, pero ha habido por lo menos unos 3 años de encanto donde no podías cuestionar la política de Evo Morales, porque había mirada vigilante y vecinos convencidos de que era su presidente, que estaba nacionalizando y que todo lo que decía era verdad. Pero ahora los efectos son bien contradictorios, el desempleo es bárbaro, ahora prima el mercado internacional, los chinos están invadiendo nuestro mercado. La población se ha desencantado, de 10 vecinos de El Alto 7 están en contra de Evo Morales” (Carmelo Rodríguez, enero 2012).

De acuerdo a don Pablo Vásquez, uno de los puntos que no se cumplió en el gobierno de Evo Morales, fue la nacionalización, es un punto candente porque la Guerra del Gas tenía como principal demanda la defensa de los hidrocarburos, oponiéndose a su exportación. De esta manera, no se dio la nacionalización:

“... porque PETROBRAS está trabajando en tal parte, y ahí ni un boliviano trabaja, ahí ni el perro es boliviano donde está la nacionalización, hasta ahora no se ve. Hay la famosa nacionalización y con eso se iba a abrir polos de desarrollo, nuestro pedido era industrialización, todos nuestros recursos naturales. Todos debemos procesarlos y no salir nunca la materia prima, y se debe cerrar las fronteras, más bien lo han abierto de par en par” (Pablo Vásquez, enero 2012).

Es así que cuando se pregunta –en perspectiva histórica– si la Guerra del Gas valió la pena para la ciudad de El Alto, o si hubo algún cambio, nuestros entrevistados sostienen, “Chasqueados hemos quedado. Yo como actor de ese tiempo, como he visto como las madres de familia se han sacrificado no comían para dar a sus hijos. Mi hijo renegaba

para que tú te metes, estas de dirigente, ni te pagan, ahora no tenemos ni pan, que vamos a comer y ahora duele al ver estas cosas como... hemos dicho que haya polos de desarrollo, nada de nada” (Pablo Vásquez). Es así que una tendencia de los habitantes de El Alto podría centrarse en que se esperaba que existiese polos de desarrollo y un mayor desarrollo en El Alto.

Es así que algunos califican el cambio, como un cambio negativo “Hay algunas positivas pequeñas, paliativos, no están atacando a la raíz, están andando por las ramas, y nosotros hemos dicho no vamos a ir por las ramas, que cosas vamos a dejar a nuestros hijos” (Pablo Vásquez, enero 2012).

En retrospectiva Don Hernán Caita dice que la Guerra del Gas y los muertos no han servido para hacer el cambio:

“La Guerra del Gas, los muertos, heridos no han servido para hacer el cambio. Se ha hablado de revolucionar todo, pero nada ha cambiado, tal vez incluso se ha empeorado. Yo he participado de foros con amigos, donde se decía que las transnacionales están mejor que en los gobiernos neoliberales” (Hernán Caita, enero 2012).

Incluso han llegado a decir que este gobierno, Evo Morales ha traicionado a su clase

“El Alto su bastión le ha dado la espalda (a Evo Morales), y en la próxima elección va a votar por el que más le convenga. Este gobierno de Evo ha sido retroceso en cuanto a nivel político, hasta yo en el revocatorio cuando saca el 64% he votado por Evo y todavía seguía creyendo pero es más el ha traicionado a su clase” (Hernán Caita, enero 2012).

Existe una opinión común respecto al proceso de cambio. Para la gente, el que haya estado ausente Evo Morales de las jornadas de la Guerra del Gas, hace que se cuestione la permanencia del actual presidente en dicho sitio:

“No debería estar el señor Evo Morales en esa silla, él no estuvo en las jornadas de octubre, si le preguntaran en que sector él luchó y nosotros solitos se lo hemos trabajado para que salga presidente” (Rita Sánchez, enero 2012).

De esta manera, se da la percepción de que el actual presidente es producto de las luchas de El Alto. En este sentido, es interesante la relación que hacen respecto a la atención que Evo Morales debiera dar a El Alto:

“... y dentro de mi digo, nuestro presidente gracias a El Alto está donde está, y nunca se ha recordado hacer una buena terminal no tenemos, bien preocupado y lloro, lloro entre mis cuatro paredes” (Mónica Escalera, enero 2012).

Otra lectura novedosa es que la gente reconoce que las jornadas de octubre fueron aprovechadas por otros actores, pues existe la idea de que era la oportunidad de que el pueblo tome el poder. Para algunos cuyo pensamiento es de corte socialista, dicho momento era el apropiado para que partidos como el PS-1, o el POR tomase el poder:

“Ha caído él (Evo Morales) como paracaidista, la idea era cercar La Paz, tenemos que reconocer porque teníamos una cabeza y dirigirnos y tomar el palacio, el pueblo tenía que ser presidente, llegamos abajo y con un saludo a la bandera dimos media vuelta. Nos ha faltado un poco de dirección” (Rita Sánchez, enero 2012).

“Ha faltado ideología política, era oportuno que el POR o el PS1 tomen el poder” (Rafael Andrade, enero 2012).

Es así que reconocen que se votó por Evo Morales porque era la única alternativa, contraria a la derecha que quedó muy maltrecha después de dichos acontecimientos.

“Hemos votado por Evo porque no había otra alternativa. O era la derecha, no había otra opción” (Rafael Andrade, enero 2012).

Creemos que fue una mezcla de varios aspectos: como la identificación que se dio entre la gente de El Alto y el presidente Evo Morales “Evo es como yo”. A esto se sumó el rechazo a una opción ideológica de derecha, encarnada en Gonzalo Sánchez de Lozada, José Luis Paredes en El Alto, además sinónimo de saqueo de los recursos naturales pertenecientes a los bolivianos.

Una de las principales críticas radica en la participación de organizaciones populares, por ejemplo sostienen, que en la Asamblea Constituyente la participación de las organizaciones sociales y juntas vecinales hubiese sido ideal y no sólo que se hubiese podido participar a través de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, esto último lo consideran como una traición. El segundo aspecto es el tema de los hidrocarburos y su respectiva nacionalización. Se toman a pecho el hecho de que este gobierno haya enarbolado discursivamente la Revolución, con posibilidades de cambiar, pero no hubo nada de Revolución:

“Traiciones, la asamblea constituyente, el pueblo soberano podía participar a través de sus organizaciones, juntas vecinales pero que hace él (Evo Morales) dice ‘podrán participar partidos políticos y agrupaciones ciudadanas’. (...) si Goni negoció los hidrocarburos, él lo ha hecho mejor, nos prometió industrializar, nacionalizar, y menos se ha cumplido con El Alto, ha sido una segunda traición. El tenía el poder del pueblo, con miras de revolución, podía cambiar eso que le dio” (Rafael Andrade, enero 2012).

Antes era el Evo es como yo, ahora dice el Evo nos ha traicionado, o lo escuchan y dicen nos está dividiendo (María Velásquez, enero 2012)

Cooptación. Dos clases de dirigencia: la social, y la azul

La cooptación de las organizaciones sociales es uno de los problemas en la actualidad. Si bien la cooptación de la dirigencias se inició con CONDEPA hace décadas atrás, se esperaba que en el actual proceso de cambio, las dirigencias hubiesen sido y actuado de manera distinta:

“La dirigencia ha sido cooptada totalmente por el gobierno, primero que la COR a través de que ha conseguido cotas de poder, tienen al mando la alcaldía, favorecen al gobierno. Gremiales a la cabeza de (...) es cooptada por el gobierno. En último caso ha sido de que se ha organizado una coordinadora en defensa de El Alto, el año pasado a partir de agosto CODEDIPA se llama, y esto se ha organizado a través de un cabildo abierto, con vecinos, gremialistas, y han empezado a reclamar al gobierno, demandas para El Alto, han empezado a apoyar a la marcha del TIPNIS” (Carmelo Rodríguez, enero 2012).

Una de las críticas bastante fuertes de la actual FEJUVE precisamente es el de la cooptación. Los presidentes de las juntas vecinales se han convertido en serviles de la dirigencia de la FEJUVE y la prebenda:

“Ahora las juntas vecinales van a cooptar, lamentablemente los presidentes se han convertido en serviles de la dirigencia y la prebenda. Antes el dirigente era muy consciente con sus bases. El presidente de zona del barrio ahora ellos se adjudican las obras de los barrios, y el alcalde le dan las obras como forma de cooptación. El dirigente solo le interesa que se le adjudique la obra. Por eso la mentalidad esta distorsionada del dirigente” (Carmelo Rodríguez, enero 2012).

En cuanto a la cooptación, don Hernán Caita sostiene que ya varios alcaldes como Paredes y anteriores a éste iniciaron los procedimientos de cooptación:

“Todos son buenos con los dirigentes. Tanto así que los dirigentes están en estado de putrefacción, les llevan a comer a buenos lugares. Paredes inició eso de cooptar. Paredes se hizo grande por su situación. Las bases hacen caso a los dirigentes con Paredes. Ahora no, ya la gente sabe que los dirigentes viven de ser dirigentes. Como han agarrado el poder, un dirigente es más que un subalcalde. El presidente de junta vecinal tenía mucho poder” (Hernán Caita, enero 2012).

Uno de los errores que don Pablo Vásquez resalta es que la elección de candidatos en El Alto, fue de manera vertical, es así entonces que como éstos no fueron consensuados para ir en las listas y ser electos, existe una separación entre las bases y la dirigencia. Por ejemplo, lo mismo ocurrió con la elección de Patana, no han consultado a las bases. Como era máximo dirigente de la COR, un gremial⁷, la candidatura para la alcaldía recayó en Patana.

“Al Patana le han ofrecido la Alcaldía y ya no dice nada, obedece al partido de gobierno que le dio de comer, y no a sus bases.

Cooptación de dirigentes por el MAS, FEDEPAF, a él igual lo han tomado y ahora es diputado Choquetarki, ese no sabía ni el estatuto de la Federación peor en qué consistía un Ministerio. A él ahí estaba y lo eligieron el Isaac Avalos, también Álvaro García, y en ahí se le ha dicho estas cometiendo un error grande, agarrando dirigentes no vas a mandar así, (o sea tienen que consultar a sus bases). Después de otras cosas más, ellos han dicho no, él siempre tiene que ser y nosotros les hemos dicho, ese no sabe ni siquiera pensar, ‘el Álvaro dijo no necesitamos pensadores, sino levanta manos’ ” (Pablo Vásquez, enero 2012).

Nuevamente sale a la luz la crítica a la actual FEJUVE, Don Rafael Andrade se considera parte de los dirigentes contestatarios a los que no les dejan hablar, y critica de la intromisión del municipio y del gobierno central en los congresos de la FEJUVE. De manera muy ilustrativa Don Rafael Andrade señala que existe aún una dirigencia honesta, que tiene compromiso y por otra parte existe una dirigencia totalmente cooptada por los partidos políticos, hasta el punto de que algunos figuran en las planillas de sueldos de la alcaldía:

“Yo creo que si hay dirigentes contestatarios, pero que no los dejan salir a la luz. Hoy los congresos ya están financiados por el municipio local y gobierno central. Ya tienen los candidatos, los ejecutivos y subalcaldes se encargan de hacer esa tarea. Y los gobiernos no los dejan a los otros, el gobierno le va inventar cualquier tipo de calumnias. Estamos en época en la que el dinero ha comprado o tiene poder en las dirigencias. Hay dos dirigencias la dirigencia social, la que es pequeña y está en rangos bajos y la dirigencia azul, y mañana si entra el rojo será dirigencia roja, o si entra el MIR será naranja con azul” (Rafael Andrade, enero 2012).

⁷ Varios coinciden en que el estatuto de la COR es vertical, pues señala que por reglamento sólo un gremial puede ocupar la secretaría general o presidencia debido a que el sector gremial es el sector fundador y el más numeroso. Algunos opinan que está a la cabeza por ser el que cuenta con más afiliados, pero luego carece de ideología: “En realidad en El Alto eran los gremiales, se imponen y la COR es cualquier cosa porque se afilió a la COB pero nada de ideología tiene” (María Velásquez, enero 2012)

Contrariamente a aquella FEJUVE de imagen fuerte con la que emergió después de 2003, hoy en día –sostienen algunos exdirigentes– la FEJUVE no tiene moral, no tienen ni voz, ni voto porque ya nadie cree en la actual FEJUVE.

Como ha perdido credibilidad esta instancia, la percepción de los entrevistados es que ya la FEJUVE al ser politizada no reúne ni convoca a nadie. Como la FEJUVE ha sido politizada, ha perdido credibilidad.

“Ahora la FEJUVE convoca y ya nadie va, antes eran la Ley, ahora ya no porque la FEJUVE ha sido politizada, si no eres masista no tienes nada por esta razón la FEJUVE ya no es creíble, ni representativo porque de esas movilizaciones se han aprovechado de la ciudadanía para saltar a los cargos donde ahora están, eso han hecho Edgar Patana, Mamani y todos los que han pasado por ahí. Es como decir, ya no existe FEJUVE, sólo es nombre y es politizado” (Lilian Paz, enero 2012).

Divide y vencerás, el estado de división en El Alto

Una de las constantes en El Alto es la actual división en la que se encuentran las organizaciones sociales: por ejemplo hay tendencias de división dentro la FEJUVE, la FEDEPAF lo cual las debilitada. Juntas vecinales y distritales de educación no coordinan e incluso se “odian a muerte”⁸. Ante las peleas con la FEDEPAF, el distrito 8 ha creado su propia organización de nombre CODIJE⁹.

Como varios entrevistados, se coincide en que la división y la fragmentación han cundido en las organizaciones de El Alto y existe una fracción que es la que quisieran decir algo, y no puede “Hemos hablado pero no nos han dejado hablar, porque FEJUVE está fragmentada. Los dirigentes han sido cooptados. FEJUVE, COR están divididos, entre los que quieren decir algo y los del MAS” (Pablo Vásquez, enero 2012).

Ante la interrogante de si en algún momento a futuro, las juntas vecinales reaccionarán frente a la manera cómo actúa la FEJUVE, don Pablo Vásquez considera que existe una anulación del vecino: “Estamos anulados por tanta división, va a reventar algún momento. Antes de la elección le hemos dicho este dirigente no sirve, este dirigente no sirve” (Pablo Vásquez).

La expresión “va a reventar en algún momento” nos remite a que habrá una reacción, un reclamo de las bases, una sanción hacia los dirigentes. “Ha descabezado, ahorita estamos como león dormido, pero ya nos estamos dando cuenta de muchas cosas (a pesar

8 Así se refirió Don Rafael Andrade a la relación entre la junta vecinal y la distrital de educación.

9 Consejo Distrital de Juntas Escolares del distrito 8.

que casi no he participado en las reuniones) gobierno escuchando al pueblo dice, pero a qué pueblo gobernará” (Pablo Vásquez, enero 2012).

Asimismo, hacen una lectura en el sentido de que con Paredes estaban –en lo que se refiere a la realización de obras– bien, y que votaron por el MAS por una cuestión ideológica, Paredes era aliado de Gonzalo Sánchez de Lozada, y eran de derecha. En la actualidad opinan que Patana no tiene experiencia, suspende obras, en fin si se nota que falta gestión y ejecución.

¿Cómo funciona la cooptación?

Se ha tenido que construir un aparato grande, complejo que funciona desde arriba. Los entrevistados sostienen que determinadas personas como el secretario general de la alcaldía, siempre se ha mantenido en el poder. Incluso –como en muchos casos– esta persona blasfemaba a Evo Morales tratándolo de narcotraficante. Hoy en día es el más masista de los masistas y es quien recibe los porcentajes (no estipulados) que se tiene de cada obra de acuerdo a lo señalado por los entrevistados.

“Se ha hecho un aparato grande. Porque siempre (...) siempre está en el poder. Antes de que Evo este en el poder, el decía Evo es un narcotraficante, ahora es más masista que los masistas” (Hernán Caita, enero 2012).

Por otro lado las subalcaldías cuentan con 200 mil bolivianos de libre disponibilidad para adjudicar obras

“La subalcaldía tiene 200 mil bolivianos de libre disponibilidad para adjudicarse obras y que han hecho los ejecutivos para adquirir obras, una comidita, unas cervecitas, y lo que han hecho es que se han hecho empresas constructoras y para adjudicarse el adoquinado, aceras, y se está manteniendo así. Y eso lo que están relacionados con el ejecutivo” (Hernán Caita, enero 2012).

De este modo, las direcciones vecinales, las sindicales se encuentran prebendalizadas, claro que no todas las juntas vecinales tienen sus microempresas, sino hay un núcleo de poder económico que viene desde (...), él ha sido el autor de todo esto. La Señora María Velásquez sostiene que este mecanismo de prebendalismo se arrastra desde CONDEPA

“Desde la época de CONDEPA era así, porque en esa época 2001 era dirigente de estudiantes de nocturno de secundaria. Ahora ese sistema de cooptación de dirigentes a través de microempresas es obra de CONDEPA que han cooptado, grupos de choque, articulado direcciones de esa manera, y con Paredes se mejoró, perfeccionó el método de cooptación, que los llevaba al

lago a los dirigentes, y el grupo de dirigentes que tenían sus microempresas” (María Velásquez, enero 2012).

La forma como se procede es que el secretario general de la alcaldía coordina con los subalcaldes directamente, “y según ley el subalcalde no es nombrado por el alcalde, sino son elegidos en las asambleas distritales. Las juntas vecinales en el distrito eligen, y luego el alcalde lo posesiona nomás ya”. (Hernán Caíta, enero 2012)

“Las 200 juntas vecinales no pueden tener su microempresa, sino hay un núcleo con poder económico que viene desde (...), él ha sido el autor de todo esto, ha enraizado de tal forma el poder el (...), que él sabe a quienes van a hacer microempresas. En los ampliados de las 200 juntas vecinales del 8, dominan 25%, no veo que llegue a 100 presidentes sino los que van son los más allegados a (...). El subalcalde le rinde pleitecía a (...), ni César Loma, desde arriba el (...) amarra con uno, para botarle a la Fanny Nina, y ahí como sobreviven esos 100 y los 200 tal vez, porque no los 200 no reciben obra” (Hernán Caíta, enero 2012).

No todos los presidentes de juntas vecinales pueden tener microempresas, sino que la forma como ganan de las obras es que les llega el diezmo “los famosos diezmos le llega al presidente de la junta. Porque las obras están con sobreprecio y le llega al presidente de la junta. Ejemplo está duplicando la obra”. (Hernán Caíta, enero 2012). Existe una persona que es la que “agarra” o se adjudica las obras de todas juntas vecinales, y este tiene que dar cierto porcentaje a quienes le ayudaron a que se adjudique una obra. Por otro lado la aprobación de las obras, todas pasan por las manos del Secretario general de la alcaldía, por lo tanto dependiendo los distritos, hay obras que se aprueban en seis meses, y otras que en 2 o 3 años no se pueden aprobar.

La FEJUVE de hoy

La FEJUVE inicialmente cumplía un papel contestatario, en su último congreso tal como cuenta don Carmelo Rodríguez, sacó resoluciones importantes, incluso señala que se calificó al actual gobierno de neoliberal, proimperialista, colonialista, pero la cooptación pudo más que los preceptos y principios, al punto de que la FEJUVE tiene ganado el Ministerio de Agua, como cuota de poder. Ha habido situaciones como el gasolinazo, en el que los vecinos de base fueron quienes con una autorganización hicieron que el gobierno retroceda.

“Entonces esa FEJUVE no reivindica las ideas de las bases ni de sus afiliados. Esa dirigencia está dispuesta al servicio del gobierno” (Carmelo Rodríguez, enero 2012).

Don Jorge Meruvia, hace su evaluación sobre la FEJUVE señalando que lo que hace falta es que exista una ideología política, porque se ha politizado de tal forma esta instancia organizativa, que los dirigentes sólo buscan el interés personal, la consecución de objetivos individuales y personales.

La historia de la FEJUVE ha estado permeada de constantes divisiones. Llegó a existir dos sedes de la FEJUVE, y fue don Jorge Meruvia que fue nombrado presidente de juntas vecinales de todo El Alto, quien convocó en aquel entonces a un congreso de unidad.

“Yo he sido el presidente de presidentes de las juntas vecinales cuando había división el 89 más o menos. Se llegó a dividir un sector que apoyaba a Paz Zamora porque Paredes era de ese partido, y otro de CONDEPA, había dos juntas. Nosotros hemos hecho una reunión, y me nombraron presidentes de todo el Alto, y convocamos a congreso de Unidad, y logramos la unidad hasta ahora ha habido divisiones pequeñitas, por desconocimiento a la presidente, pero en sí una división en que funcionaban dos FEJUVE” (Jorge Meruvia, enero 2012).

En perspectiva haciendo una evaluación de la Guerra del Gas, podríamos afirmar que la victoria de Evo Morales y la implantación del proceso de cambio ha sido una consecuencia de la Guerra del Gas. Por tanto, Evo Morales es producto de la lucha de El Alto.

Los entrevistados hacen la aclaración de que algunos personajes de la política actual, sacaron réditos de la Guerra del Gas. Entonces la lectura de la victoria de Evo Morales y el apoyo que El Alto le da a Morales radica en otros elementos, como la extrapolación del “gringo y los otros que se llevaron los recursos” versus “un campesino que también puede gobernar”.

“En la Guerra del Gas no estaba Evo, no estaba Roberto de la Cruz, ni Felipe Quispe (el estaba oculto en la Radio San Gabriel) haciendo una huelga, no había, han aparecido ellos y ha aparecido Evo creo que estaba en Cochabamba. El problema era que Mesa se ha equivocado en su gobierno de un año, y no ha nacionalizado y prácticamente ha entregado todos los recursos a la ciudad y no ha hecho nada por El Alto. La agenda de octubre no ha hecho nada por El Alto. De ahí nace Evo, frente a los candidatos de entonces, ¿Quién más?, yo también he votado por Evo, no había otro, y creo que el problema de desquitarse era del gobierno, porque no había nadie. Mostrar de qué había campesinos que podían. Yo como socialista hubiera querido que vaya un obrero, pero el movimiento obrero estaba deshecho, así que vaya un campesino era también una victoria políticamente, así que la clase media

también vota por Evo, porque la gente se ve frustrada por los otros presidentes, Banzer, Mesa, Goni, Paz Zamora, ha sido frustrado, porque todos los recursos se han ido” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Pero en la actualidad la gente de El Alto se siente desencantada con el proceso de cambio llevado adelante por Evo Morales, especialmente en los últimos dos años. Aunque cabe aclarar que la desaprobación no es total, pues también nuestros entrevistados resaltan aspectos que se pueden rescatar, como la mal llamada nacionalización que permite que existan los bonos sociales que de una u otra manera están dirigidos a la gente pobre. Un elemento simbólico que indican es la presencia de gente de pollera, indígena y popular en el parlamento, respecto a décadas anteriores en que personas de corbata ocupaban los curules parlamentarios:

“Evo logró mayoría con el sector campesino y clase media, nunca en la historia un presidente logró ese apoyo, y en su reelección ha sido alto. Evo demostró muchas cualidades, cosas. Lo que yo debo decir es que Evo no hace nada hace 2 años. No está haciendo nada, solo atiende al sector campesino, y aquí no hace nada.

Lo único bueno ha sido el asunto del gas, no es nacionalización, pero que ha logrado recursos si ha logrado, que está dando a los pobres, que ha cambiado el parlamento ha cambiado, como antes el parlamento todos de corbata y ahora están los ponchos, guardatojos. Mi partido ha estado de acuerdo con el proceso de cambio y nosotros apoyamos al proceso de cambio no a Evo” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Basado en la experiencia de haber ejercido la presidencia de la junta vecinal de Santiago II, don Jorge Meruvia, nos habla de que desde que dejó su cargo, 5 presidentes han ocupado la presidencia de la Junta vecinal, y que han encontrado incluso hechos de corrupción:

“Han encontrado visos de corrupción se vendían las obras, otros incapaces. El problema de las juntas vecinales es que se han vuelto corruptos. En mi zona han encontrado que había recibido 120 mil bolivianos y la misma empresa le ha denunciado. No hay conciencia política y hay más prebendalismo e interés personal, en la mayor parte de las zonas hay esos problemas” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Es así que para este dirigente minero, que ahora radica en El Alto, la presencia de una conciencia política es fundamental, caso contrario sólo se cae en la corrupción, porque el móvil u horizonte que los dirigentes tienen es netamente personal.

Participación de los vecinos en otras movilizaciones

Cuando se aborda el tema de la existencia y participación en otras movilizaciones, cuesta que emerjan otros referentes además de la Guerra del Gas de octubre de 2003.

Sin embargo en 2005, durante el gobierno de Carlos Mesa, se llevó a cabo una movilización en la que se pidió a la transnacional Aguas del Illimani –que se dedicaba al servicio del abastecimiento de agua– que se vaya del país. Es así que los entrevistados recuerdan a la misma como una movilización local en la que cada barrio movilizó no más de 30 o 50 personas.

“Con Carlos de Mesa, se ha pedido que se vaya la transnacional Aguas del Illimani, y paralelamente se pedía la nacionalización de los hidrocarburos. Está en el pliego petitorio. Inclusive primero era el tema de los hidrocarburos y luego el tema de Aguas del Illimani. El 2005 ha sido eso” (Carmelo Rodríguez, enero 2012).

Después del 2003, las movilizaciones que se han dado se han centrado en demandas locales, como el tema de la subida del pasaje de parte del autotransporte, en esta ocasión se decreto un paro de 24 horas, pero que no fue acatado con mucha intensidad. La última movilización coincidió con la marcha de la CIDOB iniciada en agosto del 2011.

Un aspecto interesante que señala Don Jorge Meruvia se refiere a la movilización de la gente, puesto que la gente sale a las calles a reclamar y demandar mientras tenga que resolver aspectos prácticos como: la consecución de gas, alcantarillado, agua. Entonces las peleas y movilizaciones son sectoriales con el fin de conseguir estos servicios básicos, pero una movilización que haya generado la unidad sólo se ha dado con la Guerra del Gas.

“El problema ha mejorado, la gente se movilizaba para que a su zona llegara el gas, lo importante era que haya gas, es que tenga que haber agua y alcantarillado, eso se debía priorizar en algunos distritos. Esas peleas han sido sectoriales, aisladas, pero una pelea como la Guerra del Gas, conjunta, unida no ha habido, ya son peleas aisladas. Por ejemplo nosotros ya no recuerdo habernos movilizado” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Para otros entrevistados, la Guerra del Gas se constituye en el conflicto por excelencia, razón por la que luego vino una paz total y las cosas han mejorado en el país, especialmente con el IDH, ha habido más dinero para obras.

Un momento de movilización con el fin de que la nueva CPE trabajada en la Asamblea Constituyente sea aprobada, es traída a la memoria por Don Pablo Vásquez, “Si, yo recuerdo que se ha salido masivamente cuando nuestro presidente actual Evo Morales

se le ha aclamado y eso era para aprobar la NCPE, ahí ha venido don Macario Tola, que era de la bancada de La Paz, era constituyente. Para presionar la aprobación conscientemente, presionan para la aprobación cuando vienen los ponchos rojos. Esa movilización fue movida por Macario Tola” (Pablo Vásquez, enero 2012).

“No hay norte en la organización, hay que formar a los jóvenes”

Una vez realizado el balance y evaluación del proceso de cambio, y la situación de la FEJUVE como principal instancia de organización urbana, nos centraremos en presentar las percepciones respecto a aquellos aspectos que la instancia urbana puede mejorar.

La renovación de la dirigencia se constituye en uno de los elementos sobre los que se debería trabajar. Asimismo darle otro cariz a la forma de ejercer la dirigencia.

Para don Jorge Meruvia tiene que haber un cambio en la dirigencia y anteponer los intereses del colectivo a los personales. La FEJUVE debe dejar de ser un espacio en el que se proyectan determinadas personas con fines políticos, tal como sucedió con Abel Mamani. Hay muchas necesidades aún que resolver en El Alto, abocarse a ello.

“Tienen que cambiar y no ir a la pelea personal, mucha pelea hay en la FEJUVE porque quieren proyectarse. Cual el problema de Abel Mamani, se ha proyectado ahora está en el MSM, tráfuga. Uno cuando entra a la presidencia es para servir a la zona, no a uno mismo ni a la calle de uno.

Las juntas vecinales tienen que cambiar en su conducción del movimiento vecinal, tiene mucho que hacer en El Alto. Nos falta mucho para zonas. No tenemos un centro comercial para que nos tengamos que abastecer de muchas cosas y no ir abajo. El problema del aeropuerto es serio. El problema de la terminal que hasta ahora no se hace. Eso es culpa de ellos, no le ponen seriedad. La FEJUVE tiene que cambiar la manera de conducirse, porque muchas gente lo conduce para beneficio propio, y lo conduce la gente aymara, que son para mí muy personalistas y no tienen posición política firme son indigenistas. Yo soy minero del Consejo Central Sur Quechisla somos muy honrados, dados al trabajo, somos diferentes, y siempre hemos sido así” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Asimismo como los subalcaldes son un eslabón de la corrupción, don Carmelo Rodríguez nos dice que podría anularse el nombramiento de los subalcaldes por parte de los vecinos.

“Tiene que haber una renovación y otra forma de hacer dirigencia, tal vez anulando que los mismos vecinos ya no nombren a los subalcaldes. Los vecinos nombran a los subcalde y este es representante del alcalde, del Patana,

del MAS, ese subcalde está obligado a conceder a quienes le han elegido”
(Carmelo Rodríguez, enero 2012).

Don Carmelo analiza que El Alto ha sufrido todo un proceso de despolitización lo que ha desembocado en un retroceso, pues ya no hay reacción de la gente, refiriéndose a reclamos, demandas, y no hay grandes debates en los distritos:

“La despolitización de las bases en El Alto ha causado un retroceso, ya no hay reacción, ya no hay debates grandes en los distritos o ampliadados zonales, tenemos que luchar ya no hay eso. La necesidad va a ser que haya una nueva autorganización de los vecinos no va a haber otra”
(Carmelo Rodríguez, enero 2012).

Don Hernán Caita se refiere a los jóvenes como los más propensos a corromperse y direccionar equivocadamente la organización. Contrariamente habían pensado que los jóvenes podían hacerlo mejor, pero al parecer se han corrompido. Don Hernán reflexiona y sostiene que ahora hay el pensamiento de que la dirigencia da ganancia y ya no hay memoria de lo que se hizo.

“... yo hablaba con Rudy que también está al margen de las direcciones, él me decía, como hemos confiado en los jóvenes, estos los van a ser mejor, y los que hemos estado en la lucha no son corrompido, ahora en la FEJUVE que nos digan los jóvenes (o nos diganelijamos a los jóvenes) vamos a decir que se han aplazado. Voy a sacar mi título y a mí nadie me puede decir nada. El dejar a los jóvenes, en el último congreso yo he sido presidente de la comisión de desarrollo humano y social, yo he incentivado (para que vayan jóvenes a la cabeza) pensando que había conciencia de lucha, pensando que había compromiso social, había que formar antes” (Hernán Caita, enero 2012).

María Velásquez lúcidamente resalta dos elementos fundamentales que se necesita, una mayor conciencia social con la que cuentan los mayores, o gente que ya ha pasado por la dirigencia. Por lo tanto el tema pendiente en la dirigencia es de índole político.

“Lo que no hay es una base ideológica o conciencia mínima social que tienen los mayores, luchamos son por luchar un cargo sino luchamos porque cambien las cosas, por eso hay frustración por las direcciones, para que haya fuentes de ingreso, salario. Los mineros, ahora lo que la gente piensa es me voy a aprovechar del cargo y me puedo aprovechar para comprar un auto, una casa” (Hernán Caita, enero 2012).

Es así que existe un grupo de dirigentes, que no son tomados en cuenta, y que representan a la disidencia o a quienes “quieren decir una voz contraria al MAS” dentro de las organizaciones alteñas.

“Lo que yo veo es qué vamos a hacer ahora hay que jugárselas, hay jóvenes Rudy me invitó a esa reunión y yo analizando con profesionales que es otro grupo, se ha perdido la conciencia y en nosotros no se ha perdido la autoconciencia y tenemos la razón, no se ha acabado todavía porque estamos vivos, ya conociendo las cosas” (Hernán Caíta, enero 2012).

En el desempeño de la dirigencia, juega un rol principal la verba y hoy en día se fijan si es profesional la persona elegida. A pesar de esto María Velásquez opina que lo más fuerte en los últimos años ha sido la cooptación política.

“En el último tiempo lo que más ha pesado es la cooptación política. En el congreso se dijo que había dos frentes del MAS por si acaso y perdieron y ganó Fanny Nina, hay mucho del tema de la cooptación, pero como hay el tema de proceso de frustración, si el Evo no es universitario, bachiller, incluso los chicos ‘para qué voy a estudiar si el presidente no tiene ni título, entonces no necesitamos título para ser presidente’ ” (María Velásquez, enero 2012).

De esta manera uno de los ámbitos en los que hay que trabajar es en la formación de los jóvenes: “No hay norte, no hay norte y vamos a tener que volver a formar a los jóvenes” (Hernán Caíta, enero 2012).

Santiago II: Remembranza de las minas en la ciudad de El Alto

Antecedentes

La urbanización Santiago II fue fundada a partir de la construcción de viviendas que impulsó el Consejo Nacional de Vivienda el año 1968; sin embargo la fecha de fundación es el 7 de septiembre de 1972, tras la entrega de casas y primeras viviendas a favor de trabajadores mineros. Es necesario indicar que se entiende como fecha del aniversario de esta zona el 25 de julio de cada año, porque en esta fecha se rinde homenaje y se recuerda al Apóstol Santiago patrono de Villa Santiago II.

Asentada sobre los terrenos de la comunidad Cupulupaca, sobre una extensión de 87 hectáreas, los primeros años de su existencia no tuvo una gran población, pero los que ya se habían asentado lucharon para conseguir servicios de agua y luz, con las organizaciones vecinas, que desde ese momento contó con una fuerte participación de ex dirigentes mineros. A partir de 1985, el barrio recibió a un gran número de personas provenientes de las minas, quienes también tuvieron que organizarse en “cooperativas” para conseguir los servicios básicos (Flores, et al., 2007: 36).

Antes de la llegadas de los mineros a Villa Santiago II, esta zona se constituía en el más conocido campo deportivo, porque en su cancha se libraban los más colosales campeonatos de fútbol, en 1972 se dieron las primeras llegadas mineras y con la promulgación del decreto 21060 y la mal llamada “relocalización” familias íntegras de mineros arribaron a esta zona cargados de ilusiones y esperanzas, y en su trajín fueron forjando el futuro y moderno campamento minero en la ciudad más joven de Bolivia. El Alto. Después de su fundación en 1972, Villa Santiago II nace a la vida institucional el 28 de febrero de 1979 con la aprobación de su planimetría de parte de la alcaldía de El Alto, fue a partir de 1985 aproximadamente que la zona se expande aceleradamente, tornándose imperiosa la construcción de nuevas viviendas, aunque muchos ya contaban con ellas, adquiridas hace bastante tiempo a través de planes de vivienda del entonces Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI). En los posteriores años hasta hoy son más de 35.000 habitantes que están asentados en esta zona sobre un diseño urbano particular.

La organización vecinal de Santiago II consiguió el acceso a los servicios, la construcción de escuelas, el pavimentado de avenidas, la instalación de un retén y la construcción de una guardería, una sede social donde funciona actualmente una biblioteca y la plaza del minero. Esto hace que Santiago II sea uno de los barrios en El Alto con aceptable infraestructura y acceso a servicios (Flores, et al., 2007: 36).

En los barrios investigados, hubo tres instancias de organización: junta vecinal, los jefes de calles o comités de movilización, como instancia intermedia y los vecinos y vecinas de base directamente (Flores, et al., 2007: 39).

La zona Villa Santiago II está enclavada en la zona sur de la ciudad de El Alto, tiene una extensión de 874302 m², se encuentra a 15 minutos de la Ceja de El Alto, geográficamente limita al Este con la zona Rosas Pampa, al Oeste con las zonas Elizardo Pérez y Nuevos horizontes, al norte con las zonas Villa Bolívar E y Villa el Carmen, al Sur limita con la zona Nuevos Horizontes. Santiago II se constituye en una zona de muchas importancia por su población con más de 25.000 habitantes, la mayoría residentes mineros, de los cuales el 48% son varones y el 52% mujeres y por su extensión territorial, los servicios básicos con los que cuenta son producto del sacrificio propio de sus vecinos, como el agua, energía electrónica y el alcantarillado, las pocas obras que existen no tiene relación con su dimensión y población en relación a otras zonas.

Muchos como pobladores de la zona, algunos de edad muy avanzada, desde muy temprano concurren a esta plaza. De por medio siempre están las conversaciones nostálgicas de un pasado que siempre fue bueno. De tanto en tanto dirigen sus miradas hacia el monumento al minero y a la palliri, erigidos como símbolos patentes de lo que fue la genuina clase proletaria.

Actividad principal

Un buen porcentaje de la población de esta zona está constituida por rentistas mineros, que viven de la renta mensual que perciben.

El asentamiento minero aquí representa el 80%. La actividad laboral está diversificada y la mano de obra calificada está siempre ávida.

Se realizan asambleas vecinales de las que surge el programa de obras y su posterior ejecución.

Otro porcentaje de la población de esta zona está conformada por funcionarios público, otro segmento poblacional de esta zona se dedica al comercio y a una variedad de negocios, un buen porcentaje de pobladores son trabajadores independientes, albañiles, vendedores, etc.

La idiosincrasia y la forma de vida de esta zona resaltan en sus costumbres tradicionales. Días festivos como carnaval, Semana Santa, Todos Santos y otros de orden religioso se celebran al puro estilo minero. Un acápite importante lo constituye la entronización del Tata Santiago, el 10 de julio del 2006, como patrono esta zona, en la parroquia de Villa Santiago II.

a. Infraestructura educativa

Un aspecto prioritario, como es la educación escolar, se desarrolla en medio de graves deficiencias. Son pocos los centros educativos. Aquellas ubicadas en sectores circundantes no reúnen condiciones mínimas de funcionalidad; a donde la mayoría de los niños asisten “cargados” de sus banquitos y escribiendo en los cuadernillos asentados en sus rodillas. Lo peor para ellos es soportar las inclemencias del tiempo, pues muchas aulas presentan agujeros, y las ventanas sin vidrios.

b. Campos deportivos

En cuanto a la infraestructura deportiva, las campañas políticas preelectorales han favorecido para la construcción de algunos campos deportivos, puesto que los recursos de la junta de vecinos habrían sido insuficientes para este propósito.

c. Salud preventiva

La Prefectura del Departamento, a través de su departamento respectivo, implementó un Centro de Salud para esta zona, pero la atención está reducida a solo ocho horas.

d. Seguridad ciudadana

Es el punto más neurálgico. Santiago II está considerado como una de las zonas de mayor peligro de El Alto. Las pandillas y grupos de bandoleros aterrorizan a la población. Los atracos son permanentes y la policía simplemente no existe, apenas un retén alejado con tres efectivos que de vez en cuando efectúan rondas nocturnas.

e. Servicio de transporte

El servicio de transporte a esta zona también es deficiente. Los habitantes de esta zona se desplazan a través del sistema de transporte constituido por minibuses y taxis, los principales son los minibuses que hacen el recorrido desde la Ceja hasta Santiago II, entre esas líneas podemos mencionar 203, 260, 263, 695, 710, además existen taxis que ofrecen sus servicios en esta zona. Esta zona cuenta con líneas fijas telefónicas y sistema de televisión por cable e internet como medios de comunicación.

f. Saneamiento

La red de distribución de agua potable alcanza a la población toda, mientras la conexión domiciliaria del sistema del alcantarillado tiene dificultades en su cobertura. Asi-

mismo el alumbrado público tiene muchas deficiencias y está ausente en varias calles y avenidas.

La Junta Vecinal de Santiago II

En este apartado haremos una exposición de la junta vecinal Santiago II a partir del relato de algunos de sus habitantes principalmente y de entrevistas individuales que mantuvimos con otros vecinos.

Un sábado 28 de enero de 2012, por la tarde pudimos reunirnos en un local “salón de té” de la zona a algunos vecinos de la zona. Así se presentaron ellos:

Sabina de la mina Colquiri, aunque ella es “quimeña”. Con la relocalización de 1985 llegó a Santiago II y desde entonces vive en la zona. Es ama de casa, no ha desempeñado ningún cargo.

Lilian Paz Quiroga de Catavi - Siglo XX, nació en Llallagua. Cuando terminó el colegio vino a La Paz en 1976 para continuar estudios superiores y desde el 2000 vive en El Alto. Hizo cargos en La Paz y en El Alto durante la gestión de Tito Marca (2004-5) como secretaria de vinculación femenina y ahora es Delegada de la calle.

Patricia Pérez de Oruro, su familia vino a La Paz en 1968. Ella vive en el Alto desde 1980. Es profesora jubilada que trabajó en diferentes zonas de El Alto y se jubiló en un escuelita de Santiago II. Ha sido delegada de calle en la gestión del Sr. Mamani.

Jorge Meruvia viene del Consejo Central Sud, tupiceño de nacimiento. Vive en la zona desde 1978. Ocupó cargos sindicales y en la zona fue presidente en 3 oportunidades, 1978 - 1980; 1982 - 1984; 2003 - 2004.

Tito Marca, orureño, trabajó en Colquiri desde sus 12 hasta sus 42 años, también en minas privadas. Llegó a Santiago II desde 1992. No ocupó cargos sindicales, en la zona ha sido secretario de Participación Popular en la gestión de Jorge Meruvia (2003/4) y el 2005 fue presidente. Tiene 60 años. (recibió su bono dignidad por primera vez en este enero).

Organizaciones que existían en la zona

La señora Nivia Soto López radica en Santiago II desde 1976, ya que se consiguió una transferencia de Minas del Sud, de la empresa minera Quechisla de la sección siete Suyos, “me vine a trabajar como encargada de farmacia a la Oficina Central de aquí. Hemos sido, quizá 20 familias, las primeras que hemos estado habitando en esta zona y hemos logrado algunas mejoras, el agua, la luz, la movilidad pueda venir hasta acá, en los primeros momentos de nuestra permanencia aquí” (26/01/2012).

Doña Patricia Pérez recuerda que desde que se vino allá por 1980, no había casi nada en Santiago II, no había luz, agua. Ella recuerda que gracias a Simón Yampara se tuvo luz en la zona. Ni qué decir del agua, solían trasladar desde la escuelita antigua. Respecto al papel de Simón Yampara, existe otra percepción de don Jorge Meruvia, para quien “el inmigrante Sr. Yampara cuando era ministro ha hecho llegar luz y teléfono a su casa, olvidándose del resto” (28/01/2012). De esta manera, aseguró que al vivir en la zona don Simón Yampara si aprovechó para equipar su casa con los servicios como línea telefónica.

La zona ha empezado a crecer con la relocalización, acota don Jorge Meruvia. Él recuerda que como los relocalizados eran mineros de distintas minas, pero se conocían de todas formas, realizaban reuniones con el objetivo de conseguir los servicios básicos:

“Había reunión de los vecinos, pero era como familia, no había discusiones; se reunían para lograr objetivos, como la luz, el agua que se traía desde la fábrica de Induwares. La única movilidad que venía hasta el cuartel era el 22. Luego logramos introducir la luz hasta el mercado, había un solo poste y de ahí se podían sacar la gente con cables; hasta ahí se vivió en una miseria, ahí se construyó, una escuela, un mercado. Los primeros presidentes, yo vivía como residenciado por el problema político, se han preocupado de la luz, el agua y de muchas cosas, nosotros hemos sido presidentes cuando todo ya está servido, no podemos decir que nosotros hicimos esos trabajos. Yo recuerdo que en mi primer periodo hemos hecho el alcantarillado, pero gracias al trabajo de los anteriores de algunos presidentes. Los presidentes más antiguos eran Don Mateo Navarro, Sr. Laura, no se puede olvidar de esta gente que realmente ha peleado” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Olas migratorias: “una avalancha de emigración con la relocalización, 1986”

Reconstruir el proceso de poblamiento de la zona no es tarea fácil, nos debemos basar en los recuerdos no lineales, desordenados porque los recuerdos emergen de tal manera. Es así que entre las olas migratorias, los entrevistados recuerdan que la zona ha empezado a crecer con la *relocalización*, momento en el que se logró muchas cosas, pues recuerdan que las casas cuyo piso era de tierra, las mejoraron. Don Jorge Meruvia recuerda que:

“Las cooperativas mineras han comprado aquí los terrenos, aquí están concentrados todas las minas hasta Catavi, Siglo XX, Huanini, Colquiri, Consejo Central Sur, Viloco, Caracoles, Coro Coro, Pulacayo y todas los mineros concentraban en cooperativas, y se han comprado lotes o han comprado sus casas o como el caso mío ha hecho la central de vivienda minera, pero eso fue antes del 21060. Con el 21060 han hecho trasladar las casas en precarias condiciones aquí, no se contaba con agua, luz, transporte nada.

El 80 esta zona ha empezado a crecer con la relocalización. La relocalización ha logrado objetivos grandes, nuestras casas eran pura tierra, lodo, ahí hemos empezado a mejorar nuestras casas. Yo no he sido relocalizado, yo me retiré el 88 recién. El traslado de la gente desde las minas de Catavi, Siglo XX, Colquiri, Huanuni, (...) era más rápido porque esos lugares estaban más cerca, en cambio del Consejo Central Sud ha sido más difícil. Vinieron de los centros mineros, sobre todo privados” (Jorge Meruvia, enero 2012).

La señora Lilian Paz, interviene y puntualiza entonces que el 76, cuando tenían que marcar los terrenos, era una zona deshabitada y el 86 se ha dado una avalancha de emigración de los centros mineros.

En el año 76, cuando vine por 1ª vez a Santiago II, era vacío. Mi papá vino a recoger el terreno que se habían adjudicado los jubilados. Era tan vacío que sólo había pedregal y nosotros recogíamos piedras blancas para marcar los terrenos y poner nuestros nombres. A partir de ahí fueron viniendo, pero el 86 ha sido la avalancha por la emigración de los centros mineros. Esta ha sido una de las primeras zonas adjudicadas, luego han sido creadas otras zonas como 1º de Mayo, Villa Adela, pero han sido más mejoradas sus servicios básicos porque ellos vinieron de las provincias pacañas. Eso ha sido después del 76, después del 80. (Lilian Paz, enero 2012)

Don Jorge Meruvia quiere puntualizar un aspecto y señala que la zonas 1º de Mayo y Villa Adela ya habían. “Santiago II se crea como consecuencia de las cooperativas de viviendas de las minas y compra sus terrenos, y compra la gente para cuando sea conveniente venir. Se construye las primeras viviendas, esa donde está la farmacia, todo ese reglón, el 76. El 80 se construye viviendas más atrás y adelante, pero no había viviendas particulares, sino todas eran por el Consejo Nacional de Vivienda Minera. La zona Santiago II se crea en 1972. El 86 la gente se ha venido de forma masiva, antes y después de la relocalización la gente venía poco a poco, generalmente mineros” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Interesante entonces desentrañar que en 1972, las cooperativas de vivienda minera, ya concesionaban terrenos a los mineros, de hecho don Jorge Meruvia señala que su esposa e hijos se trasladaron inicialmente, muchos años después él se vino a Santiago II. El grupo entrevistado además señala que ésta zona tiene 2480 terrenos. Y esta zona de Santiago II antes se llamaba Cupilupaca y pertenecía al municipio de Achocalla, pero nunca legalmente, sino al municipio de La Paz. En la actualidad la composición social de la zona cuenta con 35 mil habitantes aproximadamente, mineros, campesinos, etc.¹⁰

¹⁰ Desde la Junta Vecinal, no tuvimos acceso al POA, con el fin de obtener la composición social de la zona, sin embargo en el grupo focal salió que aproximadamente la zona cuenta con 35.000 habitantes, siendo una zona que ha crecido bastante.

Es interesante que en varias entrevistas se señala que si bien existe bastante población campesina, que vive en Santiago II, cuando se trata de censos y cuantificación de gente, disminuye porque la gente regresa a su comunidad con el fin que la coparticipación en sus comunidades no disminuya: “Cuando haya el censo vamos a disminuir porque la mayor parte de la gente se va a su comunidad. La mayor parte de cooperativas mineras estamos en la avenida 2 y hacia el norte, hacia el sur son migrantes del campo, a excepción de los cooperativistas rentistas, al otro lado hay una franja que son de la mina Chacarilla” (Jorge Meruvia, enero 2012).

De acuerdo a la percepción de Don Tito Marca:

“Los mineros ahora somos el 60%, 20% del campo y 20% de la hoyada. Los del campo se vinieron poco a poco por sus familias. El Sr Huaranca que es de Achocalla me contó que su casita era la única de paja cuando inauguraron las viviendas los de Fonvis” (Tito Marca, enero 2012).

Y Don Jorge Meruvia añade y relata cómo migrantes campesinos vinieron a asentarse a la zona de Santiago II, en primera instancia los campesinos del altiplano venían al lugar para vender sus productos ya luego se les dio la oportunidad de asentarse:

“La migración campesina ha sido consecuencia de la migración minera, cuando han visto asentarse a los mineros ellos vinieron a vender sus productos y empezaron también asentarse” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Organizaciones en Santiago II

Cuando abordamos la existencia de organizaciones en Santiago II, el propósito fue mencionar aquellas instancias con las que el vecino se relaciona o relacionaba, en este sentido, en este apartado encontraremos aquellas organizaciones que existían y las que actualmente existen.

Un Club de Madres para las mujeres mineras

La señora Nivia Soto relata que a partir de la relocalización, la gente se tuvo que organizar, por ejemplo en ese entonces no había, Junta Escolar, y tuvieron que impulsar la construcción del colegio, claro antes tuvo que funcionar en alguna casa. Asimismo recuerda que junto a la señora Fortunata se organizaron y “caminaron” para conseguir alimentos de Agropasa. Cuenta que convocaron a las mujeres relocalizadas, viudas, esposas, hermanas y familiares de los mineros. Rememora que en ese entonces lograron convocar a 400 mujeres todas interesadas en formar parte del club con el propósito particular además de conseguir alimentos.

“De ese modo hemos trabajado con Agropasa desde fines del 86, 87, 88, el 89 hubiéramos continuado porque nos venían a dictar cursos de medicina, hacíamos manualidades dos veces a la semana, venían otras instituciones a enseñarnos, también venía Caritas. Así las señoras han salido ya capacitadas, para hacer incluso economía doméstica, muchas ya tenían sus puestos para vender y hacer todo eso. También trabajamos con las de Gregoria Apaza, yo era muy asidua siempre estaba en todas sus convocatorias. Había talleres para costura, tejidos a máquina, talabartería, ahí fueron a capacitarse algunas y salieron bien, algunas pusieron sus talleres. Estando ahí hicimos nuestro comedor en la casa de doña Clara Rodríguez de la mina Animas” (Nivia Soto, enero 2012).

Asimismo, nuevamente emerge la temática de la intromisión de los partidos políticos en la organización que termina en la división y disolución de los grupos:

“... cuando han visto que estábamos tan bien organizados y todo el mundo quería estar en nuestro grupo empezaron a andar los partidos políticos, empezaron a querer meternos división, que esto que el otro, al final entre las mismas señoras porque nosotros trabajábamos sin color político, sino por la necesidad que teníamos todos, no éramos de ningún partido dentro del grupo, pero fuera todos tenían derecho de ser del partido que quieran, esa eran nuestras reglas. Entonces, empezaron a infiltrarse algunos partidos, los neoliberales se puede decir, y empezaron hacernos un poco de mala campaña, al final llamé a Asamblea general y les dije, ‘no por mi culpa, porque yo no quiero que nos apoyemos a un partido u otro, van a perder; cada grupo es independiente, cada grupo con su gente y con su dirigente pueden organizarse y aceptar cómo van trabajar, no dependen ya de nuestro grupo. Yo no quiero hacer daño ni a mí mismo grupo, por eso voy a renunciar, porque no quiero ir en contra de mi ideología’ ” (Nivia Soto, enero 2012).

Respecto a la existencia de organizaciones al interior de Santiago II, Don Jorge Meruvia sostiene que a partir de las juntas escolares se crean varias organizaciones femeninas.

Los recuerdos de la señora Lilian son mucho más próximos pues ella recuerda a **“las manzaneras”**. En la época de Pepe Lucho hubo un financiamiento extranjero para crear Centros legales integrales municipales, en ese tiempo había 8 distritos reconocidos, y en cada distrito tenía que haber un SLIM con una movilidad porque hay y había tanto machismo que no había donde denunciar. Esos dineros se han desviado y creado las manzaneras en los diferentes distritos del El Alto. Se llaman así porque en cada manzano teníamos representantes de base para su trabajo era orientación nutricional, de salud”

(Lilian Paz, enero 2012).

La señora Patricia añade y dice que las manzanas trabajan con los centros de salud por manzanos, y Don Tito señal que esta organización era parte de la junta vecinal.

Otras organizaciones que recuerdan los entrevistados son la Asociación de padres de familia del colegio que no pertenece a la FEDEPAF, la liga deportiva que es autónoma, la Asociación de conjuntos folklóricos que tienen actividades para el aniversario de la zona, el 25 de julio. Actualmente esta Asociación está separada de la junta vecinal. Don Jorge Meruvia señala que *“la entrada de los conjuntos folklóricos que debería ser en la plaza, por esa pelea que han tenido la Asociación han hecho al final de la avenida”* (Jorge Meruvia, enero 2012).

La señora Patricia señala que el problema es que cada organización *“quiere hacer su voluntad, en todas las organizaciones hemos perdido el respeto, la colaboración”* (Patricia Pérez, enero 2012). Suponemos o deducimos que la pérdida de respeto y colaboración tiene que ver con el poblamiento y crecimiento de la zona.

La junta vecinal el referente del vecino

La señora Sabina sostiene que la relación cotidiana que entablan se da con los vecinos, y alguna vez con el presidente de la junta vecinal:

“A veces con la señora, que es una amiga mía, hablamos. Una vez hablé con don Freddy sobre la plaza, él dijo que iba a ser mejor que la plaza de Satélite, igual que la de Oruro y en cuatro meses se va terminar todo; pero hasta ahora no terminan. Sólo esa vez hablé con él” (Sabina, enero 2012).

Don Jorge Meruvia explica que el Comité de Vigilancia que existe es a nivel de El Alto y a nivel de distritos. El representante del distrito es parte del Comité de vigilancia del El Alto. Hay 58 juntas vecinales por distrito. Y se acude a un Comité de Vigilancia cuando hay un problema, por ejemplo, en el caso de la plaza, las casetas que no se quieren levantar, entonces se invita al Comité de Vigilancia a una asamblea y se les plantea el problema y ellos plantean su parecer (Jorge Meruvia, enero 2012).

Para resaltar además dentro el barrio, el papel e importancia de la junta vecinal como instancia de organización vital, la señora Lilian apunta:

“Cuando el 2000 me vine, empecé a trabajar con Don Jorge Meruvia como Delegada de calle (trabajo como Junta Vecinal en el Club de madres), pero mi actuación notoria ha sido con Tomás como secretaria, lo que hoy se podría llamar secretaria de género. En ese entonces, todos los problemas se centraba en la Junta Vecinal, inclusive los intrafamiliares, me correspondía. Seré muy honesta, yo no conocía, no sabía cómo hacerlo, entonces llegué dos

invitaciones de dos ONGs para los dirigentes. Una de Red Habitat para hacer un curso sobre gestión ciudadana y del Centro Gregoria Apaza para formar lideresas donde logré graduarme. Ahí llegó también otra invitación para la Red de difusoras de leyes y derechos que trabajaban con violencia intrafamiliar y desde entonces soy Difusora. Antes teníamos un SLIM, donde está funcionando la Defensoría de la niñez y adolescencia, pero se lo han retirado y no sabemos por qué. Yo he solicitado a la JV un ambiente para trabajar con la Red de Difusoras, que no es un ONG sino es un trabajo voluntario, para atender los casos de violencia. Siempre he trabajado, desde ese entonces que entré a la JV, ahí se me han abierto las puertas” (Lilian Paz, enero 2012).

De acuerdo al relato de la señora Lilian, la junta vecinal y su desempeño en la cartera de género le llevó a enlazarse con ONGs que trabajan atendiendo asuntos de género. Antes de la creación de los SLIMs y Defensoría de la niñez, vemos el papel importante que desempeñaba la junta vecinal pues se centraba incluso en resolver los problemas intrafamiliares, generalmente de violencia hacia la mujer y los niños, razón por las que existen Organizaciones No Gubernamentales que apuntan a incidir en la resolución de dichos problemas y posteriormente se crean instancias municipales que de igual forma orientan su accionar a atenuar y disminuir la violencia intrafamiliar.

“Es cierto que la Junta Vecinal atiende todo. Una vez un vecino había pegado a su mujer, su hijo vino a mí, y yo le dije que vaya a la Policía, ‘no, la Policía le va sacar plata a mi papá’. O sea a la Policía no confiaba, sí en la Junta Vecinal. La Junta Vecinal es como padre” (Tito Marca, 28/01/2012).

En Santiago II funcionó un club de madres que tuvo bastante peso:

*“El **Club de madres** que había, a mi me encantó porque era muy bien organizado. Se alfabetizaba a las mujeres, daban planificación familiar, hacían toallas, macramé, hacían todo lo que hace falta. Ahora todo eso se ha perdido” (Patricia Pérez 28/01/2012).*

El papel de la junta por ejemplo en la gestión de don Jorge Meruvia era muy cercana a los acontecimientos y lo que vivía el vecino, nos relata como por ejemplo al ser presidente, la junta vecinal enviaba coronas a todos los fallecidos vecinos de Santiago II.

“Me acuerdo cuando ha fallecido mi mamá, como vecino y como autoridad ha estado don José y eso me ha gustado” (Patricia Pérez 28/01/2012).

Don Jorge Meruvia señala que se logró en el barrio conformar –rememorando como en las minas a los delegados de sección– delegados de calles. Como señala Flores, una particularidad de la organización en Santiago II es la existencia de jefes y jefas de calle, no solamente en tiempos de movilización. Cada calle propone una terna y elige a una

persona para que la represente ante la junta vecinal. En octubre las y los jefes de calle de Santiago II estuvieron encargados de organizar el cavado de zanjas, ir de puerta en puerta para convocar a las marchas y recolectar víveres para los mineros, principalmente. También debían garantizar la asistencia de los vecinos a los bloqueos principales, en dos turnos durante el día y en dos turnos en la noche (Flores, et al., 2007: 41).

La intención era que se aglomere la gente, haga asambleas permanentes y así se hacen reuniones en cada calle. “En la actualidad no funcionan, ya no quieren que haya delegados (los dirigentes). La función de los delegados tiene dos virtudes, una de ayudar al dirigente en los trámites y la otra de coordinar con los vecinos. Ahora ya no coordinan, ni ayudan al dirigente, antes yo agarrado de ellos me iba hasta la subalcaldía” (Jorge Meruvia, enero 2012). La señora Lilian añade que no se ha abolido dicho cargo sino que simplemente ya no existe coordinación, no existe interés y no se los toma en cuenta:

“Hay delegados de calle, lo que pasa es que ya no nos llaman como antes. Cuando nosotros estábamos, ‘reunión de delegados para tal fecha’, ahora no nos participan, pienso que es por falta de coordinación” (Lilian Paz, enero 2012).

Don Tito Marca, va más allá y sostiene que la junta vecinal tiene miedo a los delegados por el control que estos podrían tener. Es interesante poder rescatar esta forma de organización propia de barrios mineros, pues como señalan los entrevistados el papel de los delegados de calle hace que dentro la junta vecinal exista más coordinación y es de gran ayuda a las autoridades de la junta.

“Ahora sobre los delegados de calle, tenemos 17 calles, 68 delegados de calle (4 de cada calle: 2 de arriba y 2 de abajo). Los delegados son los que más se preocupan de la zona, entonces para poder coordinar mejor, ellos nos orientaban, qué cosa les falta, qué hay que hacer, incluso en los proyectos, pero ahora la Junta vecinal dicen ‘malos consejos no dan, ellos no más quieren manejas por eso no llamamos’. O sea que tienen miedo a los delegados de calle porque ellos conocen muy bien, si hay obras o no. En mi calle no hay delegados, yo quería participar, pero no convocan a reuniones” (Tito Marca, enero 2012).

Solidaridad en Santiago II

Muy certera la afirmación de don Jorge Meruvia, quien señala que la solidaridad está en función del crecimiento de los pueblos, de la zona en este caso. Por ejemplo, en el 76, cuando había reuniones, todos salían y compartían hasta la comida, era como una hermandad. Ha ido creciendo y se ha ido perdiendo, ahora la solidaridad son entre las calles, entre los distritos mineros porque el minero jamás puede olvidar la solidaridad.

Por ejemplo, entre los de Siglo XX, Catavi tienen solidaridad y también entre vecinos, es un valor minero. (...) Nos visitamos entre los que nos conocemos, pero no a quienes no conocemos (28/01/2012)

Es entendible que en 1976 cuando migraron en su mayoría mineros, se conocían era como si se hubiera dado –de alguna manera– el traslado de centros mineros a El Alto, por tanto la solidaridad y los lazos entre vecinos eran más fuertes. Ahora sostienen que la solidaridad se da entre calles, y hasta la actualidad entre centros mineros. Ahora es de esperarse que a medida que las familias mineras vayan desapareciendo, también los lazos se vayan perdiendo, pues las generaciones como los hijos de mineros ya se dedican a otras actividades y sus cotidianidades tienen otros rumbos.

La señora Lilian sostiene que los delegados de calle son los que más conocen a los vecinos.

“Como delegada se quienes son propietarios de casa o no, quienes dan en alquiler, pero hay inquilinos que lo subalquilan, como ha sido el caso de los auteros. Entonces, ya no somos tan unidos, sabemos que en esa casa existen inquilinos, pero cada que llega un nuevo inquilino, llegan personas desconocidas que ya no podemos solidarizarnos porque no sabemos quienes son. Por otra parte, entre vecinos dueños de casa nos conocemos y nos solidarizamos, aunque ya no vemos al presidente, ni a nadie de la Junta vecinal, sólo los vecinos. Antes, hasta la gestión de Tomás íbamos a los velatorios, incluso cuando han velado a un vecino en un toldito” (Lilian Paz, enero 2012).

Otro de los aspectos que cambia la vida cotidiana del barrio es que cuando son inquilinos los que ocupan las viviendas, son personas de paso, que no se sabe cuánto tiempo morarán en el barrio, de tal manera que la solidaridad disminuye, porque no hay los lazos que se han tejido entre los vecinos dueños de casa que habitan el barrio.

“Las reuniones de la Junta se citan por palomitas; pero cuando se deja donde vive el compañero de la comunidad, a su hijo o la casa, no vienen, entonces entre mineros nos reunimos. Ahora con los que vienen de la hoyada es otra cosa, además son unos cuantos, pero no viven aquí, sino sus inquilinos; no son más de 2 ó 3%” (Jorge Meruvia, enero 2012).

“Vienen a cobrar la rentas” (Lilian Paz, 28/01/2012).

A esto se añade que los actuales cargos, ocupados por gente más joven ya no prioriza la importancia de atender en temas cotidianos a los vecinos, tal como es asistir en representación del barrio a los velatorios.

Santiago II, pionera en las peleas con alcaldes y partidos

Con nostalgia don Jorge Meruvia recuerda que Santiago II fue vanguardia y pionera en la pelea con alcaldes y partidos.

“Santiago II: Ha sido pionera, hemos peleado con alcaldes, con los de CONDEPA, del MIR. Santiago II era la primera en tomar la palabra en las reuniones de la Fejuve, daba la línea y nos tenían miedo porque nos hacíamos escuchar como ex trabajadores mineros. O sea se ha hecho sentir, era respetada, era una de las mejores zonas, pero hoy día estamos por los suelos” (Jorge Meruvia, enero 2012).

O como señala don Tito Marca, la junta de vecinos es una instancia cívica. Le revocaron de la presidencia de la junta vecinal porque ya hubo intromisión de los partidos políticos:

“... vino la gente de Pepe Lucho y ya querían ordenarme nomás ellos, ‘Tomás tenemos que apoyar’, nada señor la asamblea es la que define a quién vamos apoyar, yo no. ‘Aválemelo aquí’, ‘pon tu sello’, yo no puedo sellar cualquier papel, yo soy presidente de la Junta de vecinos, así que les mandé a rodar. Me traían papeles para apoyar del ADN, MIR, UCS, UN, MSM, hasta del MAS venían, ‘tienes que apoyar!’ nada señor. Yo les decía, ‘déjenme sus documentos, se los voy a leer en la asamblea, y listo’, después viene el sellito, pero no querían, sólo querían el sellito. Por eso me voltearon...” (Tito Marca, enero 2012).

Guerra del Gas en Santiago II

Trayectoria dirigencial y su importancia en la organización

En este subtítulo nos interesa desatacar un elemento interesante referido a la trayectoria de lucha que tienen muchos dirigentes y que jugaron un rol protagónico en la Guerra del Gas: Carmelo Rodríguez quien participó en el comité de movilización de la FEJUVE, ocupó cargos en su juventud. Él cuenta que fue Dirigente en la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia. Además ya pasó por el cargo de dirigente de mi zona. El 2003 estuvo en el comité de movilizaciones representando al distrito 4 y además fue miembro del Comité Ejecutivo de la FEJUVE del 2004-2006. De la misma manera, nuestro entrevistado Rafael Andrade, desempeñó el cargo de dirigente en la UPEA.

De la misma manera, las mujeres dirigentes de la FEJUVE de ese entonces, se hicieron conocer desempeñando funciones en alguna cartera más pequeña en sus juntas vecinales.

“En una primera instancia fui dirigente de juntas escolares. Lo que fue la FEDEPAF y nos alejamos de la FEDEPAF, y conformamos de la CODIJE

Confederación Distrital de Juntas Escolares y que tiene las mismas atribuciones que la FEDEPAF. Hicimos un programa radio que se llama acontecer vecinal, luego reencuentro y luego los sábados en la mañana la agenda vecinal con temas especializados. Mi incursión en radio hizo que se me invitara por trabajadores de la prensa, claro que primero me afilié al STAC, (Sindicado de Trabajadores en Comunicación Alternativa) y me postularon a la dirección del sindicato de la prensa del Alto hasta el año pasado estaba en eso” (Hernán Caita, enero 2012).

María Velásquez jugó un papel vital en la Guerra del Gas, en ese entonces era representante de la Defensoría del Pueblo en El Alto, hija de minero, con trayectoria de haber militado también en algún partido político. En el grupo focal destacaron el rol de la Sra. Marina, quien apoyó y estuvo en los momentos más críticos recogiendo cadáveres, llevando a los heridos al hospital, entrando y visitando las zonas de conflicto. En estas reflexiones nuestros entrevistados se sienten verdaderos actores de la Guerra del Gas, sin embargo también destacan que otros aprovecharon la fama, cuando los verdaderos actores, luchadores se encuentran en el olvido.

Concretamente en el caso de Santiago II, quién lideró la zona fue don Jorge Meruvia Alfaro, un dirigente muy conocido, nacido en Tupiza en la Provincia Subchichas de Potosí. En las minas ya fungía como asesor laboral de la vivienda minera, fue elegido en un congreso de la federación de mineros. Don Jorge Meruvia fue perseguido en el golpe de Estado que propicia Hugo Bánzer y García Mesa, fue exiliado a Panamá donde estuvo 9 años. Entró al país clandestinamente

“para pelear y apoyar a los compañeros que peleaban contra el gobierno, por ejemplo estaba el compañero Oscar Salas, el ‘Huracán’ Ramírez, y aquí en esta casa se fundó la federación de mineros al día siguiente del golpe de García Mesa, con la federación de mineros para planificar qué hacíamos y fue detectada esa reunión y vinieron a querer sacarme de aquí. Soy del PS-1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahí he aprendido y transmitido ese conocimiento a mis compañeros, y con la llegada de Marcelo han llegado mucho más. Con Marcelo, por resolución nos convertimos todos los trabajadores al PS-1 del compañero Quiroga” (Jorge Meruvia, enero 2012).

De igual manera, don Tito Marca, minero cuenta que hizo dos veces el servicio militar, en 1970 y 1971, aquí radica su formación política “comunista” porque fue un “soldado de cintillo rojo”. Su padre era miliciano del MNR en La Paz. Don Tito después de tres años de servicio volvió a su pueblo y fue olvidado por Paz Estenssoro “así nomás los luchadores somos olvidados”. Fue secretario de participación popular de la Junta de

Vecinos de Santiago II, gestión 2003-2004, y en la siguiente gestión fue elegido democráticamente como presidente de la Junta Vecinal.

En Santiago II, al ser el lugar en el que se instaló gente de varias minas para vivir, la señora Nivia Soto nos cuenta su trayectoria y entonces vemos algunos aspectos en común: ella era es viuda, su esposo Justo Pérez García dirigente de la Federación de Mineros de Bolivia y también de la COB, fue diputado por el partido Socialista junto a Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1978. Tanto don Jorge Meruvia, como don Justo Pérez militaron en el PS-1, por tanto en Santiago II existen resabios de militancia partidaria principalmente por el vínculo que mantuvieron los mineros con el partido Socialista. Ahora percibimos la influencia que don Justo Pérez tuvo sobre su esposa, pues la señora Nivia al llegar a Santiago II es la que organiza los clubes de madres reuniendo a mujeres con el fin de conseguir alimentos, y también de que reciban capacitación. Ella dice:

“Cuando mi esposo murió yo era presidenta de la Junta vecinal, había candidato por el apoyo de la gente, hice mi plan de trabajo y conseguí dirigentes de cada mina para componer la directiva y así empecé a trabajar con ellos. Yo era quechisleña, el que me seguía era colquireño y así toditos eran de Huanuni, Colquiri, Santa Fe, Unificada, inclusive había gente que había venido de Pulacayo. Cuando yo estuve trabajando en la Junta de vecinos como viuda tuve que ausentarme a los Yungas por un compromiso laboral por un mes, y cuando volví me dedique de lleno al trabajo de la Junta. La obra que me había propuesto cuando me postulé, lo primero era hacer una casa comunal, luego la instalación del alcantarillado que no nos querían hacer porque esta zona era grandísima y nadie quería darnos el aval para esta obra, ni la alcaldía, ni nadie. Empezamos a andar y conseguimos esto, el Centro Cultural Marcelo Quiroga Santa Cruz, esta es mi iniciativa y del directorio del 94, nosotros empezamos con esto. Esa vez estaba en la Alcaldía CONDEPA y como no era neoliberal, entonces nosotros nos apoyamos un poco a CONDEPA. Me tenían mucho respeto y de ese modo me dijeron ‘usted quiere una casa comunal, se están haciendo centros culturales y ahí dentro usted va tener su oficina, su cocinita y su baño’, bien les dije, hagamos el convenio. Cuando salí el 96 deje toda la infraestructura, la obra gruesa, después de sucedió don Jorge Meruvia y él hizo terminar esto. El 96 y 97 he sido delegada de calle, incluso la directiva de Jorge Meruvia me nominaron para que yo sea representante ante la Junta Escolar” (Nivia Soto, enero 2012).

Réplica del sindicato minero en la organización vecinal

Cuando nos referimos a Santiago II, existió una tradición organizativa minera (en la actualidad cada vez menos), en la Guerra del Gas.

Claro que los mineros que llegaron a formar Santiago II, tuvieron que acoplarse al tiempo de organización de Junta Vecinal:

*“Teníamos que acomodarnos a las normas estatutos, que tenía la Federación de Junta vecinales, porque ya había habido juntas vecinales acá, teníamos que acomodarnos a ese modo de trabajo y organización, pero posteriormente hemos tenido que evitar las luchas de las minas. En la Guerra del Gas nos hemos organizado tal como estaban organizadas las huelgas en los centros mineros, primero **asambleas permanentes**, había compañeros que se dedicaban a la recolección de víveres, otros avisaban para avisar que estaba viniendo el ejército y utilizaban los postes que eran metálicos, y cada mañana se hacían asambleas para informar. Y hemos logrado que cada calle tenga su propio dirigente. Aquí la mayor parte de las calles de Santiago, de un kilómetro, lo que en las minas era la sección de sección, aquí hemos hecho delegado de calles, como allá era delegado de sección. Los dirigentes de calle apoyaban a los dirigentes elegidos en asambleas. Nosotros hacíamos asambleas de delegados, estos han hecho un papel arduo, organizando a la gente e informando”* (Jorge Meruvia, enero 2012).

De esta manera, se ha recreado la tradición organizativa minera de las minas en el caso de Santiago II y concretamente en las jornadas de Octubre de 2003.

“Han trabajado arduamente. Finalmente la gente no hemos necesitado que se los obligue, como alguna prensa ha dicho. Ellos estaban concientizados de lo que estaban haciendo y ellos salían automáticamente a trabajar, esa misma forma de luchas de las minas hemos reeditado. Consejos de delegados, reuniones y como no se contaba con muchos servicios, la gente tenía que asistir a las reuniones para conseguir alcantarillado, gas, teléfono. Hoy día las asambleas ya son menos y contamos con los servicios básicos, a excepción de algunas calles que no tienen los servicios” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Métodos de lucha

Es interesante resaltar los métodos de lucha empleados por los vecinos de Santiago II. Don Jorge Meruvia dirigente de la junta vecinal de ese entonces nos señala varios métodos:

“... las zanjas, reuniones, delgados de calle, asambleas permanentes, algo más que ha surtido, para que la gente haga caso a la asamblea y movilizaciones era cortar la pulpería, aquí hemos hecho lo mismo, hemos cerrado todas las tiendas. Aquí hemos nombrado a algunos compañeros para que controlen, y hemos dado permiso para que las tiendas y alguna gente salga a vender

de 7 de la mañana a 9 de la mañana, cosa que toda la gente se proveía de pan de cosas que le hacían falta. En la tarde todo cerrado. Los compañeros hacían cumplir estrictamente, no se vendía bebidas alcohólicas, como somos mineros, hemos hecho cumplir” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Otro elemento, que destaca es que la toma de decisiones en las jornadas de la Guerra del Gas fue muy participativa (ver anexo 2) ejemplo de un voto resolutivo del barrio.

“La gente se concentraba en la plaza para recibir órdenes y nosotros recibir sugerencias, porque ha sido muy participativa, algunas veces criticándonos y otras veces, sugiriendo algunas cosas que debíamos hacer. Críticas severas que debíamos hacer. La concentración era a la altura de la carretera, en las noches, mayormente. Yo recuerdo pasaje de ese entonces, la gente se concentró de día. Agarraron una especie de aguayo, y esa es la comida, y metían piedra, y trasladaban a ese lado. No debíamos dejar pasar la gasolina ni el gas, ese era el objetivo, para que el gobierno de Sánchez de Lozada pueda renunciar e irse” (Jorge Meruvia, enero 2012).

En su libro Flores también destaca que a comienzos de octubre, cada barrio organizó asambleas para informar sobre las decisiones a la FEJUVE, con importante participación de hombres y mujeres. Así se decidió el inicio de los bloqueos en avenidas y entradas a los barrios, la vigilancia de los bloqueos por turnos y el abastecimiento de alimentos para el tiempo que durara el paro. (Flores, 2007: 43).

Así también, la señora Nivia Soto rescata la planificación y participación que se dio al interior de Santiago II

“Cuando llegó la cuestión del Goni, don José nos convocó, nos reunimos y dijimos qué vamos hacer?, ‘tenemos que apoyar esto, el gas no puede ser, qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos’. Así organizamos y convocamos a hombres y mujeres, y en una asamblea planificamos, cómo vamos hacer todas las cosas. ‘Lo primero que vamos hacer es organizarnos, vamos hacer los piquetes de hombres y mujeres, pero tienen que concurrir todos, hay que pedir a los vecinos que participen todos, en el tiempo que tengan’. Y como siempre hay gente muy comprometida y otra un poco nomás, y vinieron de forma masiva, sobre todo mujeres” (Nivia Soto, enero 2012).

El zanjeo de calles en octubre de 2003, fue un tema prioritario para impedir el paso de los tanques y el ejército, es así que:

“Hemos organizado el zanjeo porque hemos visto que se estaban entrándose a las zonas, y dijimos ‘cada calle con su delegado y su gente es responsable de la calle, la parte que le corresponde hace la zanja, si tiene que hacer 10

zanjas, hace 10 y si tiene que hacer 2, hace 2' y todo Santiago era bien zanjado, nadie podía pasar ni las bicicletas. En las noches empezamos hacer vigilia con los varones, a quemar llantas; bueno algunos tocando sus charangos, otros cantando, otros jugando, los niños correteando hasta cierta hora. Teníamos miedo de que se entren porque anunciaron que iban a sacar a los dirigentes, entonces yo les dije, 'todos los dirigentes que no se queden en su casa porque son un peligro para la familia, o mínimamente hagamos correr la voz de que los dirigentes están en casa de sus amigos'. Hicimos correr la voz, pero ninguno había dejado su casa, esta era una de las estrategias. Estas estrategias eran de conocimiento de lo que habíamos hecho en las minas y que nos han servido" (Nivia Soto, enero 2012).

Es así que se replicaron ciertas estrategias y conocimientos que los mineros tienen, fruto de la experiencia y de haber hecho frente a dictaduras, represiones en décadas anteriores.

Don Jorge cuenta, que en el caso de la gasolinera que voló, los jóvenes –que no tienen tradición minera– se metieron a hacer cosas que no saben, como manejar dinamita “*El asunto de volar la gasolinera no tomaron las precauciones necesarias, no hubiera pasado eso con las precauciones necesarias. Algunas veces, el problema de la gente, sin ninguna experiencia es que los jóvenes hacen esta clase de cosas*”. (Jorge Meruvia, enero 2012).

Un punto esencial, que nos parece un referente y un hallazgo es la percepción que los mineros tienen de la organización minera trasladada a El Alto, por lo tanto la diferencia que encuentran entre el sindicato minero y la junta vecinal. En cuestión de nombre y cargos solo cambia el denominativo señala, sin embargo hay una diferencia fundamental entre ambos tipos de organizaciones, que radica en la formación política, en las minas se trabajaba la visión política, por lo tanto existía

“En las minas es casi similar aquí comienza por el presidente y allí secretario general. No hay cambio, solo el nombre de la cabeza, luego sigue similar las carteras deportes, actas. En lo que puede diferenciar es en el método de lucha. En las minas hemos trabajado en la cuestión política, no hemos sido tan salarialistas, las juntas vecinales es más social y si se vuelve político es por conveniencia en cambio en allá hemos trabajado la ideología, en las minas hemos aprendido. La política se aprende no en el sindicato mismo, hay que salir, pero claro es como el sindicato fuese el kínder, luego se va al congreso, al ampliado es como si fuera la secundaria y el congreso ya como si uno fuese a salir (a graduarse) ahí se aprende y se escucha discutir a la gente, ahí con la gente también discutíamos. El sindicato enseña, las asambleas enseñan, la forma de hacer política y cómo uno llega a ser político” (Jorge Meruvia, enero 2012).

En el caso concreto de la Guerra del Gas, entre los métodos empleados se encuentra el derribado de puentes, pasarelas, se sacaron las rieles, tal como lo relata don Hernán Caita:

“Sacábamos las rieles, derribado puentes, pasarelas, fácilmente derribadas, era tanta la rabia que no había noche y día que se descansa. Se dormía alrededor de las fogatas que se habcía con las llantas, es triste que en la mayoría no sabemos” (Hernán Caita, enero 2012).

La vigila fue uno de los métodos, así como las fogatas, bloqueos, zanjas, marchas, golpes en los postes, bloqueos, señas.

Los delegados de calle, clave en la organización: “wawa que no llora no mama”

Por lo que afirman los vecinos de Santiago II, e inciden en la importancia de los delegados de calle, se ve que éstos en otrora fueron claves en la organización del barrio, cosa que en la actualidad no ocurre:

“Nosotros teníamos organización, con los delegados de calle podíamos hacer cualquier cosa. La verdad es necesario porque no todos los vecinos se van a reunir de emergencia, pero si tenemos delegados inmediatamente nos reunimos. En la gestión del Mamani hemos marchado contra el Comité de vigilancia porque de acuerdo al POA nos habían dado 50 mil bolivianos y se lo habían llevado a otra zona y hemos rescatado una parte, pero gracias a los delegados y vecinos” (Jorge Meruvia, enero 2012).

Los delegados de calle y los vecinos funcionaban como control social, activo, y eran quienes cuestionaban el porqué se hacían o no las obras. Los delegados de calle llegaban a ser autoridades:

“Los delegados de calle eran autoridades, supongamos que una calle se aduquinaba, el delegado de calle tenía que ver el formulario No 1 y de ahí hacia el seguimiento por fases, por eso el delegado de calle es el que más conocía. Pero ahora yo veo las calles que están a medias, eso es porque no hay actividad de los delegados de calle. En mi gestión, por ejemplo hemos dado credenciales a los delegados y con esa credencial han llegado hasta donde el Pepe Lucho y otras autoridades” (Tito Marca, enero 2012).

“Nosotros los delegados hacíamos de control de vigilancia o control social porque nosotros cuestionábamos ‘por qué esto, por qué el otro’ ” (Lilian Paz, enero 2012).

Los delegados de calle tienen que tener la inquietud de molestar a la junta vecinal, al presidente, como dice la señora Lilian:

“El error es de la cabeza porque él tiene que planificar, pero él quiere contentar aquí y allá por eso las obras en distintos lugares, a veces a medias. Nosotros le hemos observado, pero a veces a las personas que más reclamamos no nos llega ni las palomitas, tiene que ser inquietud de la delegada para venir y molestar a la JV, ‘wawa que no llora no mama’ ”. (Lilian Paz, enero 2012).

La práctica de la solidaridad minera en 2003

En octubre de 2003, los vecinos de Santiago II practicaron los valores de solidaridad. Se hicieron vigiliadas, se cocinó en ollas comunes y se hicieron horarios de atención de las tiendas:

“No hay que olvidar lo que ha dicho don José, los trabajadores mineros siempre hemos practicado todos los valores, hablamos de solidaridad, respeto... Esos valores hemos traído y practicado el 2003. El 2003 era delegada de calle y como delegadas hemos participado con nuestros vecinos y teníamos que hacer la vigilia en la Taquiña. Nos hemos organizado para hacer la olla común, hemos acotado, hemos puesto fideos, chuños para llevar a los mineros que habían llegado del interior. La movilidad de un sacerdote nos ha permitido llevar alguna gente hasta abajo. Ahora qué ha pasado con el mercado, de 5, 6 de la mañana hasta las 9, 10 am. ya no tenía que haber ningún vendedor, en ese horario nos proveíamos” (Lilian Paz, enero 2012).

Entre los recuerdos de esas jornadas, don Tito Marca recuerda que en una ampliación de la FEJUVE se decidió que los sitios de abasto se abrirían de 5 de la mañana hasta 9 o 10 de la mañana. Asimismo sostiene que de los dirigentes sólo 2 funcionaron y los demás desertaron.

“En octubre no hemos peleado sólo los mineros, sino los de la feria. Dónde estaba Juan Arias, dónde estaba el Nicasio, dirigentes mineros” (Tito Marca, enero 2012).

Para la señora Lilian Paz, las mujeres jugaron un papel fundamental:

“En la Guerra del Gas han sido las mujeres, yo tengo las listas de las que han participado (aquí en la Taquiña), haber que la Norma presente las listas” (Lilian Paz, enero 2012).

De la misma manera la Sra. Nivia Soto sostiene “Yo digo con orgullo, aquí en Santiago las mujeres son las primeras que dan la cara”

La señora Sabina nos relata la solidaridad que se dio y vio también la afronta que los militares han tenido con los mineros, disparándoles a quemarropa, ella recuerda entonces el antiguo papel que los mineros han tenido siempre siendo la vanguardia:

“Yo he visto (compungida), cuando los mineros en Ventilla han sido rodeados, con el compañero Eusebio hemos comprado coca y sardinas, y hemos ido con bandera. Los militares nos han correteado con gas y hemos visto como les han disparado (a los mineros) desde las motos, y eso me ha dolido. De ese modo nos hemos molestado porque todos somos mineros. Es una historia grande, porque los mineros siempre hemos ido a la cabeza unidos. Estaba el compañero de la COB, Solares en la avenida 6 de Marzo” (Sabina, enero 2012).

Subida de Evo Morales y la junta vecinal en el proceso de cambio

En octubre de 2003, don Tito sostiene que no se conocía a Evo Morales como potencial candidato, aunque las consignas decían:

En octubre no conocíamos al Evo. Cantábamos, mineros y campesinos al poder, pero no teníamos líderes... (Tito Marca, enero 2012).

La empatía con Evo Morales, hombre de campo, surgió cuando lo suspendieron del parlamento, con directa intromisión de la embajada norteamericana.

“También hemos peleado para bajar a Mesa. También tiene la culpa la embajada de USA porque expulsó a Evo y toda la gente simpatizamos ‘por qué a uno del campo van a expulsar del parlamento?’ Eso ha sido el bastón del Evo, la embajada de USA; hasta yo me calenté. Entonces, desde ese entonces aplaudimos a Evo porque en la mina toda la vida hemos aprendido a aplaudir al mejor hombre, pero no soy masista” (Tito Marca, 28 enero 2012).

Hubo o se dio una identificación con Evo Morales, identificación étnica la llaman algunos autores¹¹, en la que la solidaridad ha jugado un papel importante:

“No todos hemos sido masistas, pero hemos apoyado al Evo. Yo creo que ha sido el sentimiento de solidaridad porque él era un hermano campesino y no podía ser expulsado de manera tan denigrante. Entonces, el valor de la solidaridad le ha llevado a Evo donde está” (Lilian Paz, enero 2012).

A seis años del Gobierno de Evo Morales y el proceso de cambio, los entrevistados realizan un balance y análisis de la organización vecinal señalando que las juntas vecinales se han corrompido. Concretamente en Santiago II, hubo el caso de un presidente que hizo malversaciones de fondos. Otro de los aspectos que don Tito Marca nota es que hoy en día los dirigentes entran a la dirigencia para la consecución de beneficios personales.

“Los dirigentes entran para beneficiarse, o sino conseguirse pega para sus hijos o para sus nietos, eso es lo que ha ocurrido en todas las juntas. Cuando

¹¹ Ver Zegada et.al. (2011) La Democracia desde los márgenes. Transformaciones del campo político boliviano, Muela del Diablo, CLACSO, La Paz.

entré como presidente, la primera vez, Pepe Lucho ya me ofreció trabajo para mis hijos más, pero yo le negué. ‘Mis hijos están estudiando, yo no puedo perjudicarles, aquí me lo darán dos años peguita y después les van a votar’, la Alcaldía es así pues, eso les dije. Así al Pepe Lucho me lo maneje como con volante, porque si yo le hubiera pedido trabajo, el Pepe Lucho me hubiera manejado a mí como con volante y yo tendría que estar conforme porque me da trabajo, eso ha pasado en todas las zonas, no sólo aquí en Santiago” (Tito Marca, enero 2012).

Asimismo por su parte Fanor Aguilar señala que para conseguir la realización de los proyectos y para ser priorizados como barrio y atendidos por el alcalde, media las relaciones de amistad, por lo tanto aquellas juntas vecinales que no tienen algún grado de amistad con el alcalde o con alguien que “pise” fuerte en la alcaldía, seguro sus obras son dilatadas:

“Con la COR, con Rocha amistad y nada en asunto práctico, igual también con Rubén Paz de la FEJUVE, con el subalcalde sí es amigo, también del Comité de vigilancia que son las cabezas, el primero que ejecuta y el segundo que da dinero. Con Edgar Patana tengo amistad porque, cuando nació a la vida política con el MIR el 87 conocí a Edgar el 90, cuando él vendía revistas en la 16 de julio y yo le he invitado al MIR y él ha sido simpatizante del MIR después de un año. Entonces, cualquier dificultad de trámite que yo tenía llamaba a Edgar, mucho ha hecho la amistad que yo tenía, por eso estoy feliz porque todos los proyectos que se ha planificado están saliendo a flor de piel. Yo siempre les he dicho a los vecinos que simplemente queremos dejar algo bueno, déjenos trabajar, terminar nuestros proyectos, queremos trabajar” (Fanor Aguilar, enero 2012).

La Guerra del Gas en retrospectiva ¿Valió la pena?

Distintas son las percepciones y la evaluación que se hace respecto a la Guerra del Gas. Una interesante es que el resultado se ve en que ahora los vecinos de Santiago II en su gran mayoría tienen instalado el gas a domicilio

“En mi percepción, el haber salido a pelear por el gas y ahora que tengo gas a domicilio, para mí ha valido la pena porque ya tengo gas en mi domicilio” (Lilian Paz, enero 2012).

De la misma manera, la instalación del gas a domicilio fue el primer proyecto de don Tito Marca y la consecución del mismo. La manera como se solicitó gas domiciliario para la zona de Santiago muestra el valor que le dan a la participación que tuvieron en la Guerra del Gas:

“... y eso he cumplido, he hecho zanjear al 100% para Santiago II. Abel Mamani y Ademar Céspedes que era representante del Distrito al sector gas, los tres hemos hecho firmar al Presidente de Yacimientos. ‘Señor presidente del gas, aquí está hablando con un luchador de gas y para mi zona quiero el 100%’, le dije; ‘por qué señor presidente’, me dice; ‘porque valoro mi Santiago II, porque ha peleado’. Entonces, le mostré mis heridas, ‘mira aquí tengo así, a este lado mira, mi dedo, mira aquí mi herida porque la bala pasó por aquí. Y ahora usted señor, yo le ruego, no estoy viniendo a sentenciarle, es para mi zona, no es para mi’. Llama directamente al ministro y le dice ‘un guerrero del gas’, ‘firmáselo’ y me lo firma el documento. Así comuniqué a los vecinos, ellos me aplaudieron y listo. Ahora todo Santiago II tiene gas” (Tito Marca, enero 2012).

Otra percepción hace alusión a que era un deber la defensa de los recursos naturales, incluso sostienen que a los bolivianos nos correspondía por derecho los recursos naturales. La señora Patricia señala que el punto de la defensa de los recursos valió la pena, sin embargo critica que nadie haga nada por el país, y se hizo semejante guerra que como no mejoramos parecería que no valió la pena.

“Pero esa era una regla, que teníamos que tener gas, para tener gas no se necesitaba luchar porque es derecho que nos corresponde porque tenemos (recurso natural), sólo era cuestión de organizar y a mí me da pena como mujer. Ningún partido político hace nada por Bolivia que tiene todo y se está yendo a la ruina por culpa de... Los campesinos venden y hacen sus fiestas, así no se hace Bolivia. Para mí no valió la pena porque nadie hace nada (...) Primero el gas para Bolivia, en eso ha valido la pena” (Patricia Pérez, enero 2012).

Contrariamente a la percepción de la señora Patricia, don Tito Marca opina que Bolivia avanzó en el tiempo del gobierno de Evo Morales y el *Proceso de Cambio*, este avance se dio principalmente en el campo.

También es interesante como se dio un proceso de concientización de lo que sucedía con nuestros recursos en nuestro país, es así que existía concientización en la lucha. Hubo un trabajo de las ONG en este proceso también. Don Tito Marca, rescata de la Guerra del Gas, la unión con la que todos han peleado. En especial las mujeres y mineros rentistas.

“Hablabamos de esto en nuestra federación de mineros, de rentistas, además el partido comunista que se reúne cada 6 meses, siempre estamos detrás de nuestro país, y esa información traíamos. La lucha de octubre nos ha enseñado que todos unidos hemos peleado, en especial a las mujeres, también otro baluarte ha sido los mineros rentistas” (Tito Marca, enero 2012).

“No vamos a negar, nos ha llegado harta información, nosotros no sabíamos lo que era en ‘boca de pozo’ y las emisoras no decían nada. Entonces habido ONG que han venido a dar talleres, seminarios... Nosotros (Gregoria Apaiza) hemos hecho trabajo de hormigas para concientizar y la consigna era: gas no por Chile, gas para Bolivia...” (Lilian Paz, enero 2012).

Otros conflictos después del 2003

En 2005, los entrevistados de Santiago II recuerdan otra movilización que iba en pos de sacar a Carlos Mesa y exigir su renuncia, el argumento que dan es que éste estaba yendo por el mismo camino que Sánchez de Lozada, siguiendo los lineamientos de la embajada norteamericana.

“La caída de Mesa el 2005, porque estaba yendo por el mismo camino del Sánchez de Lozada, siguiendo a la Embajada de USA. La FEJUVE decreta huelga general indefinida y salimos a las calles, bloqueo general, ha sido similar al 2003. Hemos recibido a los mineros en el colegio” (Tito Marca, enero 2012).

Otra movilización grabada en los recuerdos fue realizada con objeto de apoyar la aprobación de la nueva Constitución. La señora Lilian señala que trabajaron para movilizar a la gente, sin embargo ella aclara que lo hicieron como organizaciones sociales y no como parte de la junta de vecinos.

“La marcha ha sido por nuestro presidente para apoyar la nueva Constitución. Antes al compañero Evo le habían votado del parlamento y él nos había contado cómo había sufrido, además había rumores de que le querían matar, ahí yo me inclinado más. Entonces, nosotros hemos dicho que podíamos apoyarle, de eso modo hemos hecho la marcha cuando Evo ya era presidente. Yo he trabajado por el Evo” (Sabina, enero 2012).

“Para la aprobación de la NCPE nos hemos movilizado, pero no como JV sino a nivel de organizaciones sociales. Por ejemplo, nosotras como Difusoras con Red Habitat nos hemos movilizado concientizado a la población porque esa ley las hemos trabajado, hay muchos artículos que nos favorecen a las mujeres” (Lilian Paz, enero 2012).

Un conflicto menor, de hecho ninguno igualable a las jornadas de octubre de 2003, fue el conflicto para expulsar a aguas del Illimani que fue encabezado por la FEJUVE. En este conflicto salió a la palestra Abel Mamani quien después ocuparía el cargo de Ministro de aguas.

“Para sacar a Aguas de Illimani, se ha peleado encabezado por FEJUVE por eso ha ido Abel Mamani como ministro de aguas. La marcha ha sido desde

aquí hasta Aguas del Illimani, y hemos subido hasta Villa Fátima” (Tito Marca, enero 2012).

Conclusiones

En líneas generales, quisiéramos presentar hallazgos generales y otros más particulares y puntuales basados en el estudio de caso que hemos tomado para este trabajo.

Entre los hallazgos generales, podemos destacar que:

La Guerra del Gas en Bolivia es uno de los hitos que desafió las políticas neoliberales aplicadas en el país durante las últimas tres décadas. Y muestra el fracaso de la política económica de privatización de los recursos públicos, y más aún el error del Estado de pretender exportar un recurso natural alrededor del cual se generaron amplias expectativas sociales de soberanía.

Pero eso no es todo, se dio un factor político, que posibilitó la insurrección de El Alto en octubre. Este se refiere al hartazgo que produjeron en la población los partidos políticos tradicionales quienes vieron en el Estado un espacio de ocupación de poder con fines personales. En la ciudad de El Alto es particularmente interesante la evaluación que hacen del alcalde José Luis Paredes, de quien sostienen que en cuanto a gestión mostraba resultados, pero fue repudiado por ser aliado de Sánchez de Lozada¹².

De esta manera, la Guerra del Gas de El Alto, se constituye en el referente histórico que muestra la posibilidad que existe para que una población pueda levantarse y derrocar a un gobierno de corte neoliberal y en última instancia determinar el gobierno que merece estar en el poder.

Entre los hallazgos particulares podemos destacar:

El cansancio, hastío de la población alteña condensó el sentimiento de las clases populares, que fueron las más abatidas por el modelo implementado.

El Alto tiene características particulares que fueron expuestas en el texto, la idiosincrasia de la población, la mezcla entre lo urbano y lo rural. Ciudad receptora de migrantes de distintos lugares. Económicamente es una ciudad en la que las tareas por cuenta propia, la informalidad son el común de las actividades a las que sus habitantes se dedican.

El caso concreto escogido para esta investigación –Santiago II– nos muestra varios elementos que se pueden rescatar y que nos darán luces para debatir acerca del papel

¹² Iván Berrios (2005:297) sostiene que detrás de esta gigantesca movilización, ente todos los actores que componente el espacio territorial alterno, se ejerció una crítica práctica a un sistema que durante caso dos décadas había minado la representatividad de las organizaciones alteñas, convirtiéndolas en espacios para la política electoral de los partidos criollos dominantes.

de los actores urbanos en estos últimos 10 años, lapso que incluye el rol de los actores sociales en el llamado “proceso de cambio”. Resulta interesante debatir en un contexto en el que los actores urbanos han cobrado un protagonismo especial.

El estudio de caso arrojó datos interesantes como, la mitificación que se ha hecho del rol jugado en los días críticos por las organizaciones urbanas como la FEJUVE y la COR. Por las circunstancias especiales, de aquellos días, los dirigentes desaparecieron y fue el vecino aquel que pertenece a determinado barrio y junta vecinal el que se movilizó. En el caso de Santiago II –de repente como excepción– se dio un alto grado de organización en la movilización. Los dirigentes de la Junta Vecinal de Santiago II tuvieron un papel importante.

En las entrevistas entonces se enfatiza en el elemento de que fue el vecino el que se autorganizó. Determinados dirigentes intervinieron en la organización y coordinación de determinadas acciones, es así que en uno de los grupos focales realizados, nuestros entrevistados destacan dos hechos: uno la oportunidad de reflexionar, recordar a más de 8 años los sucesos acaecidos en octubre de 2003, los dirigentes con los que conversamos no se habían reunido nunca con la oportunidad de conversar sobre la Guerra del Gas. El segundo hecho es que reclaman que el protagonismo y las ventajas obtenidas por determinados líderes que no tuvieron papel especial en la Guerra del Gas, pero que políticamente supieron sacar réditos.

Queremos rescatar el tipo de organización que Santiago II llevó adelante y que muestra la capacidad de organización que existe en el vecino, cuando ciertas situaciones lleguen al límite. Es así que queremos sintetizar aspectos como los métodos de lucha empleados por los vecinos de dicha zona durante las jornadas de octubre. Como habíamos sostenido en varias partes, el caso de Santiago II es un caso particular, puesto que este barrio es la reproducción y réplica –en algunos aspectos– de la forma de vida minera.

De esta manera, por ejemplo queremos destacar dentro la organización de la Junta Vecinal, la existencia de los delegados de calle, responsables de informar, movilizar a los vecinos de la calle en la que habitan. Esta figura fue replicada de los delegados de sección. Asimismo como en las minas donde regulaban la pulpería en momentos difíciles (intervención de gobiernos dictatoriales) en Santiago II en octubre de 2003 se reguló la apertura de las tiendas, de modo que los vecinos podían proveerse de alimentos durante dos horas desde muy temprano.

Ahora cabe preguntarse el grado de influencia de la formación política y carrera dirigenzial de quienes encabezaron la resistencia y la movilización. Refiriéndonos al Santiago II, prima la tradición minera, y Don Jorge Meruvia quien tiene una larga trayectoria de formación sindical, fue quien 2003 liderizó (junto a otros) las movilizaciones de 2003 en su zona. Es así que de acuerdo a lo relatado y a la importancia que dan a la formación política, quienes dirigen las acciones a tomarse, y quienes hacen un análisis profundo

de la Guerra del Gas no se apartan de una ideología y de su formación en las organizaciones. Notamos que es la gente más crítica y lúcida, y de manera real nos dicen que una vez que los mineros de Santiago II poco a poco mueran, otra será la historia, puesto que no es lo mismo las generaciones que les precederán.

En lo que respecta a la evaluación del proceso de cambio, los entrevistados en su gran mayoría muestran desilusión de cómo se está decantando el proceso de cambio. Es bastante interesante en el caso de El Alto, que el desgaste del proceso de cambio se manifieste en la actual situación por la que atraviesa la FEJUVE, instancia en la que la cooptación política campea, producto del partido gobernante, como bien lo señalan. Los entrevistados añoran aquella FEJUVE contestataria, y cuestionadora de los partidos tradicionales.

La división, los intereses personales son elementos presentes en dicho actor urbano. Con los detalles particulares que nos relatan de la forma cómo ha penetrado y cómo funciona la cooptación en las instancias organizativas urbanas. Cabe aclarar que las prácticas de cooptación funcionaban ya desde la época de CONDEPA y de José Luis Paredes, ante esto lo que sorprende a nuestros entrevistados es que si bien las ex autoridades pertenecientes a los partidos tradicionales solían acudir a dichas prácticas, existía la expectativa de que en el proceso de cambio la forma de conducción y la característica misma de la FEJUVE sería distinta, respondiendo al proceso de transformación que vivimos como país.

Si bien el gobierno de los movimientos sociales, tiene en su seno organizaciones heterogéneas, que van adquiriendo protagonismo, este debe ser matizado en cuanto a la participación que van adoptando en el proceso de cambio, pues existe una crítica dura a los dirigentes (de todos los niveles) y su accionar en el marco de este proceso y de un Estado Plurinacional. Enfatizan que el que Evo Morales haya llegado a la presidencia es resultado de la Guerra del Gas y la pelea de los alteños, es así que se sienten desilusionados al no ser atendidos y que la agenda de octubre se haya cumplido de manera incompleta, especialmente en lo concerniente a la nacionalización de los hidrocarburos.

Frente al estado de desaliento que irradian nuestros entrevistados, respecto a la organización matriz FEJUVE, existe un hálito de esperanza que guardan y que recae en la recuperación de compromiso e ideología. Es así que rescatan la conducción de antiguas dirigencias, formadas, que antepusieron el bien común ante el interés personal.

El actor urbano tiene una potencia latente para actuar en determinados hitos, cuando la masa se vuelve multitud, y se sedimenta de aquellos episodios un aprendizaje. Sin embargo también se debe analizar que en el mayor tiempo de aletargamiento, el actor urbano parecería estar desinteresado en cuestionar al Estado y mucho menos tiene un horizonte de cambiar las estructuras, al menos en este contexto el Alto y la FEJUVE son una muestra de ello.

Bibliografía

- ARBONA, Juan Manuel 2005 La nueva izquierda en el gobierno. Nueva sociedad N 197, Mayo-Junio.
- BERRÍOS, Iván 2005 Movimientos sociopolíticos en la ciudad del Alto: la construcción colectiva de identidades urbanas indígenas y de poder en los barrios vecinales de Tawantinsuyu y la Ceja durante el conflicto de Octubre (2003) el orgullo de ser Alteño. En Reunión Anual de Etnología. Autonomías regionales y pueblos indígenas Tomo 1 MUSEF, La Paz-Bolivia.
- FLORES, Jesús; Iblin Herbas; Huanca Francisca 2007 Mujeres y movimientos sociales en El Alto. Fronteras entre la participación política y la vida cotidiana, PIEB, La Paz.
- GARCIA Linera Alvaro (coord.) Marxa Chávez, Patricia Costas, 2005 Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructura de movilización, repertorios culturales y acción política. OXFAM y diakonia, La Paz.
- GREGORIA Apaza, 2010 La acción colectiva en El Alto. Hacia una etnografía de las organizaciones sociales, Gregoria Apaza, Bolivia.
- GREGORIA Apaza, 2011 Estudio con información estadística, descriptiva y analítica sobre las condiciones, oportunidades e institucionalidad de la población y la ciudad. Gregoria Apaza, El alto, 2011.
- GÓMEZ, Luis 2004 El Alto de pie. Una insurrección aymara en Bolivia, Comuna, HdP, Indymeida, Fundación Abril, La Paz.
- INE 2005 El Alto: indicadores sociodemográficos por ciudades capitales, censo de 1992-2001 y zonas censales, censo 2001 La Paz: INE.
- INE, Instituto Nacional de Estadística, 2001 Censo Nacional de Población y Vivienda. La Paz.
- LARUTA, Carlos Hugo, 2006 La conquista de la ciudadanía (Documento de trabajo). Regional CIPCA La Paz.
- MAMANI Ramírez, Pablo 2005 Microgobiernos barriales. Levantamiento de la ciudad de El Alto (octubre 2003). CADES, IDIS-UMSA, La Paz.
- SANDOVAL, Godofredo; Sostres Fernanda, 1989 La ciudad prometida. Pobladores y organizaciones sociales en El Alto. La Paz: ILDIS.
- ZEGADA, Maria Teresa et al. 2011 La democracia desde los márgenes. Transformaciones en el campo político boliviano, CLACSO-Muela del Diablo, La Paz.

DOCUMENTOS CONSEGUIDOS DE LA JUNTA VECINAL SANTIAGO II:

- Reseña histórica Zona Santiago II Ciudad de El Alto
- Conclusiones de la reunión de presidentes del distrito II (25 de octubre de 2003).
- Estatuto orgánico Federación de Juntas Vecinales FEJUVE El Alto, julio 2001.

Anexos

ANEXO 1

LISTA DE ENTREVISTADOS (Nombres ficticios):

María Velásquez	Hernán Caita	Patricia Pérez
Mónica Escalera	Pablo Vásquez	Lilian Paz
Rita Sánchez	Tito Marca	Nivia Soto
Rafael Andrade	Carmelo Rodríguez	Fanor Aguilar
Jorge Meruvia	Sabina	

ANEXO 2

VOTO RESOLUTIVO

El cabildo abierto realizado en la zona Santiago II de la ciudad de El Alto, a horas 10:05 a.m Resuelve:

Primero.- respaldar en forma unánime a nuestras organizaciones matrices de los trabajadores y de los vecinos en general

Segundo.- apoyar las reivindicaciones de la UPEA y su lucha por la autonomía de gestión

Tercero.- Rechazar las pretensiones del gobierno en la venta del gas a países extranjeros, la Ley de Seguridad Ciudadana diseñada por el Gobierno y al nuevo Código Tributario atentatorio para las familias alteñas.

Cuarto.- Pedir la renuncia inmediata del presidente de la República, lic. Gonzalo Sánchez de Lozada por su incapacidad en la solución de los problemas, su prepotencia y su política vende patria.

Es dado en la Plaza del Minero a los ocho días del mes de octubre del años dos mil tres (Día de la dignidad revolucionaria).

Actores urbanos en resistencia

El Plan 3000 en septiembre de 2008

Introducción

Entre Agosto y Octubre del 2008, el empresariado cruceño libró una ofensiva amplia, pero a la vez desesperada, en afán de recuperar la gran influencia que había ganado en el Estado boliviano. Posición que le permitía no solo controlar y re-direccionar, en beneficio propio, los excedentes que generaba el país, sino además aprovechar de los intersticios de su andamiaje institucional para generar mayores oportunidades de acumulación.

Se trataba de una posición bastante conveniente, a la que le había costado mucho tiempo y esfuerzo acceder, ya que durante gran parte de la vida republicana, éste fue un privilegio reservado a un pequeño grupo de empresarios afincados en el occidente del país. Por lo mismo, era difícil aceptar la menor amenaza de desplazamiento, esto no iba a suceder llanamente.

En realidad, el conflicto comenzó el año 2003, luego de que el pro-empresarial Gonzalo Sánchez de Lozada, fuera obligado a renunciar a su cargo de presidente de la república, fue entonces que se resquebrajaron los estrechos lazos que mantenía el empresariado cruceño con el gobierno a través de representantes en el gabinete ministerial. Su

sucesor, entendería pronto que a la menor amenaza, la elite cruceña estaba, no solo en posibilidad sino en disposición de echar mano de la presión y la movilización para defender sus prerrogativas. Pero las cosas se agravaron aún más cuando en parte gracias a sus acciones, éste también renunció y se adelantaron elecciones nacionales.

En el año 2005 fue electo Evo Morales, quien había permanecido en la oposición política y social a las coaliciones neoliberales desde los años 90. Y este resultado no era más que la confirmación de que grandes sectores de la población apostaban por un cambio de timón en el país. Morales, pronto convocó a la realización de una Asamblea Constituyente, como escenario para legitimar los mismos.

Luego de una votación para elegir a los miembros, la composición de la asamblea, mostró más claramente aún que en las elecciones presidenciales y parlamentarias, que los grupos empresariales nacionales habían perdido representatividad. A falta de un proyecto político nacional, su acción se concentró en las demandas regionales, solo desde allí lograron articular una oposición medianamente exitosa, aunque no pudo detener el inicio, desarrollo y término de la Asamblea Constituyente.

En el año 2008, cuando solo faltaba un referéndum popular para aprobar la nueva carta magna, la élite económica a había ya perdido casi todas las batallas y se lanzó a la ofensiva. Santa Cruz fue el núcleo duro de la oposición, pues era allí donde las élites habían logrado construir un discurso anti centralista fuerte y que gozaba del apoyo mayoritario, ello les ofrecía un holgado margen de acción, y lo aprovecharon para ocupar la ciudad y todas las instalaciones públicas; incluso acorrallar y golpear a oficiales del ejército nacional.

Este trabajo, empero, no trata de explicar todos esos sucesos, sino un evento en particular. En medio de la euforia cívica que parecía imparable, los habitantes de un barrio popular y modesto de la ciudad de Santa Cruz, se atrevieron a mostrar su desacuerdo con el proyecto de las élites e incluso a plantear “su” propio horizonte de autonomía territorial y política. Hecho que resultó intolerable para quienes más que nunca necesitaban mostrar su hegemonía.

Los grupos que actuaban a nombre de las demandas cívicas intentaron aplacar las voces discordantes, emprendieron contra el barrio, para ponerlo bajo control. Los habitantes del “Plan 3000” habrían de ser puestos ante la situación de defender su barrio y lo hicieron tan exitosamente que los atacantes no pudieron lograr su objetivo, pero ello no impidió que lo mantuvieran cercado durante tres días.

El desafío de los pobres urbanos, terminó infringiendo un duro golpe a las pretensiones de los cívicos, y de hecho cambió por completo el panorama político nacional. La elite cruceña, no podía ya mostrarse como portavoz de la voluntad colectiva y seguir ocultando su intención de proteger sus privilegios de clase detrás de la demanda regional.

Este trabajo se propone por un lado rescatar la memoria que los habitantes del Plan 3000 guardan sobre ese momento en que sus acciones definieron el rumbo del país. Pero al mismo tiempo lograr un acercamiento a aquellos elementos de largo plazo con que los habitantes del barrio concurren a ese acontecimiento.

Para cumplir con ese propósito hemos organizado el documento en tres partes: la primera ofrece un recorrido histórico sobre la cuestión regional y el regionalismo en Santa Cruz, sin lo cual no podríamos entender las características del conflicto del año 2008 en Bolivia, que también está descrito a grandes rasgos. Posteriormente, nos detenemos en los días del asedio y las acciones en que se vieron envueltos los habitantes del Plan 3000. Finalmente, tratamos de ofrecer una panorámica histórica de la conformación del barrio, sus estructuras organizativas y las experiencias ganadas en luchas anteriores, pues nos parece interesante avanzar en la comprensión de lo periurbano en Bolivia más allá de los momentos de conflicto social. En esta tarea, estamos obligados a ubicar el barrio dentro del contexto urbano mayor, es decir la ciudad de Santa Cruz.

Antes de iniciar este recorrido, expresamos nuestro agradecimiento a los habitantes del Plan 3000 que han participado en la recopilación de testimonios.

Ires y venires del regionalismo

La integración nacional, la gran demanda de las regiones

La ciudad de Santa Cruz, fue fundada como una avanzada militar española que intentaba sentar presencia en el centro del continente frente al avance portugués y a la vez como una frontera para contener los ataques de la población amazónica. Dentro del esquema colonial, centrado en la extracción de minerales, esa región tuvo un rol secundario, la principal actividad de su habitantes era la agricultura y la ganadería. Esta situación se mantuvo sin grandes cambios en los primeros años de la república, pues la producción de Santa Cruz, se orientaba básicamente al abastecimiento de productos agrícolas como el azúcar, el caucho, el alcohol, el algodón; más tarde cueros y carne. Actividades que dejaban estrechos márgenes de ganancia, como fruto de una combinación de factores: altos precios de transporte, “arcaicas condiciones de producción” y “relaciones señoriales de dominación” en la explotación de la tierra (Rodríguez 2003: 87).

Como si esto fuera poco, a fines del s. XIX e inicios del s. XX, los productores cruceños, pero también los de otras regiones del país, fueron duramente golpeados por tres hechos: la adopción de una política económica librecambista; el traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz y finalmente la introducción de los ferrocarriles. En conjunto, estos acontecimientos, constituyeron un “... golpe de gracia a la vinculación cruceña al mercado interno y a su expansión” (Prado Salmón, y otros 2005: 28), puesto que los alejaron del abastecimiento a los centros mineros.

Rodríguez Ostría (1986) plateará que además de la guerra federal y el librecambismo, el tema de los ferrocarriles o mejor dicho su financiamiento, fue un asunto en torno al cual, la oposición centralismo - regionalismo, se desarrolla adquiriendo su sentido actual. El mencionado autor, plantea que la consolidación de la primacía paceña en lo político y económico, luego de la Guerra Federal (1899) ocasionó “quejas frecuentes de las oligarquías regionales”. Pero, el tema particularmente sensible, fue el Plan de Construcción de Ferrocarriles, diseñado por el norteamericano Lee Sisso (1905), a pedido de los gobernantes bolivianos. Era evidente la insuficiencia de recursos para construir todas las líneas necesarias para conectar al país, así que la priorización de inversiones despertó susceptibilidades entre los departamentos. Quedaba claro, que los mineros, privilegiarían sus “contactos con el exterior” en la construcción de la red ferroviaria, antes que la integración nacional.

Rodríguez, cree que es frente a este hecho que el término “centralista” sería utilizado contra una región “acusada de absorber la energías vitales y recursos económicos de las otras”, para su desarrollo. Hasta entonces, ninguna región en particular resultaba seria-

mente mentada como “centralista” en ese sentido¹, así como todavía ninguna se había endilgado la condición de “periferia abandonada”.

El impacto económico negativo y la crisis subsecuente, explican, en gran medida, que se desataran airadas protestas y demandas de hacendados y productores del interior del país y particularmente de los cruceños. Sin embargo, estas apuntaban a la escasa integración vial del país, como el origen de los males y por consiguiente se creía que los ferrocarriles, eran la solución a los mismos. La construcción de vías férreas hacia en el interior del país terminarían restituyendo los mercados, así como habían contribuido a su pérdida. El pedido de la élites locales era unánime, todas demandaban ferrocarriles, para sus respectivos departamentos.

El llamado *Memorandum de 1904*, redactado por un grupo de “notables” cruceños expresa básicamente este sentimiento. Los reclamos de la elite cruceña, inscritos en ese documento giran sobre la necesidad de un ferrocarril hasta Santa Cruz, como un hecho de sumo interés nacional para frenar la angurria de las naciones vecinas y se cuida de aclarar que no existe pugna entre los “intereses de Oriente y Occidente”. En esa medida, se podría decir que es un documento en el que no se muestra disociación entre los intereses nacionales y regionales, al contrario ambos se complementarían mutuamente.

Claudia Peña (2007), entiende que el mencionado documento es un hito en la construcción del discurso regional puesto que, entre otras cosas², parte del “principio de que la expresión de la élite es la expresión de la diversidad social, y que los intereses de la élite cobijan los intereses del resto de la población (en una prolongación de las relaciones paternalistas dominantes al interior de la sociedad cruceña)”.

Con la mirada fuera del país

La principal y más sentida demanda cruceña hasta la Guerra del Chaco había sido la construcción del ferrocarril Cochabamba – Santa Cruz. En torno a ésta se organizó el movimiento regional cruceño, logrando algunos avances en la construcción de la vía en los años 30. Pero, a inicios de los 40 el proyecto fue dejado de lado ante los cuestionamientos a su viabilidad económica, que realizaron técnicos norteamericanos. Éstos, recomendaron su reemplazo por una carretera y mostraron predisposición de financiar la obra, la misma que comenzó en 1944 y fue entregada en 1954.³

1 Tomando como ejemplo, el caso cochabambino, menciona el hecho de que hacia 1871, quienes interpelaban al país en pro del federalismo hacia 1871 “...lo hacían asumiendo que el caudillo militar, con su aura personalista y su actitud patrimonialista devenía en la encarnación maligna del poder central”

2 Para ser fieles a las ideas de Claudia Peña: “...el *Memorandum de 1904* constituye un hito en la construcción del discurso regional, porque los intereses y reivindicaciones expresados en el documento son presentados como expresión de toda la población del oriente boliviano; el documento empieza a delimitar las temáticas de negociación (o enfrentamiento) entre el Estado y la región; en ese sentido y en última instancia, construye a la región, la define, la delimita y la determina por enfrentamiento al Estado central; por último, parte del principio de que la expresión de la elite es la expresión de la diversidad social, y que los intereses de la elite cobijan los intereses del resto de la población (en una prolongación de las relaciones paternalistas dominantes al interior de la sociedad cruceña)”.

3 La carretera Santa Cruz - Cochabamba proyecto que reemplazó al ferrocarril, sobre todo al demostrar las misiones norteamericanas mayor predisposición a financiar esta obra, inició el 1944. Según Limpías (2009) hubo de ser inaugurada dos años antes de su conclusión real, “para anticiparse a la inminente

Sin embargo, las elites cruceñas ya no confiaban del todo en los mercados del occidente del país para su desarrollo. Así como los mineros tenían puestos sus ojos en el pacífico, ellos comenzaron a explorar las rutas hacia el Atlántico.

Mientras las obras de la carretera Cochabamba-Santa Cruz se demoraban, fueron ágiles las tratativas para la construcción de dos vías ferroviarias que unirían Santa Cruz con Brasil y Argentina. Hecho sorprendente, si tomamos en cuenta que la posibilidad de nuevas pérdidas territoriales era una amenaza presente en el imaginario nacional. La guerra con Paraguay había puesto en evidencia la debilidad de una escasa integración vial y era sumamente riesgoso que una región estuviera más y mejor conectada con los vecinos que con el resto del país.

No se puede desdeñar del todo que miembros de la élite cruceña, con influencia en el Estado boliviano hayan sido los artífices de esta proeza. El historiador y arquitecto Víctor Hugo Limpías (2009), encuentra que fue relevante para este proceso “El aporte de diplomáticos de carrera” entre los que se destacan, el cruceño Enrique Finot, el chuquisaqueño Alberto Ostria Gutiérrez, el también cruceño Dionisio Foianini y el paceño Eduardo Díez de Medina.⁴

Finot y Ostria “Actuando durante esos años críticos como asesores, embajadores y ministros, (...) jugaron un rol decisivo en cuanto a negociar con Brasil y Argentina tratados favorables para el país, y principalmente en la difícil tarea de convencer a la mayor parte de los parlamentarios, de que conectar a Santa Cruz con los países vecinos no implicaba ningún riesgo a la integridad nacional, como insistentemente se planteaba en círculos conservadores. Adicionalmente, presentaron ante los organismos internacionales los argumentos necesarios para obtener el aval requerido para tan grandes inversiones. Finot y Ostria firmaron varios de los convenios, protocolos y tratados que concretizaron, tanto durante el gobierno de Busch como en el de Peñaranda, la futura integración de Santa Cruz con el mundo, cambiando para siempre la historia cruceña y la boliviana” (Limpías: 2009: 3).

Los impactos de la infraestructura vial y la carretera se verían reforzados por el empeño del gobierno del MNR, luego de la Revolución de 1952, de consolidar en Santa Cruz, un motor económico nacional de base agrícola, timoneado por la empresa privada. Varios estudios han demostrado la inmensa cantidad de recursos públicos destinados al sector en ese período y los cambios relativamente rápidos que este hecho trajo en la estructura productiva regional y nacional. En ese período, el PIB de la región

inauguración del ferrocarril al Brasil, evitando un golpe simbólico de parte del vecino país” que inflamara las los afanes secesionistas que se atribuía a Santa Cruz, cuando todavía faltaban 150 Km de asfaltado. Las obras del ferrocarril Santa Cruz - Corumbá iniciaron en 1938 y fueron entregadas en 1955. El ferrocarril Santa Cruz - Yacuiba iniciaron en 1942 y terminaron en 1957

4 El papel del Paceño Eduardo Díez de Medina, según Limpías fue más bien general a diferencia de Finot, Ostria y Foianini.

“...se cuadruplica (...) subiendo de 10 millones de dólares anuales a 40 millones de dólares (2.6% de PIB a 9.1%)” (Lavaud: 1998:275).

De la región al Estado

Mientras el MNR estuvo en el gobierno, la región se consolidó como un polo rebelde, difícil de controlar. En cuatro diferentes oportunidades, recurrieron a la fuerza para retomar el control de la ciudad. A la cabeza de la oposición se encontraba el Comité Pro Santa Cruz CPSC, cuyas actividades llegarían a estar proscritas, hecho que solo logró fortalecer su legitimidad como representante de los intereses regionales.

Sin embargo, las condiciones de la élite cruceña habían cambiado radicalmente, gracias a la política económica aplicada antes y después del MNR en Santa Cruz, ya no eran más los representantes de una periferia “abandonada”, fácil de ignorar, sino una pieza importante en la vida económica del país y como tal querían influir en la vida política nacional, o más bien querían tomar ellos mismos las riendas del Estado.

Esta avidez por controlar el aparato estatal, marca una nueva etapa en el movimiento “regional” cruceño. La oligarquía cruceña a través del CPSC, apoya de manera explícita el golpe de Barrientos y en su gobierno, algunos de sus miembros ocuparon cargos relevantes (Sivak: 2007). En el golpe contra Juan José Torres, “se encuentra el corazón mismo del complot” pues “buena parte de los fondos necesarios para comprometer en la conjura a los militares se recolecta en Santa Cruz” (Lavaud: 1998:297).

Las recompensas económicas no son nada despreciables, y despejan cualquier duda sobre el papel del Estado en la consolidación de los grupos de poder en Bolivia. Durante los seis años del gobierno de Barrientos, así como los nueve de Banzer, la elite cruceña se beneficia de una ingente cantidad de créditos agrícolas para la industria algodonera además de “...la devaluación del peso en 1972 (6%) para favorecer a los agroindustriales exportadores, la decisión de aumentar, en enero de 1974, en más de un 100% el precio de los productos cruceños (azúcar, arroz, aceite), la generosa concesión de nuevas tierras, a tal punto que es durante el período de Banzer cuando las élites de Santa Cruz más se benefician de la Reforma Agraria(...) y por supuesto también aumenta el número de empresarios cruceños en el gabinete presidencial: un tercio de los ministros” (Lavaud: 1998:298-299).

Todos esos beneficios son canalizados al fortalecimiento de emprendimientos de carácter financiero y comercial principalmente, incluso hay quienes sostienen que las actividades productivas se abandonan en vista de las posibilidades de enriquecimiento rápido que ofrece la especulación. Sin embargo, hay que aclarar que la élite cruceña, toma parte en la lucha, no solo en busca de beneficios económicos “coyunturales” o “regionales”, se trata en todo caso de la construcción y defensa de un modelo de acumulación que la elite cruceña estaba en capacidad de liderar.

Este liderazgo podría poner en cuestión algo que usualmente se da por sentado: la territorialización de los intereses de los “patrones bolivianos”, es algo que usualmente se da por sentado, pero deberíamos cuestionar si al fin y al cabo, para ese momento, la agroindustria, la minería mediana, el comercio y las finanzas, tienen o no relaciones estrechas. Es el caso de empresas como Grace y Hansa, cuyos intereses se mueven tanto dentro de la minería como la agroindustria, entre Oriente y Occidente, entre la producción y la especulación, importando y exportando.⁵

Si este fuera el caso, el regionalismo estaría, jugando el rol de una eficiente arma principalmente ideológica para lograr arrastrar a los sectores populares de la población, en la lucha por el control del Estado, pero al final beneficia al conjunto de la burguesía comercial financiera, independientemente de su arraigo territorial. Quizás es por ello, las demandas propiamente regionales aparecen diluidas mientras el control de aparato Estatal no está en riesgo. Como veremos a continuación.

Mientras los negocios van bien, la región puede esperar

Con Víctor Paz Estenssoro (MNR) como presidente de la república⁶, en 1986 tiene lugar la “ruptura con el modelo de acumulación basado en el capitalismo de Estado instaurado en 1952”. (Lavaud:1998:387). Se inicia en Bolivia la etapa de implementación de las Reformas de corte neoliberal, política económica a la que sucesivos gobiernos darán continuidad por espacio de 18 años.

La actitud del movimiento regional cruceño en este contexto fue totalmente diferente a la que tuvieron con el gobierno de corte popular de la UDP (1982-1984) al que presionaron para iniciar el proceso de descentralización, poniendo en peligro el frágil proceso democrático (Sivak:2007:22). Y es que en la etapa neoliberal, los partidos políticos gobiernan Bolivia con equipos ministeriales, compuestos casi en su totalidad por empresarios privados (Lavaud:1998 y Peña: 2007), que garantizaban la implementación de las políticas de liberalización de la economía, que tanto reclamaba el patronato cruceño.⁷

Desde sus inicios, a pesar del éxito en la estabilización de la economía, la reforma tuvo efectos negativos en el empleo, el sector minero estatal paralizó sus operaciones, produciendo despidos masivos; la incipiente industria fue golpeada por la eliminación de protecciones arancelarias y aduaneras, lo que desató una inundación de mercancías

5 Sobre este tema, se pueden hallar abundantes datos tanto el trabajo de Lavaud (1998) como en el Soruco (2008)..

6 En 1985, Acción democrática Nacionalista ADN, el partido político organizado por Hugo Banzer, ganó las elecciones presidenciales, seguido de su aliado en el golpe de 1971, el MNR, con Víctor Paz Estenssoro a la cabeza., quien El sería finalmente poseionado como presidente de Bolivia, gracias a la modalidad de elección parlamentaria, que le permite beneficiarse del rechazo que provoca la idea de un retorno democrático (y triunfal) de Banzer a la política en los partidos minoritarios, que terminan votando por Paz.

7 El CPSC a fines de 1984 organizó el Encuentro de Comités Cívicos de todo el país en 1984, el CPSC. Exigiendo la descentralización administrativa y además la privatización de las empresas estatales. Convengamos en que se plantea al país, el primer esbozo de lo que sería el paquete de reformas políticas y económicas de corte neoliberal, en un momento en que ningún partido político se atrevía a defenderlas.

extranjeras. También fue reducido drásticamente el sector público y miles de trabajadores pasaron a engrosar las filas de la economía informal.

Pero, la oligarquía cruceña podía, con razón, ser entusiasta respecto al libre mercado, autores diversos (Peña 2007; Soruco: 2008; Prado:2005 y Sivak:2007) coinciden en señalar que fue la región que menos sufrió con la recesión económica que devino por efecto del Plan de Ajuste Estructural y desde inicios de la década de los noventa experimentó un crecimiento acelerado, que la ubicó como el “departamento que más contribuía al PIB nacional” (Sivak: 2007:23). La exportación de productos agrícolas (soya) como los hidrocarburos (gas) fueron el pilar de esta bonanza, impulsada por los requerimientos mercado externo.

A contrapelo del discurso de no intervención del Estado en la economía, éste se convierte en un elemento clave para disminuir los costos de producción de la soya boliviana. Subvenciona las exportaciones con devoluciones de impuestos, subvenciona el diesel necesario para el transporte y la producción, ofrece exenciones de pago de impuestos a la importación de bienes industriales, canaliza y paga créditos destinados al despeque del sector y finalmente suscribe convenios de comercio que aseguran el mercado de exportación. Aún más, el Estado garantiza acceso a tierra virgen y barata necesaria para la expansión de los cultivos⁸. (Soruco:2008:74) Es gracias a esto que la agroindustria soyera es competitiva en el mercado internacional.

Como puede observarse, la afirmación de Lavaud (1998), de que luego de la implementación del modelo neoliberal en Bolivia, “el Estado ya no aparece como la gran mama nutriente” (p. 387) debe ser relativizada. Es cierto que ya no están en disputa los cargos públicos, pues este sector se ha reducido considerablemente, pero en el escenario de apertura de la economía, el control del aparato estatal, sigue siendo tan o más vital que antes para asegurar el éxito de los negocios.

El clima favorable que trae el libre mercado para la oligarquía agroexportadora afincada en Santa Cruz, quizás pueda explicar la disminución del interés por las demandas propiamente regionales, ya que a diferencia de lo que pasó con la UDP, el tema de la descentralización ya no aparece como un asunto de primer orden. De hecho, durante los años 90 este tema se trasladó al plano parlamentario, donde primaron el entusiasmo y el debate sin consecuencias, mientras la aprobación de la Ley de Descentralización era sistemáticamente postergada.

El gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997). Por ejemplo, pudo ignorar, fácil y completamente todos los acuerdos parlamentarios logrados hasta ese momento sobre el

8 De hecho, Soruco (2008) plantea que luego de la dictadura de Banzer, Jaime Paz (1989-1993) fue uno de los gobiernos que más propiedades dotó en el oriente boliviano “Otro período importante para la dotación de grandes propiedades es el gobierno de Jaime Paz (18% de los expedientes y 15% de la superficie), (p. 68-69).

tema y aventurarse por una descentralización por vía municipal, en medio de tibios reclamos de los cívicos cruceños. En 1994 se aprueba la ley de Participación Popular LPP, y recién en 1995 se aprueba la Ley de Descentralización Administrativa Departamental.

En los hechos, las recién creadas alcaldías⁹, obtendrían autonomía política y administrativa mucho antes que las prefecturas. Y a pesar de que se sancionaría la Ley de Descentralización, los gobiernos departamentales se mantendrían en la práctica bajo tutela del Estado central, el Prefecto seguía siendo designado por el presidente de la República. Plata (2008) afirma que “La apuesta de la descentralización por la vía municipal opacó la descentralización por vía departamental”, y que los cívicos cruceños se habrían quedado sin discurso (p.148) Pero a la luz del posterior resurgimiento de la demanda en un contexto de crisis estatal neoliberal, hace suponer que el silencio sobre este asunto expresaba más bien conformidad con el estado de cosas.

Sin embargo, hay que recalcar que la descentralización no representaba un escollo para el modelo neoliberal, más bien lo complementaba. Como escribe Laserna, “...no es casual que la descentralización haya sido planteada como parte de las estrategias de ajuste estructural recomendados por el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros organismos similares. Ella parece corresponder a tendencias de descentralización efectiva del proceso productivo, posibilitadas ahora por una revolución tecnológica (...) No se puede ignorar que la descentralización podría resultar también en un debilitamiento para el Estado nacional frente a las empresas transnacionales, quienes a su vez se beneficiarían por la dispersión de organismos de representación y decisión política” (en Presencia, 18 enero, 1991).

Esta afirmación, se confirmó en los siguientes años, puesto que la descentralización, aunque no fuera la planteada por los cruceños, reforzó la construcción de demandas de alcance local, a tono con un ya inexistente debate sobre el desarrollo nacional. Como quiera que el neoliberalismo priorizó su relación con determinados sectores y territorios, el Estado vino pronto a aparecer como un molesto intermediario, del que era posible (y ¿deseable?) prescindir. Pero esto fue algo posterior.

Lo nuevo fue la incorporación del racismo en el acervo regionalista. No es que no estuviera presente antes, pero toma mayor relevancia. “Lo cruceño” y “la cruceñidad” se convierten en valores en peligro, amenazados por un enemigo foráneo, en este caso los collas, acrecentando la legitimidad de quien asuma su defensa.

Plata (2007) que se ha ocupado de identificar los cambios más importantes en el discurso regionalista a través de los años, plantea que, la ideología regional cruceña se ha nu-

9 En Bolivia solo existían 44 municipios en los centros poblados urbanos más importantes. Dedicados casi exclusivamente a la conservación del ornato público y provisión de servicios como el agua potable, alcantarillado y otras de carácter limitado. La Ley de PP, permitió la creación de alcaldías en todas las capitales de provincia con lo cual en llegaron a más de 300 municipios en todo el país.

trido de un imaginario que reclamaba la pureza racial (descendientes directos de españoles) de los habitantes de Santa Cruz, como una característica que les hace merecedores de “un lugar especial en un país de indios” y los hace superiores a toda la población altiplánica donde existió un alto grado de mestizaje. El autor mencionado, indica que a partir de 1952 es posible ubicar una modificación en este discurso, ya no se apela a la pureza racial, sino al mestizaje como elemento constitutivo de lo “camba”. El “camba”, a diferencia del mestizo andino (que recibe como herencia los peores atributos de españoles e indígenas), personificaría los mejores atributos de ambas razas. O sea, un mestizaje “bueno”. Se trata de una incorporación de lo indígena al núcleo identitario cruceño, pero se le dota de atributos funcionales al discurso de diferenciación de lo andino. Plata cree que es necesario inventar el mito del indígena guerrero oriental que se resiste a la invasión del imperio incaico, para otorgarle continuidad histórica a la lucha contra los “collas”, quienes a partir del proceso de migración que se genera hacia el Oriente luego de la revolución de 1952 son vistos como invasores del territorio cruceño (p.134-139).

La “invasión” colla, habría puesto bajo amenaza, el acceso de los cruceños a los recursos naturales, como la tierra, pero también los valores tradicionales “cambas”. En ese escenario, el CPSC es el llamado a convertirse en el guardián y “vigía de la cruceñidad”¹⁰. Peña (2007) afirma que este rol de constructora, guardiana y defensora de la identidad cruceña le asegura la posibilidad de seguir ostentando la representación regional, así como acumular un capital simbólico, bastante útil en situaciones de conflicto (p.129).

El regionalismo... en tiempos de cambio

A partir del año 2000, la estabilidad que había podido garantizar la continuidad del modelo neoliberal se resquebrajaba. La movilización de diversos sectores afectados por el libre mercado y el ajuste estructural comienzan a confluír hacia un solo cauce. Las demandas sectoriales se articulan en el pedido de cambios profundos en el Estado. Posteriormente, arrastraran cuesta abajo a los principales actores del sistema político.

Tomando las palabras de Gustafson (2006), es en este contexto que “...las élites criollas tradicionales iniciaron su retirada del Estado centralizado del cual habían dependido por tanto tiempo. Demandando más descentralización y alentados por la esperanza de que los recursos naturales estuvieran bajo control regional en lugar de control nacional, las elites empezaron a atrincherarse discursiva e institucionalmente en los departamentos” (p.1).

10 Según Peña (2007) desde 1981, el CPSC inicia una campaña para reforzar la construcción de símbolos identitarios cambas. “En 1981 José Luis Camacho, entonces presidente cívico, desempolva un decreto prefectural que ordenaba la iza de la bandera departamental junto a la nacional en los actos cívicos. Se declara el 24 de julio como ‘Día de la bandera cruceña’. Las estatuas de Melchor Pinto Parada, Eify Albrecht y de los unionistas Roca y Coronado son elaboradas y colocadas en sus ubicaciones actuales. La Federación de Fraternidades se forma a impulsos del Comité pro Santa Cruz en 1984, y es esta institución la que posteriormente instituye el festival ‘Sombbrero de Saó’ y el Día de la Tradición. En 1989 el Comité pro Santa Cruz edita cinco libros de historia regional, y uno de historia cívica, dirigido a los colegios”

El surgimiento del grupo denominado “Movimiento Autonomista Nación Camba” MANC, puede considerarse una manifestación de este hecho, además de una repuesta a la magnitud y éxito de las movilizaciones aymaras del año 2000, que habían vuelto a plantear el tema indígena en la agenda política. En su primer documento público, denominado “Memorándum de 2001”, argumentaron en torno a la existencia del “pueblo-nación” cruceño, y su “derecho a la autodeterminación”, el mismo que estaría justificado por asuntos como el abandono, el sometimiento al centralismo, la identidad, las diferencias históricas y culturales.

Esos temas recurrentes en el discurso regionalista, poseían la fuerza suficiente como para lograr adscripciones de diversos sectores sociales, más en esta ocasión se incorpora a Beni y Pando dentro del territorio de la nación camba, debido a “los fuertes vínculos

Territorio de la “Nación Camba” y sus nexos externos



históricos y socio-culturales” (Dabdub: 27) que son reconocidos y “re-elaborados” por los teóricos del movimiento.

La propuesta del MANC, era claramente separatista¹¹ pero, puede ser que ésta no fuera “aún” la salida de consenso entre la elite cruceña. Tampoco era un tema nuevo. Autores como Lavaud (1998), han planteado que en el pasado, los límites del planteamiento separatista estuvieron dados por la comprensión de la elite cruceña de que tal extremo sólo significaría ocupar una posición periférica frente a Brasil y Argentina. Por ello, la idea de conformar una república independiente, era usado como una amenaza que les permitía conseguir mayores beneficios dentro del propio Estado boliviano.

En el escenario reciente, otros autores como Gustafson (2006), entienden que las propuestas pro-secesionistas del MANC, formaban parte de una estrategia de negociación, donde la postura “extrema” servía para fortalecer, la propuesta de Autonomía departamental, al mostrarla como la más sensata, racional y moderada.

Sivak (2003) por su lado, entiende que el CPSC frente al asedio de las organizaciones sociales que presionaban por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, planteó la Autonomía Departamental como una “propuesta integral para el país”, más que como un pedido regional. Para Sivak “el comité trató de convencer a los cruceños y a la sociedad boliviana de expandir el exitoso modelo de Santa Cruz” en lugar de avanzar por el camino señalado en la “agenda de Octubre”. Se trata de un esfuerzo “por mostrar que la agenda de occidente no era la única disponible”(47).¹²

Más allá de eso, tanto la propuesta secesionista como la autonomista tenían un punto de convergencia, al parecer innegociable: los gobiernos departamentales debían tener potestad para controlar, el territorio y gestionar los recursos naturales de la región.

Ya en el primer cabildo por la autonomía en Santa Cruz, en 2004, Rubén Costas, entonces presidente del Comité Cívico, aseveraba:

“Ha llegado la hora de gobernarnos a nosotros mismos. De elegir de forma directa y democrática a nuestras autoridades departamentales. De administrar nuestros recursos económicos. De manejar los recursos naturales que nos pertenecen” (Costas 2005:63 tomado de Plata: 2007:152).

Sorucu (2008), afirma para “proteger su modelo de acumulación”, “asegurar su sobrevivencia a mediano plazo” y también para “negociar concesiones con el gobierno central y adherir las demandas de otras élites regionales”, este era un tema crucial.

11 La Nación Camba es explícitamente graficada como un territorio que ocupa más de un tercio del actual territorio de Bolivia.

12 De hecho se llamó “Agenda de enero”.

Con respecto al tema, Gandarillas (2006), afirma que la privatización del sector hidrocarbúfero en Bolivia, tuvo como efecto una mayor disposición de recursos en las regiones, especialmente en las prefecturas de los departamentos productores, en contrapartida a la disminución de la capacidad del gobierno central de acceder a los mismos. Esto generó y profundizó las disparidades entre regiones (productoras y no productoras) y acentuó el carácter extractivista y rentista de las elites locales, que vieron en la descentralización una oportunidad para administrar los recursos económicos y re-componer redes clientelares de enriquecimiento en torno a las licitaciones de obras públicas y otras actividades que involucran el concurso de los fondos públicos.

Para el mencionado autor, este hecho fortaleció la oposición entre los intereses “regionales” y los nacionales. Las elites locales beneficiadas por las regalías, aparecieron pronto como defensores de las empresas transnacionales, a cuya presencia atribuían el generoso flujo de recursos. Con el argumento de no ver perjudicadas las regalías, los representantes regionales, se opusieron a una nueva nacionalización de los hidrocarburos, demanda central de la “Agenda de Octubre”.¹³

En este caso, entendían que la autonomía les otorgaría a los departamentos, la posibilidad de firmar contratos de manera directa con compañías petroleras, prescindiendo del Estado Nacional y poniéndose a resguardo de los arrebatos de los levantiscos movimientos sociales del altiplano.

En el año 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada, es obligado a renunciar a su cargo de presidente con apenas trece meses de mandato, como consecuencia de la “Guerra del Gas”¹⁴ y su sucesor, Carlos Mesa hará lo propio luego de dos años de gestión. El presidente de la Corte suprema de justicia se ve obligado a asumir el mando del país, mientras se convoca a nuevas elecciones.

Para entonces, los sectores populares ya habían consolidado un agenda de reformas políticas que incluían la realización de una Asamblea Constituyente y nacionalización e industrialización de los hidrocarburos y se habían posicionado claramente en contra de las propuesta de avanzar en la implementación del régimen autonómico, por el contrario veían como una necesidad el fortalecimiento del rol del Estado central como único freno a los intereses de las empresas transnacionales. En 2005, eligieron como presidente de la república a Evo Morales Ayma, dirigente sindical de los campesinos que cultivan hoja de coca en el trópico de Cochabamba, y líder del Movimiento al Socialismo MAS.

¹³ Tal y como ya había pasado cuando el gobierno de Ovando nacionalizó la Gulf Oil.

¹⁴ Con mayor detalle, en el capítulo anterior.

La articulación de la oposición “cívica”

Con el triunfo de Evo Morales en las elecciones nacionales del 2005¹⁵, la situación se complica. Con un gobierno que en sus primeros meses ofrece señales poco favorables al empresariado nacional y extranjero, como la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a Asamblea Constituyente y la Ley de “Reconducción Agraria”, todo indica que la “agenda de octubre” se ha impuesto y los movimientos sociales han logrado el control del Estado.

El sector empresarial, tiene muy poco que esperar de los partidos políticos como entes de representación, puesto que estos han perdido legitimidad ante la mayoría de la población, la alternativa se encuentra en las regiones y será a partir de este espacio que presentarán sus demandas. Luego de lograr que el presidente Carlos Mesa les brindara los instrumentos legales para la elección de Prefectos por voto popular y ganar el seis departamentos. Los Prefectos, junto a sus comités cívicos articulados, se estrenan como la nueva oposición política al gobierno de Evo Morales.

La estrategia es clara: controlar en lo posible los avances de la “agenda de octubre” en la Asamblea Constituyente, y avanzar en el diseño y puesta en práctica de un régimen (autonómico, federal o separatista) que les permita retener el control sobre los recursos naturales.

Para lograr ello, la utilización de la fuerza no estaba descartada, o más bien, se confiaba demasiado en la necesidad de hacer uso de la misma. Durante todo el año 2008 se organizaron medidas de presión: paros cívicos, huelgas de hambre, marchas y bloqueos, cuyo “éxito” era una premisa para alcanzar suficiente fuerza de negociación.

Pronto la gente común, que se encontró atrapada en medio de las demostraciones de fuerza. Los grupos cívicos de jóvenes que se organizaron en otros departamentos, imitando a la UJC, se encargarían de forzar la disciplina en los paros. Como resultado, los abusos contra cualquiera que intentara empañar la imagen de consenso, aumentaron progresivamente. Llegó un punto en que el cierre de negocios, los ataques físicos a los opositores, las palizas públicas a líderes indígenas y sociales, se tornó cotidiana.

Los paros estaban acompañados de movilizaciones y cabildos¹⁶, todos a favor de la autonomía departamental, aunque también se avivó la opción del separatismo y las

15 Las elecciones presidenciales de diciembre de 2005, correrían paralelas a la elección de Prefectos para los departamentos, en cumplimiento de un decreto promulgado por Carlos Mesa, poco antes de dejar el gobierno. En ellas resultaría ganador Evo Morales con un 53,7 % de la votación nacional, pero al mismo tiempo los políticos de oposición ganaron seis de las nueve Prefecturas del país.

16 En septiembre de 2006 la media luna organizó un paro cívico en cuatro departamentos (La Prensa, septiembre 05, 2006). En Octubre una resolución de los prefectos de la “Media Luna” anuncia que si se aprueba el sistema de votación por mayoría simple, no acatarán las resoluciones emanadas de la Asamblea Constituyente (La Prensa, Octubre 03, 2006). El 15 de diciembre del 2006 se realizó cabildos simultáneos en Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, siendo este último el más numeroso, denominado el Cabildo del Millón donde los asistentes juraron no acatar las resoluciones emanadas de la Asamblea Constituyente si esta no se aprobaba por dos tercios y no les confería competencias legislativa y ejecutiva. Al mismo tiempo aprobó la potestad de que la Prefectura iniciará gestiones para la aprobación de un estatuto autonómico en Referéndum (Plata: 2007:154 -155).

amenazas de desacato a las resoluciones de la AC, si ésta no les confería a los departamentos potestades legislativa y ejecutiva con “autonomía plena”.

Durante el 2006 y 2007, los cívicos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija) y sus aliados de La Paz y Cochabamba lograron bloquear por casi un año, el inicio de debates en AC, con el conflicto en torno al sistema de votación de las plenarios¹⁷. Superado este escollo, no tardaron en generar otros frentes: una supuesta intención de aprobar una constitución oficialista que ponía en peligro las libertades y derechos individuales, la educación privada, la libertad de culto y otros temas (Bolivia Press, septiembre 2007).

Pero sin duda, fue el tema de la capitalía el que resultaría más efectivo para los interesados en empantanar la asamblea. El CPSC, y la alianza de Prefectos de la “Media Luna”, apoyaron la demanda sucrense de trasladar la sede de gobierno a esa ciudad, ya que la misma se ubicaba en La Paz desde la guerra federal (1899). En base a la explotación de los sentimientos regionalistas la AC pudo finalmente ser entorpecida.

Durante los último meses del 2007, las condiciones para sesionar en Sucre se hicieron cada vez más difíciles, puesto que los líderes regionales intentaban presionar a los asambleístas para restituirle a Sucre la condición de capital “plena”. Representantes del MAS fueron constantemente agredidos y golpeados en las calles. En el extremo, se llegó a impedir su ingreso a los recintos de debate, con lo cual las sesiones fueron paralizadas. Al poco tiempo, hubo que rendirse ante la evidencia de que todos los intentos de reinstalar las sesiones eran inútiles. Parecía que la estrategia de bloqueo ejercitada por los cívicos daba resultado.

En noviembre, con el tiempo apremiando, el MAS se juega una última opción, reinstalar la plenaria a cualquier costo. La AC reinició sesiones en un recinto militar en las afueras de la ciudad. Allí, el texto constitucional fue aprobado, en primera instancia bajo protección militar. Por supuesto, esto no se logró sin resistencia, todas las fuerzas opositoras del país, confluyeron en Sucre en un intento desesperado de frenar la sesión, pero sin éxito.

El texto se aprobaría rápidamente y fue necesario escoltar a los constituyentes para salir del departamento. En la ciudad se libraba una batalla entre los grupos de jóvenes universitarios y las fuerzas del orden. Al final la sesión concluyó, pero no hubo festejo, había costado la vida de dos jóvenes, centenares de heridos, incertidumbre en el paradero de varios constituyentes, policías retenidos por la turba, instalaciones de la policía destruidas, fuga de prisioneros del penal y el caos generalizado en la ciudad.

¹⁷ Se negaron a admitir que este fuera realizado por simple mayoría y presionaron duramente para que ésta se llevara a cabo por dos tercios, hecho que les otorgaba poder de negociación.

Finalizando el año 2007, en la ciudad de Oruro se convocó a una última sesión de la AC para aprobar el texto final, en medio de la división de la bancada opositora. Paradójicamente luego de la aprobación del texto constitucional en Sucre “el tema de la capitalidad quedó archivado: la oposición se empeñó en acusaciones contra el gobierno pero no volvió a hacer referencia al tema de la capitalía...” (Bolivia Press, enero 2008). La versión final del texto fue entregada al Presidente del Congreso y al Presidente de la República y éste lo entregó a los representantes de los movimientos y organizaciones sociales en un acto público al que habían sido convocados en La Paz.

La respuesta del movimiento cívico, no se dejó esperar, no sólo habían advertido con el desacato a los resultados de la misma, sino que habían trabajado en la elaboración de los estatutos autonómicos, mismos que en buenas cuentas se oponían al texto constitucional aprobado, particularmente en relación al tema de recursos naturales. Prefecturas y Comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, presentaron sus estatutos de manera pública en clara muestra de desafío al gobierno y anunciaron la recolección de firmas para dar viabilidad al referéndum departamental para la aprobación de ese estatuto y proceder con ello a la instalación de las autonomías “de facto” (CEDIB, Anuario 2007).

Para ese momento, resultaba claro que los prefectos de la “Media Luna” habían dejado de lado el camino de la oposición democrática y se encontraban de pleno con la salida de emergencia, a sabiendas que eso suponía el uso de violencia. Soruco (2008), entiende que las contradicciones se intensifican en este momento. Luego de cincuenta años, la burguesía comercial se “enfrenta a un Estado que no representa sus intereses” y entonces está obligada a luchar, para asegurar su reproducción.

Regionalismo, racismo y espacio urbano

Uno de los hechos más llamativos del contexto descrito anteriormente, tiene que ver con la importancia que adquiere el espacio urbano. Es evidente que la mayoría de los conflictos y eventos significativos de la vida política del país tienen como escenario las ciudades, en particular las capitales, al ser el domicilio de las principales instancias de decisión, como el parlamento, la casa presidencial, etc. Sin embargo, en el último período, no es sólo el espacio “en” el que se lucha sino también “por” el que se lucha. Por constituirse en un referente simbólico de poder, la pérdida de control sobre el espacio urbano, anuncia una crisis en los sistemas de representación, por ello mismo, la lucha por retenerlo puede adquirir contornos violentos.

En la historia reciente de Bolivia, ya durante la “Guerra del Agua” (2000), organizaciones y movimientos sociales, habían puesto de manifiesto la importancia de la ocupación territorial urbana, para el éxito de sus demandas. Durante las jornadas de abril en Cochabamba organizaciones y movimientos sociales, convocaron a la “toma” de la ciudad como

medio para presionar al gobierno para rescindir el contrato con la empresa transnacional “Aguas del Tunari”, aspecto en el que ya hemos abundado en el acápite correspondiente.

No se trataba por supuesto, de una ocupación violenta, sino de un préstamo del lenguaje militar, en el que la fuerza de las armas es remplazada por el de las multitudes de gente organizada que con su presencia en las calles obliga a paralizar todas las actividades. Las marchas, los bloqueos de rutas, además de cumplir con esta tarea, trastocan las reglas cotidianas del “buen uso” del espacio urbano, sientan, crean y sostienen sistemas de autoridad para la distribución de sanciones, cuya legitimidad parte del colectivo movilizado.

Si en términos generales la segregación espacial urbana, tiende a naturalizar el esquema de jerarquías sociales vigente, las “avanzadas” populares sobre porciones del espacio urbano donde su presencia es “limitada”, bien podrían ser consideradas como un desafío político. Visto desde la perspectiva de los sectores dominantes, se trataría de un avasallamiento o una invasión que impele a la defensa. Dicen bien, Arroyo y Romero (2011) que el espacio urbano, puede ser analizado no sólo como un categoría en si misma sino también como terreno y encrucijada de prácticas (*y en este caso, de luchas*) políticas.

Esta ocupación espacial de los sectores populares en Cochabamba en la “Guerra del agua” y su apropiación de la plaza principal que se prolonga más allá del conflicto, tiene su contracara en el período 2005-2008. Los investigadores Calla y Muruchi (2010), aseguran que el triunfo electoral de Evo Morales y su posesión como presidente, la elección de diputados y senadores campesinos(as) indígenas y otros actores del campo popular, su presencia en las Asamblea Constituyente, la posesión de Ministras(os) con ponchos y polleras fue vivido por los sectores medios como una pesadilla, como un “desplazamiento de los espacios del Gobierno y el Estado” y como resultado, la élite que basó su dominio en las diferencias raciales, comenzó a exteriorizar el racismo y exponerlo en demostraciones públicas. Sin embargo, a esta proposición hay que añadir que ese desplazamiento se expresó también de forma espacial, con la presencia de indígenas y sectores populares en las calles, plazas y edificios simbólicos. De ahí que las mayores expresiones de violencia y odio racista se hayan producido en estos escenarios.

En el caso de Santa Cruz, ya en octubre del año 2003, organizaciones indígenas, campesinos y sectores populares urbanos que intentaban unirse a la protestas de la “Guerra del Gas”, realizaron una marcha con destino a la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz. Allí, fueron recibidos por la Unión Juvenil Cruceñista y miembros de la Nación Camba, quienes los atacaron violentamente. Gustafson (2006) relata que un líder cívico, “...atacó y pateó a una mujer andina que usaba pollera. La pateaba repetidamente cuando había caído en la acera de la plaza principal. El notable cívico también golpeó a una mujer cruceña que intervino, gritándole según la prensa: “si estás con esta gente, eres mi

enemiga.” (p.17) Este tipo de acciones, cuyo blanco principal eran indígenas y campesinos, principalmente los “collas”, pasaron de ser esporádicas en 2005, a frecuentes en los años 2006 y 2007, para finalmente llegar a su cúspide en 2008.

En Sucre al iniciar las sesiones de la AC, y durante el año 2006, los (y especialmente) las asambleístas indígenas fueron objeto de insultos y golpizas, en plazas y calles céntricas de la ciudad. Calla y Muruchi (2010) afirman que estas acciones se dirigían a todo aquel que “parecía” indígena, aún si no pertenecían al MAS, enfatizando que más allá de las diferencias políticas, la violencia era sobre todo racista. Por otro lado, encuentran que en Sucre, este tipo de ataques no se realizaban solo en los momentos de tensión política sino que eran cotidianos, llegando incluso a ocupar un lugar importante en los acontecimientos festivos, como entradas folclóricas y fiestas de carnaval donde el motivo principal de los jóvenes eran disfraces ofensivos, como varones jóvenes disfrazados con ropas de mujeres indígenas, con máscaras de burros (p. 49).

En la ciudad de Cochabamba, luego que el 2006 se vivieran golpizas y enfrentamientos con sectores populares durante los paros cívicos organizados por los prefectos opositores, la violencia estalló el 11 de enero 2007, cuando el grupo “Jóvenes por la Democracia”, formado emulando a la UJC, convocó a los ciudadanos a movilizarse contra la “ocupación de la ciudad” por sectores campesinos¹⁸. El día de la marcha, los jóvenes, iban armados de palos, bates¹⁹, cadenas de bicicleta, y también armas de fuego, pero fueron detenidos por la policía justo en el punto donde se encontraba la vigilia campesina. En algún momento, rebasaron la barrera policial y atacaron con violencia, incluso a mujeres y ancianos. Al poco tiempo, la ciudad se convirtió en un campo de batalla, con grandes cantidades de heridos en los centros médicos. El saldo del día: un muerto por herida de bala, dos heridos graves que terminarían falleciendo, y un joven, que no había terminado la secundaria, muerto a golpes.

Pero como dijimos, Santa Cruz fue uno de los puntos de violencia más significativos, según los datos de Emir Iskenderian (2010), quien sistematizó estadísticas de las agresiones, hasta agosto del 2008, se registró 70 casos atribuidos a la UJC, de los cuales 53 fueron realizadas dentro del departamento y 43 en la ciudad de Santa Cruz. Las agresiones se efectuaron principalmente contra miembros y dirigentes de organizaciones indígenas, obreras y campesinas, habitantes de barrios periurbanos, defensores de Derechos Humanos, médicos cubanos, extranjeros (supuestamente venezolanos), militantes del MAS, policías de bajo y alto rango.

¹⁸ Campesinos, junto a sectores urbanos populares y partidarios del MAS habían instalado un vigilia, pidiendo la renuncia de Manfred Reyes Villa, Prefecto del departamento. El 8 de enero, la vigilia había terminado en un enfrentamiento grave entre manifestantes y policía, cuyo desenlace final fue la quema del frontis de la Prefectura; varios heridos entre policías, periodistas y manifestantes y una veintena de detenidos. El 9 y 10 el grupo de la vigilia, había cambiado de escenario ocupando la frontera con el Norte de la ciudad, espacio donde residen los sectores más acomodados de la ciudad. Los “Jóvenes por la Democracia” habían lanzado un ultimátum de 24 horas para que la ciudad fuera abandonada por los marchistas, de lo contrario procederían a usar la fuerza

¹⁹ Gustafson ha anotado que en Santa Cruz también los jóvenes de la UJC hacían uso de bates de beisbol, un deporte más relacionado con EEUU que con Bolivia.

Las acciones variaron en un amplio abanico que incluye: golpizas grupales, insultos, amenazas, pedreas, quema de viviendas, atentados con bomba, tomas de instalaciones, incluso raptos colectivos. Pero más allá de eso, la justificación de la violencia, se encontraba en el origen étnico de las víctimas de quienes de decía que eran “collas”.

Gustafson (2006), entiende que tanto el uso de la violencia callejera como de los espacio festivos, constituyen dos caras de la espectacularización del poder al que apelan las elites frente a la “erosión de los privilegios raciales y de los mecanismos tradicionales de control político” (p.2). Con estos actos “intentan reforzar – mediante la naturalización – las jerarquías tradicionales de espacio, raza y de género. De esta manera se evocan grandiosas ilusiones de hegemonía y prosperidad en contraste con la subyacente precariedad de ambas”.

Aunque, desde las ciencias sociales se le ha prestado mayor atención a articulación entre discurso regionalista y racismo, es evidente que “la defensa” del espacio urbano ha constituido una bisagra importante para generar adhesiones y movilizar a sectores importantes de la población. Desde esa perspectiva, el caso de la ciudad de Santa Cruz, es peculiar, en tanto ha jugado mucho tiempo el rol de “capital del oriente” denominación que ha sido reactualizada dentro del discurso separatista y autonomista. Más aún, su plaza principal continúa siendo un espacio de poder inviolable puesto que a diferencia de otras ciudades, no ha sido tomado, ni por los indios, ni por los pobres.

La ofensiva de septiembre. Desacato, revocatorio y desenlace

Iniciando el 2008, pese a la apurada finalización de la Asamblea Constituyente, pero aún sin formalizar su aprobación con un Referéndum, los prefectos jugaron la carta de la amenaza de avanzar en el régimen autonómico de “facto”, convocando a la aprobación de estatutos en cada región aún sin la aprobación de la Corte Nacional Electoral.

Pese a la públicamente declarada, voluntad de encontrar acuerdos, la realidad mostraba que estos eran difíciles, la oposición se articuló con los cinco prefectos y lo que quedaba de partidos políticos en un frente denominado Consejo Nacional por la Democracia CONALDE, para enfrentar al gobierno central y los movimientos sociales. En los meses siguientes actores como el Defensor del pueblo, la Iglesia Católica e incluso organismos internacionales, trataban de mediar en el diálogo, el mismo que se fue tornando cada vez más estéril. En todo caso, conforme el tiempo avanzaba, las acciones de uno y otro lado mostraron que las reuniones sólo servían para ganar tiempo.

Por su lado, CONALDE declaraba que cualquier acuerdo estaba supeditado a la anulación del proceso de aprobación del texto constitucional y especialmente la revisión del contenido del texto constitucional, el reconocimiento de las autonomías departamentales, en los términos propuestos en los estatutos aprobados por los cívicos que consistía

en un régimen semifederal con competencias exclusivas sobre recursos naturales y un tema coyuntural pero no por ello intrascendente, la restitución de un porcentaje de las transferencias de recursos provenientes del impuesto a los hidrocarburos (IDH), que efectuaba el gobierno central a los municipios y prefecturas, mismos que habían sufrido un recorte, bajo la figura de “aporte” de los gobiernos locales para cumplir con el pago de un bono destinado a la tercera edad.

El gobierno, expresó una voluntad amplia de diálogo, en aras de “compatibilizar” el texto Constitucional con las demandas autonómicas, pero en ningún caso su anulación. El Vicepresidente Álvaro García, declaraba:

“Mantenemos la voluntad de juntar el texto constitucional corregido en sus contradicciones con un estatuto autonómico modificado para enmarcarlo en la constitución y la legalidad” (La Patria, 8 de marzo 2008).

Ambas partes reconocían que esta disputa expresaba sobre todo las contradicciones entre dos visiones de país incompatibles. Quizás por ello, el diálogo fue finalmente abandonado y ambos lados intentaron avances en otros terrenos. El gobierno presionado por las organizaciones y movimientos sociales, aprobó en el legislativo la fecha para el referéndum aprobatorio de la Constitución y dirimidor para el único artículo que no tenía consenso, el límite a la cantidad de tierra agrícola que sería permitido poseer. Los cívicos respondieron convocando en esa misma fecha (4 de mayo) a un referéndum para aprobar los estatutos autonómicos.

La Corte Nacional Electoral rechazó la realización del Referéndum constitucional, alegando la imposibilidad de organizar el proceso en el corto plazo otorgado por el parlamento. Pero de manera sorpresiva y en franco desacato a la instancia nacional, las cortes electorales departamentales del bloque cívico, señalaron su predisposición a organizar, garantizar y avalar la realización de los Referéndums Autonómicos. En ese contexto, el CONALDE acordó no negociar sino hasta pasados los referéndums autonómicos. Tal vez en espera de que los resultados, les proporcionaran una mejor correlación de fuerzas.

Paradójicamente, lo que era un desafío al gobierno, se transformó en ocasión para mostrar las debilidades del bloque autonomista. El anuncio de realización de Referéndums Autonómicos sólo logró polarizar aún más el país y trasladar la tensión a los departamentos en conflicto. En el Occidente las fuerzas sociales interpretaron esta acción como un franco intento de separatismo y una amenaza de desintegración de la unidad territorial del país. En los departamentos de la “media luna”, los sectores populares que estaban en contra del contenido del proyecto autonómico abanderado por las élites, se vieron empujadas a manifestarse.

La férrea unidad en torno a las autonomías que hasta entonces se habían esmerado en mostrar los cívicos, y su hegemonía en la representación regional se vio desportillada por la aparición y multiplicación de expresiones públicas de disenso y crítica al proyecto autonómico, tal y como estaba planteado en los estatutos. Incluso organizaciones e instituciones que habían apoyado la demanda, cuestionaron la forma de su elaboración a la que calificaban de poco participativa y también el contenido, pues era evidente que se orientaba a salvaguardar intereses económicos y consolidar formas de ejercicio de poder autoritarias, como la evidente intención de reemplazar el centralismo estatal por otro de carácter local, al convertir a las Gobernaciones departamentales en una instancia que subordinaba a todas las demás instancias territoriales existentes como municipios y los territorios indígenas.

En el caso de Santa Cruz, Gustafson (2006) entiende que la hegemonía cívica, podía mostrarse más consolidada en el núcleo urbano, pero en todo caso, la realidad regional estaba alejada de la imagen de armonía y consenso deseada por los cívicos:

“Los valles cruceños ubicados al Oeste son tres provincias unidas a la ciudad de Vallegrande, un área marcada por una profunda pobreza rural. El Norte Integrado está constituido por provincias que han sido transformadas por asentamientos de gente proveniente de los Andes y que actualmente se constituye en el escenario de tensiones entre los intereses de las élites relacionadas con la madera, soya y ganado y las organizaciones de campesinos. La región de la Chiquitanía, nombrada así como homenaje al Chiquitano (Besiro), también es hogar de los Guarayus y Ayoreos. Los reclamos territoriales de minifundistas e indígenas confrontan intereses forestales y ganaderos, una frontera sojera en expansión, la extracción de minerales y el corredor de petróleo y del tren que va hasta Brasil. El Chaco o Provincia de la Cordillera ubicada al Sur, territorio tradicional de los Guaraníes, se constituye ahora como escenario de tensiones territoriales, conflictos relacionados con los hidrocarburos y el propio proyecto regionalista ‘chaqueño’ que se opone a la dominación cruceña” (7).

El Referéndum Autonómico, se realizó primero en Santa Cruz, pues era hasta entonces la plaza más fuerte de los cívicos. Pero, lejos de la gran victoria que anunciaban con triunfalismo y afanes propagandísticos los organizadores del referéndum, fue ocasión para mostrar la profundidad de las fracturas internas en las visiones sobre la propia autonomía departamental.

El acto electoral no pudo llevarse a cabo en varias provincias debido a que sectores organizados impedían la apertura de las mesas de votación, mientras en otras se imponía la abstención. No faltaron los enfrentamientos y la violencia. Al final del día, la fiesta regional que debió ser el plebiscito, se convirtió en un frío anuncio que todo había marchado según las expectativas de los cívicos.

“La improvisación, el desorden, la violencia, las denuncias de fraude en el padrón, la aparición de ánforas repletas de papeletas marcadas con el SI, deslucieron el acto que se suponía fortalecería al CPSC. En la noche, los resultados se anunciaron ante un escenario preparado para una celebración masiva, pero en su lugar, se tuvo un acto ‘frío’ y rápido, donde se anunció que 85% de los electores habrían aprobado el estatuto autonómico. En los días posteriores esta cifra también quedó en duda, por el conflicto de la Corte Departamental electoral de Santa Cruz para cuadrar los ya anunciados datos, con el padrón electoral” (en La mala hora de la autonomía: Boliviapress: 2008).

Sin embargo, la nota más fuerte de la resistencia se generó en la propia ciudad, en el barrio popular denominado Plan 3000, pues los vecinos organizados trataron de impedir la apertura de mesas de votación en las escuelas y terminaron descubriendo y mostrando ante los medios de comunicación, la existencia de ánforas llenas de votos marcadas con el “SI”. La UJC concentró esfuerzos en la zona a fin de controlar el descontento, sembrando amenazas y golpes, con el único resultado de remachar la imagen autoritaria de los autonomistas.

Los hechos producidos en el departamento que lideraba las demanda autonómica, resultó un mal presagio para los prefectos de los otros departamentos. De este modo en Beni, Pando y Tarija llevaron el proceso electoral con más cautela y menos optimismo. En Occidente en cambio, particularmente en Cochabamba, el 4 de Mayo se realizaron multitudinarias concentraciones en contra del “separatismo”, desahuciando cualquier posibilidad de avance cívico y dejando en situación muy complicada al Prefecto autonomista, Manfred Reyes Villa.

Que los resultados del 4 de mayo comenzaron a hacer mella en CONALDE se hizo evidente a continuación, puesto que una fracción con representación en el senado (el partido del ex presidente Jorge Quiroga Poder Democrático y Social PODEMOS) viabilizó de manera sorpresiva, una ley que mantenía empantanada hace meses. La Ley de Convocatoria a Revocatorio para Presidente, Vicepresidente y Prefectos.

El anteproyecto de ley había sido presentado hace meses por la bancada del MAS, como una vía democrática para zanjar las diferencias con el bloque cívico, pero los prefectos del bloque de CONALDE se negaban a aceptar esta vía, la consideraban fácil para el gobierno ya que no necesitaría esfuerzo para ser ratificado, pero muy peligrosa para el bloque de prefectos que podría verse disminuido. Por este motivo, PODEMOS había frenado su aprobación final, pero ante lo que consideraron un fracaso del bloque cívico regional, el sector parlamentario trató de recobrar la iniciativa política con una maniobra, destinada a bloquear el Referéndum para la aprobación de la Constitución²⁰

²⁰ La legislación boliviana solo permite llevar adelante un referéndum de carácter nacional en el mismo año.

La acción fue mal recibida, los Prefectos del CONALDE que anunciaron que se había procedido sin consultarles, rechazaron de plano la idea y no tardaron en lanzar acusaciones de traición a los parlamentarios del PODEMOS. El hecho minó irremediablemente la unidad del bloque. En los siguientes meses las muestras del desbande opositor se incrementarían.

A pesar de nuevas amenazas de desacato del bloque de Prefectos, el referéndum revocatorio no tenía vuelta de hoja y finalmente se llevó a cabo. Los resultados, sin embargo, no mejoraron la situación política, ni ayudaron a deponer posiciones atrincheradas. Como era previsible, el Presidente fue ratificado, con un porcentaje de votación mayor al que había obtenido en la elección. En contrapartida, los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija fueron también ratificados, con altos porcentajes de apoyo. Solo fueron revocados los Prefectos de La Paz y Cochabamba, que de todas maneras ya tenían su liderazgo muy desportillado.

Estos resultados fueron interpretados como una “victoria” por ambos bandos y de hecho territorializaba las contradicciones del momento político (un asunto de Oriente contra Occidente), ocultando la cuestión de la existencia de dos proyectos económicos distintos. Tanto el gobierno como los cívicos se sostuvieron en sus posiciones, atribuyéndose mayor legitimidad que el otro y se enfrascaron nuevamente en pedidos de diálogo, encuentros y mediaciones, sin consecuencias ni acuerdos.

La situación cambió, con la decisión de avanzar en la convocatoria a Referéndum para la aprobación de la nueva Constitución en el Congreso Nacional, fijando la fecha de su realización (7 diciembre de 2008). Ello provocó una enconada reacción cívica y anuncio de resistencia regional. Los prefectos y comités cívicos de cinco departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) anunciaron movilizaciones, tanto para frenar el Referéndum Constituyente, como también para pedir la restitución de los fondos del IDH. De este modo lograban conjugar sus demandas políticas con las propiamente regionales.

Cumpliendo con sus amenazas, el bloque autonomista comenzó su ofensiva a fines del mes de agosto, con el corte de vías camineras en el sur del país y de carreteras incluso aquellas que conectaban con los países vecinos. Luego, radicalizaron sus acciones con la toma de instalaciones y oficinas públicas, acrecentando la violencia a niveles intolerables. En los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, entre el 9 y 11 de septiembre, grupos afines a los cívicos, entre los que se contaban principalmente jóvenes, empleados de las prefecturas, alcaldías y otros miembros de los comités cívicos, saquearon las oficinas de empresas públicas como ENTEL, cerraron o incendiaron otras tantas dependencias públicas como el Servicio Nacional de Impuestos, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Aduanas, Administradora de Carreteras. También tomaron las instalaciones de YPF, provocando desabastecimiento en la distribución de carburantes a

nivel nacional, además de interrumpir la exportación de gas natural a Argentina. Incluso se llegó a dinamitar oficinas y alguna torre eléctrica. Siguieron atentados contras las viviendas particulares de autoridades y militantes del MAS, amenazas a la seguridad de las misiones de salud cubanas, ocupación de los aeropuertos y terminales de transporte terrestre. (El Diario, 10 Agosto 2012).

Las fuerzas del orden y contingentes militares que resguardaban instalaciones, equipos y la seguridad personal de algunas autoridades públicas, se vieron rebasadas por la violencia de los ataques. Tras fracasar en el intento de dispersar a los movilizados con gases lacrimógenos, y acatar la orden de no utilizar armas de guerra, los efectivos llegaron a ser atacados y golpeados, en medio de una sorprendente paciencia que evitó víctimas fatales.

No tardaron en producirse enfrentamientos entre civiles. Campesinos e indígenas entablaron escaramuzas con grupos cívicos en el afán de controlar ciertos puntos estratégicos como oficinas públicas, caminos y carreteras. En las ciudades, se pugnaba por la “toma” de espacios simbólicos, medios de comunicación populares, espacios de trabajo informal como mercados, incluso las oficinas de organizaciones sociales. Los enfrentamientos se prolongaron por días (en La Razón 12 septiembre 2008).

En la ciudad de Santa Cruz, al margen de las instalaciones públicas, los grupos cívicos, intentaron tomar la Radio Integración y el mercado, ubicados en el barrio popular Plan 3000, lo que provocó la reacción de vecinos y vendedores, que terminaron enfrascados en una batalla callejera por el control del barrio, que se mantuvo durante tres días.

Desde el 9 hasta el 11 de septiembre, grupos de choque liderados por la UJC intentaron ingresar al barrio sin lograrlo, pero lo mantuvieron cercado y en constante estado de tensión. Pronto el asedio al barrio se transformó en un “escenificación” de la pugna nacional, y por lo tanto su defensa y control en un asunto político, pero sobre ese tema hablaremos con más detalle en adelante.

El gobierno, que no tenía control en los departamentos ya mencionados, respondió a la situación, apelando a la comunidad internacional. Denunciaba la puesta en marcha de un golpe de Estado “civil” en Bolivia y buscó el compromiso de las naciones vecinas de no reconocer otro gobierno, fuera del electo democráticamente en Bolivia, y también rechazar cualquier intento separatista. A fin de cuentas, el respaldo de los países de la UNASUR habría de rendir frutos al gobierno de Morales, en la retoma del control del país.

En cambio, las relaciones con EE.UU. fueron cada vez más tensas, se acusó a la embajada norteamericana no solo de apoyar, sino de propiciar los aprestos golpistas y remató con la expulsión del embajador norteamericano en Bolivia.

Los movimientos y organizaciones sociales de carácter nacional y en especial las indígenas y campesinas se organizaron, para enfrentar la peligrosa situación en la Coordinadora Nacional del Cambio CONALCAM, que habría de determinar una marcha hacia el oriente con el fin de apoyar a los que allí resistían a los cívicos (Plan 3000), cercar la ciudad de Santa Cruz y retomar las instituciones.

La situación del país era grave y no se vislumbraban salidas cercanas, la violencia se había ya apoderado del escenario, aunque afortunadamente no se habían producido víctimas fatales. Fue precisamente este ingrediente, el que acabarían por imponer las condiciones del diálogo y negociación entre el gobierno y los cívicos. El 11 de septiembre, se produjera una masacre en uno de los departamentos en conflicto.

En Pando, hacía meses que los cívicos realizaban acciones de fuerza y violencia, como tomas de oficinas, saqueos y golpizas a dirigentes del MAS y “collas”, bajo el amparo y apoyo de las principales autoridades de la Prefectura del departamento. En septiembre del 2008, en el marco de las acciones coordinadas con otros líderes cívicos, los grupos de choque, tomaron el control de la ciudad de forma relativamente fácil y al parecer bajo una sospechosa inacción de los organismos de seguridad policial y militar.

Al parecer, en el marco de las movilizaciones desarrolladas por las organizaciones indígenas y campesinas en todo el país, las de Pando habían convocado a un ampliado, con la finalidad de realizar una marcha en Cobija, la ciudad capital de departamento. Según la versión del artista César Brie, que realizó una exhaustiva investigación del caso y un video documental sobre la masacre, con esta acción, los campesinos intentaban poner a buen recaudo los archivos de oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que atestiguan los procesos de dotación de tierras fiscales expedidos recientemente por el gobierno.²¹

El punto de concentración de los campesinos, era el poblado de Filadelfia, muy cercano a la ciudad de Cobija, antes de llegar a este punto, fueron detenidos, puesto que allí (Porvenir) se había apostado un grupo de cívicos que en su afán de frenar su avance hacia la ciudad, habían cavado zanjas con maquinaria prefectural. Los seguidores del Prefecto Leopoldo Fernández, con petardos y tiros al aire, pusieron en fuga los marchistas, los campesinos piden apoyo a sus compañeros ya concentrados en Filadelfia, se suceden acciones de uno y otro lado y enfrentamientos en el camino.

En algún momento, el intercambio de petardos y gases se transforma en intercambio de balas, que ya no son al aire sino al cuerpo de los oponentes. Hora que pasa, la situación empeora, a las cuatro de la mañana, se registran dos heridos de bala, a las nueve, el primer muerto. Al mediodía, habían llegado desde Cobija un grupo de cívicos portando armas, se presume que estaban enfurecidos por la noticia de una muerte entre sus filas, disparan descontroladamente sobre una muchedumbre de campesinos. Hombres, mu-

21 César Brie, La masacre de Pando.

jeros, niños y ancianos tratan de escapar por la única vía, el río, hasta allá los sigue la balacera, muchos morirán en ese trance. El trágico saldo se conocerá posteriormente, once muertos y cientos de heridos.

Pero las cosas no acabaron ahí, con la ciudad controlada por los cívicos y la policía local actuando en su apoyo, las garantías personales básicas se desvanecieron para todos aquellos acusados de ser “campesinos”, pertenecer al MAS o ser collas. En Cobija se vive un día de horror y luto: rehenes interrogados bajo tortura, heridos a los que se niega atención médica o que son golpeados en los centros médicos, intentos de linchamiento a líderes indígenas, detenciones ilegales.

Por la noche, toda Bolivia conoce la noticia: se ha producido una masacre en Pando, la llamada “Masacre de Porvenir”. Al día siguiente, el gobierno decreta la suspensión de garantías constitucionales y la militarización de la zona, un contingente militar aterriza en el aeropuerto para finalmente tomar control de la ciudad. El Prefecto Leopoldo Fernández sería apresado más tarde y trasladado a la ciudad de La Paz.

El 13 de septiembre, miembros del CONALDE en desbande, anuncian su predisposición a iniciar el diálogo con el gobierno y llaman a pacificar el país. Se instalan mesas de diálogo donde ambas partes acordarán términos para someter a referéndum el nuevo texto constitucional. De este modo terminó la ofensiva cívica.

Cerco y defensa del Plan 3000

Como mencionamos anteriormente, en el barrio “Plan 3000” resistió el asedio de los denominados “autonomistas”, principalmente de su brazo operativo la UJC, durante tres días (9 -11 de septiembre de 2008). Fueron esos días de lucha y su significado en el contexto que vivía el país, los que transformaron el sentido peyorativo de “zona roja” que le habían asignado los sectores acomodados de la ciudad, vinculándolo a la criminalidad y la inseguridad, para convertirlo en sinónimo de lucha y coraje.

Si nos situamos en la disputa que mantenía la elite cruceña frente a los intentos de llevar adelante cambios económicos y políticos que afectaban sus intereses y privilegios, un barrio humilde como el Plan 3000, no era precisamente una pieza importante. De hecho, todo muestra que el Comité Cívico por Santa Cruz, daba por descontado el apoyo de los sectores urbano populares. Después de todo, los migrantes de occidente y de las propias provincias de Santa Cruz han internalizado fuertemente los principales componentes del discurso regionalista y para muchos la única forma de evadir el estigma social que significaba su origen, era mostrarse “más cambas que los cambas”. Ello significaba, adoptar el acento, la forma de vestir y la defensa de la región.

Los primeros cabildos organizados por el Comité Cívico mostraron elocuentemente este hecho, gente de toda condición social asistió a los mismos, enarbolando la bandera

verde y blanca y pidiendo Autonomía para Santa Cruz. Los resultados de las elecciones nacionales en el 2005, mostraron también que Santa Cruz era la plaza fuerte de la oposición, fue allí donde logró doblar el número de votos conseguidos por el MAS.

Pero el apoyo territorializado a los líderes locales pronto se mostró insuficiente, en especial frente a las demostraciones de un gobierno que buscaba afianzar su apoyo popular a nivel nacional con acciones como las nacionalizaciones, las promesas de reforma en el régimen de tenencia de la tierra y la instalación de una Asamblea Constituyente. Las concentraciones multitudinarias de los cívicos cruceños, seguidas de encendidos discursos, simplemente no tenían capacidad para revertir la marcha de las cosas y las elites, agazapadas en las demandas cívicas, pronto tuvieron que recurrir a acciones de fuerza para mostrar su poder como las huelgas departamentales.

Pero, garantizar el éxito de los paros, en un país donde la gran mayoría de la población vive de actividades informales, que dependen en gran medida de operaciones comerciales diarias, era una tarea difícil. Pronto, el CSPSC, a través de su brazo operativo la UJC, se vio implicada en el uso de fuerza física y amenazas contra los vendedores y comerciantes para mantener paralizada la ciudad y la imagen de unidad, departamental que tanto necesitaban.

Las acciones violentas (e impunes) que en principio estaban reservadas para los partidarios del MAS, se aplicaron contra ciudadanos y ciudadanas comunes quienes recibían maltratos, golpes y amenazas, bajo el manto protector de la “euforia” regional.

Los mercados, ya víctimas de la violencia cotidiana que les reporta su condición de chivos expiatorios de todos los males urbanos, también se convirtieron en blancos usuales de ataques físicos al considerarse una afrenta a los intereses regionales sus necesidades de sobrevivencia. Los comerciantes eran objeto de persecución y violencia desmedida, la misma que se justificaba en la idea de que TODOS ellos eran “collas”, por tanto sospechosos de boicot.

Pero los unionistas no imaginaban entonces que sus acciones lejos de escarmentar, serían el detonador para que los afectados se organizaran y finalmente los enfrentaran. Algunas de estas acciones, impactaron fuertemente en la subjetividad colectiva y terminaron de convencer a todos que “algo” había que hacer. Tal fue el caso del Miguel Pérez Condori, atropellado por una camioneta conducida por jóvenes cívicos, al negarse cerrar su negocio en el Mercado Abasto, el 28 de agosto del 2007 en medio de un paro cívico. El relato de lo sucedido a este señor, las imágenes de mujeres de pollera golpeadas por otras mujeres en la plaza principal mientras les gritaban “indias”, rostros ensangrentados y cuerpos pateados casi siempre por grupos de jóvenes, sin ningún respeto a la vida y haciendo gala de abuso y racismo, fueron la evidencia más clara de que la “autonomía” no era un proyecto para todos los cruceños.

Es cierto que los grupos encargados de cerrar comercios, conformados principalmente por jóvenes (UJC) lograron inicialmente su cometido de atemorizar, pero más cierto es que fueron estas acciones las que distanciaron irremediablemente a los sectores populares del bando autonomista.

“Sí vencían, ¿qué hubiera sido de nosotros?” Pregunta un joven del Plan 3000, y otro responde: “tendríamos la voz embargada”. Otro más asegura: “Seguro nos iban a pedir pasaporte en la ciudad”.

Los habitantes del Plan 3000, aseveran que luego de ser objeto de la violencia unionista, grupos de diferente índole comenzaron a reunirse para analizar la situación y tratar de enfrentarla.

“La primera vez nos organizamos fue en un paro cívico que hubo por un señor en el Abasto que lo atropellaron [...] ésa fue la primera vez que salió una gran cantidad de gente aquí en el Plan 3000, porque se identificaron con él, era del interior, era gremialista y lo atropellaron como si fuera un animal cualquiera y se veían las golpizas que le daban a la gente en el centro y de ahí fue el antecedente” (entrevista JB).

Conforme crecían los abusos de la UJC, las muestras de rebeldía se hicieron frecuentes. Para el 4 de mayo 2008, cuando se llevó a cabo el referéndum autonómico, disturbios relevantes se registraron en el Plan 3000, los vecinos ya habían superado el miedo y estaban suficientemente organizados como para evitar que muchas mesas de votación fueran instaladas en la zona. Incluso alcanzaron a denunciar públicamente el hallazgo de ánforas llenas de papeletas marcadas de antemano con la opción por el sí.

El veinte de agosto, el CPSC declara nuevamente un paro y en su afán de asegurar su cumplimiento, un grupo de la UJC se dirige al Plan 3000 para cerrar negocios; allí los jóvenes del barrio, los enfrentan:

“Al mediodía, ciudadanos bloquearon la entrada de la ciudadela Andrés Ibáñez y montaron guardia en la rotonda del Plan, una de las zonas más pobladas de la capital cruceña, para resguardar a comerciantes y empresas privadas que no acataron el paro. Decenas de jóvenes de la UJC armados con bates de béisbol intentaron romper el cerco e ingresar a la zona.

La Policía dispersó con gases lacrimógenos a los dos sectores enfrentados y los unionistas tuvieron que retroceder. Al promediar las 16 horas se informó que 10 personas resultaron heridas en los enfrentamientos y que al menos tres unionistas fueron detenidos en posesión de armas de fuego” (en Bolpress, 20 de Agosto 2008).

Posteriormente, en el barrio se realizó un cabildo donde los vecinos declararon la Ciudadela Igualitaria Andrés Ibañez, territorio libre de “fascismo racismo y discriminación”, y pidieron “su” autonomía, es decir convertirse en un municipio. Quedó claro, que en el *Plan* se había articulado un polo popular dispuesto a dar pelea.

Sentimos miedo y rabia, pero era más fuerte la rabia

Cuando se pregunta a los vecinos y vecinas del Plan 3000 por qué inició el conflicto, la mayoría habla de una necesidad de defenderse, hay muchos que incluso aseguran que fueron obligados por las circunstancias. Al parecer la UJC utilizó la coacción como método para acallar e incluso prevenir cualquier expresión de descontento, pero ésta fue tan extrema que los pobladores del barrio llegaron a sentir que sus vidas y la de sus familias estaba en peligro, así como sus lugares de trabajo, si no le ponían un freno a la situación.

Alex, un joven dueño de un taller de metalmecánica en la zona, quien nunca ha ocupado cargos dirigenciales de ningún tipo, ni antes ni después del 2008, pues dice que le falta el tiempo, acepta orgulloso haber participado activamente en la resistencia durante los tres días que duró el conflicto, incluso haber *comandado* una escuadra de jóvenes, pues encontró útil en ese momento, aplicar tácticas que le enseñaron en el cuartel cuando prestó el servicio militar. En realidad, toda su familia participó en el conflicto, incluso su madre que ya es anciana (65-70 años), traía agua “por lo menos” para su hijo y los demás jóvenes.

En esos días, Alex vio por televisión cómo los cívicos quemaban y provocaban destrozos en oficinas estatales, en señal de haberlas tomado, y se preguntaba si algún día se recuperarían esos recursos, si alguien devolvería el dinero de los daños ocasionados. También sabía que en los meses anteriores, los jóvenes de la UJC golpearon a personas “incluso ancianos” y que llamaban “collas de mierda”, a personas que incluso habían vivido mucho tiempo en Santa Cruz.

“Yo tengo 28 años y que uno de 18 quiera patearme y decirme colla de mierda... Yo vivo aquí más tiempo, doy trabajo, apporto, vivo aquí. Pero los jóvenes llegaban con palos y pateaban nuestras puertas ¿qué podíamos hacer?”
(Entrevista AH).

Aunque para él “no hay persona que no sea política”, la militancia partidaria está lejos de sus intereses, pero para los unionistas todos los que se oponían su abusos eran *masistas*²²:

“Imagínese si los jóvenes no hubieran venido, nosotros nunca hubiéramos salido ni siquiera a pelear [...] Yo por ejemplo, como decirte si alguien me dice

22 Militante del Movimiento al Socialismo MAS

este es masista porque apoya la gobierno. Pues no, si una persona defiende su lugar o ve un joven de 18 años que pega a una persona de edad, entonces prácticamente me declararía masista, no hay otra pues ¿qué opción me dejan? [...] yo y mi familia salimos espontáneos, salimos espontáneos porque vivimos acá y si así fuera varias veces, diez veces o mil veces, o hasta donde me diera la vida saliera (sic.) a defender” (entrevista AH).

En los días anteriores casi todas las instalaciones, instituciones, oficinas y sedes de relevancia habían sido tomadas con tanta rapidez y cálculo que hacía sospechar de la existencia de un plan elaborado con criterios militares. Fueron tomados paulatina y selectivamente las instalaciones estratégicas: telecomunicaciones, transporte aéreo y terrestre, oficinas de recaudación de impuestos, la oficina del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA donde se lleva el registro del saneamiento y titulación de tierras, y luego las sedes de organizaciones indígenas de tierras bajas como la Central Étnica de Pueblos Indígenas de Santa Cruz (CPESC) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), incluso oficinas de instituciones no gubernamentales, la ciudad estaba prácticamente bajo su control. Los verdaderos militantes y simpatizantes del MAS, muchos de los cuales eran trabajadores de las instituciones y empresas tomadas, la policía y el ejército habían tratado de ofrecer resistencia a las tomas, sin éxito.

La excepción era el Plan 3000, donde se trasladaban documentos e incluso oficinas para que continúen funcionando de forma provisional, como por ejemplo, el Servicio Departamental de Educación SEDUCA. El barrio, también se había convertido en refugio de militantes, autoridades del MAS y dirigentes sociales amenazados. Quizás por esa misma razón, se convirtió en objetivo estratégico para los unionistas, era “el último bastión que debían vencer los cívicos” como expresa un dirigente (entrevista DV).

En la noche del 9 de septiembre, los vecinos estaban en alerta pues habían escuchado que los unionistas, como en otras ocasiones, pretendían atacar *La Rotonda*²³. Los comerciantes instalaron una vigilia en sus puestos, pues por la experiencia pasada sabían que ese era el blanco de bandas de asaltantes que acompañaban a los cívicos a cambio de quedarse con la mercadería robada. En la madrugada se registró el primer incidente:

“A las dos de la madrugada llegó una camioneta de la prensa, la red UNITEL, salimos con palos y piedras y los hicimos escapar. Dentro de una hora, llega la unión y nos dicen [...] ¡váyanse de aquí collas!. Entonces empezó... Fuimos a la policía y ellos los despachan” (entrevista QP).

Pero, al día siguiente, las cosas cambiaron:

²³ La Rotonda es el cruce de dos avenidas importantes, una que conecta el barrio con el centro de la ciudad y otra que atraviesa. Es como el centro del barrio, allí se concentraba una gran cantidad de gente que va o llega de la ciudad y se dirige a otros sectores, también hay un mercado y mucho comercio callejero, allí funcionaba la Radio Popular Integración, y de forma más camuflada la llamada “Casa del Pueblo”, sede del MAS.

“... se interna la gente de la UJC al Plan 3000, podemos decir miles de personas, entre ellos maleantes, y a las siete de la tarde o seis y media, ya un grupo muy numeroso empiezan a entrarse desde la plaza del Mechero hasta llegar a La Rotonda. Se entraron a La Rotonda con petardos de grueso calibre, y nosotros tuvimos que responder también, la gente salió con piedras y palos. Llamamos a la gente a través de la Radio Integración, la gente se concentró y le hemos dicho a todos los gremialistas que defiendan sus puestos, sino se les van a quemar. Entonces la gente se organizó, empezó a venir miles de personas también y empezó el enfrentamiento. Nosotros los hacíamos correr y ellos nos hacían correr entre ambos bandos. Llega un momento en que nos llegan a ganar, se entran a los primeros puestos del mercado y empiezan a saquear. Un poco molestos la gente de nosotros, también los hicimos correr. Unos diez puestos del mercado han asaltado, no han dejado nada y lo querían quemar pero nosotros no hemos dejado. A partir de ahí empieza la lucha toda la noche...” (entrevista QP).

Desde ese momento durante tres días, los enfrentamientos serían continuos. Los vecinos y vecinas del Plan 3000 se agruparon en La Rotonda, muchos acudían al llamado que otros vecinos hacían por medio de la Radio Integración²⁴, en cuestión de horas eran miles en las calles. Niños, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres, familias enteras *defienden* la zona. “día a día se fue armando como una cruz humana” que abarcaba las principales vías de acceso, “me hubiera gustado que alguien enfoque desde arriba” (dice AH, uno de los entrevistados).

Es innegable el hecho de que la gran mayoría de vecinos que participó en el conflicto tenía como principal motivación la defensa, de la familia, el negocio y el barrio, pero también la dignidad que se había herido por el contenido racista de los ataques de la UJC.

Un grupo más reducido, respondía a posiciones políticas elaboradas pero también diversas, por ejemplo quienes hablaban de la necesidad de hacer frente a los “fachos” (fascistas) y la “derecha cruceña” y la necesidad de mostrar “que no todos están de acuerdo con la autonomía de ellos”, y finalmente los actores con militancia política que tenían una lectura nacional de los hechos, aunque no necesariamente compartían una misma visión. El grupo de dirigentes ligado al MAS por ejemplo, remarcaban que su objetivo final era la aprobación de la Nueva Constitución, pero para otros grupos este objetivo era demasiado estrecho.

Sin embargo, hasta ese momento, no toda la gente del barrio tenía una postura crítica respecto de los planteamientos de los cívicos, o las acciones de los unionistas, algunos vecinos afirmaron que existía, mucha “gente que alzaban las bandera autonomista” (en-

²⁴ Radio Integración era una radio comunitaria que operaba en el barro muy cerca del Mercado principal.

trevista MU), apoyaban a Rubén Costas y “tenían un cartel de él en sus puertas” (entrevista, AH).

La polarización del barrio, se confirma con el testimonio de gente que asevera que por ejemplo su barrio no participó pues se trataría de “lugares donde vive gente más acomodada [...] que estaba más apegada a los cívicos”. (entrevista MU). Un dirigente barrial dijo que ellos no participaron porque “fue una pelea entre dos partidos políticos. La UJC defendía a una parte y los supuestamente agredidos... eran políticos” (entrevista SS).

Muchos jóvenes del Plan actuaron “del otro lado”, es decir con los unionistas, aunque casi siempre se dice que fueron contratados, “habían amigos que han recibido un tanto de plata y estaban del otro lado tirando piedras y el padre le decía: ‘el otro día te vi allá carajo, del otro lado... En la casa vas a ver’” (entrevista AH).

Pero, las discrepancias tuvieron que quedar de lado cuando “la patada llegó”. Puesto que para los unionistas todos los que allí vivían eran iguales, eran “collas”, “masistas” y por tanto enemigos. De este modo, fueron ellos los que reforzaron los lazos comunes obligando a todos los vecinos a defender el barrio.

A todo el mundo le llegó. Se olvidaron que eran de Rubén Costas y salieron tuvieron que salir a defender su puerta porque ya los estaban pateando ¿a dónde estaba Rubén Costas entonces? (entrevista AH).

Pero en el país, que apenas días antes ha sido testigo de las imágenes que retrataban a Santa Cruz como un terreno totalmente dominado por los cívicos, la noticia de un barrio pobre resistiendo a sus embates, cosa no que había hecho ni siquiera el ejército, se convierte en una novedad y en una esperanza para los sectores populares.

La reacción no se deja esperar, en otras ciudades se organizan marchas con gritos de apoyo al barrio rebelde, incluso los vecinos de El Alto amenazan con enviar jóvenes combatientes de la “Guerra del Gas” para ayudar.

Es difícil saber si realmente llegó algún contingente desde El Alto, pero sí es cierto que es “la gente más combativa de todos los distritos” (entrevista DV) y también de algunas provincias, llegó hasta el barrio y participó del enfrentamiento.

“... te puedo jurar que no solo fue el Plan. Mire los que no hallaron como defenderse, como Los Lotes [...] y no hallaron como defenderse y tenían que aguantar, tuvieron que venirse y luchar junto con nosotros. El Plan fue como el claro ejemplo de Santa Cruz que no discrimina sino el que acoge. Había gente de la Villa [Primero de Mayo] que pelearon con nosotros. Fue bueno y no tenemos cómo pagar” (entrevista AH).

Gente de otros barrios, representantes de otras organizaciones sociales e indígenas, activistas, jóvenes universitarios, militantes de casi todas las tendencias de izquierda, y de propio partidos de gobierno estuvieron presentes allí en los tres días que duró el conflicto.

Los Actores

Los sectores organizados cuya presencia es reconocida por los vecinos son:

- Unión de Juntas Vecinales del Plan 3000. Asociaciones de gremiales de los mercados (18 asociaciones) Universidad Popular Igualitaria, Transportistas, Cooperativas de agua.
- La Juventud Igualitaria Andrés Ibañez del Plan 3000. Juventudes Unidas del Plan 3000, Organización juvenil Marcelo Quiroga (no es del barrio), Organización de jóvenes Luis Espinal (no es del barrio).
- Jóvenes anarquistas, militantes del MAS, militantes del Partido Comunista, maoístas, militantes del Partido Obrero Revolucionario.

De todos ellos, está claro que los actores más relevantes fueron los vecinales, no necesariamente por la acción organizada de las juntas vecinales, pues solo algunos dirigentes barriales tuvieron un rol importante. Fueron las familias enteras sean mujeres y hombres, jóvenes e incluso niños quienes se quedaron durante los tres días en guardia en La Rotonda y formaron la cruz humana que cubría las principales avenidas de la zona, los verdaderos y hasta hoy orgullosos “guardianes del plan”.

Hay quienes hablan de la llegada de campesinos San Julián y El Torno, también de la presencia de “Los Ponchos Rojos”²⁵ de La Paz, aunque en el último caso es difícil saber si se trata de un mito o rumor difundido para amedrentar a los oponentes o de vecinos de Achacachi que viven en la zona hace mucho tiempo. En el mismo sentido se habla de las Bartolinas, o la organización de mujeres Juana Azurduy sin que se haya podido verificar su presencia orgánica.

Como se sabe mucha gente llegó al Plan 3000 para apoyar la resistencia, aunque no todos tenían sanas intenciones como dice un joven:

“después del segundo día de enfrentamiento se vio que se iba a resistir, que no iban a entrar y vinieron los directores de algunas instituciones para figuretear y para decir en La Paz ¡Yo estuve ahí!” “Hasta fotos se hicieron sacar con polera. Yo los vi encamisados no más” (Entrevista JB).

²⁵ Los Ponchos Rojos, se llama así a un grupo de indígenas aymaras de la Provincia Omasuyus que se habría conformado en 2003, luego de la masacre de Warisata. Se proclaman como defensores de los derechos indígenas, enarbolan la reconstitución del kollasuyo. Usan como “uniforme” la vestimenta tradicional de las autoridades originarias, se distingue el uso de un poncho rojo.

Pero más sensible que la presencia de quienes sólo estaban allí para “tomarse una foto”, fue la ausencia de actores del espectro “popular”, como los trabajadores fabriles, o los afiliados a la Central Obrera Departamental, que no hicieron presencia organizada.

Hay en efecto muchos trabajadores y obreros de fábricas que viven en la zona, por la cercanía al parque industrial, que es posible que estuvieran presentes pero no al llamado de su organización laboral. En todo caso obreros de San Aurelio, el ingenio azucarero que ocupa un inmenso espacio entre el Plan 3000 y otro distrito al sur de la ciudad, fueron convocados para custodiar las instalaciones para cuidarla de ataques de los vecinos y lo mismo hicieron algunos obreros en el caso de las instalaciones de la fábrica de Branco Marincovich.

Sin embargo, es interesante que los vecinos y vecinas consideren que allí fue muy importante en el combate la presencia de los ex trabajadores mineros, porque su experiencia en el manejo de cachorros de dinamita ayudó en los momentos más duros de la pelea. Habiendo llegado en el año 1986 a la zona, muchos de ellos trabajan por cuenta propia y en talleres y negocios dentro y fuera del Plan 3000. Dicen en realidad la mayoría de los comerciantes del Mercado de la Rotonda son ex-mineros.

En términos de generacionales se destacan los jóvenes. Que fueron los que participaban en los enfrentamientos en primera línea para impedir que los del UJC avancen hacia La Rotonda.

“Una parte de los jóvenes y los que hacia resistencia eran hijos de gremiales, que si o sí tenían que defender los puestos de los padres [...] Los que no eran del mercado, estos eran gente que se sentía discriminado y abusado, porque decían: ‘No es posible que venga otra gente y a mi vecino que vende en La Rotonda quieran a venir a darle palo para que pare, quieran venir a entrarse’. Entonces no van a venir los ‘culitos blancos’ a entrarse acá” (Entrevista JM).

La masiva participación de jóvenes en el conflicto, se explica por el carácter violento de los enfrentamientos. Las personas mayores se quedaba en la Rotonda, puesto que eran presa fácil para los unionistas en su mayoría varones jóvenes, que no tenían ningún reparo en el daño físico que causaban “si te agarraban te daban y te daban y te podían matar” (entrevista JM). A la acción de los jóvenes autonomistas, se opuso a la acción de los jóvenes del barrio, descritos como “pobres” “flaquitos” y “morenos” pero que resistían mucho más que los “blancos, ricos, altos y rubios” de la UJC.

Las mujeres, que en gran mayoría se quedaba en la retaguardia por los mismos motivos, pero se ocuparon de los heridos, la provisión de agua y alimentos. Armaron ollas comunes a la par que aprovisionaban piedras y otras cosas necesarias, lo cual no las libraba totalmente del peligro, pues eran la retaguardia

“Atrás habían pura mujeres y nos lograron arrinconar, no había más fuerza, pero había la reserva: las mujeres y empezamos a gritar. Ellos estaban cansados, aprovechamos eso y empezamos a correr, con lo que teníamos y una cuadra antes logramos gritar con todas las mujeres, logramos que se fueran...” (Entrevista DV).

Según el testimonio de los vecinos, también los niños participaban, corrían de un lado a otro llevando noticias, un grupo incluso salió dispuesto a participar de los combates, desfilaron por las calles como un batallón, con “cascos” que no eran más que ollas robadas a las cocinas de sus madres. Los mayores que vieron esa escena quedaron impresionados y recuerdan emocionados la escena. Por supuesto, no les permitieron avanzar, los hicieron volver a sus casas, pero en medio del desorden, volvían a aparecer cumpliendo la función de mensajeros y vigilantes.

Fuera de las familias, y las organizaciones sociales e incluso de la presencia de experiencia como la de los relocalizados, o la novedad de los jóvenes organizados, algunos hablaron de una presencia un tanto incómoda de jóvenes que viven al margen de la ley. Don DV contó que vino gente de todas partes a apoyar pero rescata la presencia de jóvenes “diferentes”.

“Nos apoyaron con juventudes que están en el anonimato, están en el olvido... diferente a la Juventud Igualitaria del Plan 3000, a ellos se les conoce oficialmente. Pero ellos son el rostro bonito, digamos. El rostro bonito de la defensa del Plan. El otro grupo es el que no lo hemos reconocido, son gente muy humilde. Un joven universitario llegó a ingresar a ese mundo que le dicen –Despreciándolos ¿no?– Un mundo subterráneo, de los cleferos, de los malvivientes, de los pitilleros, de los que roban, de los que matan, que asaltan, pero gente joven. El joven logró aglutinar y esa gente es la que ha puesto la cara silenciosamente y ese es el grupo que ha movilizadado y tenían mucha fuerza...” (Entrevista DV).

Estos hechos nos dan pie a diferenciar entre las organizaciones “formales”, es decir aquellas que por su accionar dentro de los marcos de lo aceptado socialmente como legal y apropiado, tienen un reconocimiento social y son puestas al frente o en la superficie de la movilización, como un blindaje ante posibles acciones de desprestigio de los oponentes. En lo hechos en la movilización pueden estar presentes otros actores, digamos “informales”, aquellas que no están institucionalizadas, como lo fueron los grupos juveniles de “autodefensa” y grupos políticos de izquierda que no son electorales. Finalmente, están aquellos sectores sobre los cuales pesa algún tipo de condena social, o que están por fuera de la legalidad establecida, cuya participación puede ser decisiva, especialmente en un momento de emergencia como el que se presentó en esos días²⁶. En

²⁶ La gente dice que “parecía Bagdad” o “parecía una zona de guerra” especialmente en la noche donde la oscuridad era rota por los destellos producidos por la explosión de petardos.

ese caso, su presencia es requerida, admitida y valorizada como algo excepcional, pero no se libra de la invisibilización en los relatos posteriores que intentan por lo general resaltar las virtudes y el heroísmo de la acción y omite algunos detalles que pudieran resultar incómodos.

Coordinación y articulación

Como dijimos, gran parte de la gente salió a las calles apenas se enteró del ataque al mercado, es probablemente por esa razón, que la mayoría de los participantes afirma que “todos salieron de forma espontánea”. Esta frase alude a un sentido “voluntario” de la acción, pero no se trata de carencia de estructuras organizativas o niveles de articulación entre ellas. Por supuesto no se trató, de una estructura militar o de un mando único, pero es posible distinguir distintos niveles de coordinación y articulación entre los grupos y organizaciones en esos días, los mismos se fueron creando y mejorando sobre la marcha, sin responder a un diseño o planificación.

De esta forma, podemos distinguir a los grupos con niveles mayores de organización entre los que estarían los grupos políticos, partidos y militantes de izquierda, que actuaron en grupos pequeños, con gente de confianza y con diferenciación de tareas, muchos de ellos tenían ideas básicas de “combate callejero” y experiencia por haber participado en acciones similares. Tenían reuniones y comunicación frecuente y códigos (santos y señas) para reconocerse y mejorar la seguridad de sus miembros. Tenían tareas asignadas como la vigilancia e información de las acciones de los unionistas. También existían encargados de abastecimiento y finalmente los de “primera línea”, es decir aquellos que estaban en los puntos de enfrentamiento para evitar el avance hacia la Rotonda.

Entre ellos, los militantes del MAS eran quienes tenían una capacidad logística mayor, pues contaban con una sede, la llamada “Casa del Pueblo” (entrevista DS) donde podían reunirse, organizar la atención de heridos y otro tipo de aprovisionamiento, incluso una radio comunitaria. Respondían a la estructura organizativa partidaria, pues habían logrado consolidar una dirección o representación a nivel de barrio. Esta dirigencia provenía y tenía contactos con organizaciones sociales, como los jóvenes “Iguaitarios” vecinos y dirigentes antiguos en la zona, conocían muy bien el terreno y eran el nexo con las otras instancias orgánicas del MAS, de la región o del país.

Algunos militantes, aseguran que el partido brindó todo su apoyo, incluso que fue crucial para el éxito de la movilización. Se habla de una especie de provisión de requerimientos en todos los ámbitos, desde petardos, escudos, hondas, alimentos e incluso médicos para atender a los heridos. Sin embargo, hay quienes opinan que el partido no apoyó mucho, aseguran que la estructura nacional mantenía distancia de lo que ocurría en el Plan, pues era más conveniente, la figura de una resistencia popular sin vínculos partidarios.

Otros grupos especialmente de jóvenes actuaban por su cuenta, algunos como *Los Iguaitarios* ya habían participado de otros enfrentamientos con los unionistas. Por ello, tenían escudos y elementos para distinguirse, además de coordinación interna en sus acciones, la mayoría peleaba en primera línea. Pero fuera de los grupos de jóvenes más consolidados, los jóvenes conformaron pequeños grupos (*escuadras*), utilizando los conocimientos adquiridos en el cuartel, participaban también de los enfrentamientos más violentos y hacían rondas para detectar la presencia de los autonomistas en las calles o hacer seguimiento a posibles lugares de incursión.

Grupos de personas con oficios afines como los vendedores del mercado y sus familias, dueños de comercios, responsables de las cooperativas de agua, etc. se reunían para cuidar los lugares de trabajo y proteger las cosas de valor.

Puede ser que uno y otro grupo hayan tenido reuniones de planificación y coordinación, pero es cierto también que ninguna estructura era capaz de abarcar, controlar o dirigir la cantidad de iniciativas y acciones particulares que surgían de la gran cantidad de gente que se encontraba en las calles. Pero lo relevante es que ante la debilidad de instancias aglutinadoras y centralizadas, es casi imposible hallar algún aspecto que no hubiera estado cubierto por los participantes de la acción, los asuntos logísticos, los de comunicación, alimentación, atención de heridos, aspectos tácticos, incluso la recreación y el ánimo colectivo.

Tanto la Radio Integración, como las improvisadas reuniones en La Rotonda servían de canales de comunicación e información de lo que sucedía en otros puntos de enfrentamiento, la ciudad y el resto del país. “Habían dos vehículos para hacer ronda y llamaba para confirmar datos, si alguien decía están viniendo por allá se llamaba para coordinar” (entrevista JB).

Estrategias. La cruz humana en acción

Luego del primer ataque, en La Rotonda (por el Norte) los unionistas intentaron ingresar por otros puntos, el Mechero que queda al sur, el Ingenio San Aurelio (sud oeste) y la Campana hacia el Este. En cada nuevo intento, la gente reaccionaba, defendía e lugar y luego un contingente se quedaba para hacer guardia y cerrar el acceso. Los vecinos/as del Plan 3000 terminaron por controlar todos los posibles accesos y ocupando todas las calles que condujeran a La Rotonda.

Allí, estaban las mujeres y los adultos mayores como última línea de defensa de la radio y el mercado. También estaba la *Casa del Pueblo* que oficiaba como cuartel general donde llegaban los heridos, se podía oír las noticias y se producía alguna que otra reunión de coordinación entre sectores. En las avenidas y calles adyacentes, gente de todo

tipo. Y en primera línea, en las cuatro posibles vías de ingreso al barrio, escuadras de jóvenes que se enfrentaban en escaramuzas con los de la UJC.

Los militantes de partidos de izquierda, y otros grupos de jóvenes que habían participado en similares acciones, aportaban en la organización y uso de estrategias de combate callejero y además se habían dotado de algunos elementos de defensa, como escudos y protectores.

“Yo creo que [lo más efectivo] fue cuando el grupo de los Igualitarios se organizaron y aparecieron con escudos porque a grupo de la unión juvenil siempre se los veía con escudos y algunos protectores y eso siempre da confianza para avanzar. Uno puede tener mucho coraje puede ser muy valiente pero si no esta armado logisticamente terminan reprimiendo y también aparte me acuerdo que los trotskistas utilizaron como escudos de calamina y avanzaban y eran la vanguardia tanto igualitarios como trotskistas así que empezaron a avanzar, avanzar y bueno eso generó la confianza de los de atrás y bueno se los fue repeliendo” (entrevista MU).

También se habla de un ex – montonero, argentino que ayudaba en el mismo tema:

“ese sabe todo, era de los montoneros, el encabezaba la parte de conexiones de internet, tenía también un grupo, el daba la doctrina. Se reunía, hablaba abiertamente de temas de guerrilla” (Entrevista DV).

Otros, echaron mano de los conocimientos adquiridos mientras cumplieron con el servicio militar, para articular la defensa.

“Las personas mayores y los jóvenes que hemos ido al cuartel empezamos a operar de la forma en que se nos entrenó en el cuartel, cuando fuimos a servir a nuestra patria, cuando fuimos a hacer ese año de escuela que fue para todos nosotros; y pusimos en marcha todo eso y recordamos todo lo que se nos había enseñado en el cuartel y de esa manera comenzamos a atacar por los puntos estratégicos. Ellos querían, de manera absurda, entrar con toda la gente que tenían, al centro de la Rotonda y sin embargo nosotros pusimos una guardia en todos los puntos cardinales y también formamos una escuadra que los estaba esperando en La Rotonda para así formar nuestra resistencia” (Entrevista JM).

A ello le siguió la comunicación, ya que los cuatro frentes debían estar interconectados para mejorar la defensa o enviar refuerzos. En ello fueron útiles tanto los celulares, como chiquillos que corrían de un lado a otro para llevar mensajes.

Es claro, sin embargo que la estrategia más eficaz fue la ocupación física de las calles y el control de las principales puntos de ingreso a La Rotonda, lo que los vecinos llaman

la “cruz o cadena humana” donde participaban todos los vecinos “...hasta señoras y niños” (Entrevista JB).

“Había el lugar en donde no tenían que entrar de ninguna manera, era La Rotonda, porque estaba la radio [...] la gente iba a defender la radio a capa y espada, dormía cuidando la radio en el Trillo sector donde estaban los fachos, había grupos que estaban vigilantes de lo que pasa, había comunicación interna con un grupos de elite de organización de izquierda, por el otro lado estaba también del Quintanilla mas allá del Che Guevara estaba bloqueado, San Jorge, también estaba controlado, los pocitos también estaba controlado entonces lo lugares más importante estaban controlados, teníamos todo el radio que estaba controlado por los dirigentes vecinales y gremiales” (Entrevista EI).

También se utilizó el rumor para difundir información falsa que desanime a los oponentes, cosas como la posibilidad de uso de armas de fuego, o la presencia de refuerzos como los “ponchos rojos” o “guerreros del gas”.

“Recuerdo que un grupo de jóvenes, sería seguramente, porque llegaron en moviidades de lujo, (...) estaban por el colegio Claudina Thevenet y con vidrios oscuros, todo cerrado. Bueno, yo fui por allá y era de noche ya, recuerdo que agarré un palo de escoba y me fui así y como tenía vidrios oscuros no lo vieron. Yo les grite de lejos: ¡Sabes que nosotros venimos armados! –les dijimos– ¡Les damos pa’ su tiro y los bajamos! –les decía– Era un palo de escoba y ellos creían que era escopeta y corrieron como el diablo” (entrevista AH).

Estas armas (rumor) por supuesto estaban al alcance de los oponentes, quienes hicieron circular entre la gente del Plan 3000, noticias para amedrentarlos, como la presencia de *mercenarios colombianos* entre sus filas, los mismos que en determinado momento actuarían en una masacre. También disparaban regularmente al aire armas de fuego e incluso hubo momentos en que jóvenes del barrio resultaron heridos de bala, afortunadamente sin consecuencias fatales.

Los petardos, las hondas y los escudos eran las principales armas, cada grupo se ocupaban de conseguir su propia dotación, de hecho había grupos que desde los anteriores enfrentamientos venían acopiando cohetes. Tanto los comerciantes como vecinos colaboraron con la compra de petardos y acopio de piedras, pero al tercer día ya nadie tenía cohetes, así que solo quedaron las piedras, hondas y palos para defenderse.

Mientras el éxito de la defensa no estaba asegurada, hubo grupos que llegaron a planear una estrategia frente a una eventual retirada.

“Estaba tan tensa la cosa, que creíamos que nos iban a atacar [...] hacer una masacre. Si nos van a matar, nos van a matar como chulupis. No tenemos armas ¿dónde vamos a conseguir armas? Esa era otra pregunta, porque ya se oía que no era un levantamiento popular, sino que teníamos que resistir y a dónde teníamos que ir si pasaba algo más grave [...] Si nos vencían en La Rotonda nos íbamos a replegar al fondo y del fondo íbamos a salir, pero ya teníamos que tener armas...” (entrevista EI).

Una vez que la defensa estuvo asegurada y era poco probable que La Rotonda fuera tomada por los cívicos, varios sectores empezaron a discutir la forma de pasar a la ofensiva. Pronto cristalizó la idea de voltear la situación, tomar instalaciones simbólicas del poder empresarial cruceño. Los posibles blancos eran las cooperativas de servicios, medios de comunicación privados, empresas e industrias. Todo ello debía terminar con la recuperación de las instituciones estatales asaltadas por los cívicos.

Una parte de los dirigentes estuvo de acuerdo con estos objetivos y reconoce haber participado en los planes, otros aseguran que se trataba de desbordes de grupos aislados que no respondían a ninguna estructura. A estas alturas, es difícil establecer cuán lejos hubieran avanzado, pero el rumor se había extendido bastante, los propios empresarios denunciaron los aprestos y amenazas a sus propiedades. Muchos obligaron a sus empleados y trabajadores a montar guardia en sus instalaciones, como recaudo.

Al final, estas acciones quedaron suspendidas ante el peso abrumador de la muerte

“Nosotros esperamos ese día y al otro día íbamos a tomar ... pero ese día hubo la matanza de Pando [...] entonces nos quedamos ahí, hubo los muertos del Porvenir. Ahí nos quedamos, no sé si para bien o para mal, con los objetivos de pasara más a la historia. Con... no sé, con...heridos, muertos... No sé. Y ahí nos quedamos, y el resultado fue ese” (entrevista DV).

Con la masacre de Pando, la situación política del país cambió. La ofensiva cívica se fue diluyendo en medio de una serie de negociaciones y acuerdos políticos que en último término permitirían la pacificación del país. Todo esto ocurría lejos de la villa rebelde y quizás ninguno de los dirigentes de ese momento fue convocado a las reuniones que definirían el futuro del país.

Para los hombres y mujeres del Plan eso no era motivo de queja, habían cumplido su tarea y en un acto de humildad extrema no pedían ninguna retribución, ni estaban detrás de ningún protagonismo político. Saben que hay quienes han sacado provecho de esos días, conocen los nombres y los cargos que hoy ocupan algunos dirigentes que solo posaron para las fotos. Pero eso no les amarga. Si se les pregunta si valió la pena, contestan afirmativamente, entienden que si no actuaban en ese momento, el país hoy sería diferente.

Después del conflicto

Después del conflicto, los habitantes del barrio vivieron de forma intensa la euforia de la fama conseguida. Habían dejado atrás, de forma irreversible, la imagen del espacio periférico y marginal de la ciudad “más moderna de Bolivia”. Habían transformado el contenido de “zona roja”, asociado a la criminalidad, en un apelativo de lucha y dignidad.

Una señal de aquello fue la búsqueda de contactos con dirigentes del Plan que realizaban representantes de las organizaciones populares más importantes así como de dirigentes políticos, muchos los consideraban aliados estratégicos y otros buscaban ganar prestigio dentro del partido de gobierno.

“Al Plan 3000 a cada rato lo llevaban pàlla para estar delante las autoridades. Que él estaba con el Plan 3000, que el otro estaba con el Plan 3000. Si usted se da el trabajito de ver este fenómeno del Plan 3000, peor de los que han puesto la cara, de los que son públicos, los llevan como su trofeo: ¡Yo estoy con el Plan 3000! ¡Yo estoy coordinando! Gracias a eso, están arriba...” (entrevista DV).

Esta novedosa situación tuvo influencia en el terreno organizativo, el ambiente de confianza, orgullo y unidad estaba muy fresco y fue el marco propicio para dinamizar iniciativas de todo tipo. Un síntoma de ello, fue la multiplicación de organizaciones, una verdadera “fiebre asociativa”. El 16 de septiembre de 2008 se conformó el Frente Popular de Resistencia del Plan 3000, instancia que agrupaba a todas las organizaciones sociales y políticas que habían participado de la defensa del barrio, anunciaron su nacimiento con un manifiesto político que rechazaba las acciones “subversivas de CONALDE” y exigía la retirada de la UJC de las oficinas públicas “tomadas”. Posteriormente, en la ciudadela se organizaron varias federaciones regionales como la Central Obrera Regional, que intentaba representar a todas las organizaciones, la Unión de Juntas Vecinales cívicas del Plan 3000, el comité impulsor de la creación de la Universidad Iguaitaria Andrés Ibáñez, incluso el comité impulsor de la construcción del coliseo prometido por Evo Morales.²⁷

“Ahora veo que estábamos más unidos porque antes de la pelea y todo eso no había en sí la cosa de unirse o pelear juntos, porque nunca nos habíamos juntado para una cosa así. Pero al llamado que hubo, la gente rápido salió y a esa unión que hubo también mucha gente compartió, se dieron teléfonos, ya llámame. Es como si tuvieras un partido de futbol entre jugadores se encuentran toma mi número cuando haya un partido me llamas” (Entrevista AH).

Bajo los efectos positivos de ese momento, desde el Plan se formulaban cada vez más demandas, como si se hubiera desatado un torrente: la creación del municipio, la

²⁷ El mismo se construyó en el año siguiente a pesar de la oposición de la Alcaldía, quien no autorizó la obra. Fueron los jóvenes designados como guardia municipal simbólica los que ahuyentaron a los inspectores municipales.

universidad, la regularización, y luego el retiro del relleno sanitario de Normandía y la expropiación de los terrenos del ingenio azucarero San Aurelio²⁸. Empezaron una serie de movilizaciones importantes, seguidas de bloqueos y marchas.

“A mí me gustaría tener aquí mi propio alcalde, porque este alcalde que ya se le están des aflojando los pernos. Hay caminos, hay calles que nos deja a medias, no se si se le olvida o que será pues, pero bueno. Es así que estamos, al Plan 3000 le gustaría que Normandía ni siquiera esté aquí [...] a ver al lado de la Villa que les lleve Normandía, a ver que tal les huele, bonito será pues. Hay muchas cosas que en el Plan nos incomoda, pero como personas que somos estamos aguantando. Pero tengan en cuenta que eso tampoco va ser mucho hay un momento en que la gente se va erguir de rabia, pero no esperen eso también” (Entrevista AH).

Todas estas acciones, respondían por un lado, a la confianza en su capacidad de acción que había sido reafirmada en septiembre, y por el otro a un cambio en la comprensión que tenían de sí mismos, del espacio que ocupaban en la ciudad. Parece que después del conflicto resultaba más claro, que les habían asignado un rol secundario y subordinado en la ciudad y que esta situación solo cambiaría con su acción organizada.

“Ellos mismos nos hicieron dar cuenta que nosotros somos despreciados por el prefecto, sí no fuera así [...] date cuenta, parece que diez veces arreglaron la plaza de la Villa (1° de Mayo) que es a favor de ellos ¿no? Pero sin embrago a nosotros tenemos que esperar que los niños se mueran, que se electrocuten, recién nos hacen caso” (entrevista AH).

Por otro lado, autoridades públicas nacionales y locales parecían competir por asentar su presencia en la zona. Evo Morales, el presidente de Bolivia, llegaría a Santa Cruz a después de mucho tiempo sin poder participar de un evento público en la ciudad, a invitación de la ciudadela “Andrés Ibáñez”, sería recibido con mucho cariño, e invitado a presidir desde el palco oficial el desfile en honor de la efemérides departamental (24 de septiembre). Posiblemente, la visita del presidente haya sido un hecho extraordinario en la historia barrial.

Aprovecharon el día, y tal vez, las ilustres visitas, para recalcar su voluntad de gestionar el reconocimiento de la zona como nuevo municipio. Un primer paso en esa tarea, fue la elección y posesión de alcalde, y subprefecta “simbólicos”, más tarde nombrarían incluso una guardia municipal, compuesta por jóvenes “luchadores”.

El presidente correspondió la gentileza, haciendo varias promesas, como la de agilizar el tratamiento de una ley para avanzar en la declaratoria de municipio, otra ley

²⁸ Normandía es el nombre del lugar donde está ubicado el relleno sanitario de la ciudad dentro del distrito 8. Los terrenos del ingenio Azucarero San Aurelio ocupan una porción importante de terreno entre los anillos 3 y 6 dificultado el paso directo entre el Distrito 8 y el 12. En ambos casos los argumentos de la vecindad giraban en torno a la contaminación del basurero como las operaciones del ingenio.

para facilitar la regularización del derecho propietario de las viviendas y también para la creación de la Universidad Popular Andrés Ibáñez, también les prometió canalizar el desembolso de fondos públicos para la construcción de infraestructura urbana, como un coliseo y un nuevo edificio para el mercado.

Por su lado, tanto la alcaldía como la prefectura cambiaron de estrategia. Trataron de “conquistar” al barrio, manipulando las necesidades del mismo, direccionaron mayor inversión pública municipal y prefectural para obras de alcantarillado, mejoramiento vial y otras infraestructuras.

“... la prefectura el comité cívico y demás grupos fueron cambiando. Por ejemplo, la prefectura, después de los conflictos, viendo que no pudieron hacer nada se volcaron al Plan 3000 y empezaron a mirarlo de otra manera, ya no como un enemigo sino como barrio al que tenemos que conquistar. Era el barrio al que quisieron destruir y ahora era el barrio que tenían que conquistar” (Entrevista MU).

Lamentablemente, los buenos vientos no duraron. El panorama actual de las organizaciones no es optimista. Como se dijo, los partidos políticos buscaron cooptar a dirigentes y líderes barriales, unos fueron favorecidos con privilegios personales y ello derivó en peleas entre grupos, finalmente la fragmentación ganó terreno, cada organización se dividió por lo menos en dos. Al poco tiempo, ya no había fuerza suficiente para efectivizar ninguna demanda.

“Bueno, ya pasaron cuatro años. Estábamos pues bien en esa época, había más ideología, la gente estaba más por cuestiones ideológicas importantes, se pudo hacer un trabajo hermoso, pero después de eso, ha habido una decadencia dirigencial, un vacío, no se han portado a la altura de las circunstancias políticas y han terminado cediendo, digamos mucho espacio. Y mucho oportunismo (...) oportunistas que no participaron en las luchas sociales. Actualmente hay un vacío político y más bien descontento social eso es lo que hay en el Plan ahorita. Hay un retroceso enorme, por lo menos si quiere avanzar en colectivo para plantear de una vez la universidad, la quinta sección, más bien hay contradicciones internas.” (Entrevista RI).

Los motivos de esta situación son varios, ambiciones por lograr un espacio dentro del gobierno, la pugna por cargos públicos o por ingresar a las listas de candidatos y la acción de los grupos externos.

La derecha al ver que en el Plan no pudo a la fuerza, organiza y financia paralelismo, todo dividido, habían dos organizaciones igualitarias, habían dos MAS creo que hasta tres, en la universidad tres grupos se autoproclamaron de la UPIAI, hubieron dos grupos del tecnológico, dos o hasta cuatro de las juntas vecinales. Todo dividido...dos COR [...] eso es lo que hay, mucha división y no se concreta una lucha colectiva” (Entrevista RI).

El Plan 3000, la ciudadela que se hizo rebelde

Santa Cruz la ciudad

Desde 1527, varios conquistadores tanto españoles como portugueses, en competencia por apoderarse de mayor cantidad de territorio en América, realizaron incursiones al corazón del continente. Esta hazaña, estuvo llena de obstáculos, debido a que se trataba de territorio alejado y selvático. Varias incursiones españolas desde el Río de la Plata, terminaron con la muerte de los expedicionarios a manos de los indígenas.

En 1957 Ñuflo de Chávez, enviado por el conquistador Irala²⁹ para fundar una ciudad en la costa del Paraguay, al enterarse de su muerte, decidió asentarse “otra” ciudad independiente. Sólo lo acompañaron sesenta “con los que llegó al río Grande donde encontró a Andrés Manso”. “Otro conquistador que llegaba desde Lima, al que se impuso con el favor del Virrey de Lima” (D’orbigni:1945:1122).

A partir de su fundación, la ciudad tuvo por lo menos cinco poblaciones precursoras. (Schoop 1981, 191). Durante todo el período colonial, esta ciudad cumplió el rol de frontera, principalmente para contener avanzadas indígenas.

Por sus características (difícil acceso, población semi-nómada hostil, sin ninguna clase de metales), no presentaba atractivos para una mayor migración de españoles. Según los datos de Köster (1983 tomado de Peña 2007), en 1583 la población de Santa Cruz consistía en 160 “hombres” (65 vecinos y el resto soldados)³⁰ y 3000 indígenas que prestaban servicios personales. En contrapartida, la ciudad de Potosí en el censo de Toledo de 1573 contaba con una población de 120 mil almas.

Muchos de sus habitantes se asentaron en la zona, atraídos por la leyenda de una ciudad de oro en la selva, pero “no tuvieron otra alternativa que dedicarse a la agricultura” y esto lo hacían más por “razones de supervivencia que por elección” (Prado et al.: 2005:15). Hay quienes sostienen que la actividad económica más lucrativa fue el comercio de esclavos.

Poco tiempo antes de las guerras republicanas, en su Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, Francisco Viedma (1787), afirma que es una población que “esta en sus principios”. Esa realidad no habría cambiado mucho cincuenta años después.

29 Domingo Martínez Irala

30 La abundante presencia militar sugiere que para entonces la ciudad funcionaba aún como un fuerte.

El viajero francés, Alcides D'orbigni llegó hasta allá en 1830, y la describe como una ciudad con un aire todavía “provisional” y la “más campestre que haya conocido en América”. Calles “sin pavimento”, cubiertas de arena movediza, donde se hundían los pies “hasta la mitad”, tanto en época de sequía como en tiempo de lluvia. Pasadas las cuatro cuadras dispuestas desde su fundación, la ciudad había crecido con cierto desorden. En la plaza principal se encontraba la catedral “un edificio provisorio hecho de barro que todos los días se pensaba sustituir por uno digno de su objeto”, también se ubicaba el cabildo, donde vivía el prefecto, y un colegio que hacía las veces de seminario, para entonces resultaba llamativo la inexistencia de hospital. Las casas sencillas y sin lujos, con paredes de tierra y techos de paja, donde no se conoce “muebles rebuscados ni pinturas” (1947:1135).

Para esa época contaba con ocho a diez mil habitantes, la población “blanca”, que seguía considerándose española, según consta en el censo de Pacheco³¹ citado por D'orbigni (1947) era mayoritaria. Por entonces era la única ciudad de la república donde se hablaba **solo** castellano³², los pocos indígenas que vivían allí “desempeñan funciones de sirvientes o nodrizas en las casas españolas ejerciendo también diversos oficios al igual que los mestizos” (p. 1132).

En todo caso, la actividad económica principal era agricultura y la ganadería, “sin que ambas explotaciones siempre distintas en la República Argentina, se hallen (...) diferenciadas”. En Santa Cruz se destacaba el cultivo de caña de azúcar y otros productos derivados de ella como la melaza y el aguardiente que constituían los principales productos de “exportación” a “las ciudades interiores”. En cambio, la ganadería era una actividad “más bien modesta”, sin grandes beneficios, puesto que los cueros no tenían más uso que embalajes para el azúcar. Otras “industrias”, eran casi inexistentes en la ciudad, “...ninguna fábrica de tejidos, ningún taller de cualquier especie que sea”. A lo sumo, algunos oficios como zapatería, herrería y carpintería (D'orbigni: 1947: 1133).

Luego de ello, el comercio³³, considerada una ocupación de prestigio. “Si el trabajo manual es un desdoro para quien lo practica, el comercio de venta, aún al detalle, siempre resulta compatible con las pretensiones aristocráticas más exageradas”. La ciudad de Santa Cruz era en efecto “el centro de donde irradian las mercaderías propias al comercio de las provincias indígenas: Cordillera, Chiquitos y Moxos”. A quienes proveían

31 D'orbigni afirma que el censo de Andrés Pacheco, vicario de la diócesis, en 1830 la ciudad tenía 3908 almas, y sólo se contaban españoles y ningún indígena. D'orbigni guiándose en su propio cálculo, afirma que la ciudad tenía entre 8 a 10 mil habitantes entre españoles, mestizos indígenas y negros.

32 D'orbigni había pasado por las ciudades más importantes de Bolivia y observó el hecho de que en las mismas se hablaba “exclusivamente los idiomas indígenas”. De La Paz dice por ejemplo que todo el mundo lo habla, los indígenas exclusivamente, el mestizo mezclado con un español “incomprensible”, en fin en todas partes de la vida social y en la intimidad. Dice que sólo se usaba el español “más que con los extranjeros y en las reuniones de etiqueta”, se trata en todo caso de un grupo reducido que habla español, pero que según D'orbigni tiene un acento de la lengua aymara.

33 Desde Cochabamba y Chuquisaca llegaban comerciantes que D'orbigni denomina “traficantes” que llegaban a la ciudad para vender productos como sal, vino. Con el dinero adquirido compraban azúcar, “en valijitas de cuero sin curtir llamadas petacas”, que llevaban de vuelta. Luego de ellos, estarían otro tipo de negocios que pertenecían a familias locales.

de sal, harina, vino (producto de lujo) “cintas de seda; en quincallería, como cuchillos, tijeras, agujas, hachas y vidriería gruesa, para uso de los indígenas. Además la ciudad consume mate del Paraguay, telas de fábricas francesas e inglesas, sedería de Lyon, india y otros tejidos de algodón venidos de ultramar, índigo, lana de color y toda clase de productos de uso cotidiano, pues los objetos de lujo, con excepción de las joyas, aun no se conocen en Santa Cruz” (D’orbigni: 1947: 1134).

La ciudad entre la crisis y el auge

Al finalizar el capítulo dedicado a su paso por Santa Cruz, D’orbigni se preguntó, sobre el futuro de aquella sencilla ciudad que lucía “como de tres siglos atrás”, donde reinaba la hospitalidad y el desprendimiento. Qué pasaría con ese pedazo de mundo cuando: “conozca las mil y una necesidades que el lujo y la molicie introdujo en las ciudades europeas”. A los ojos del naturalista, era seguro que sus gastos “habrán de centuplicarse”, “las diferencias de fortuna se harán sentir y acarrearán rivalidades tendientes a endurecer su corazones e inspirarles el frío egoísmo que envenena nuestro centros civilizados”. Y se pregunta: “¿Serán entonces más felices los cruceños?” (1947:1136).

Estas preocupaciones, no estaban lejos de tener respuesta. Al poco tiempo el Oriente boliviano y con él la ciudad de Santa Cruz, habrían de experimentar grandes cambios, la región se vio sacudida por acontecimientos que transitaron entre el despegue económico y la posibilidad de ingresar en una profunda crisis.

Como se explicó adelante, los acontecimientos nacionales como la adopción de la política librecambista y la introducción del ferrocarril resquebrajarían la economía regional, pero en contraparte, el auge de la explotación de quina y goma, le darían un vuelco a los más terribles presagios. Incluso cuando finalmente terminó el boom de la goma, la guerra del Chaco ofrecería paliativos a esta situación. En el ínterin, sucesivas oleadas migratorias terminarían por transformar completamente la vida del departamento, y en particular la ciudad.

Soruco (2008) afirma que ya el 1850 la explotación de quina tuvo un impacto significativo en la región, aunque desafortunadamente no hay mayores datos sobre este hecho. Sin embargo, el auge de la goma, fue sin lugar a dudas, el más significativo para la ciudad de Santa Cruz, ya que se convirtió en la “capital comercial” del Oriente. Aunque la explotación se producía en el noroeste, el capital comercial heredero de la goma se traslada hacia Santa Cruz; así las oficinas centrales de las principales casas comerciales del Oriente a partir de 1914, y sus inversionistas, residen en esta ciudad (por ejemplo, la casa Zeller ocupaba la actual Alcaldía Municipal) La misma autora, afirma que ello significó una migración muy importante a la zona, (80 mil personas), entre ellos europeos que llegaron a trabajar como técnicos en las principales casas de exportación de caucho,

quienes terminaron por emprender sus propios negocios y fijar residencia en la ciudad de Santa Cruz. La colonia más importante fue la de alemanes, que terminaron al poco tiempo emparentados con las familias más importantes y adineradas de Santa Cruz. (p. 18-21).

Hacia 1920, el negocio de la goma, ya en declive, había transformado “la fisonomía urbana”, “muchos recolectores de caucho utilizaron sus importantes ganancias en la compra de objetos suntuarios y en construcción de nuevas casas en la ciudad” (Peña: 2007: 94).



Foto: Antigua Casa Zeller, hoy Alcaldía Municipal

Prado (2005) por ejemplo, atribuye a este período la construcción de casas de dos plantas, cuyo ejemplo es la Casa Zeller³⁴. Köster (1983) por su lado, afirma que en esos años se construye el primer cine con instalaciones fijas y las oficinas del Banco de la Nación Boliviana (Tomado de Peña: 2006:94).

Aún así, la ciudad hasta las primeras décadas del siglo XX continuaba siendo pequeña y tradicional, sin pavimento, “calles intransitables y las veredas desniveladas”, carente de un sistema de agua potable, la misma que era “escasa” y de obtención “difícil”, al alcance sólo de las clases más pudientes quienes tenían “noria o aljibe”, mientras los demás debían recogerla de arroyos. Faltaba también el alcantarillado, y no existía sistema de recojo de basura (Prado y otros: 2005:150).

De pequeño poblado a gran ciudad

Los cambios en torno a la estrategia de desarrollo nacional adoptados luego de la guerra del Chaco y la Revolución de 1952, aceleraron el proceso de urbanización a nivel nacional, la población urbana se duplicó entre 1950 y 1976. Sin embargo, las ciudades más importantes vivieron el impacto de forma desigual, Cochabamba y Oruro, verían duplicarse su población urbana y La Paz, la ciudad más importante la cuadruplicaría, el

³⁴ El auge de la goma, con sus arquitectos traídos de Europa, produce varios ejemplares de arquitectura señorial neo renacentista y francesa que en su mayor parte elimina las galerías, para lo cual en 1915 se aprueba una ordenanza municipal que prohíbe el uso de las galerías por considerar que son “expresión de atraso”. La verdad es que las galerías eran incompatibles con los modelos europeos, hasta que surge la solución ideal: La casa en dos plantas, con doble galería, pilares clásicos, arcos rebajados y cenefas y molduras de origen europeo. Tal es la tipología de la actual alcaldía y el antiguo Cabildo en la plaza 24 de septiembre, lados Sur y Norte).

caso de Santa Cruz fue el más dramático, pasó de 41 mil habitantes a poco más de 256 mil, creció casi seis veces.

Las reformas neoliberales aplicadas desde 1985, trajeron consigo nuevos cambios en la distribución poblacional nacional, con la economía minera en crisis, los campamentos mineros fueron cerrados y su población buscó nueva ubicación, además de ello fueron también afectados los centros agrícolas que los abastecían. Como resultado, la migración hacia La Paz (El Alto), Santa Cruz y Cochabamba se intensificó. Laserna (2005), afirma que si las tasas de urbanización no son más altas es debido al hecho que algunos tienen la opción de mantenerse como campesinos accediendo a tierras de colonización.

Debido al impacto del nuevo modelo económico de desarrollo que privilegió la explotación de materias primas exportables, como la soya y el gas, materias primas cuya demanda en el mercado internacional vino a reemplazar parcialmente a los minerales, el oriente boliviano vivió un nuevo “boom” por el flujo de inversión extranjera, que dinamizó su economía y la convirtió en un polo de atracción. El departamento de Santa Cruz vivió un proceso acelerado de urbanización³⁵ y ello se hizo más evidente en la ciudad, la pequeña ciudad alejada y periférica se convirtió en la más poblada del país.

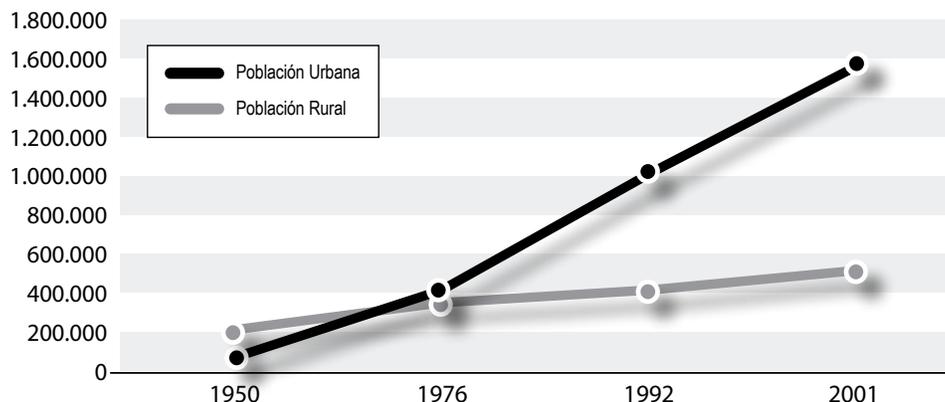
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (2001), el municipio de Santa Cruz contaba con una población total de 1.135.526 habitantes, lo cual significa que desde 1992 ha crecido a un ritmo anual de 5.08% en promedio. En los cinco años antes del Censo, llegaron como migrantes unas 129 mil personas, 24,34% del mismo departamento de Santa Cruz, 21.3% de La Paz y 19,31% Cochabamba.

Aunque esta situación se ha visto acompañada del crecimiento de ciudades intermedias, lo cierto es que se verifica una alta concentración en la capital puesto de la ciudad de Santa Cruz aglutina al 55% de habitantes del departamento y al 72,21% de la población urbana departamental (INE Censo 2001, tomado de Melvy Vargas: 2005: 217).

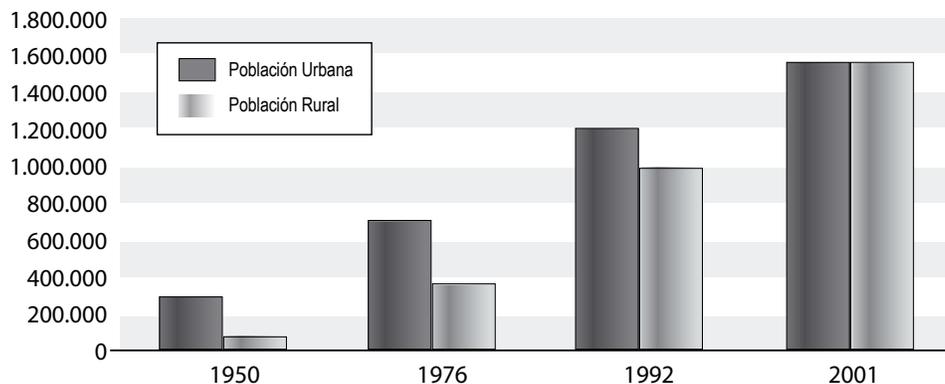
Este crecimiento, ha traído también desafíos, en términos de empleo, infraestructura urbana, servicios, vivienda, uso del suelo, mismos que fueron enfrentados de dos maneras distintas en consonancia con los modelos de desarrollo imperantes en el país. Una etapa, la primera, entre 1950 y 1970, estaría dada por los esfuerzos de elaborar, consolidar y sostener un proceso de planificación urbana, de la mano de la corriente racionalista, en boga por entonces. Dicha apuesta tuvo resultados interesantes, puesto que los cambios posteriores no pudieron borrar completamente la configuración, particular que le otorgó a la ciudad. La segunda etapa, desde mediados del 80 hasta nuestros días, en que el mercado se convirtió en la gran y única guía del crecimiento urbano. Es incluso posible territorializar ambos períodos, la primera etapa hasta el 4° anillo y la segunda todo lo demás, la ciudad actual. Veamos con algún detalle este tema.

35 Si para 1976 el departamento ya era mayoritariamente urbano (con 53% del total) para el 2001, la población urbana ya constituía un 76 %.

Crecimiento de la población en el Departamento de Santa Cruz



Cuadro comparativo crecimiento de la población urbana, Santa Cruz



Planificación vs Mercado

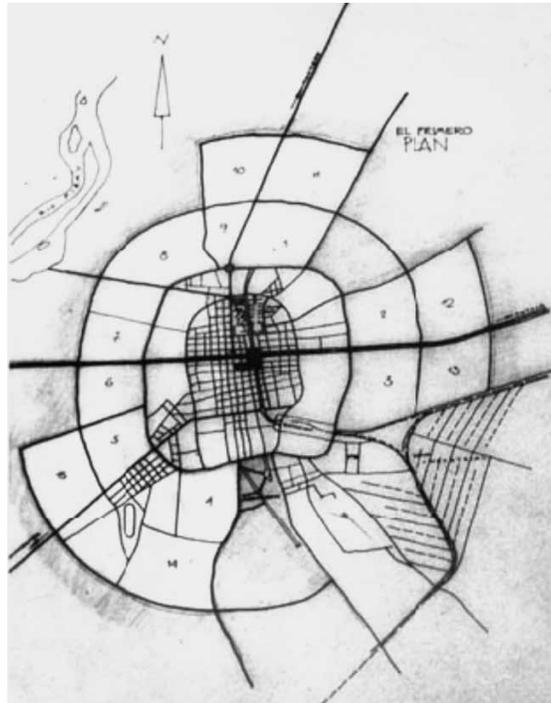
La denominada Misión Ivanissevich (1947), fue el primer intento de planificación urbana, se relevó topográficamente la ciudad y se diseñaron las redes de alcantarillado cloacal y fluvial, la red de energía eléctrica y se proyectó la pavimentación de las calles (Bendeck). Aunque al parecer las obras no se iniciaron sino años después al ser integradas en el que habría de ser la base de planificación urbana actual, el Plan Techint.

A partir de 1959 se asegura la disponibilidad de recursos económicos gracias a la trasferencias de regalías petroleras, las que en principio estaban destinadas únicamente al mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad de Santa Cruz. Para la inversión de estos fondos fue creado un Comité de Obras Públicas COOPP, instancia independiente del gobierno, cuyo “directorio estaba conformado por instituciones públicas y privadas” de carácter local. Fue esta instancia la que lanzó la convocatoria y finalmente contrató a la consultora ítalo – brasilera Techint, para la elaboración del Plan Regulador de la Ciudad. El documento entregado en 1960 y discutido hasta 1967 fue puesto en vigencia con muchas modificaciones (Prado: 2005:154).

Fue el Plan Techint el que formuló la estructura radial de la ciudad, con cuatro anillos cuyas características más relevantes serían: i) la eliminación del damero cuadrado, imponiendo manzanas alargadas de 50 mts. que requieren de sólo dos calles, ii) las avenidas con jardín central, conformando anillos y radiales, que manejan los tráficos de atravesamiento y que se cruzan mediante rotondas, mientras las calles secundarias manejan el tráfico local (distinción que no se daba en el damero colonial, donde todas las calles eran iguales) iii) la sustitución de la tipología de la casa a patio con galería, por la vivienda unifamiliar aislada, (tipo “chalet”) que elimina la galería frontal pública y iv) la zonificación que separaba los usos sobre todo para industria, (parque industrial) comercio, servicios (áreas de equipamiento terciario y primario) y vivienda (unidades vecinales) (Prado: 2005: 214).

Este modelo de ciudad, habría durado hasta 1978, cuando se aprueba un Nuevo Plan que en palabras de Prado, “no fue aún la negación conceptual de la ciudad de los cuatro anillos, sino

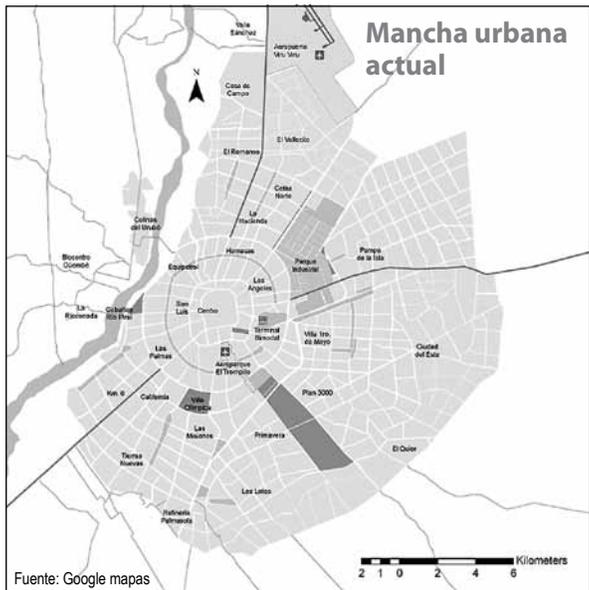
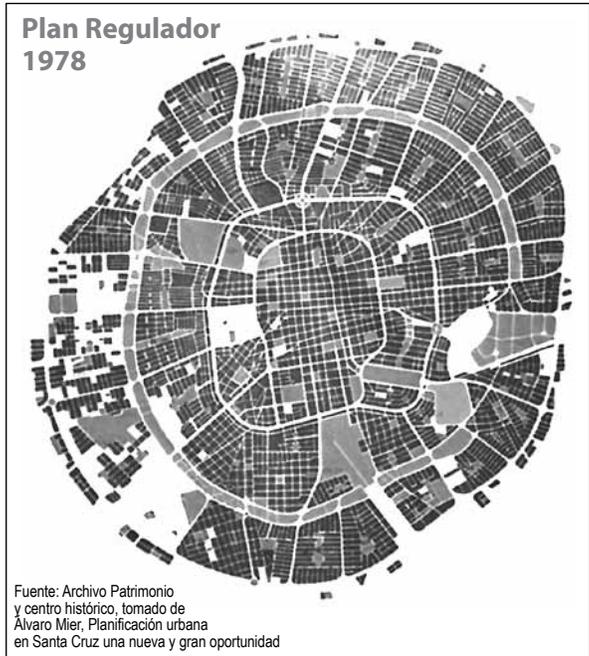
Plano Regulador Techint, Philip Lohbauer, 1960. (Tomado de Santa Cruz y su Gente)



su expansión y crecimiento manteniendo una gran coherencia formal” con el anterior plan. Aunque considera que a contramano de lo vivido anteriormente, se manifiesta una tendencia a disminuir la participación de la sociedad civil en el proceso.

El gran “quiebre” se habría producido con el neoliberalismo, ya que el crecimiento poblacional, tuvo que ser asumido en un contexto donde el rol del Estado en la planificación urbana, y la misma idea de planificación fueron cuestionadas o dejadas de lado. Prado (2005) señala como un hecho significativo la desaparición del Ministerio de Planificación, a lo que siguió el cierre de las oficinas de planificación urbana en los municipios. Su lugar fue tomado por un mercado inmobiliario desregulado y liberalizado, que no tardó en hacer mella en la estructura urbana.

Poco tiempo después, la elección de alcaldes por vía de la democracia representativa, abrió la posibilidad de que estos prioricen el criterio electoral por encima del técnico. En esa medida, el paso siguiente fue que los grupos de presión, numéricamente significativos, como el comercio callejero, el



trasporte o los prestadores de servicios, pero particularmente los especuladores de tierra, logren controlar cualquier tentativa de control desde el municipio, por la vía de pactos y alianzas con los políticos que manejan el municipio. De este modo se impusieron los intereses particulares y la ganancia en el manejo de la cosa pública, y particularmente en la ocupación territorial, desnaturalizando su rol. Quizás por ello Prado (2005), finalmente califica este período como “el saqueo de la ciudad”.

La Santa Cruz “neoliberal” y globalizada

Como indica Harvey (2007), el neoliberalismo, es un modelo económico cuya característica principal es la desigualdad. Puede producir altas tasas de ganancia para un pequeño grupo de patrones, pero ello implica el empobrecimiento de la mayoría. La Santa Cruz globalizada no es una excepción, pese a un exageradamente publicitado “éxito” y bonanza económica, alberga todas las características de lo que se ha llamado “ciudad dual”.

El término “ciudad dual” desarrollado por Manuel Castells (1995) y Saskia Sassen (2000), hace referencia a la manifestación de una estructura urbana social y económicamente polarizada, como un fenómeno intrínseco de la economía capitalista actual. Para Sassen, los trabajos de bajo nivel salarial y por lo tanto el empobrecimiento, son las bases de lo que se denomina “crecimiento económico” en el capitalismo tardío, mismo que se produce al amparo de transformaciones en el mercado laboral que empujan a la degradación del mismo. En ese escenario, surgen “nuevos ricos”, aquellos que aprovechan de las “oportunidades” de la globalización, pero también “nuevos pobres”, los antiguos obreros expulsados del mercado laboral por el proceso de desindustrialización, reclusos en guetos urbanos de los que no pueden salir por las dificultades que encuentran para acceder a la educación y las nuevas tecnologías. Pero lo realmente nuevo es que a ellos se suman sectores de las clases medias que antes se beneficiaban de mejores condiciones laborales.

Esta polarización económica y social, se manifiesta en la configuración del espacio urbano, donde conviven zonas urbanas, que cumplen con las expectativas de lujo y exclusividad y zonas donde impera la mayor necesidad. A decir de Trejos (2004), en Latinoamérica

“... el crecimiento de las ciudades en las últimas dos décadas se ha debatido entre un Urbanismo Espontáneo de hábitats auto-construidos en los márgenes, intersticios y áreas abandonadas de las ciudades pensadas; y una Arquitectura de Mercado que se ha dedicado a la búsqueda de nichos de mercado. El resultado de este proceso son ciudades duales donde se expresan simultáneamente la exclusión y el desamparo de unos frente a los privilegios de otros, pero también el lugar donde se coaccionan las libertades urbanas de todos” (p. 1).

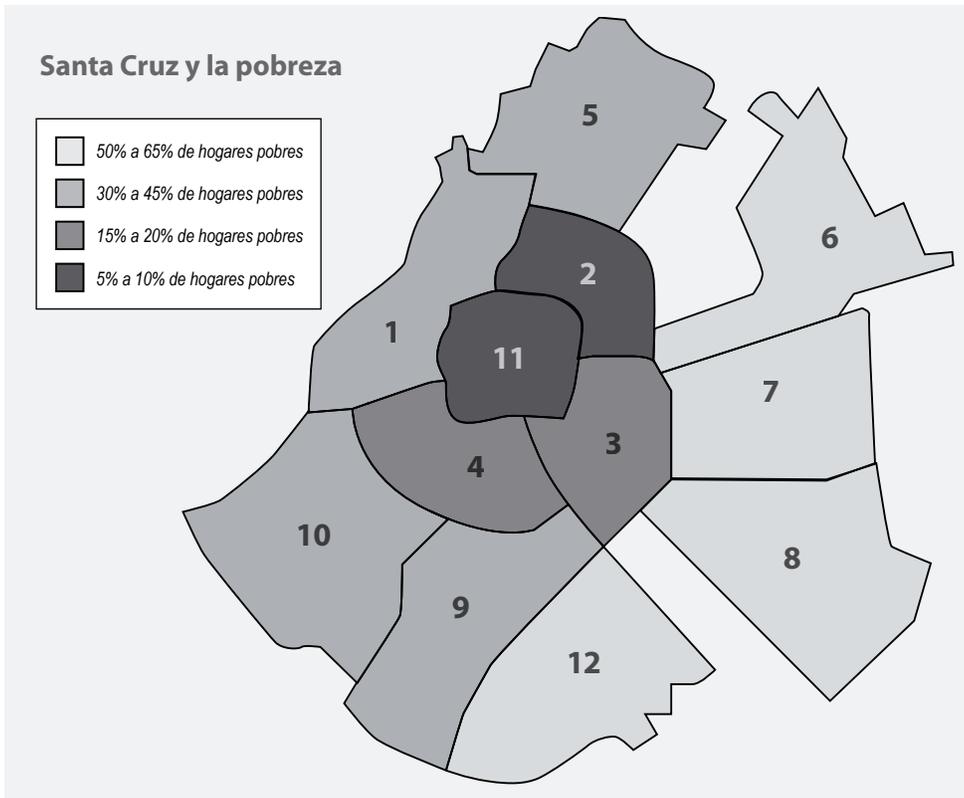
Este fenómeno también se ha expresado en las principales ciudades de Bolivia, aunque Santa Cruz, tiene sus particularidades. Esta ciudad se ha constituido en el principal destino de las grandes compañías transnacionales que arribaron a Bolivia, luego del proceso de privatizaciones en la década del 90. En esta ciudad, se concentran actividades financieras, las oficinas de importantes empresas transnacionales, así como tiendas y comercios que ofrecen las mercancías más recientes de las más grandes marcas mundiales, pero está lejos de ser una urbe industrializada, todo lo contrario, la tercerización y la informalidad del mercado de trabajo son las principales características de su economía.

Con los datos brindados por Prado (2005) se señala que la tercerización se expresa en los siguientes indicadores, correspondientes al año 2001

- Los diferentes tipos de establecimientos comerciales y de servicios constituyen el 93,9% del total de establecimientos existentes en la ciudad y 84,9% del personal ocupado
- Aunque los puestos fijos y móviles casi en su totalidad corresponden a actividades terciarias, su participación en el total de establecimientos es igualmente mayoritaria en número (91,3%) y personal ocupado (83,1%).
- El 74% de la población ocupada se concentra en el sector terciario.
- Entre 1992 y 2001 el sector terciario generó 70% de los trabajos nuevos de la economía y casi la mitad del sector comercial, pero al costo de una notable disminución en los ingresos.
- El sector domestico y familiar al mismo tiempo presenta caídas en el nivel de ingresos laborales medios.

Otro tema que resalta es la desigualdad. Siempre siguiendo a Prado (2005), en el período de mayor dinamismo de la base económica agroindustrial, el 5% más pobre de la ciudad declinó su participación en los ingresos laborales totales de la ciudad de 0,7% a 0,5%. El 5% más rico aumentó considerablemente de 23,6% a 28%. Todas las categorías de ingresos, salvo el 15% más rico, disminuyeron su participación en la masa de ingresos laborales, lo que habla de la intensidad del proceso de concentración en la etapa expansiva.

Pero, la desigualdad no solo se manifiesta en lo económico, sino en la consolidación de la segregación socio espacial y acceso diferenciado a los servicios y bienes urbanos, seguidos de un incremento cuantitativo de la pobreza. Esta realidad podría pasar inadvertida si sólo se tiene en cuenta los datos departamentales o municipales, puesto que los altos promedios de bienestar concentrado en algunos sectores urbanos distorsionan o por lo menos encubren la gravedad de la situación en los sectores más pobres.



El mapa de distribución de pobreza según distrito, elaborado por el Programa de alivio a la Pobreza Santa Cruz (2002) y reproducido en el texto *Santa Cruz y su Gente*, es en principio bastante ilustrativo de las diferencias espaciales.

Los Distritos que están fuera del 4° anillo son los que presentan niveles más altos de pobreza. Los distritos 6 (Pampa de la Isla) 7 (Villa Primero de Mayo), 8 (Plan 3000) y 12, (son al mismo tiempo los que tienen mayores tasas de crecimiento poblacional³⁶, mayor hacinamiento (mientras el distrito 11 tiene cerca 15% de hogares hacinados, el 7 y 8 pasan el 50%), los índices más bajos de Desarrollo Humano y también la mayor cantidad de población migrante.

En base a los datos del CENSO 2001, Melvy Vargas (2005) afirma que la pobreza medida con la metodología del NBI ha registrado un importante reducción entre 1992 y

³⁶ Vargas (2005) señala que los Distritos 6 y 8 tuvieron tasas de crecimiento poblacional que superan el 11% anual en el periodo intercensal 1992 - 2001.

2001, puesto que de tener 42% de población en esta situación se ha pasado a 19,1%, pero en términos cuantitativos el número de personas pobres no ha variado significativamente, habría pasado de 280.337 a 210.569.

La autora citada aclara un hecho:

“... la estimación de la pobreza con la metodología de la NBI, sólo permite evaluar la pobreza estructural, dado que se define a la población pobre como aquella que no cumple con los niveles mínimos de bienestar en cuanto a las características de la vivienda, disponibilidad de servicios de agua y saneamiento; energía eléctrica y combustible para cocinar; nivel educativo y acceso a los servicios de salud, por lo que la disminución de la población pobre en el período intercensal puede haberse dado como simple resultado de la mejor cobertura de los servicios básicos e infraestructura educativa y de salud. Sin embargo, por razones de la crisis económica es de esperar que la población pobre en cuanto a disponibilidad de ingresos para cubrir las necesidades más indispensables, se haya incrementado considerablemente en los últimos años” (p. 223).

La ocupación de los pobladores de los distritos 6, 7, 8 y 12, está ligada al sector informal y por lo mismo sus ingresos no son estables “una gran parte son vendedores ambulantes, ayudantes de albañilería, trabajadoras del hogar, lustrabotas, lavadores de movilidades ambulantes, pequeños artesanos y vendedores” (Vargas: 2005:239).

En lo que se refiere a salud, resalta, la disminución de la esperanza de vida al nacer en el municipio entre 1992 y 2001 que pasó de 72,59 a 64,96, aunque las reducciones más importantes se produjeron en los distritos 7,8, 10 y 12. La mortalidad infantil por distritos es uno de los más ilustrativos de las desigualdades al interior de la ciudad ya que está estrechamente vinculada a la cobertura de servicios como el agua potable y el alcantarillado. Mientras en el Distrito 11 presentaría una probabilidad de muerte infantil de 49 por cada mil nacidos vivos, en el distrito 8 la cifra se eleva a 88 (Vargas:2005:233).

En una ciudad con tantos contrastes y con tanta desigualdad están presentes las condiciones para la maduración de conflictos sociales. Así también lo expresó un joven entrevistado, que pasó gran parte de su infancia en el 4 de Noviembre, un barrio popular que colinda con Equipetrol (residencial) y cerca del campo Ferial.

“Era una barriada, era villa, la mayor parte era gente pobre, no había pavimento, alcantarillado ni canales de drenaje (...) había pandillas, era normal que cada año había una muerte por peleas de pandillas, especialmente donde había chicherías. Había un centro policial que fue construido especialmente para el barrio, porque era demasiado peligroso.

La Feria Exposición era un lujo en medio de la miseria, eso lo recuerdo bien. Ni siquiera estaba pavimentada la avenida principal del barrio, pero ahí (en la feria) había un derroche de dinero. Los chicos del barrio aprovechaban para ir a cuidar autos y nosotros para entrar sin pagar a la feria. Era un lujo en medio de la miseria” (Entrevista JM).

Dentro de esta situación, quizás un tema a resaltar es la discriminación y el racismo. En todas las ciudades de Bolivia, las élites construyen un culpable de los males de la ciudad, un sujeto que les libre de las responsabilidades de la mala gestión, la mala administración de recursos públicos o simplemente que justifique y naturalice la desigualdad. En general, los migrantes rurales suelen jugar este rol en las otras ciudades de Bolivia, pero en el caso de En Santa Cruz, que ha vivido procesos intensos de migración desde el Occidente, pero también de las propias provincias del departamento, las elites hacen hincapié en remarcar que los culpables del desorden urbano y las limitaciones son los migrantes altioplánicos (collas), a quienes les atribuyen la labor de “afear” la ciudad.

Los conflictos de ser migrante y ser colla en Santa Cruz, puede ser una carga pesada. Aún después de muchos años de permanencia en la ciudad, o haber nacido allí, los jóvenes que tienen padres de origen occidental no se sienten cómodos.

“...el insulto más común era ‘colla’ en sentido despectivo (...En el colegio si llegaba alguien, por ejemplo de Cochabamba. Por más que `era simpática, blanca y todo lo demás, pero tenía acento y venia de Cochabamba y La Paz, era uno tras otro de insultos, de amenazas, de hacerle pisar el palito para golpearla y lo mismo en el barrio [...] pero ya después se lo acoplaba”.

Santa Cruz es actualmente, uno de los espacio urbanos donde existe mayor diversidad de culturas, ascendencias y experiencias. Es difícil imaginar algún lugar de Bolivia donde esto se pueda encontrar y es de lamentar que en aras de la defensa de una identidad considerada única se pretenda soslayar este asunto, que ahora mismo se constituye en una característica por demás interesante.

El Plan 3000

Aspectos generales

La ciudadela Andrés Ibáñez, más conocida como Plan 3000, en la actual nomenclatura municipal corresponde al Distrito 8, espacio situado al Sur de la ciudad de Santa Cruz. En 2001, el censo nacional contabilizó a 148.704 habitantes, lo que muestra que casi ha triplicado su población desde 1992 cuando contaba con 51.988 habitantes, registro una tasa de crecimiento anual de 11% hasta 2001, una de las más altas a nivel nacional y del propio municipio (5% anual). Es el Distrito más poblado de los doce existentes. Si la tasa de crecimiento poblacional se ha mantenido, los habitantes Distrito 8 (Plan

3000) fácilmente podría haberse duplicado. Por ello, los cálculos de diversas instancias públicas y privadas hablan de unos 300.000 habitantes, agrupados en unos cien barrios (Fundación Hombres Nuevos).

Pese a lo que muchos creen, el crecimiento poblacional del Distrito 8 no se debe únicamente a las altas tasas de migración. Según los datos que presenta Vargas (2005) en 2001, casi 60% de la población distrital era oriunda del municipio. El 40% restante son migrantes, principalmente de otros departamentos, pero también de otras provincias de Santa Cruz. Vargas, asevera que esta situación podría estar mostrando procesos de reacomodo de los habitantes de otros distritos de la ciudad hacia lugares más alejados.

Las condiciones habitacionales son las siguientes, si bien en el municipio el promedio es de 40,2% de la población viviendo en hogares con hacinamiento, las diferencias entre distritos son abismales, mientras en el distrito 11 sólo existen 15% de familias en estas condiciones en el distrito 51,8 % están en esta situación siendo el segundo distrito con más hogares en esta situación (Censo de población y vivienda de 2001, tomado de Vargas 2005).

La esperanza de vida al nacer en Santa Cruz muestra un preocupante descenso en el municipio respecto a 1992, pues se ha reducido en casi siete años, pasó de e 72,59 a 64,96 años, sin que hayan quedado claro si se trata de un error en el relevamiento de datos o en un efectivo deterioro de las condiciones de vida en la ciudad. En todo caso es importante recalcar que si hablamos de datos desagregados por distrito, el ocho es el más afectado por esta situación, ya que tendría una disminución de por lo menos ocho años en la esperanza de vida al nacer de sus habitantes.

La probabilidad de muerte infantil por cada mil nacidos vivos, en el distrito ocho es de 88, la más alta del municipio, mientras la más baja se registra en el distrito once con 49. (Vargas: 2005) Esta situación estaría fuertemente determinada por las carencias de servicios básicos particularmente el agua potable.

Finalmente, el distrito ocho, sería junto con el doce, el espacio donde sus habitantes tienen menores ingresos en el municipio, según los datos de Vargas (2005) que ha calculado el PIB per cápita por distritos, este consistiría en 2833 \$us frente a 9071 \$us de los habitantes del Distrito 3.

La inundación. El origen del “Plan 3000”

El barrio se fundó en 1983 con 3000 familias re-ubicadas luego de una riada que inundó la zona Oeste de la ciudad. En este lugar, el río Pirai tiene sus últimas estribaciones, por lo cual era “más sensible de inundarse en época de lluvia” (Antelo: 1985). Quizás por ello, allí se habían asentado familias de escasos recursos. Más allá de eso, las

personas habían escogido esa zona para vivir no sólo por el bajo precio de un terreno considerado “peligroso”, sino también por la cercanía a los principales mercados de la ciudad. La zona está situada a escasos tres kilómetros de la Plaza 24 de Septiembre.

Los trabajos posteriores en el río, han permitido alejar el peligro de inundación de la zona, actualmente está lleno de viviendas, y ha conservado el nombre de “4 de Noviembre”. Es un barrio con mucho comercio y posibilidades para alquilar algún espacio a los estudiantes universitarios, por la cercanía de la Universidad Gabriel René Moreno, cerca está también el campus ferial donde se realiza la Expo Cruz, el exclusivo barrio residencial Equipetrol y finalmente condominios exclusivos en la otra orilla.³⁷

En febrero de 1983, las autoridades de gobierno informaron de una crecida inusual del río Pirai, el hecho amenazaba con provocar una inundación en la ciudad, una de magnitudes superiores a las ya vistas en otros años. Sergio Antelo (1985), para entonces intendente de la Prefectura, afirma que pese a que el Comité Departamental de Emergencia realizó trabajos preventivos para enfrentar las contingencias de la temporada de lluvias, estos fueron insuficientes ante la magnitud del desastre. Cuando finalmente el agua se desbordó, no fue posible organizar la evacuación de los afectados y varias familias quedaron atrapadas en medio del agua. Durante toda la noche se realizaron operativos de rescate (p. 3).

Un censo posterior, estableció que 7000 personas habían sido afectadas, las mismas fueron ubicadas en el campo ferial, espacio construido para la realización de la muestra anual de negocios más importante de la ciudad. El espacio, se prestaba para este tipo de contingencias en virtud de que contaba con una infraestructura techada y amurallada de miles de metros cuadrados. Ya que permanecía desocupada gran parte del año, había sido usado anteriormente para proporcionar alojamiento temporal en caso de inundación. Por otro lado, su perímetro asegurado brindaba seguridad a sus eventuales alojados y facilitaba la distribución ordenada de medicamentos y vituallas. Como se colige del relato de Antelo, el inconveniente parecía estar en el deterioro del campo ferial, según indica debido a algunos saqueos y destrozos.

Este hecho parece haber determinado que apenas pasadas 48 horas de la inundación, un tiempo bastante corto de instalación del campamento, las autoridades tomaran una decisión radical: reubicar de forma permanente a las familias en otra zona de la ciudad, en el plazo más breve posible. Las razones mencionadas por Antelo son las siguientes:

“La carencia de medios materiales para tener una población censada de 7000 personas, la destrucción progresiva de las instalaciones, el crecimien-

³⁷ Un puente, permite el tránsito fluido hacia la que otra orilla del río Pirai, que es el límite con el municipio de Porongo, un pequeño municipio rural cuyo centro poblado está a 14 Km. Este sin embargo debe hacer frente a la voracidad que as empresas constructoras e inmobiliarias han demostrado por la porción de terreno comunicada con la ciudad de Santa Cruz, donde e ahora se están construyendo condominios súper exclusivos, como “Colinas del Urubó”.

to de las tensiones y los conflictos internos, y la imposibilidad de retornar al lugar de origen, obligaron, entre otros motivos, a encontrar en el menor tiempo posible, un nuevo terreno donde se pudiese reasentar la población damnificada” (Antelo: 1985:4).

Organizar el “operativo” de traslado, no fue fácil, las autoridades tuvieron que enfrentarse a la resistencia de las familias, ya se dijo que la zona afectada por el agua, estaba situada en una zona muy bien conectada con el centro de la ciudad, los mercados y negocios más importantes.

La oferta del municipio fue un terreno que había sido expropiado en 1981, en el marco del Plan Socio Urbano, una medida de la dictadura de Banzer, con la que se pretendía dotar de vivienda a familias con limitados recursos económicos. El lote estaba ubicado al sur de la ciudad, “si bien relativamente distante, ya disponía de vía de penetración y contaba con alguna población”, aunque no era precisamente una oferta tentadora.

En los siguientes días, los técnicos municipales a cargo de la organización del campamento procedieron al operativo de traslado. Antelo afirma que fue voluntario, aunque hubo un grupo que se quedó en el campamento, la llave del éxito habría sido la oferta de tres beneficios, ante los cuales “los propios damnificados no se podían resistir” (Antelo:1985:4).

- a. Ración de alimentos suficiente para quince días
- b. vehículos municipales a su disposición para realizar el traslado
- c. una boleta de damnificado donde se garantizaba la dotación de un terreno en usufructo perpetuo.

Unas 1200 familias fueron trasladadas en primera instancia, mientras que unas 100 se mantuvieron en el campo ferial. Desgraciadamente, dos nuevos turbiones afectaron la zona en marzo, (el 18 de marzo fue el más violento). En esta ocasión, se registró una cantidad significativa de muertos, ahogados y enterrados bajo el lodo.

En medio de las tareas de rescate, se tuvo que instalar un nuevo campamento, esta vez en las instalaciones de la Universidad Gabriel René Moreno, con cerca de 8000 personas (1500 familias). Con ellas, se procedió de la misma manera que con el primer grupo, fueron trasladadas a la nueva urbanización. Entre el primer y segundo continente sumaron más o menos 3000 familias, el nombre que recibió fue de “Ciudadela Andrés Ibáñez”, pero al estar bajo la responsabilidad de la unidad de Proyecto del Plan 3000, este último fue el que por muchos años prevaleció como denominativo de la zona.

Tanto el primer, como el segundo grupo de familias, fueron instaladas en carpas en calles que aún no acababan de ser demarcadas por la maquinaria municipal. La imagen

de un gran campamento en medio de la nada se ofrecía a sus habitantes. Allí todavía, las autoridades, debían organizar la distribución de alimentos y agua.

Las condiciones de vida en el momento inmediatamente posterior a la reubicación debieron ser bastante duras, la prensa no tardó en denunciar que el campamento se parecía mucho a un campo de concentración. Antelo (1985), señala que estos calificativos eran fruto de intereses políticos, y que las autoridades hacían sus mayores esfuerzos para aliviar la situación.

En todo caso, los recuerdos de los vecinos y vecinas que vivieron esa época no son gratos. Según el testimonio de vecinos de esa época, las raciones alimenticias nunca fueron suficientes y que el agua transportada por un carro cisterna, llegaba al barrio una vez por semana:

“Estábamos como animales, no venía ni el colectivo (...) tomábamos agua de los pauritos³⁸ y ojitos de agua. Ellos (autoridades municipales) traían una cisterna de agua, que era más gasolina que agua, no se podía tomar, después nos dieron un pozo con CORDECRUZ” (Entrevista, Vecina MF).

Otra vecina, recuerda que las malas condiciones sanitarias, afectaron la salud de todos y en especial en los más pequeños. Ella, una niña por entonces, guarda la imagen del paso de los cortejos fúnebres por la calle, por lo menos una vez por semana “con un cajoncito blanco” en andas (Entrevista VS), eran los féretros de niños/as que morían. Doña MF, dijo que los niños “no aguantaron”, la carencia de agua potable y alimento hacía mella en los pequeños cuerpos, terminaron enfermando y muriendo de forma significativa, “acá se llegó a enterrar diez niños por semana”.

Antelo (1985) admite que las condiciones socio-sanitarias de los damnificados se vio agravada por la larga permanencia en carpas “provisionales y anti-higiénicas donde se producían el hacinamiento y el contagio en forma generalizada”, aunque señala que por ser pobladores de características “marginales y de bajos recursos” ya portaban males endémicos, que empeoraron en el campamento. Lastimosamente, ninguna instancia pública se encargó de contabilizar la mortalidad infantil en el campamento.

Algunos vecinos refieren al hecho de que las donaciones y campañas de solidaridad, fueron importantes debido a la magnitud del desastre, pero tienen dudas sobre si esta ayuda llegó en su integridad a los afectados. En esa época menudearon las denuncias de malversación de fondos, incluso de la comercialización de alimentos y vituallas destinados a donación.³⁹

³⁸ Diminutivo de Pauro. Nombre que se da en el oriente boliviano a los pozos de agua o vertientes.

³⁹ En nuestro país no sería extraño que esto sucediera, baste recordar que luego del terremoto de Aiquile, se conocieron y denunciaron numerosos casos de corrupción en torno al manejo de las donaciones, donde estaban implicados incluso funcionarios de lato rango.

La consolidación del barrio

Pasado el impacto del desastre las autoridades tomaron una nueva decisión, esta vez en torno al destino de los fondos que habían sido recaudados, de diferentes instancias. De entre varias opciones, optaron por utilizarlo en la construcción de viviendas, un programa denominado “techo mínimo”. Se trataba de un módulo, que según el diseño de los proyectistas contaría con 25 metros cuadrados, al cual los propietarios “podían hacer crecer en base a sus propias necesidades e iniciativas”(Antelo:1985:8).

El dinero recaudado, serviría para comprar material de construcción, las familias pondrían la mano de obra y alguna instancia de la iglesia Católica apoyaría mediante el canje de alimentos por trabajo. El proyecto arrancó, con un representante de la iglesia católica a la cabeza y de esta forma se lograron construir, en los primeros meses, unos 400 módulos, pero la magnitud del problema seguía siendo importante al año del desastre, puesto que aún no se habían construido ni la mitad de lo requerido, las familias seguían viviendo en carpas (Antelo:1985:9).

Muchas familias no llegarían a recibir una nueva vivienda nunca y quienes las recibieron tampoco estarían socorridos, “el techo mínimo” resultó en un pequeño cuartito de 3x3 m².

“Esto es lo que nos entregaron. Una sola pared, estoy pegada a mi vecino por una pared de un ladrillito que comparto con mi vecino. Me entregaron este cuarto, de tres por tres, sin puertas, sin ventana, sin piso. El techo que no servía para nada, porque entra el agua y mejor es estar fuera que dentro. Y no llegó a todos, fueron unos cuantos. A algunos no llegó ni piedra ni nada, en el barrio San Antonio no llegó nada, eso tuvo que hacerlo el padre ya de compasión hizo. (...) Para mí esto es un engaño, pero cuando uno dice la verdad es radical, le ponen un montón de nombres, pero la verdad hay que decirla...” (Entrevista MF).

Antelo (1985) también reconoce que en los hechos existían dos grupos diferentes dentro del Plan 3000, unas 1200 familias del primer turbión:

“... se trataba de una masa relativamente compacta sin mayores conflictos internos, que se propuso reconstruir su hábitat en base a la propuesta del gobierno municipal de dotarlos de tierra y la infraestructura mínima para el desarrollo posterior de sus actividades y la normalización de su vida económica y social”.

El segundo sector, lo conformaron los evacuados del segundo turbión, que tuvieron peores condiciones en el asentamiento. “Estos permanecieron mucho más tiempo que los primeros a la intemperie y en condiciones precarias (carpas). La dotación de tierras fue



Foto: Una de las viviendas (habitaciones) construidas después de la inundación, todavía en pie.

por demás dificultosa, los evacuados fueron protagonistas del manejo político que se hizo de su situación. Finalmente ocuparon las extremidades del asentamiento, conformando actualmente las alas Norte y sur del Plan. No conocieron los orígenes del programa y establecieron muy poco contacto con sus promotores” (Antelo: 1985:11).

Tal vez lo correcto sería decir que en la zona cohabitaban, los grupos de afectados

por las inundaciones que se establecieron en el Centro, Norte y Sud del terreno y junto a ellos los asentamientos pequeños de gente que vivía allá antes de riada.

“Donde yo vivo (...) es el más viejo, antes que se funde como Plan 3000, ese barrio ya pertenecía a ese distrito, pero con la riada del ¿82? la gente de las riberas del Río Pirai, unas 3000 familias (...) son trasladadas al lugar de la rotonda del Plan 3000. En esas Unidades Vecinales (UV), alrededor de esas rotonda es que habían las 3000 familias y por eso se le dice históricamente ‘Plan 3000’ a todo un distrito que es mucho más amplio en superficie. Ahí habían unas 6 Unidades Vecinales, pero ahora el Distrito 8 son unas 160 Juntas vecinales” (entrevista DV).

En los años posteriores, el barrio fue cambiando. No faltó quienes “vendieran”⁴⁰ la casita o el lote a otras personas que compartían las mismas condiciones socioeconómicas pero no eran damnificados de la riada. Por ejemplo el padre de VS, albañil que llegó a Santa Cruz, desde La Paz con su familia.

“Mi papa trabajaba con un señor que había sido damnificado y a su lado vivía otra pero bebía mucho, e inclusive se descuido tanto que casi quema la casa que le dio el gobierno, de esta forma el dueño quería vender la casa. Su amigo le avisó a mi papá le dijo: –El de al lado de mi casa quiere venderlo– Mi papá vino, lo vio el terreno e hicieron trato” (Entrevista VS).

⁴⁰ Las transacciones (compra-venta) de lotes de los damnificados a terceros se realizó de forma informal, trasladando la boleta de damnificado. La propiedad sobre los lotes no fue regularizada aún en el momento en que se realizó este trabajo.

Al núcleo central de damnificados y antiguos habitantes se sumaron nuevos vecinos. La zona ganó atractivo mercantil gracias a las vías de comunicación abiertas por el municipio para atender el campamento, al gran contingente de gente asentada. Los loteadores comenzaron a hacer su trabajo y proliferaron las urbanizaciones alrededor.

Se trataba casi siempre de barrios que surgían de algún tipo de afinidad, por ejemplo comerciantes a quienes se ofreció facilidades de pago, o grupos con un origen común como paceños o potosinos, paisanos de alguna provincia, migrantes de zonas rurales de Santa Cruz, grupos que compartían la misma ocupación y como en otras ciudades, a fines de la década del 80, los relocalizados mineros, quienes llegaron con un programa de dotación de viviendas del Estado.

“Sabíamos que estaban construyendo unas casas allá, bonitas porque tenían cocina, dos dormitorios y su salita (...) No sé si les daría el Estado pero hicieron construir, solo para los mineros, varias casa igualitas en un barrio. Eran bonitas a comparación de las que nosotros teníamos, las nuestras tenían solo un cuarto, sus casas eran bonitas, tenían agua, luz. Ellos no vivieron lo que nosotros vivimos” (Entrevista VS).

Unos compraron terrenos directamente de sus dueños, propietario de fundos agrícolas que habían obtenido títulos en el proceso de Reforma Agraria. Entre ellos casi no hubo problemas de propiedad, aunque sí de cambio de uso de suelo pues muchos no estaban considerados terrenos urbanos. Pero más comunes fueron los procesos fraudulentos de compra y venta de tierras. No faltaron los casos en que más de un dueño reclamaba la propiedad de la tierra y los asentados tuvieron que enfrentar juicios interminables, desalojos, y toda una gama de problemas que se arrastran hasta la actualidad.

Todos concuerdan en que el “barrio se llenó” entre la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, o sea cuando la ciudad gozaba de la bonanza neoliberal y era destino seguro de muchos migrantes. En esa época se fundaron muchos barrios nuevos fuera del terreno de las víctimas de la inundación.

Ahora, el barrio tiene unas 160 juntas vecinales, al principio sólo existían seis y se calcula que desde el último censo (2001) la población se ha duplicado y hoy llega a unas 300.000 almas. En este espacio resalta y asombra la diversidad de orígenes, rostros, idiomas y experiencias, algo que lo hace único con respecto a cualquier otro barrio de Bolivia.

“Aquí estamos bien mezcladitos pues, de todo Bolivia estamos mezcladitos, aquí no solo están cambas de baja ralea, ni collas de baja ralea. Estamos bien mezcladitos, de toda Bolivia y no nos peleamos pues, eso es lo bueno, sabemos convivir el uno con el otro. Ese divisionismo nos han traído del centro, aquella vez que lo han polarizado entre

collas y cambas, pero aquí uno vive diferente. Si ambos no tenemos nada, los pobres ¿de qué vamos a pelear?” (Entrevista MF).

Dinámicas asociativas

En el campo organizativo, el Barrio ha pasado por tres grandes etapas desde su consolidación: La primera corresponde a un núcleo de damnificados por la riada; la segunda de expansión con el surgimiento de nuevos barrios en torno al núcleo y finalmente la etapa actual de complejización y dispersión organizativa. Pasaremos a describir cada una de estas etapas con mayor detalle, otorgando importancia a las relaciones que se tejen entre distintos tipos de organizaciones existentes.

Primer momento: el surgimiento

Antelo (1985) que escribe desde el punto de vista de un funcionario que intenta ejecutar el plan de reubicación, nos transmite la idea de que la relación con los dirigentes vecinales no fue precisamente buena. Según él, los dirigentes estaban pugnando por mantener una estructura de “poder” que se había consolidado en el antiguo barrio y que habían de ser cuestionadas en la nueva situación.

La intervención directa del Estado (a través del municipio y prefectura) en las tareas de reubicación, reconstrucción y dotación de alimentos (agua y vituallas) puso a los vecinos frente a la necesidad de re-estructurar sus organizaciones, hubo innovaciones pero se desechó totalmente las antiguas.

“Mi esposo era líder de allá de los bañados del Piraí, había como una Unión de Juntas que agarraba varios: San Martín, Litoral, La quemada, Los chinos, Ovidio Santiesteban, Carlos Satiesteban, Botánico, La Madre ...había como una Unión de Juntas. Aquí también se hizo y mejor todavía porque por cada manzano tuvimos un delegado, o sea que siempre hemos ido organizados. Delegados por censo, delegados por todo, el delegado tenía que ir a pedir...”
(Entrevista MS).

Los delegados por manzano, fueron la novedad como lo reconoce también Antelo (1985) “...facilitaba la comunicación de órdenes e instrucciones y permitía a sus organizadores contar con cuadros organizados, disciplinados y jerarquizados dentro de su propia comunidad, como elementos de apoyo en las operaciones requeridas por el Plan, sea para el envase y distribución de alimentos, movilización al trabajo, etcétera”.

Antelo (1985) también da cuenta del surgimiento de “nuevos liderazgos al margen de las estructuras formalizadas por los organizadores. Estos liderazgos se alimentaban en las deficiencias en materia de alimentación, medicinas o supuestos privilegios concedidos a personas afines a las autoridades de la época”.

Pero, desde la visión de los vecinos, no hay una ruptura “total” entre lo que existía en “los bañados del Pirai” y las organización adoptada posteriormente. Como afirma la señora MS, los delegados de cuadra vinieron a ser una mejora pero funcionaron incorporando a las anteriores estructuras organizativas.

Lo evidente es que en las nuevas circunstancias, las mujeres tomaron un rol preponderante en la organización barrial. Antelo por ejemplo señala que “...pronto se organizaron estructuras de Poder Vecinal, que se constituyeron la expresión genuina de la organización popular y, que por extraño fenómeno sociológico aún no estudiado, estuvieron representadas mayoritariamente por mujeres”.

Doña MF, corrobora esta afirmación:

“En el sur tenemos un icono, doña María Chacón, su marido fue líder desde allá también, fue damnificado. Ha muerto Don Noé, mi marido también ha muerto como líder, hemos seguido las mujeres. La señora María, también siguió como líder, se cansó también de pelear, ya nos hemos cansado, pero seguimos. Siempre hemos tenido organizaciones sociales por detrás”.

La estructura organizativa que se generó en el barrio, tenía como base a los afectados, que fueron ubicados en viviendas distribuidas en manzanos. De cada uno de ellos, se debía elegir a un delegado cuya función era organizar e informar a los vecinos de cada cuadra sobre cuestiones como la seguridad, el recojo de alimentos, materiales de construcción, organización del trabajo, etc. Todos los delegados de manzano participaban a una instancia, donde todos asistían para recibir información y coordinar acciones. Esta instancia era un cuerpo intermedio entre las bases y los representantes de todo el barrio. También existía la posibilidad de que los delegados de manzana de los sectores Norte, Centro y Sur se reúnan por separado en torno a necesidades particulares, pero al parecer, todos los que pertenecían a una misma estructura organizativa, y diferían en sus funciones.

Un tipo de organización específica surgió entre los que tenían hijos en edad escolar, quienes antes de la inundación se encontraban en el proceso de construcción y consolidación del funcionamiento de la Escuela del Pirai. Una hoja mecanografiada, sin fecha, ni autor, que es utilizada para reseñar la fundación del colegio en su aniversario reseña⁴¹:

“Nace a orillas del Rio Pirai por la década del 80 con sólo una aula de construcción precaria donde albergaba a niños de los alrededores (...) Los padres de familia continuaron acumulando en la medida de sus posibilidades materiales para su ampliación hasta lograron levantar una barda para encerrar a la escuela y contaban con algunas calaminas y maderas para la construcción de otra aula. Cuando menos esperaban se presentan los desastres naturales

41 El documento lleva por título: “Breve historia de la escuela Claudina Thevenet”.

de la riada de 1983 donde mucha gente perdió la vida y otros quedaron completamente sin nada y fueron trasladados al Plan 3000, entre ellos la escuelita, que solo pudieron salvar unas cuantas calaminas, maderas y el tablerito donde rezaba 'Escuela del Pirai' ”.

Según el documento mencionado, la escuela se puso en funcionamiento luego el traslado “debajo de los árboles más frondosos, casas prestadas o debajo de un hule”, hasta que las religiosas de “Jesús – María” se hicieron cargo y le cambiaron el nombre a “Claudina Thevenet”, que fue la primera escuela del Plan 3000.

También hacia 1985 se consolidó la primera Cooperativa de Agua, con un carácter social denominado COPLAN Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado que en un inicio se llamó Cooperativa de Servicios Públicos “Tres mil Ltda.”. Aunque de forma inicial, fue considerada parte de la organización única: “Tuvimos la necesidad de hacernos una cooperativa, porque había necesidad. Por eso, esa cooperativa es patrimonio del pueblo, todo el pueblo ha puesto, somos dueños todos. Hemos tenido que hacer igual que SAGUAPAC” (Entrevista MF).

Segunda etapa: expansión

Se caracteriza por el crecimiento rápido de la zona y el paulatino cambio de vecinos por efecto de la compra venta de terrenos. Muchos de los damnificados vendieron sus lotes, la cantidad de barrios alrededor creció de forma tan precipitada y rápida, que pronto el barrio de damnificados no fue más que uno entre muchos. Los nuevos vecinos ya no compartían las mismas experiencias de vida y lucha, ni el recuerdo de la inundación y la reubicación.

Los nuevos barrios que se formaron, traían experiencias previas de organización y ya no respondían al núcleo central de damnificados, eran parte de una federación de comerciantes, de mineros, de residentes del interior, etc.

“Yo era gremial, era de la federación y a través de ella conseguimos para los gremiales afectados un lote a crédito y teníamos que pagar durante un año, diario un dólar, pusimos primero una cosa de 300 dólares y nos costó en total 830 dólares ... Incluso se consiguió a través del Gobierno del MIR y el sector gremial apoyó con votos a ellos, como eran de izquierda y conseguimos unas viviendas a través de FONVIS y nos construyeron de esa vivienda teníamos que pagar un costo de 3500 dólares. Tenía su salita, su dormitorio, su cocina, su baño (...) Después hicimos nuestra Junta vecinal, incluso la Junta vecinal nos dicen hasta ahora ¡ustedes son gremiales! Barrio gremial nos dicen hasta ahora ¿no? Pero no era así... Tal vez si, (...) queríamos ser una zona muy importante del sector gremial, pero no se pudo lograr” (Entrevista TM).

“Nosotros tenemos haber más o menos unos tres barrios de puros mineros, ellos mismos dicen: ‘somos los hijos de los relocalizados’, un barrio muy combativo ahí, el ‘Barrio Minero’ justamente. Ellos se organizaron y creo que también nos apoyaron a ser combativos a los vecinos. En ese tiempo, lograron incluso asfaltar ¡en un monte! que sus calles sean asfaltadas, tuvieron viviendas del gobierno en fin, en ese tiempo ya. Pero, ahorita vaya, yo creo que sigue todavía aislado. Está el barrio y está el pavimento y esas casitas que todavía no ha llegado el asfalto de aquí de la municipalidad” (Entrevista MF).

El crecimiento de la zona tuvo su influencia en la estructura organizativa, diluyó la intensidad de las relaciones interpersonales, la comunión de intereses y también marcó diferencias socioeconómicas.

“Antes había poder de convocatoria (grande). Ahora se ha perdido todo eso, parece que con lo que algunos lotes han vendido, ha entrado gente nueva y ya no nos conocemos. Esa gente llegó con su capitalcito [sic], a esa gente, ya no le interesa. Ya no van ni a las reuniones, está más importada [sic] en sus negocios...en esas cosas. Antes hacíamos asambleas todas las noches, era mejor, estábamos mejor organizados que ahora. Ahora, usted trae una máquina... ni cincuenta centavos quieren dar los nuevos que han venido a comprar los lotes, que por el azar de la vida lo han vendido los mismos damnificados. Ya no les interesa. Ni nos conocemos.

Yo por ejemplo, a este mi vecino, ni conozco de dónde es, nunca hemos charlado, ni viene siquiera. Es su lote de engorde. Más allá, no sé. Buenos días y punto, nunca hacemos una charla, porque no hay tiempo. Entonces hemos perdido todo eso. Antes, en medio de nuestras desgracias nos ayudábamos, había más comunicación, había más reuniones, era mejor la lucha también, (ahora) está adormecido” (Entrevista MS).

En el proceso, cada barrio conformó su propia organización y cada una tenía su propia forma de organizarse, algunos mantuvieron a los delegados de manzanos, otros por la representación simple de Junta Vecinal con Presidente y directiva, incluso hubo quienes se agruparon como sindicato agrario.

“Ya se volvieron Juntas, ya nos empezamos a dividir también ya. Antes era uno solo, después ya nos dividimos. Ese lugar ya es, por ejemplo ‘18 de Marzo’, más allá ya es ‘San Juan’, le han puesto nombre ya. De cada barrio una Junta salió. Al frente ya es ‘16 de Julio’, más adentro ‘12 de Diciembre’ y así... De ahí, ya sacaron presidente de cada barrio que son Juntas Vecinales (...) esas son las OTBs” (Entrevista MF).

Es difícil saber hacia dónde se encaminaban en términos organizativos, no cabe duda de que la riqueza del proceso de expansión estuvo en la mezcla de diferentes experiencias organizativas, como bien dice don DV, los relocalizados por ejemplo hicieron sentir su forma de organización en el barrio, “nos enseñaron a ser combativos”. Por otro lado, es cierto que se combinaban diferentes tiempos y experiencias organizativas que podían jugar tanto a favor como en contra de propia organización. Cual fuere la dirección que estuviese tomando, el proceso fue truncado por cambios mucho mayores a nivel nacional, como veremos a continuación.

La nueva institucionalidad y organización vecinal

A mediados de la década del 90, se produjeron en Bolivia cambios institucionales importantes, que también afectaron las formas de organización de la sociedad civil y en particular a las llamadas organizaciones de base territorial como las Juntas vecinales.

Las reformas que incluyeron, la municipalización (descentralización), la elección de alcaldes por voto y la implementación de la Ley 1551, delinearon un panorama con gobiernos locales con autonomía de gestión y asignación de recursos económicos para poder cumplir con sus nuevas competencias.

En términos organizativos, se impulsó el registro y reconocimiento de las organizaciones territoriales, como las juntas vecinales que se convirtieron en actores principales del desarrollo local y los procesos de planificación participativa en las ciudades. Aunque, se supone que la ley sólo pretendía otorgar reconocimiento legal a las organizaciones territoriales ya existentes, a través de la realización de un trámite ante los gobiernos locales departamentales, en los hechos, significó un certificado de defunción para la Junta Vecinal tradicional. Como la ley preveía un mínimo de ocho manzanos para poder iniciar el trámite de personería jurídica, se produjo un proceso acelerado de fragmentación en las organizaciones vecinales.

Más adelante, esto facilitaría el afianzamiento de relaciones clientelares entre el municipio y la población, una forma de subordinación que fue sostenida y profundizada por efecto de la captura del poder local por elites que se benefician directamente del manejo de los recursos públicos. Además de eso, a efectos de mejorar los procesos de planificación, los municipios debían delimitar instancias menores dentro de sus territorios, denominadas distritos. En muchos casos, la distritación, agrupó actores y territorios que no habían construido entre sí nexos de ningún tipo.

Ello supuso un gran esfuerzo para las organizaciones vecinales, pues tuvieron que adecuarse a las nuevas condiciones. Estar representados como distrito ante el municipio, implicaba una nueva etapa en la vida organizativa, empezando por reconstruir sentidos de identidad y pertenencia. Actualmente, el Distrito 8 de la ciudad, lo conforman las

Juntas Vecinales comprendidas en el territorio que dibuja una figura trapezoidal, inicia en el 6to anillo y se ensancha hacia el 9 ó 10 anillo, prácticamente en el límite de la ciudad. Más o menos en el centro, quedaría ubicado el Plan 3000 propiamente dicho, aunque es un hecho que la mayoría se identifica con el nombre que dio origen al barrio.

El Distrito, está representado por el Consejo Distrital o Unión de Juntas Vecinales. Esta instancia se conforma con todos los presidentes de Juntas Vecinales, (electos por asambleas barriales), ellos forman un directorio con secretarías o carteras tradicionales y mantienen reuniones de forma periódica. Su función, como ya se dijo, es representar al distrito ante el municipio. En teoría debería funcionar como una instancia de agregación de demandas y velar por el desarrollo del todo el territorio, aunque no siempre es así.

En la actualidad, la estructura organizativa tiene dos facetas, en ocasiones se muestra débil, en especial en lo que atañe a su capacidad de relacionarse y gestionar sus demandas frente al municipio. De hecho, los dirigentes y vecinos plantean que casi todas las instancias formales de participación en el ámbito local han sido sistemáticamente burladas por intervención de intereses externos.

“Nosotros hemos descubierto que uno o dos personas dan firma y poder listo. Pero no es pues así, al final de cuentas la zona que están dañada debe estar citada para hacer un proyecto. No nos citan para una reunión, para decir esto queremos hacer, queremos mejorar esta zona, queremos hacer esto o lo otro, pero no.

Aquí en el Plan 3000, para hacer la planificación, no citan. No nos citan. Igual para entrar a un POA nosotros no participamos, unos, dos, tres, cuatro, ellos hacen. Entonces, de nada sirve, tenemos incluso el Comité de Vigilancia, de nada sirve. Tampoco informa. Por ejemplo yo tengo un problema, el comité de vigilancia nunca informó cuánto costó la obra. De eso hay harto que hablar, hay obras fantasmas en el Plan 3000, (...) en el informe dice hay tal obra, está en tal manzano, tal barrio y sin embargo, no hay nada” (Entrevista TM).

De hecho la estrategia más eficaz parece ser el ataque a la unidad interna de las organizaciones minando la representatividad de la misma:

“Pero ahora eso también está dividido en cada barrio hay dos tres juntas, ya está perdiendo la credibilidad la gente, no tiene ese poder de convocatoria que tenía antes porque la política les ha dividido. Hay una Junta de la izquierda otra de la derecha, otra del centro y la gente no sabe a cuál de los dos ir porque los problemas siguen los mismos, la gente sigue necesitando cosas, el barrio sigue abandonado” (entrevista MF).

“Ahorita estoy descansando durante unos cinco meses, me cansé de ser dirigente de junta vecinal. Pero hice el lanzamiento de elecciones para que un vecino de verdad conforme (...) la convocatoria dice, debe ser parte del directorio más que todo la cabeza, debe tener lo mínimo, dos años de viviente, debe tener su propia casa y ser en la zona ¿no? Sin embargo, aquí se manejó (...) al color político. No tiene ni casa pero ¡He ganado! dice. Ahí tenemos, a nivel político gente traen de otros lados para hacer elecciones, como siempre han manejado en aquellos años, trasladan gente de aquí allá para respaldarse. Eso pasó en mi barrio, pero yo sigo siendo dirigente mientras no haya asumido un verdadero vecino que tiene casa, vivientes de aquí, yo lo rechazo, no acepto que él sea el presidente de la Junta Vecinal” (Entrevista a TM).

En esta historia colabora también que las instancias mayores como la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad sufre el mismo problema. Sin duda esta situación es propiciada por los diferentes gobiernos municipales, con la finalidad de tener interlocutores dóciles.

“Yo he visto a nivel nacional hay dos o tres CONALJUVES, pero en Santa Cruz había ya dos FEJUVES, hace mucho tiempo creo que ya van para sus ocho años, más todavía, ya había eso y en los barrios es lo mismo. En mi barrio, donde yo soy conocido, en Plan 3000 soy conocido. Pese a eso, hay tres juntas vecinales en mi barrio” (Entrevista DV).

“...cuando viene la Federación (...) van a darle la posesión, cuando van a una comisión ellos tienen dieta. Entonces ¿qué hacen? Por no perder eso, le dan posesión. ¿Qué hacen? me ponen un paralelo y yo lo denuncié: El señor, no es viviente de la casa, no tiene casa aquí en el barrio. A ver, que se acredite con documentación de la casa y es fácil, sencillo. Un vecino tiene factura de agua y luz y eso acredita que él ya vive en la zona. Entonces, nada tenía, ni pidió ninguna clase de documentación. Le habilita y le da posesión ¿eso qué es? Es político. El respaldo viene de la de federación, le respalda (...) pero ahorita no está trabajando, pues. Yo me creo todavía (...) junta vecinal hasta que asuma otro...” (Entrevista a TM).

Entrevistador: *“¿Qué otras organizaciones existen en el barrio?”*

Respuesta: *“Hay por ejemplo la COR que es un sindicato de los trabajadores, eso también ya lo dividieron ahora hay tres, así no se puede trabajar. Por eso, dividir para reinar. Trabajo de la derecha” (Entrevista MF).*

Pero esta estrategia se combina con la manipulación de las necesidades y anhelos de la gente de los barrios.

“... la Participación popular del gobierno municipal del centro, no invertía en el Plan 3000 dicen que por qué no tenemos alcantarillado, pero ellos podrían invertir en otras cosas. Tampoco hicieron nada (...) porque éramos opositores no nos daban.

... Los vecinos dicen, las obras vengan de donde vengan bienvenidos, eso dicen algunos, otros pensamos que no debería ser así, pero la mayoría dice que sí” (Entrevista DV).

La otra faceta de la vida organizativa es la capacidad que han tenido, tanto organizaciones como pobladores del Plan 3000 de presentar resistencia a los esforzados intentos de domesticación. Este hecho se manifiesta en la imagen que han ganado en la propia ciudad de ser “rebeldes” y eternos “opositores” a diferentes gobiernos municipales. Una eterna molestia para las estructuras de poder local.

¿Cómo podemos explicar esto en un contexto tan adverso para la organización? Encontramos que una pista de este hecho podría estar en la existencia de una identidad colectiva surgida en torno a la marginación. La experiencia de la inundación, el trato diferenciado que recibieron respecto a otros barrios afectados, la relocalización a los extramuros de la ciudad que fue vivido como un destierro, la mentira de ser beneficiarios de una tierra cuya posesión nunca fue legalizada, el posterior abandono de las instancias estatales, la permanente actitud de menosprecio de los diferentes gobiernos municipales y los grupos de poder hacia el barrio. En fin, todos esos elementos han contribuido a formar en los habitantes del Plan 3000 una idea clara y compartida sobre el lugar subalterno que ocupan en la ciudad.

Es posible advertir que de algún modo esta “debilidad” ha sido el insumo básico para estructurar su “fortaleza”. Creemos que se trata de una especie de espíritu de cuerpo, que puede no ser advertida, pero está presente en el cotidiano y ayuda a configurar horizontes comunes, planteamientos sobre el mejor futuro, que en este caso tiene que ver con el convencimiento de que la única salida es la ruptura con “los del centro”. En ese camino la respuesta que encuentran es la búsqueda de su autonomía expresada en la demanda de constitución de un municipio propio.

Por supuesto queda pendiente de profundizar un tema. El Plan 3000 no es el único barrio marginado de la ciudad, de hecho por lo menos tres distritos de la ciudad comparten la misma situación socioeconómica. Pero a diferencia del plan, otros barrios han forjado su identidad en torno a la subordinación “pactada” con los poderes que controlan la ciudad, por esa vía han logrado su integración en el contexto urbano, aunque ello signifique la clausura de otras opciones.

“Yo viví alquilado también en Luján, un tiempo, que es una barriada de más cambada que de gente del interior, en el Plan es más gente del interior que

cambada, aunque hay pero es menos. Pero el grado de pobreza es más de la gente que alquila en Lujan que de la gente del Plan. Pero por ejemplo, cuando habían los conflictos estos por el tema de la autonomía y todo lo demás el Plan se reunían en La Rotonda la gente, se quejaba, y los trataba de racistas y todo lo demás. En cambio en Lujan no, la misma gente un poco más pobre incluso era gente que no protestaba para los cívicos. Más bien muchos de ellos se parcializaban para los cívicos...”

Una pregunta que surge de esta situación es ¿qué elementos específicos contribuyen a que un barrio periurbano transite uno u otro camino compartiendo las mismas condiciones socioeconómicas? Para unos se trata sólo de cuestión de tiempo:

“... lo que hay en el plan, puede darse en otras ciudadelas, por ejemplo más que el Plan eso puede darse en el barrio Los Lotes que es el distrito 12 pero que es nuevo. El distrito 12 debe tener poblado densamente unos ocho años, el nivel de pobreza es mayor que en el Plan 3000 pero no tiene la antigüedad...”

Otros vecinos identifican elementos específicos:

1) La propia experiencia del barrio en su relación con el municipio y el Estado.

“Cuando nos acercamos a alcaldía se dice que vamos a hacer un censo. Me cansé de hacer censos. Tenemos censos con nombres, con apellidos hemos dejado en CD, allá dicen que se perdió. El problema está más claro que el agua lo que pasa es que la alcaldía no quiere reconocer, vamos a morir dejando el problema a nuestros hijos. Cómo a otros barrios ricos que se inundaron, les dieron casas y muebles por qué?

Por eso tenemos que tomar Normandía hacer huelga de hambre y eso molesta a las autoridades, nos ponen todos los nombres, primero éramos anarquistas, después comunistas, todos los nombres. Ahora seguro que si hago un bloqueo me dicen que soy masista, como que ya nos dijeron. Solo somos una maquinita de votos solo para eso servimos...

Dicen el Plan 3000 zona de maleantes y marginales. Ellos nos han marginado, somos seres humanos, tenemos los mismos valores. Que hay maleantes, hay maleantes, como en la plaza central pero quienes nos han marginado son ellos, las autoridades ...Es un genocidio lo que han hecho con los damnificados aquí no hay derechos humanos, no hay defensor del pueblo. ¿Para qué servimos? ¿Que nos queda? Luchar, y la lucha va continuar aunque se derrame sangre, vamos a continuar, sino somos escuchados” (entrevista MF).

II) La experiencia organizativa de mineros y migrantes del “occidente”.

“En el Plan la gente que es del interior a diferencia de otros sectores que son un grupo mayor que vive en el Plan, mantiene cierta identidad de sentirse colla y muchos le transmiten eso a sus hijos y se sienten discriminados porque el colla hasta ahora sigue siendo discriminado y sí hay ese sentimiento de discriminación por el sentido racial y por el sentido económico...”. “...Gran parte (...)viene con tradición de lucha del interior y con cierto legado ideológico, son afines a las ideas como el socialismo, son afines a rechazar la entrega de los recursos a las transnacionales. Hay gente por ejemplo usted va a la Rotonda se topa con un refresquero y le va preguntar qué piensa a cerca de las transnacionales y le va a decir, no es mucha pero hay gente con esa tradición de lucha y con cierto nivel ideológico.

(...) Esta el barrio minero que si bien llegaron con casas y todo lo demás, hechas ya, pero vienen con una ideología y tienen hijos y generalmente estos chicos (...) tienen identidad, no solo identidad en el sentido de origen cultural sino cierta identidad de clase. No todos pero buena parte, viene esa gente con esa tradición. Y es similar a lo que pasa en San Julián, Cuatro Cañadas, Yapacaní, es gente del interior con tradición de lucha y con cierta ideología, es lo mismo en el Plan(...) eso ha hecho que ahí sea el principal foco de resistencia a diferencia de otros lugares como la Villa 1ro. de Mayo que tiene esa composición pero no es tan, no es tanto como el Plan 3000, hay menos gente (...) pero no hay ese núcleo como es la Rotonda por ejemplo o los gremialistas y no hay la misma cantidad de población y pobreza”.

III) La mezcla de experiencias de oriente y occidente.

“En el plan se concentró la mayor cantidad de etnias. La mayor cantidad de culturas y gente de todo el departamento” (Entrevista JJ).

“El Plan 3000 fue el gran error de ellos... ellos pensaron que llevando a la gente pobre...En el río Pirai no habían collas, eran cambitas y los trajeron para que se mueran y ellos acogieron a todos y eso se les hizo como una piedra en el zapato...” (entrevista AH).

IV) La experiencia de reconocerse hermanados por la pobreza, seas cambia o seas colla.

“El Plan 3000 es una ciudadela gigante, es otra ciudad dentro de otra ciudad. Existen collas, cambas, chapacos de origen humilde y la gente tomó consciencia de los fuerte que somos, somos aquí muchísimos y la gente no es tonta, no se tragó el cuento del chauvinismo regional...” (entrevista MU).

Las principales luchas

En el Plan 3000, nunca han faltado motivos para luchar, se podría decir que desde el traslado cada una de las necesidades se han conseguido con presión de, por medio de. En los primeros tiempos se vivió un momento excepcional que requería un estado de alerta permanente.

La entrega de alimentos, de agua y medicinas requirió de una estructura organizativa que funcionara de forma permanente. Conforme fue pasando el tiempo, el Plan 3000 dejó de ser noticia, los problemas de construcción de las viviendas consumieron gran parte de la atención de la gente puesto que también debía organizarse la distribución de materiales. Otro tema que fue solucionado de forma rápida fue el de la distribución de agua, la primera cooperativa de agua estaba ya en funcionamiento en 1985.

Nos atreveríamos a plantear que la lucha más larga y dura que les ha tocado vivir a los habitantes del Plan 3000 ha sido la búsqueda de la legalización de la propiedad de los terrenos donde fueron reubicados por el municipio. Esta fue y todavía es, algo así como la principal batalla que han tenido que librar pues llevan 27 años en ello sin haber podido conseguir su objetivo. En la misma, se han usado una variedad inmensa de recursos legales y extralegales tal y como vamos a detallar brevemente. Pero hay que destacar que estos años de lucha son posiblemente lo que ha marcado el tipo de relación que los habitantes del Plan tienen con las instancias estatales.

Cómo nos volvimos rebeldes

Al principio algunos funcionarios públicos estaban seguros que contaban con el apoyo de las familias relocalizadas pues se dijo que “estaban dispuestos a defender y apoyar a quienes en su momento los habían rescatado del lodo, cumpliendo la promesa de dotarlos de un pedazo de tierra...” (Antelo:1985:11).

Poco tiempo después de la riada, cuando el barrio comenzaba a reconstruirse, la gente viviría una nueva tragedia, se enteraría de que la tierra prometida tenía propietario. Los dueños del terreno interpusieron una demanda contra el municipio ya que alegaban no haber recibido el pago por la expropiación. Ello ponía a los habitantes del Plan 3000 en riesgo de un futuro desalojo.

Desde ese momento, comenzó para los habitantes del Plan 3000 un largo peregrinar: juicios, amenazas, más promesas de solución, denuncias de desvío de fondos, censos, movilizaciones, desalojos, ordenanzas municipales, a favor; ordenanzas en contra, corrupción, etc. La historia es más o menos la siguiente:

En 1981 se dicta el Decreto Supremo DS 16917, que declaró la expropiación por necesidad y utilidad pública de una parte de terrenos que habían sido dotados gratuita-

mente por el Estado a la familia Gutiérrez Melgar, como terreno agrícola. Ellos poseían unas 172 hectáreas, pero la expropiación terminó afectando sólo 28 hectáreas.

En 1983, el gobierno municipal evacuó a este terreno a las familias afectadas por la inundación, pero no les extendieron título de propiedad, el único documento que recibieron fue un recibo denominado “Boleta de evacuación” en el cuál se leía:

“La presente BOLETA le confiere el derecho de ocupar un lote proporcionado por el gobierno municipal; el mismo que deberá ser cancelado en dos años. A la conclusión de los pagos se le extenderá el título de propiedad definitivo”.

En 1985, el municipio a través de la Resolución administrativa N° 101/85 establece un monto para realizar el pago por indemnización y conmina nuevamente a los dueños a hacerse presentes para proceder con el desembolso. Sin embargo, el dinero provendría de los propios damnificados, a quienes se les pide que depositen la suma correspondiente a los 300 metros cuadrados de terreno (Bs 600.000) en el Banco Central en la cuenta denominada “Fondos en Custodia”.

Muchas familias depositan el dinero, pero este nunca es entregado a los propietarios impidiendo concluir el proceso de expropiación. Hasta el día de hoy se desconoce el destino de los “Fondos en Custodia” la cuenta es cerrada en 1987 con un saldo de 0.73 pesos bolivianos. La ordenanza 128/ 2002 en sus consideraciones remarca:

“... los datos registrados en los extractos bancarios de la referida cuenta, se evidencia el movimiento de depósitos individuales sin poder identificar el nombre de las personas depositantes. De la misma manera se observa la salida de recursos en montos diferentes a los depositados, sin poder establecer la aplicación de los mismos (...) de los datos históricos recogidos, no se tiene constancia de que estos recursos hubieran sido entregados a los propietarios originales de los terrenos...” (Ordenanza Municipal 101).

En 1989, sin que se haya solucionado el problema, una nueva Resolución Municipal (209/89) autoriza que los propietarios vendan de manera directa los terrenos a los asentados y fija un nuevo precio, por metro cuadrado, esta vez en dólares. Se facultaba a las familias que ya hubiesen pagado el terreno al tesoro municipal, pedir la devolución del dinero. Muchos vecinos pagaron nuevamente a los dueños para dejar atrás el peligro de desalojos.

El problema continuó para los habitantes del Plan 3000, algunos iniciaron procesos por usucapión y otros no consiguieron llegar a un acuerdo con los dueños. En 1998 una nueva resolución redactada en abril, interpretando la de 1989, instruye al Ejecutivo Municipal dejar de entregar minutas de propiedad.

Esta vez los afectados organizan protestas y ejercen una presión tal que al siguiente mes la Alcaldía se ve obligada a abrogar la resolución de abril de 1998 y conforma una Comisión interinstitucional para la búsqueda de una solución definitiva a la problemática de tierras del Plan 3000. Se realiza un nuevo censo para contar con la información sobre los damnificados y la ubicación actual de sus casas, pero resultó inútil ya que luego de un año la comisión no propuso salidas.

Serán largos 10 años de reclamos y lucha contra los desalojos, sólo en 1999, en Mayo y Octubre, se dictan dos resoluciones en las que logran que se reconozca nuevamente la expropiación “reconociendo como adjudicatarios legítimos a las familias que estén en posesión de los terrenos expropiados y que cuenten con las boletas originales de pago”. Al mismo tiempo se “instruye al Ejecutivo Municipal la defensa de los terrenos de referencia y la entrega de los títulos definitivos”.

El problema no acaba ahí, los propietarios continúan litigando, las minutas entregadas por el municipio no tienen valor. En el año 2002, nuevamente el conflicto se presenta. Esta vez no solo los damnificados de la riada, sino muchos otros barrios presentan problemas puesto que los loteamientos se han acelerado y existen muchos barrios que no cuentan con títulos de propiedad de sus viviendas. A estas alturas el Plan 3000 no es la isla alejada donde fueron exiliados los pobres urbanos en 1983, sino el “corazón” de una extensa barriada completamente articulada a la ciudad.

El entonces Alcalde Roberto Fernández y el Consejo Municipal, toman una nueva determinación, en el marco de una política amplia de saneamiento de tierras. Se determina que el municipio de Santa Cruz compre las tierras a la familia Gutierrez Melgar. Para muchos vecinos, esta será la oportunidad en que más cerca estuvieron de solucionar el problema.

Ellos que habían batallado tanto, durante tantos años, ellos que habían construido “ciudad”, con su esfuerzo, habían valorizado los terrenos por lo que nadie daba mucho cuando era “una pampa” a donde ningún micro llegaba. En el año 2002 el propietario pidió 3.304.037 \$us como precio del terreno, el mismo que le había sido entregado por el Estado boliviano de forma gratuita y el municipio aceptó.

Sin embargo, las elecciones municipales trajeron cambios en la administración municipal, el nuevo Alcalde (Percy Fernández) consideró que el accionar de su predecesor estaba fuera de la ley y lo demandó alegando que el acuerdo con los propietarios encubría un acto de corrupción en vez de un genuino interés por la situación de los damnificados. Jhonny Fernández fue acusado de la firma de contratos lesivos al Estado, cohecho y estafa, señalando que el número de hectáreas por las cuales se pagaría era mayor a las afectadas, señalaba además sobreprecio en la estimación del monto acordado. Nuevamente las cosas quedaron como al principio para los damnificados, aunque para entonces el municipio ya había pagado unos 600.000 \$us.

Percy Fernández, como ya muchos otros alcaldes, prometió una solución y redactó una nueva Resolución municipal que en teoría otorgaba seguridad jurídica a los afectados de la riada, pero no sirvió de mucho, sin el título de propiedad las familias quedaban igualmente desprotegidas, en particular de acciones extorsivas y amedrentamiento para proceder a desalojos individuales.

En los siguientes años, Evo Morales se convirtió en presidente de Bolivia y los afectados volvieron los ojos a la esperanza de que serían escuchados por un gobierno de corte popular e indígena. Intentaron que el gobierno y el parlamento les otorgara la ansiada seguridad jurídica e iniciaron gestiones para obtener la promulgación de una Ley de la República que debía pasar por el poder legislativo. Paradójicamente, un mes antes del llamado “Golpe Cívico Prefectural” en Julio del 2008, en donde los pobladores del Plan 3000 jugarían un rol preponderante para frenar las aspiraciones de los cívicos contra el gobierno de Evo Morales, el proyecto de Ley presentado por el presidente de la Comisión de Hacienda Política Económica y Crediticia Senador Roberto Ruiz Bass Werner⁴², no pudo seguir adelante en virtud de la recomendación del entonces ministro de hacienda Luis Arce Catacora.⁴³

Luego de septiembre de 2008, el Plan 3000 adquirió notoriedad pública de alcance nacional e internacional, era el barrio de la “heroica” resistencia a los cívicos, con ello ganaron la atención “respetuosa” que autoridades locales y nacionales e incluso del Presidente Evo Morales a quien no le era fácil visitar otros lugares de la ciudad, llegó hasta allá como un huésped ilustre de la ciudadela y le entregaron las llaves, señalando que allí sí era bien recibido. El respondió que la promesa que más tarde sería cumplida de financiar algunas obras de infraestructura en el marco del Programa Evo Cumple, como la construcción del Mercado y un coliseo. También se abrieron opciones políticas como la elección de una vecina de la zona como diputada en las listas del Movimiento al Socialismo. Pero, el tema de los terrenos continuó y continúa pendiente, los residentes han continuado realizando marchas y bloqueos para pedir una solución, 29 años después del traslado.

La lucha por la “autonomía” y el municipio que no se constituyó

Como se dijo en el apartado dedicado a los hechos de septiembre, al final del conflicto el Plan 3000 era un barrio famoso, dentro y fuera de la fronteras nacionales. Más allá de situación política nacional que habían contribuido a estabilizar, los vecinos del Distrito 8 intentaron saldar cuentas con la marginación urbana.

42 Entonces parte activa del movimiento regional denominado “Media Luna” y militante de PODEMOS

43 En una nota de respuesta a la consulta sobre la pertinencia de la Ley Arce Catacora responde al presidente Evo Morales Ayma en los siguientes términos: “...tengo a bien comunicar que no es necesario elevar a rango de ley una Ordenanza Municipal para efectuar el saneamiento Técnico Legal y Administrativo de las Unidades 146, 147, 148, 149, 150 y 160, ubicadas en el Plan Tres Mil, ciudadela Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz. En este sentido, esta cartera de Estado no considera pertinente el presente proyecto de Ley”

Si la bandera principal de las elites cruceñas era la autonomía departamental, los vecinos encontraron que dentro de la misma, cabía para ellos una esperanza para dejar de ser la zona roja o negra que habían sido siempre. Con los mismos argumentos que esgrimían los autonomistas cívicos, las misma crítica al centralismo que abandonaba y condenaba a la postración a las regiones periféricas, criticaron su situación dentro de la ciudad, declarándose víctimas del centralismo y fervientes luchadores por la autonomía.

Quizás, el Comité Cívico no imaginó que el punto flaco de la demanda de autonomía sería la apropiación que hicieron los vecinos del Plan 3000 del mismo, elaborando una versión mucho más radical del mismo. La demanda de descentralización fue llevada hasta el extremo, poniendo a prueba la coherencia del discurso regional.

Así como ciertos sectores demandaban autonomía departamental, el Plan 3000 demandó que se les permitiera fundar un nuevo municipio en su territorio. En el momento de mayor entusiasmo, se llegó a elegir un alcalde simbólico y una subprefecta, también se organizaron varias instancias de carácter regional como la COR. Paralelamente, se ponían en marcha otras iniciativas que mostraban su determinación de avanzar en el camino de la autonomía, como por ejemplo el pedido de creación de una Universidad, la misma que llegó a funcionar por un tiempo en un local educativo con profesores trabajando de manera voluntaria.

Questionaron también la permanencia del Ingenio azucarero San Aurelio y la contaminación que causaba y plantearon un proyecto para dar utilidad social a esas tierras en función de las necesidades de infraestructura que tendría el nuevo municipio, como un hospital y la futura universidad. Algunos sectores llegaron a “tomar” el predio, siendo desalojados posteriormente.

Durante el año 2008 y 2009, las organizaciones se mantuvieron en estado de apronte, pues creían que al igual que había pasado con la ciudad de El Alto, ellos podrían constituirse en un municipio. Para muchos vecinos esta es la única salida para terminar con la exclusión de la zona.

Hoy en día, el entusiasmo que genera la demanda no ha disminuido entre la gente, pero contradictoriamente no se avanzó mucho, ya casi nadie habla de continuar con la presión para lograr este objetivo. ¿Por qué se detuvo la movilización?

Al parecer, la fama también trajo cosas negativas, muchos activistas pasaron a formar parte de algún partido político y desempeñar cargos públicos, hecho que los alejó de las preocupaciones del barrio. Pero ello, también trajo divisiones y resentimientos, pues no todos estuvieron de acuerdo con los privilegios que llegaban a unos cuantos. Por otro lado, tampoco las autoridades nacionales veían la demanda con buenos ojos, hecho por el cual los dirigentes ligados a este partido dejaron de lado la demanda.

Para el cierre

Al finalizar el trabajo queda claro que el Plan 3000, es un espacio cuya historia, origen y conformación, son la evidencia viva de la existencia de procesos de discriminación y segregación urbana, que terminan consolidando los espacios denominados periurbanos. Estos procesos usualmente se producen de manera subterránea, pues la conformación de barrios populares se vive como una elección personal, familiar o grupal, para asimilarse en el contexto urbano, especialmente si se trata de población migrante de áreas rurales. En ese contexto, es difícil visualizar el conjunto de políticas económicas y sociales que los llevan a un grupo a esta situación y más aún aquellas que los mantienen allí, como la política urbana y el mercado de tierras. De hecho, la segregación se vive casi como un merecido castigo, cuyo origen está en la transgresiones de la ocupación de suelos con alto riesgo o con problemas legales. Por este motivo, las demandas se gestionan dentro del marco del clientelismo y las nociones de derechos o acceso a los bienes públicos tardan en instalarse en este tipo de asentamientos.

Esto sucedía en el primer emplazamiento del barrio en las riveras del río Pirai, allí los habitantes “pagaban” el precio del peligro a cambio de contar con un terreno relativamente próximo al centro de la ciudad. Esto cambia con la inundación, pues las familias, a más de vivir una tragedia por la numerosas muertes de familiares, pérdida de sus viviendas y pertenencias, son sometidas a una violencia descarnada. Primero en el campamento de emergencia y luego con la reubicación, que no es otra cosa que un exilio hacia un lugar alejado de la ciudad, con el pretexto de proteger a las familias de futuros peligros.

Allí son dejados prácticamente a su suerte y deben comenzar de cero a reconstruir su espacio de vida. Son objeto de engaño permanente, no les otorgan el terreno que les habían prometido, sin acceso a servicios, ni transporte y finalmente viven bajo el peligro constante del desalojo. Del otro lado, las casas residenciales que habían sido afectadas tienen un trato preferencial, no son desalojados y el municipio se encarga e limpiar las calles afectadas.

Es a partir de esta experiencia que los vecinos ya denominados del Plan 3000, se consolidan como rebeldes. Es decir, paulatinamente dejan de confiar en las instituciones, la justicia y las autoridades que muestran tan poco interés frente a los problemas del barrio. En contrapartida, se afianzan los lazos de solidaridad. Frente a los desalojos, debían mantenerse organizados, apoyarse mutuamente y resistir. Tampoco creen en el sistema político, puesto que por allá han pasado todos los alcaldes cuando eran candidatos y todos le han ofrecido algún tipo de solución, pero que luego han incumplido, “nos ven como maquinitas de votos” pero luego se olvidan. Las diferencias sociales y las relaciones de poder que se juegan en la ciudad están al descubierto para los habitantes de este barrio y esa es una de sus mayores riquezas.

Cabe mencionar que desde esa perspectiva, septiembre del 2008 fue ocasión para reafirmar su condición de trasgresores, al desafiar la movilización cívica e incluso plantear su propia agenda. Quizás dotarle de sentido político a su rebeldía, enmarcarla en un reclamo de alcance mayor (nacional) aprovechar la ocasión para reafirmarse como distintos de la ciudad que los había expulsado e incluso encontrar el camino para dejar de ser los marginales y transformarse en héroes. Escribir su historia en otros términos: el barrio olvidado del que ahora todos se acuerdan.

Es importante destacar que los damnificados son el núcleo donde se concentra esta experiencia, pero al mismo tiempo esta se ve enriquecida gracias al hecho de que el nuevo espacio de vida es un centro de atracción para nuevos asentamientos. Llegan allá ex mineros, campesinos expulsados de sus tierras en oriente y occidente, indígenas de tierras bajas, clases medias empobrecidas. Los damnificados se convierten en los anfitriones de las oleadas de habitantes que llegaron. Ellos los acogen y apoyan, extendiendo y construyendo una identidad barrial, entre nuevos y antiguos vecinos. Los pobres, cambas y collas que buscaban un espacio donde vivir encuentran refugio allí y se sienten entre amigos. A diferencia de otros espacios urbanos en Santa Cruz, el Plan es visto como el lugar donde la diversidad no es un conflicto, sino todo lo contrario.

El proceso político boliviano actual, ha flexibilizado la rebeldía del barrio, pues un presidente que ostenta un origen tan humilde como el de cualquier vecino del Plan, ha despertado esperanzas. Tal vez ahora alguien les escuche. Después de todo, antes del 2008 tenían claro que debían dejar de votar por otros y votar por alguien que haya “pisado el barro”, alguien que haya sufrido como ellos. Las visitas de Evo Morales a la zona, las promesas cumplidas a medias, son por el momento, suficientes como para otorgarle el beneficio de la duda.

Pero en contrapartida, el efecto corrosivo que ha tenido en las organizaciones y dirigentes su acercamiento a la vida política partidaria, la fragmentación y división, los espacios de poder ganados en el municipio y el parlamento que no han modificado el sentido de las políticas municipales y nacionales, incluso el abandono de la demanda de autonomía, son elementos en torno a los cuales se organiza un naciente descontento.



Bibliografía

- ANTELO, S. (1985). El caso del Pan 3000 de Santa Cruz. En G. Caputo, E. Hardoy, & H. Herzer, *Desastres naturales y sociedad en America Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- ARROYO, R., & Romero, A. (2011). Colonizados, Globalizados y excluidos de las grandes transformaciones en Lima. *VillaLibre*, 26 - 59.
- BOLPRESS. (20 de Agosto de 2008).
- CASTELLS, M. (1995). *La ciudad informacional*. Madrid: Alianza.
- CEDIB (septiembre de 2007). *Bolivia Press*. Recuperado el abril de 2010, de www.cedib.org: <http://www.cedib.org/revistas/boliviapress-12-09-07/>
- CEDIB (2008). *La Mala Hora de la Autonomía*. BolivaPress, septiembre.
- CEDIB (diciembre de 2007). www.cedib.org. Recuperado el septiembre de 2010, de <http://www.cedib.org/revistas/boliviapress-15-12-07/>
- CEDIB (febrero de 2008). www.cedib.org. Recuperado el 14 de octubre de 2010, de <http://www.cedib.org/revistas/boliviapress-enero-08/>
- EL DIARIO (10 de Agosto de 2008).
- D'ORBIGNI, A. (1945). *Viaje a la América Meridional* (Vol. Tomo 3 capítulo XXIV). Buenos Aires: Futuro.
- GANDARILLAS, M. A. (2007). *La regionalización favorece a las transnacionales*. Petropress, 17-20.
- GUSTAFSON, B. (2008). Espectáculos de autonomía y crisis. O lo que los toros y las reinas tienen que ver con regionalismo en el Oriente boliviano. *Journal of Latin American Anthropology*, 351 -379.
- HARVEY, D. (2007). *Breve Historia del Neoliberalismo*. Madrid: Akal.
- INKENDERIAN, E. (2010). Un período defensivo para la burguesía cruceña. Ataques confirmados o atribuidos a la Unión Juvenil Cruceñista. *Artículo Primero*, 85 - 101.
- LA RAZÓN. (12 de septiembre de 2008).
- LA PATRIA (8 de Marzo de 2008).
- LASERNA, R. (1991 йил 18-enero). *REgionalismo y descentralizacion*. Presencia.
- LAVAUD, J. P. (1998). *El embrollo boliviano*. La Paz: IFEA, CESU, Hisbol.

- LIMPIAS, V. H. (2009). Las ferrovias y carretera que transformaron el oriente boliviano. Santa Cruz: El Pais.
- MURUCHI, K., & Calla, A. (2007). Transgresiones y Racismo en el proceso autonómico. Observando el racismo, 15 - 33.
- OSTRIA, R., & Gustavo. (2003). La construcción de Cochabamba 1825- 1952. Cochabamba: ELFEC.
- PEÑA, C. (2007). Poder y Elites en Santa Cruz. Tres visiones sobre un mismo tema. Santa Cruz: CEDURE.
- PRADO, F., Seleme, S., Prado, I., & Ledo, C. (2007). Santa Cruz y su gente. Santa Cruz: CEDURE.
- RODRIGUEZ Ostria, G. (1986). Capitalismo, crisis de mercado y luchas regionales en Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra: Punto y Coma.
- SASSEN, S. (2004). Cities in a world economy. London.
- SIVAK, M. (2007). Santa Cruz: Una tesis. Santa Cruz: Plural.
- SORUCO, X., Plata, W., & Medeiros, G. (2008). Los Barones del oriente. Santa Cruz: Tierra.
- TREJOS, M. (04 de abril de 2004). www.vitrovius.com.br. Recuperado el 20 de 05 de 2010, de <http://www.vitrovius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.047/590>
- VARGAS, M. (2008). En Santa Cruz y su gente. Santa Cruz: CEDURE.

DOCUMENTOS:

- Boleta de Evacuación en Zona de Inundación, Gobierno municipal de Santa Cruz 1983
- Boletas de Depósito para compra de terrenos en Plan 3000. Fondos en Custodia. Banco Central de Bolivia.
- República de Bolivia. Ley 13 de mayo de 1983. Vivienda damnificados del Pirai.
- Historia de la Escuela Claudina Thevenet del Plan 3000, mimeo, anónimo
- Honorable Senado Nacional, 29/07/29. Carta al señor Roberto Luis Bass Werner, Presidente de la comisión de hacienda, política económica y crediticia de Juan Ramón Quintana, Ministro de la Presidencia en relación al Proyecto de Ley en Consulta N° 900/07.
- Concejo Municipal Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, Ordenanza Municipal N° 128/2002
- Concejo Municipal Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Ordenanza Municipal N° 070/99. Noviembre 9/1999
- Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, Resolución administrativa N° 334, 03 de Noviembre de 2005.
- Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Resolución Administrativa N°101/85 12 de febrero de 1985.
- Fotocopia Actas de Comité Fiscalización Construcción Coliseo Plan 3000.
- Fotocopia Acta Inauguración Coliseo Plan 3000. 8/11/2009
- Fotocopia Acta de Conformación directorio y Administración Coliseo Social Cultural Plan 3000. 10 junio 2010.

ENTREVISTAS Y TESTIMONIOS:

- VS. Mujer joven, Habitante del Plan 3000 desde los 9 años, desde 1986 dos años despues de la inundación. Sus padres compraron su casa a un damnificado. Ella y sus padres nacieron en La Paz. Ellos en provincia. Ella en ciudad. Es profesional. Soltera. Antes de vivir en el Plan 3000, alquilaban en el barrio 4 de noviembre (zona que se inundó).
- JM. Joven Varon habitante en alquiler del Plan 3000 hace 4 años. Durante toda su vida vivió con su familia en el barrio 4 de noviembre cuando se inundó en 1983, pero no fue evacuado. Profesional. Casado. Cruceño. Familia materna migrante de provincia Santa Cruz. Participó del conflicto en 2008.
- TM. Adulto mayor, habitante antiguo del Plan 3000.. Llegó a Santa Cruz a los 14 años de La Paz. Llegó al barrio luego de la riada pero no era damnificado. Ocupación: Gremial. Un tiempo fue dirigente de colonizadores. Ha sido dirigente vecinal. Participó activamente en conflicto 2008. Tuvo militancia partidaria en un partido de Izquierda.
- MS. Vive en el Plan 3000 hace 20 años, adulto con familia. Presidente y fundador de un barrio aledaño a la zona de los inundados. Fue militante de MNR. Dirigente barrial y de la cooperativa del agua. Migrante de Potosí
- DV Adulto mayor casado con familia. Profesional. Migrante de provincia Santa Cruz. Vivía en la zona en un lote antes de la riada. Ha sido dirigente vecinal en varias ocasiones. Actualmente militante del MAS. Participó activamente en el conflicto del 2008.
- JJ Joven Varón. Habitante del Plan 3000 hace menos de diez años. Era miembro y luego dirigente de las Juventudes del Plan 3000 y luego militante del MAS donde ejerce cargos directivos a nivel departamental.
- EI. Joven adulto, habitante del Plan 3000 hace 15 años. Profesional. Casado. Viven en casa propia. Activista social desde muy joven. Militante de partidos de izquierda ahora del MAS. Participó activamente en el conflicto del 2008.
- BS. Joven mujer vive en el barrio desde que nació. Su familia fue afectada con la riada. Viven de actividades comerciales. Participó del grupo de jóvenes del MAS y fue representante en 2008. Ahora es militante de base.
- AH. Joven dueño de casa. Migrante del occidente. Tiene un taller de metalmecánica, nunca fue dirigente vecinal ni de otro tipo. Participó activamente en el 2008.
- JB. Joven Habitante del Plan 3000 que llegó en 1990, con su abuelo ex minero. Dirigente vecinal y de organizaciones juveniles. Actualmente militante del MAS. Participó activamente 2008.
- MU. Joven vive en alquiler desde hace 6 años. Soltero. Cruceño de nacimiento. Participó activamente conflicto 2008.
- VS. Adulto. Llegó a santa cruz desde Chuquisaca cuando era niño. Profesion artesano. Vivió en el barrio 4 de noviembre y se mudo cmo damnificado despues de la riada cuando tenía 25 años con su esposa y dos hijos pequeños. Fue uno de los fundadores del barrio.
- HN. Vive en el Plan 3000 desde antes de que llegaran los damnificados. Nació en provincia de Santa Cruz. Participó de los primeras luchas por servicios básicos, como luz, agua y transporte.

- BN. Adulto mayor desde 1987. Barrio Minero.
- IG. Mujer adulta, nació en Yacuiba y migró con su madre recién nacida a Santa Cruz. Damnificada de la primera riada. Actividad económica comercial.
- RP Mujer adulta relocalizada minera. Vive en barrio minero desde 1986. Llegó con hijos pequeños y esposo de la ciudad de Oruro. Trabaja en actividades comerciales. Fue dirigente del comité de amas de casa en la zona, también comite popular de salud, participó de club de madres y comedor infantil.
- JC. Habitante del Plan 3000 desde antes de la riada. Llegó a la ciudad Santa Cruz desde provincia del mismo departamento. Adulto mayor casado con hijos propietario de su vivienda. Participó de las luchas por agua potable y creación de COPLAN. Artesano (repujado en cueros). Dirigente de artesanos y vecinal. Se define como militante de izquierda desde joven sin partido. Ahora Militante del MAS.



ÍNDICE GENERAL

Presentación	Pág. 5
A manera de introducción.....	Pág. 7
CARACTERÍSTICAS DE LAS CIUDADES BOLIVIANAS (<i>Escarley Torrico</i>)	
Contexto general del estudio. Las ciudades bolivianas.....	Pág. 11
Nacionalismo y Urbanización.....	Pág. 14
Neoliberalismo y urbanización.	
La reconfiguración territorial. Sub-urbanización y des-ruralización	Pág. 25
La (sub) urbanización boliviana en tiempos neoliberales.....	Pág. 27
La conflictividad urbana en etapa neoliberal.....	Pág. 32
<i>Bibliografía</i>	Pág. 39
LAS GUERRAS Y LOS GUERREROS URBANOS	
Actores urbanos en la Guerra del Agua. Villa Felicidad, de obreros a comerciantes (<i>Gerson Ventura, Carminia Torrico</i>).....	
La Guerra del Agua.....	Pág. 43
Contexto general	Pág. 43
Breve cronología del conflicto.....	Pág. 46
Los actores involucrados en la Guerra del Agua	Pág. 55
Actores rurales.....	Pág. 55
Actores urbanos.....	Pág. 58
Los actores urbanos de la Guerra del Agua. Estado de la cuestión	Pág. 66
Barrio Petrolero Villa Felicidad. Un espacio de construcción social.....	Pág. 73
La ciudad de Cochaabamba, características generales	Pág. 73
El Barrio Petrolero Villa Felicidad. Condiciones generales	Pág. 75
Surgimiento y procesos asociativos	Pág. 78
Organizaciones y asociaciones del Barrio	Pág. 82
Tejido Social. Modo de relacionarse con otros	Pág. 84
Dinámica Asociativa.....	Pág. 87
Experiencia y memoria históricas	Pág. 89
<i>Bibliografía</i>	Pág. 99
Anexos	Pág. 101
Actores urbanos en la Masacre de Octubre.	
Villa Santiago Segundo, El Alto (<i>Gabriela Canedo</i>).....	
Introducción	Pág. 105
El Alto	Pág. 112
Distritos municipales y población	Pág. 112
¿Cómo se va poblando El Alto?	Pág. 113

Estructuras partidarias.....	Pág. 114
Descripción de los actores involucrados en la Guerra del Gas.....	Pág. 115
Guerra del Gas en El Alto	Pág. 123
FEJUVE 2003 y el Comité de Movilización	Pág. 123
Con el Proceso de Cambio: “Chasqueados hemos quedado”	Pág. 132
Santiago II: Remembranza de las minas en la ciudad de El Alto.....	Pág. 146
Antecedentes.....	Pág. 146
Actividad principal	Pág. 147
La Junta Vecinal de Santiago II	Pág. 149
Organizaciones que existían en la zona	Pág. 149
Olas migratorias: “Una avalancha de emigración con la relocalización, 1986”	Pág. 150
Organizaciones en Santiago II.....	Pág. 152
Solidaridad en Santiago II.....	Pág. 156
Santiago II, pionera en las peleas con alcaldes y partidos.....	Pág. 158
Guerra del Gas en Santiago II.....	Pág. 158
La Guerra del Gas en retrospectiva. ¿Valió la pena?.....	Pág. 167
Otros conflictos después del 2003	Pág. 169
Conclusiones	Pág. 170
<i>Bibliografía</i>	Pág. 173
Anexos	Pág. 174
Actores urbanos en resistencia.	
El Plan 3000 en septiembre de 2008 (<i>Escarley Torrico</i>).....	Pág. 175
Introducción	Pág. 175
Ires y venires del regionalismo.....	Pág. 178
La integración nacional, la gran demanda de las regiones.....	Pág. 178
Con la mirada fuera del país.....	Pág. 179
De la región al Estado.....	Pág. 181
Mientras los negocios van bien, la región puede esperar.....	Pág. 182
El regionalismo... en tiempos de cambio	Pág. 185
La articulación de la oposición “cívica”.....	Pág. 189
Regionalismo, racismo y espacio urbano	Pág. 191
La ofensiva de septiembre. Desacato, revocatorio y desenlace.....	Pág. 194
Cercos y defensa del Plan 3000.....	Pág. 201
El Plan 3000, la ciudadela que se hizo rebelde.....	Pág. 219
Santa Cruz, la ciudad.....	Pág. 219
La ciudad entre la crisis y el auge.....	Pág. 221
De pequeño poblado a gran ciudad.....	Pág. 222
Planificación vs Mercado.....	Pág. 224
La Santa Cruz “neoliberal” y globalizada.....	Pág. 227
El Plan 3000.....	Pág. 231
Las principales luchas	Pág. 249
Para el cierre.....	Pág. 254
<i>Bibliografía</i>	Pág. 256

Villas Rebeldes

Apuntes sobre las
organizaciones vecinales
de la periferie urbana en
Bolivia

VILLAS REBELDES ofrece un retrato de la insurgencia urbano popular que apuntaló el proceso político de nuestro país en los últimos diez años. A partir de la denominada Guerra del Agua, pasando por las jornadas de octubre en El Alto y la resistencia al golpe latifundista en El Plan 3.000 de Santa Cruz, los sectores populares urbanos dejaron sentir el peso de su importancia poblacional y política, imponiendo, en cada uno de estos eventos, cambios en las correlaciones de fuerza nacionales. A partir de ello se constituyeron en protagonistas de primer orden del proceso político que derrumbó el proyecto neoliberal.

El relato de la incursión de los movimientos populares urbanos en los grandes eventos nacionales de la última década ha sido enriquecido con el estudio de tres casos emblemáticos: Villa Felicidad en Cochabamba, Villa Santiago Segundo en La Paz y El Plan 3.000 en Santa Cruz. Casos que retratan la vida organizativa, la esfera íntima, de los espacios urbanos marginales, de las periferias construidas con las manos de sus habitantes, con el esfuerzo propio y la lucha cotidiana de hombres y mujeres que abandonados a su suerte por las autoridades locales y nacionales, se han abierto camino en las ciudades de Bolivia, modificándolas para darse cabida.

Con el apoyo solidario de:



el col·lectiu
Col·lectiu d'Estudis sobre
Cooperació i Desenvolupament

Ajuntament de
Barcelona

